

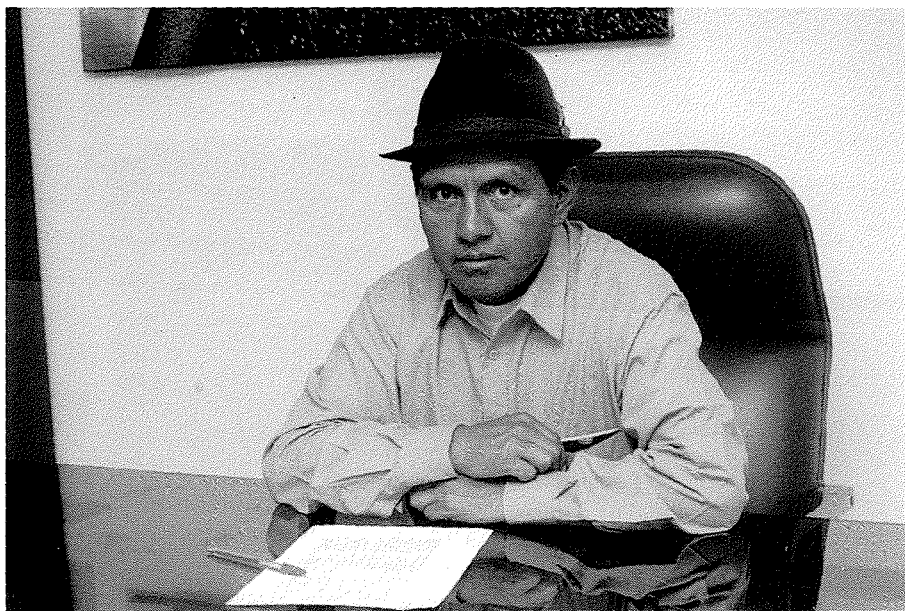


TSE

**INFORME
DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AL
CONGRESO NACIONAL**

Quito - Ecuador

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL



Sr. José María Cabascango
VOCAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL



Sr. Dr. Armando Cazar V.
VOCAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL



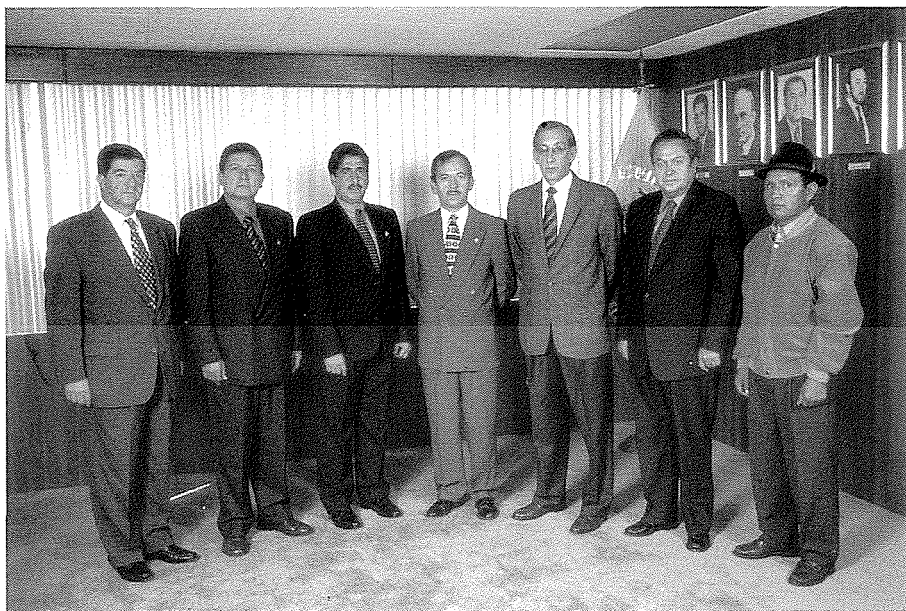
Sr. Lcdo. Jorge Valdaspinos R.
VOCAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL



Sr. Lic. Eduardo Villaquirán Lebed
VOCAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL



Miembros del Tribunal Supremo Electoral

PRESENTACIÓN

Quito, enero del 2002

Señor Doctor

José Cordero Acosta

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL

Quito.-

Señor Presidente:

De conformidad con la disposición contenida en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones y en acatamiento a una obligación cívica y moral para con el país y su máximo organismo de representación política, me permito presentar a Usted y a los señores diputados del Honorable Congreso Nacional, el informe de actividades del Tribunal Supremo Electoral, durante el año 2001, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución Política de la República y que son las específicas de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos del sufragio. Si bien el año de la referencia no fue electoral, las labores realizadas tuvieron como guía los futuros procesos, tomando en cuenta, sobre todo, que el año en curso, 2002, es de elecciones generales para la designación del nuevo Presidente de la República y la conformación del Congreso y la renovación de los diferentes órganos seccionales autónomos.

Especial atención prestó el Tribunal Supremo Electoral, al tema relacionado con el estudio y elaboración de proyectos de reforma a

las normas del sufragio, en procura de hacerlas eficaces en el tratamiento de las diferentes etapas y facetas del proceso, abiertas a una mayor participación ciudadana, permisibles para un control efectivo del comportamiento de los actores políticos y organismos del sufragio y confiables en los momentos cruciales de los escrutinios y la distribución de puestos. Algunos de esos proyectos se hallan actualmente en manos de los señores legisladores y otros les serán en el futuro inmediato, en espera de que sean tramitados con la agilidad y seriedad que el país requiere para mantener la estabilidad democrática, tan debilitada en los últimos años. Precisamente uno de ellos tiene que ver con la necesidad de poner punto final al conflicto de competencias creado entre el tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral en torno a la admisibilidad de la acción de amparo en materia electoral, tan manoseada y mal utilizada, que ha puesto en riesgo la seguridad jurídica que debe rodear a un acto electoral como el que se prepara para el mes de octubre del año en curso. No escapará a su ilustrado criterio, señor Presidente, y al de los señores diputados que lo acompañan, la gravedad del asunto, si es que se pretendiera echar abajo resoluciones de los organismos del sufragio sobre aceptación de candidaturas o validez de escrutinios bajo el pretexto de que atenta contra los derechos de las personas, ya que las resoluciones en esta materia, son jurisdiccionales que resuelven lo contencioso electoral, cuyo carácter es de última y definitiva instancia, no revisables por órgano u organismo alguno de la Función Judicial o del Tribunal Constitucional.

Han merecido preferente atención cuestiones relacionadas con la preparación de las elecciones venideras, tanto en lo referente a la elaboración de planes y programas con tiempos definidos, como en la organización de comisiones especializadas y equipos de trabajo, aprobación de reglamentos e instructivos que busquen soluciones a los

problemas que pudieran presentarse, capacitación técnica del personal electoral y educación cívico-electoral a organizaciones y activistas políticos, así como en la preparación de convenios con organismos públicos que deberán prestar colaboración electoral cuando esta les sea solicitada.

Se han tomado importantes medidas encaminadas a informar a la ciudadanía de las decisiones fundamentales que adoptan los organismos electorales y de la problemática político electoral en general; en tal sentido ha comenzado a funcionar el Centro de Información y Documentación Electoral, y se iniciará la publicación periódica del órgano de la Función Electoral, la Gaceta Electoral, una vez que sea aprobado por el Congreso Nacional. Tales creaciones responden no solo al mejoramiento de la imagen institucional, sino básicamente al afán de interesar a los diversos sectores políticos y sociales para que se incorporen más activamente en la actividad política y electoral del país.

Las relaciones con organismos internacionales del sufragio se han incrementado y fortalecido, lo que ha contribuido a un mejor conocimiento de experiencias tenidas en varias regiones del mundo, que nos permitirá aplicar las buenas a nuestra realidad, desechando las malas.

En el informe se recogen resoluciones del Pleno del Tribunal que refleja el pensamiento y actuar de los señores vocales que lo integran, respetuosos eso sí, de las posiciones al interior de las discusiones así como de la emisión de sus votos.

En definitiva, señor Presidente, el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de la limitación de sus recursos y de las dificultades de un orga-

nismo esencialmente pluralista por la variedad de orientaciones políticas de sus integrantes, pero respetuoso del criterio ajeno al momento de tomar las decisiones, considera que ha cumplido con sus deberes para con la patria, y renueva su compromiso de hacer lo que sea necesario y agotar todo esfuerzo para dar al pueblo ecuatoriano unas elecciones 2002 transparentes y confiables, que permitan dar a la democracia su verdadero valor, el de ser el camino conductor hacia una sociedad donde impere la justicia, la igualdad y la solidaridad humana.

Acompaño anexos del informe.

Del señor Presidente, muy atentamente,

Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 2001

- 1 -

Quito, Enero 15 del 2002

Señor Doctor
JOSÉ CORDERO ACOSTA
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL

H.H. Señores Diputados:

El sistema democrático, el mejor sistema de gobierno hasta hoy inventado, se sustenta en la legítima expresión del voto ciudadano a través del sufragio para elegir Mandatarios y Representantes, no siendo la única manifestación política. También hay otras formas de participación política que la Constitución Política de la República recoge en la consulta popular y en la revocatoria del mandato.

Las expresiones ciudadanas en cuanto tienen que ver como la legitimación activa y pasiva de los derechos políticos han de tener un responsable para la organización, realización y garantía. Esta actividad corresponde a la Función Electoral por intermedio del Tribunal Supremo Electoral. De tal manera que, el Tribunal se ha constituido en la primera base, sustento y garantía del sistema democrático en el país.

Tan grande responsabilidad que tiene relación con la permanencia misma del ordenamiento constitucional, obliga a que el Tribunal deba presentar periódicamente la relación de las tareas cumplidas, porque así lo exige la vigencia democrática, y lo impone: la Constitución Política de la República en su Art. 209, que, para la materia, se desarrolla en el Art. 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que dice:

"El Tribunal Supremo Electoral en el mes de enero de cada año informará a la Función Legislativa sobre su actividad.

En cualquier tiempo solicitará la expedición de las reformas legales que estime necesarias".

En conformidad, procedemos a presentar el Informe de Labores cumplidas en el año 2001, tercero de nuestro mandato; dicho Informe está constituido por el presente volumen junto a "Documentos Electorales 11.- MEMORIA de la IX Conferencia de Organismos Electorales de América del Sur"(Protocolo de Quito).

Y, en consonancia con el segundo inciso del artículo de ley transcrito, solicitamos al Congreso Nacional la expedición de reformas legales, tanto más urgentes cuanto que se trata de un año electoral, y la verdad es que, expedida, y vigente la Constitución de 1998, varias disposiciones legales quedaron desfasadas, y, otras instituciones no han sido desarrolladas en ley.

Así tenemos que sobre materia electoral la única reforma que se expidió es la que se contiene en la ley 2.000-1, y cuyo propósito inicial fue que sea una Ley Transitoria que permita afrontar las elecciones del 2000, pero se introdujeron en ella disposiciones diferentes y de vigencia definitiva, que, desvirtuaron en parte el propósito inicial.

El Tribunal entregó al H. Congreso la publicación "Documentos Electorales 8.- La necesaria reforma política" que contiene el proyecto de "CODIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA", integrado por los siguientes cinco títulos:

- Estatuto del Sufragio, Organismos Electorales y Procedimientos.
- Consulta Popular y Revocatoria del Mandato.
- Estatuto de las Organizaciones Políticas y de los Candidatos Independientes.
- Estatuto de la Oposición.
- Del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda en los medios de comunicación.

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

Al entrar en el año 2002, año electoral y con elección presidencial, que es el tema que más expectativas despierta, consideramos indispensable contar con normas claras y actualizadas; definidas, y que, por lo menos, prevengan el surgimiento de situaciones conflictivas o controversiales. Por lo mismo, y, considerando que se trata de una materia densa y bastante especializada, en el afán de contar en el menor tiempo posible, con las reformas, nos permitimos someter a consideración de los H.H. Señores Diputados, la posibilidad de que el proyecto de Código, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral sea encargado a la Comisión de Legislación y Codificación, para que dentro de un tiempo prudencial, y al tenor de las respectivas disposiciones constitucionales, pueda merecer, del H. Congreso, el "Trámite Especial" previsto en la normatividad constitucional.

Al comenzar el año 2002, repetimos, Año Electoral, los integrantes del Tribunal Supremo, responsables de que se elija a los dignatarios que dirigirán los órganos del Poder Público, en elecciones libres, claras y transparentes, expresamos la firme decisión de garantizar a plenitud, el evento electoral que se avecina; y, asegurar total acatamiento a la libre voluntad soberana expresada en las urnas.

COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES

El Art. 209 de la Constitución Política que se refiere al Tribunal Supremo Electoral, en la parte correspondiente a la integración dice: ".....Los Vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos", en consecuencia, y siendo el año 2001 el tercero de nuestro desempeño, la composición del Tribunal ha permanecido, y es la siguiente:

VOCALES PRINCIPALES:

Señores:

Sr. Juan Aguirre Espinosa
Sr. José María Cabascango
Dr. Armando Cazar Valenzuela
Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio
Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed

VOCALES SUPLENTE:

Señores:

Dr. Patricio Pozo Michelena
Lcdo. Guillermo Santamaría Suárez
Srta. Manuela Fernández Madrid
Sr. Diego Monsalve Veintimilla
Dr. Germán Rodas Chávez
Lcdo. Rodrigo Villacreses
Sr. Héctor Chávez Galarza

En orden a estimular la especialización del trabajo, lo que contribuye a dar mayor autoridad y confianza a los pronunciamientos, el Tribunal ha distribuido el cumplimiento de sus tareas en Comisiones; y, al efecto, existen Comisiones Permanentes y Especiales; y, su integración en el año a que se refiere este Informe, ha sido la siguiente:

COMISIONES PERMANENTES:

COMISION ECONOMICA

Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio, Presidente
Ing. Alfredo Arévalo Moscoso
Sr. Juan Aguirre Espinosa

COMISION JURÍDICA

Sr. José María Cabascango, Presidente
Dr. Armando Cazar Valenzuela
Sr. Juan Aguirre Espinosa

COMISION TECNICA

Ing. Alfredo Arévalo Moscoso, Presidente
Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio
Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed

COMISIONES ESPECIALES:

COMISION DE REFORMA ELECTORAL

Dr. Carlos Aguinaga Aillón, Presidente
Dr. Armando Cazar Valenzuela
Ing. Alfredo Arévalo Moscoso
Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio
Sr. José María Cabascango

COMISION DE CAPACITACIÓN

Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente
Ing. Alfredo Arévalo Moscoso
Sr. José María Cabascango

Entre las facultades del Tribunal Supremo Electoral consta la del literal c) del Art. 20 de la Ley de Elecciones, en virtud de la que le corresponde:

"Organizar los tribunales provinciales electorales, supervigilar su funcionamiento y reorganizarlos total o parcialmente si estimare necesario".

En consonancia, la integración de los Tribunales Provinciales Electorales es la siguiente:

AZUAY:

PRINCIPALES

Sra. Amparito Padilla Román
Dr. Jorge Aurelio Moreno Yáñez
Dr. Oswaldo Domínguez Recalde
Sr. Esteban León Vélez
Dr. Fernando Loyola Polo
Ing. Claudio Vélez Andrade
Sr. Eulogio Sotamba Jaigua

SUPLENTE

Abg. Patricio Ortiz Tobar
Sra. María Luisa Cuesta

Lcda. Dora Patricia García Galindo
Eco. Esteban Bernal Bernal
Arq. Patricia Vaca

BOLIVAR:

PRINCIPALES

Lcdo. Segundo Pilamunga Toapanta
Sr. Mario E. Meza Muñoz
Sr. Augusto Chávez Guerrero
Lcdo. Rolando Colina Colina
Dr. Homero Espinoza Chimbo
Lcdo. José Fierro Ramos
Abg. Inés Vásconez Martínez

SUPLENTE

Sr. Carlos Villavicencio
Sra. Tanya Arregui
Sr. Dominguín González
Sr. Klever García
Sr. Javier Camacho Vargas
Sr. Raúl Ganzo
Lic. Guillermo Gómez

CAÑAR:

PRINCIPALES

Dr. Marco Vicuña Domínguez
Sra. Alba Torres Regalado
Lcda. Julieta Jaramillo
Lcdo. José Lema Guamán
Sr. Alfonso Monsalve Iglesias
Dr. Santiago Rivas Crespo
Dr. Segundo I. Serrano

SUPLENTE

Sr. Roberto Ordóñez
Sra. Mercedes Vásquez Encalada
Sr. Marcelo León
Sr. Angel Torres
Sr. Alvaro Cabrera Merchán
Sra. Erika Toledo Verdugo
Sr. Jaime Vélez Zambrano

CARCHI:

PRINCIPALES

Prof. Washington Enríquez Preciado
Prof. Lenin Carrera López
Eco. Germán Fuentes Suquillo
Myr. José Obando Quiróz
Arq. Jaime Romo Obando
Dr. Gandhi Vizcaíno Erazo
Sr. Nizon Patricio Lastra

SUPLENTE

Sra. Narcisa Vera
Sra. María Teresa Luna

Lcda. María Luisa Tapia
Ing. Carlos Rueda
Sra. Alicia Alvarez

COTOPAXI:

PRINCIPALES

Lcdo. Flavio Torres Barthelotti
Dr. Fabián Fabara Gallardo
Dr. Mario Argüello Armendariz
Sr. Bernardo Choloquina Ch.
Eco. Antonio Lanas Cevallos
Lcdo. Fausto Ernesto Molina
Sr. José Luis Vega Andrade

SUPLENTE

Dr. Luis Alvarez Santana
Dr. Edison Murgueitio Reyes
Dr. Patricio Gordillo Jácome
Sr. Gilberto Guamangate Ante
Sr. Jorge Reyes Jiménez
Sr. Alfonso Chávez
Dra. Silvia Gualpa Cando

CHIMBORAZO:

PRINCIPALES

Dr. Edgar Camilo Haro Páez
Ing. Manuel Guevara Freire
Lcdo. Santiago Guevara Daqui
Sr. Raúl Ruiz Campoverde
Dr. Pedro Samaniego Barreno
Sr. Juan Velasco Dávalos
Sr. Miguel Quito Olmedo

SUPLENTE

Ing. Carlos Vallejo
Ing. Vinicio López
Sr. Rodrigo Viteri
Sr. Carlos Vimos Cují
Sr. Hugo Quiroz Vallejo
Sr. Luis Sangoquiza
Sr. Carlos Larrea Naranjo

EL ORO:

PRINCIPALES

Arq. Alfredo Iván Mackliff León
Sr. Néstor Ochoa Montero

SUPLENTE

Ing. Marco Ortiz Aguilar
Ing. Rodolfo Quiñónez

Sr. Angel Chacasaguay Flores
Tlga. Margoth Guerrero Paladines
Dr. Jaime Mendieta Torres
Dr. Roque Orellana Quezada
Sr. Rafael Valdivieso Maigon

ESMERALDAS:

PRINCIPALES

Dr. Vladimir Jhayya Flor
Ing. Guillermo Mosquera Quintero
Lcdo. Ernesto Aguilera Pimentel
Prof. Carlos Estupiñán Morcillo
Lcdo. Daniel del Castillo
Sr. César García Martínez
Sr. Boris López Saúd

GALÁPAGOS:

PRINCIPALES

Sra. Mariana Revelo Vallejo
Sr. Vicente Quiroga Guzmán
Sr. René Ballesteros Olaya
Sr. Ramón Olaya Ballesteros
Sr. Rolando Parrales Olaya
Sr. Fermín Pihuave Briones

GUAYAS:

PRINCIPALES

Sr. Pedro Caicedo Plaza
Ing. Enrique Pita García
Abg. Bolívar Calí Bajaña
Dr. Pedro Gómez Valdiviezo
Abg. Telmo Jaramillo Ramírez
Sr. Franklin León Mieles
Sr. Antonio Issa Obando

Lcdo. Gonzalo Ayala Armijos

Ing. Gabriel Rodríguez

Prof. Eduardo Córdova Pablo

SUPLENTE

Sr. Walberto Games
Sr. Richard Sánchez
Sr. Wilmar Garrido Cortez
Sr. Juan Borja Cañola
Sr. Pablo Gruezo
Sr. Holger Angulo
Sr. Galo Fidian Vásquez

SUPLENTE

Sra. Sandra Alba Martínez
Sr. Mariano Chiliquinga Mesaquiza
Sr. Enrique Bolaños Pomboza
Sr. Santiago Mendieta

Sra. Glenda Zabala Vilema

SUPLENTE

Sr. Ronald Rugel
Lcdo. Lenín Potes Duques
Lcdo. José Carrera Villao
Ing. Alejandro Varas Coppiano
Sr. Luis Ortega Reyes
Ing. Guillermo Benavides García
Abg. Roberto Muñoz

IMBABURA:

PRINCIPALES

Prof. Judith Chiza Maigua
Myr. Galo Larrea Torres
Sr. Fernando Ayala Mejía
Sr. Fernando Beltrán Proaño
Dr. Washington Cabezas Návárez
Sr. Leonardo Moncayo Aguiar
Sr. Hernán Vinuesa Yépez

SUPLENTES

Sr. José Antonio Lema
Sr. Bolívar Andrade Vargas
Sr. Víctor Vallejo
Dr. Antonio Terán
Sr. Orlando Pozo
Sra. Carmen Contento
Sr. Enrique Guzmán

LOJA:

PRINCIPALES

Dr. Vicente Flores Torres
Dr. Carlos Figueroa Aguirre
Lcdo. Galo Carrión Torres
Sra. Lucía Altamirano Arias
Prof. Jorge Jaramillo Arceniega
Lcdo. Luis Guamán Zhunsula
Ing. Edgar Peña Unda

SUPLENTES

Ing. Alvaro García Ontaneda
Sra. Mercedes González Serrano

Lcdo. Fernando Montaña
Dr. Manuel Maldonado Valdivieso
Sra. Angelita Granda

LOS RÍOS:

PRINCIPALES

Abg. Oscar Llerena Olvera
Abg. Laurence Cassanello
Sra. Ubaldina Ibarra
Sra. Lilian Falconí Triviño
Lcdo. Juan Yturralde Escudero
Tlga. Lucinda García Cedeño
Dr. Alvaro Ríos Vera

SUPLENTES

Sr. Luis Ubilla Bustamante
Sr. Gualberto Jaramillo
Sr. José Soriano Salcedo
Prof. Pedro Benítez
Lcdo. Wilson de la Cruz

Tclgo. Edgar Montenegro

MANABÍ:

PRINCIPALES

Dr. Marcos Zambrano Zambrano
Eco. Leonardo Villacís Santos
Sr. Manuel Bravo Román

SUPLENTES

Sra. Julia García Jijón
Sr. Víctor Zambrano

Ing. Marcos Dávila Cedeño
Ing. Oswaldo Moreano García
Sr. José Negrete Rodríguez
Dr. Luis Quiroz Cedeño

Sr. Kaussman Quiñónez Angulo
Sr. Luis Fermín Vera
Sr. Juan José Naula Cepeda
Abg. Alfredo Poggi

MORONA SANTIAGO:

PRINCIPALES

Prof. Pablo Alarcón Martínez
Sr. Gabriel Oleas Murillo
Sr. Marcelo Jaramillo Rivadeneira
Sr. Luis Lozano Lojano
Sr. Marco Rivadeneira Flor
Sr. Domingo Rivadeneira Jaramillo
Sr. Manuel Vintimilla Pacheco

SUPLENTE

Sr. José Pujapat
Sr. Rigoberto Revelo Carvajal
Sr. Germán León Caldas
Sra. Jenny Elizabeth Cuenca
Sr. Edwin Ulloa
Sr. Mauricio Ávila Choco
Sra. Mercedes Flor

NAPO:

PRINCIPALES

Prof. Piedad Rosales Mantong
Sr. Julio Tapuy Shiguango
Sr. Trotsky Cox Sanmiguel
Tlgo. Guido Carvajal Fonseca
Prof. Alirio Grefa Alvarado
Prof. Lenin Guevara Nuñez
Prof. Jorge Sinchiguano Llumiluiza

SUPLENTE

Sra. Serafina Cerda
Sr. Luis Córdova
Sra. Cecilia Trujillo
Sr. Eugenio Yori
Sra. Mery Guerrero
Sr. Lino Orna

ORELLANA:

PRINCIPALES

Prof. Wilson Barrionuevo Sánchez
Sr. Angel Aldana Castellano
Sr. Marco Bastidas Arciniegas

SUPLENTE

Sr. Iván Ballardo Revelo Cárdenas
Sra. Letty Jaramillo Lapo
Sr. Oscar Gabriel Romero Gutiérrez

Sr. Jaime Bejarano
Sr. Julio Cabrera Cabrera
Prof. Juan Duarte Guerrero
Sr. Moisés Ureña Ureña

Sr. Luis Riofrío Ochoa
Sr. Alfonso Patricio Freire Paredes
Sra. Berta Pesántez Mendieta
Sr. Lewis Mena Olvedo

PASTAZA

PRINCIPALES

Sr. Wellington Vásquez Maruri
Sr. Galo Patiño Muñoz
Sr. Sixto Peñafiel Fajardo
Eco. Marcos Tulio Restrepo Guzmán
Sr. Luis Silva Tanquina
Sr. Héctor Salinas Salinas
Sr. David Sancho Aguilera

SUPLENTE

Sra. Sandra Betty Alvarado
Sr. Darwin Cruz Moreira
Sr. Luis Guamán Tonato
Sr. Gonzalo López Cruz
Sr. José Ruiz Armas
Sr. Germán Eduardo Buenaño
Arq. Guillermo Naranjo

PICHINCHA:

PRINCIPALES

Dr. Eduardo García Jaramillo
Sr. Patricio Endara Larrea
Sra. Adriana Bermeo Bardagi
Lcdo. Andrés León Calderón
Dr. Hugo García Espinoza
Lic. Marcelo Peña
Dr. Marco Proaño Durán

SUPLENTE

Dr. Ekenner Recalde Alava
Sr. Fidel Acero
Sr. Giovanni López Endara
Sr. Patricio Alvarez
Dr. Alvaro Páez Benalcázar
Sr. Frabricio Morales
Dr. Carlos Mosquera

SUCUMBIOS:

PRINCIPALES

Abg. Jaime Delgado Intrigo
Lic. Ruth Peñafiel Shinguango
Sr. William Aguilar Romero
Sr. Gaitán Celín Coral
Dr. Agustín García Camacho
Sr. Franz Mihalache Molano
Lic. Angel Rojas Granda

SUPLENTE

Sra. Eulalia Valarezo
Sra. Rosa Virginia Bastidas
Sr. Milton Flores Jaramillo
Sr. Gerardo Giler Macías
Ing. Enrique Muñoz
Sr. Vicente Barreto Looor
Lcdo. Oswaldo Luna

TUNGURAHUA:

PRINCIPALES

Lcdo. Román Velasteguí Contreras
Lic. Julián Ainaguano Ainaguano
Dra. Marisol Alvarez Ulloa
Sr. Edgar Barros Vergara
Lcdo. Carlos Bonilla Velasteguí
Sr. Rodrigo Calero Valencia
Ing. Medardo Ulloa Arias

SUPLENTE

Arq. Gustavo Abril Rivera
Srta. Mónica Jérez
Sr. Patricio Parra

Sr. Jorge Poveda
Sr. René Solís

ZAMORA CHINCHIPE:

PRINCIPALES

Lcdo. Fernando Abad Troya
Lcda. María Consuelo Guerrero León
Ing. Bolívar Efraín Aguirre Mayo
Lic. Eduardo Jhovanny Delgado Tello
Prof. Víctor Manuel Gualán
Lcdo. Telmo Enrique Japa Cruz
Lcda. Marlene Elizabeth León González

SUPLENTE

Sr. Leoncio Salinas
Sr. Carlos Espinoza C.
Sr. Cristian González A.
Lcdo. Angel Márquez Villa
Prof. José Francisco Paqui
Lcdo. Héctor Peña G.
Sr. Luis Nugra Lituma

NECESARIA REFORMA ELECTORAL

Aunque parezca repetitivo, pero es necesario que se tome conciencia, frente al año electoral, a fin de reformar en todo lo que posible sea; y completar la legislación que se le relaciona.

La Constitución de 1998 trae el nacimiento de nuevas instituciones, como: la consulta popular seccional: por iniciativa de los organismos de la circunscripción provincial o cantonal y por iniciativa popular; la revocatoria del mandato; según el Art. 99 mantiene el voto personalizado aplicado por primera vez el 30 de Noviembre de 1997, y dispone que la ley lo conciliará con el derecho de las minorías para estar representadas; la obligación de expedir el Estatuto de la Oposición, etc.; y, además en otros casos se modificaron instituciones que habían permanecido por más de cincuenta años: tal es el caso de los Consejos Provinciales, cuyas minorías (mitad menos uno), provendrán de elección indirecta, sin precisamiento de si los electores son integrantes de los Cabildos que terminan funciones, o si, para tal objeto se ha de contar con los de reciente elección. No hay pronunciamiento alguno sólido y convincente sobre el surgimiento y existencia de movimientos independientes, sus características, requisitos y privilegios; o si se siguen manteniendo como únicas estructuras políticas organizadas los partidos políticos y además la posibilidad de los independientes de candidatizarse, bajo amparo de algún partido o respaldados por determinado número de firmas. Y, aparte de llenar vacíos, algunos de los cuales quedan anotados, es necesario incorporar en la legislación los resultados extraídos de la aplicación de la ley; y, en esa línea, consideramos importante poner mayores requisitos para los integrantes de las Juntas Receptoras a fin de alcanzar más capacidad y eficiencia en su desempeño. Es necesario precisar los recursos garantizados por la ley y volverlos más efectivos con ciertos precisamientos como señalar plazos a fin de que estén definidos, el momento en que comienzan y cuándo terminan; es importante garantizar el derecho de los recurrentes para que no sean defraudados por abulia o mala fe de quienes tienen que tramitarlos y/o resolverlos.- Como existe alguna confusión sobre quienes deben presentar las candidaturas, es necesario un precisamiento para evitar conflictividad ya vivida. Hay también confusión en dos ins-

tancias y dos momentos: la presentación de candidaturas que corresponde a los actores o sujetos políticos, y que tiene el sentido de: solicitar la inscripción de las candidaturas; y, la inscripción de la candidatura, que es ejercicio de la autoridad electoral. A pesar de que en la reforma de la Ley 2000 -1 se señaló un nuevo Calendario Electoral que en la Codificación de la Ley Orgánica de Elecciones consta como: Art. 46 y que obliga a elecciones cada dos años, todavía puede ser materia de nueva consideración, mediante la unificación de períodos de todos los electos a cuatro años.- Hemos de reconocer que a pesar de que la Ley desarrolla en los Arts. 105 y 106, la asignación de puestos en dos tiempos: úno la aplicación de la fórmula de D' Hont para asignar los puestos a la lista, y luego adjudicar los puestos que corresponden, a los candidatos más votados, no se consigue atender en su totalidad a lo mandado por el Art. 99 de la Constitución de la República, pues, es dicho Artículo constitucional el que engendra la contradicción y generó las complejidades del sistema electoral; y, además se consagra graves injusticias porque no de la representación alcanzada. La Ley de Elecciones de febrero de 1978, para las elecciones pluripersonales, estableció el sistema de listas cerradas y el sistema proporcional de cocientes y de residuos electorales para la adjudicación de puestos; y, aquello tuvo aplicación ordenada y satisfactoria a través de todas las elecciones que con regularidad se cumplían cada dos años. La votación en lista cerrada, fue reclamada por quienes quieren disfrutar de las acciones políticas declarando y proclamando no ser políticos; el reparto proporcional no tuvo oponente, se le reconocía equilibrado, atendía a las minorías; a través de los años tuvo reformas, que lo fueron perfeccionando, y tanto se acreditó, que, en ámbito internacional, se le dió el calificativo de "fórmula ecuatoriana"; y, así, sin la concurrencia de ninguna razón lógica, política o de cualquier otra naturaleza, se cambió el sistema de adjudicación de puestos, disponiéndose constitucionalmente (Art. 99) la votación y escrutinio nominal, sistema que trastoca sustancialmente el sistema electoral ecuatoriano y propicia desequilibrios entre votos obtenidos y escaños asignados, **estimulando un sistema de injusticia y grave desequilibrio político.** El Tribunal mismo, no está satisfecho plenamente con el actual sistema. La fórmula de D'HONT, de la cual el Diccionario Electoral CAPEL, (segunda edición), dice: que según este método "LOS ESCAÑOS SE REPARTEN CON BASE EN LOS COCIENTES MAS ALTOS (por esto, a este tipo de cálculo se le llama también procedimiento de las cifras

más altas)". Pero, más allá de esto, la causa primera que crea las injusticias es el "Escrutinio nominal al más votado". El Congreso de la República hará un verdadero y debido servicio a la democracia, considerando seriamente esta situación.

Esto, no es inquietud del momento; al contrario, reviste permanentemente preocupación: en efecto, consta en "Documentos Electorales 6" (15 de enero del 2000), páginas 110, 111, 120. Entonces dejamos escrita la expresión de uno de los más notables Observadores Internacionales de las elecciones de 1998, que al recorrer las Mesas de Recepción de Votos, comentaba, justamente sobre las elecciones de Diputados, que era un "ejemplo de lo que nunca debió hacerse"; y, en el Informe de conjunto de los Observadores Internacionales quedó escrito: "RECOMENDAMOS QUE SE TOMEN MEDIDAS ANTES DE VOLVER A UTILIZARSE ESTE METODO DE VOTACIÓN".- En "Documentos Electorales 8" (1° de Noviembre del 2.000), página 13, se dijo:

"...es un imperativo introducir reformas, complementar y actualizar las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos, para ponerlas a tono con el Estatuto Constitucional, y, por otra parte, después de la vigencia de éste, desde el 10 de agosto de 1998, es indispensable expedir leyes que den vigencia y permitan la aplicación ordenada de las nuevas instituciones: Consulta Popular y Revocatoria del Mandato, derecho de la Oposición y Control del Gasto Electoral. Aparte de que, es indispensable llegar a la unidad de las normativas que enmarquen en un solo instrumento jurídico las diferentes expresiones de la ciudadanía, cuestión que, por otra parte, ya ha sido adoptado por varios países de América Latina.- Es en el marco de estos conceptos que se ha diseñado la estructura del proyecto de CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA que se acompaña".

En "Documentos Electorales 9" (15 de enero del 2001), después de referirnos al asunto desde la página 22, concluimos, diciendo, en las 25 y 26:

"El Tribunal Supremo Electoral formula la más sentida invocación para que el Congreso de la República entre a considerar la expresión de la normativa jurídica que regula los diferentes eventos de expresión directa de la voluntad ciu-

dadana en sus diferentes manifestaciones.

El Congreso de la República haría un enorme y trascendental servicio a la democracia si llega a expedir el CÓDIGO DE LAS INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA, cuyo Proyecto se recoge en la Primera Parte de "Documentos Electorales 8: LA NECESARIA REFORMA POLÍTICA" que, como quedó dicho, es parte integrante de este Informe

Nos permitimos insistir que el año 2001 es propicio para hacerlo, cuando prime la serenidad tan necesaria para legislar sobre esta materia, ya que pronto llegará el 2002, año de elecciones y de elecciones presidenciales, donde surgirán necesariamente factores limitantes de intereses políticos, electoralistas, influyendo en la expedición de los Estatutos Electorales. Varios países tratan a estas materias como asuntos de carácter técnico, y es cuando se legisla con esa óptica, que se está más cerca de alcanzar el perfeccionamiento de los métodos y de la democracia".

Y, si no se modifica la Ley, eliminando las listas abiertas para casos de 8, 14, 18 candidatos, (que por unidad del sistema) tendría que ser para todas las listas de elecciones pluripersonales, volveremos, el 20 de Octubre próximo a votar con un sistema que, según los estudiosos y los expertos, "ES EJEMPLO DE LO QUE NUNCA DEBIO HACERSE". En este caso, más grave, porque quiere decir que no nos han servido **las serias advertencias de hace cuatro años.**

En verdad, la consulta popular y la revocatoria del mandato, son expresiones de la voluntad popular pero tienen características diferentes a la elección de personas; por ello, creemos que deben constar en Estatuto diferente. De otra parte, dichas instituciones que constan en la Constitución (Art. 26 y 27) no han merecido desarrollo en ley; y por ello la Comisión de Codificación y Legislación, al codificar la Ley Orgánica de Elecciones que se publica en el Reg. Of. No. 117, de 11 de julio de 2000, reconociendo su limitación e incapacidad para reformar la Ley, optó por transcribir los artículos que existían en la Ley, bajo el título de "Plebiscito y Referéndum", varios desactualizados, y agregar el texto constitucional completo sobre la materia, lo cual no es una solución a los problemas planteados, y el Tribunal se vió en el caso de expedir el Reglamento de Consultas Populares y Revocatoria del Mandato; que se publicó en el Registro Oficial No. 366

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

de 11 de Julio del 2001. Si el H. Congreso acoge el pedido de expedir el Estatuto de la Consulta Popular y de la Revocatoria del Mandato, como instrumento -parte del Código de las Instituciones de la Democracia- será importante que considere el proyecto que se publicó en Documentos Electorales No. 8 "La Necesaria Reforma Política" y el Reglamento expedido por el Tribunal Supremo Electoral, que recoge y asimila algunas experiencias vividas.

A los señores Diputados no se les oculta que el voto por lista facilita el ejercicio del voto y hace honor a la selección que los sujetos políticos deben hacer de "los mejores hombres para el gobierno". Además, una adjudicación de puestos por sistema de reparto proporcional, guarda relación entre votos y escaños y atiende de modo más equilibrado a las minorías.

COLEGIOS ELECTORALES REALIZADOS

Durante el año 2001 se ha convocado Colegios Electorales para:

1. Elegir miembros del CONESUP
2. Elegir un miembro del Tribunal Constitucional, representante de las Cámaras de la Producción,
3. Elegir Representantes ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud.

1. Miembros del CONESUP

La expedición de la nueva Ley de Educación Superior, determinó que deba integrarse el Organismo máximo representante de la Universidades y Establecimientos de Educación Superior, pero la transición fue varias veces diferida y en consecuencia: demorada. Debe recordarse que el anterior organismo superior: CONUEP (Consejo Superior de Universidades y Escuelas Politécnicas) presentó resistencia y recurrió a instancias que trajeron como consecuencia que la integración del CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior) prevista en la nueva Ley, promulgada en el Registro Oficial No. 77 de 15 de mayo del 2000, pueda alcanzar integración solo avanzado el año 2001, siendo; necesarias dos Convocatorias a Colegios Electorales: la primera, del 10 de abril y del 2 de agosto del 2001, la segunda, habiendo, inclusive de por medio una Consulta al señor Procurador General del Estado.

La segunda Convocatoria después de absuelta la consulta por el Sr. Procurador, tuvo el siguiente texto:

"CONVOCATORIA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONSIDERANDO:

QUE, en cumplimiento a la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Educación Superior, promulgada en el Registro Oficial No. 77 de 15 de mayo del 2000, el Tribunal Supremo Electoral, resolvió en sesión de 9 de agosto

del año 2000, convocar a los colegios electorales para la designación de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP;

QUE, tanto la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, en comunicación de 1 de junio del 2001, cuanto el Consejo Nacional de Educación Superior mediante No. 144-CONESUP.STA. de 11 de junio del 2001, piden al Tribunal Supremo Electoral, se convoque al Colegio Electoral de los Rectores de las Escuelas Politécnicas Públicas para que designe al representante ante el CONESUP, los primeros al principal y los segundos al alterno;

QUE, El señor Dr. Ramón Jiménez Carbo, Procurador General del Estado, ante la consulta formulada por el Tribunal Supremo Electoral en Oficio No. 724-CJA-PTSE-2001, emite respuesta en comunicación No. 18674 de 20 de julio del 2001, manifestando que, corresponde al Pleno de esta institución realizar la convocatoria al Colegio Electoral de los Rectores de las Escuelas Politécnicas Públicas, para elegir su Representante Alterno ante el CONESUP;

QUE, El Pleno del Tribunal Supremo Electoral, sobre la base de pronunciamiento contenido en Oficio No. 18674 de la Procuraduría General del Estado, en sesión de 2 de agosto del 2001, dispone convocar al Colegio Electoral conformado por los Rectores de las Escuelas Politécnicas Públicas para que designe al representante alterno ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP;

En uso de las facultades consagradas en el artículo 209 de la Constitución Política de la República en concordancia con el artículo 20, literal h) de la Codificación de la Ley de Elecciones y artículo 12 y Primera Disposición Transitoria de la Ley de Educación Superior;

RESUELVE:

Convocar al Colegio Electoral de los Rectores de las Escuelas Politécnicas Públicas, que designará al miembro suplente para conformar el CONESUP, para el día martes 28 de agosto del año 2001, a las 10H00;

Las credenciales de acreditación se retirarán en la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral; y, dentro de los días hábiles posteriores al día siguiente de la fecha de la convocatoria hasta una hora antes de la instalación del Colegio Electoral, el Tribunal Supremo Electoral registrará a las entidades acreditadas llamadas a participar en el proceso de designación y a las per-

sonas que representarán a las mismas en dicho proceso; además, deberá presentarse la cédula de ciudadanía y certificación de votación.

El Colegio Electoral se reunirá en la ciudad de Quito, en el Tribunal Supremo Electoral, ubicado en la avenida Seis de Diciembre No. 3606 y calle Bosmediano.

El Colegio Electoral se instalará en el lugar y horas señaladas, con un quórum reglamentario y, en caso de no existir se esperará una hora, luego de lo cual se instalará con los presentes.

Se considerará el Reglamento de Organizaciones y Funcionamiento de los Colegios Electorales para la designación de los miembros del CONESUP, publicado en el Registro Oficial No. 145 de 21 de agosto del año 2000, el mismo que está a disposición de los electorales acreditados en la Secretaría General del Tribunal.

Publíquese la presente convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación que se edite en las ciudades de Quito y Guayaquil.

Dado en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los dos días del mes de agosto del año dos mil uno.

f) Dr. Carlos Aguinaga Aillón
PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL".

f) Lcdo. Guillermo Astudillo Ibarra
SECRETARIO GENERAL

Realizados los Colegios Electorales, fueron electos los siguientes ciudadanos:

"NOMINA DE LOS MIEMBROS DESIGNADOS PARA CONFORMAR EL CONESUP

1. POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS:

Ing. Víctor Hugo Olalla	PRINCIPAL
Dr. Marco Lucio Muñoz	SUPLENTE
Ing. Manuel Haz Álvarez	PRINCIPAL
Ing. Víctor Hugo Jaramillo Garcés	SUPLENTE

2. POR LAS ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS:

Ing. Leonardo Félix López	PRINCIPAL
Cnrl. de E.M.C. Ing. Hernán Bedón López	SUPLENTE

3. POR LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PARTICULARES

Dr. Alvaro Trueba B.	PRINCIPAL
Dr. Santiago Gangotena G.	SUPLENTE

4. INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Dr. Alejandro Carrión Pérez	PRINCIPAL
Dr. Wilfrido Robalino B.	SUPLENTE

5. POR LOS PRESIDENTES NACIONALES DE LAS CÁMARAS DE LA PRODUCCIÓN DEL PAÍS Y DE LAS FEDERACIONES NACIONALES DE COLEGIOS PROFESIONALES

Dr. Ernesto Velásquez Baquerizo	PRINCIPAL
Tcnlg. Jorge Almeida Norat	SUPLENTE

Después de la Elección se posesionó al Presidente del CONESUP, Sr. Ing. V. Baquero.

2. Colegios para elegir el Representante Suplente de las Cámaras de la Producción en el Tribunal Constitucional.

El segundo inciso del Art. 275 de la Constitución Política de la República dice:
"Los Vocales del Tribunal Constitucional deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones. No serán responsables por los votos que emitan y por las opiniones que formulen en el ejercicio de su cargo".

El doctor Marco Morales Tobar, Presidente del Tribunal Constitucional, con Oficio No. 360-TC-SG de 9 de julio del 2001, puso en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral, que el Vocal Suplente designado por el Colegio de las Cámaras de la Producción no se posesionó como dispone la Ley del Control Constitucional. El Tribunal Supremo procedió a convocar al respectivo Colegio Electoral para que haga la nueva elección. La convocatoria dijo:

**“TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CONVOCATORIA
CONSIDERANDO:**

QUE, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 275 inciso noveno de la Constitución Política de la República; artículo 20, literal g) y h) de la Codificación de la Ley de Elecciones; y, el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de los Colegios Electorales, que se integrarán para la designación de los vocales del Tribunal Constitucional, publicado en el Registro Oficial No. 9 de 24 de febrero de 1997, compete a este Organismo convocar al Colegio Nacional para que designe la terna de candidatos de la cual el H. Congreso Nacional nombrará al vocal suplente que integrará el Tribunal Constitucional en representación de las Cámaras de la Producción.

QUE, el señor Dr. Marco Morales Tobar, Presidente del Tribunal Constitucional, mediante Oficio No. 360-TG-SG de 09 de julio del 2001, pone en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral que, el vocal suplente, designado por el Colegio de las Cámaras de la Producción no se posesionó del cargo ante el H. Congreso Nacional y solicita se proceda de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Control Constitucional.

QUE, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión de 18 de julio del año 2001, resolvió dar por conocido el oficio No. 360-TG-SG suscrito por el señor Dr. Marco Morales Tobar, Presidente del Tribunal Constitucional, disponiendo se convoque al Colegio Electoral de Cámaras de la Producción para elegir la terna del vocal suplente del Tribunal Constitucional.

En uso de las facultades consagradas en la Constitución Política de la República, Codificación de la Ley de Elecciones y Ley del Control Constitucional.

RESUELVE:

Convocar al Colegio Electoral de las Cámaras de la Producción legalmente reconocidas, para el día martes 7 de agosto del 2001 a las 11h00, para que elija la terna que será remitida al H. Congreso Nacional, para la designación del vocal suplente del Tribunal Constitucional.

El Colegio Electoral se reunirá en la ciudad de Quito, en el edificio del Tribunal Supremo Electoral ubicado en la avenida Seis de Diciembre No. 3606 y calle Bosmediano.

La elección de los electores principales y suplentes, que integrarán el Colegio Electoral de las Cámaras de la Producción se efectuará por las respectivas cámaras conforme a sus estatutos.

Cada elector deberá presentar en la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, hasta una hora antes del día y hora señalada para la instalación del Colegio Electoral, el nombramiento conferido por la Cámara que los eligió y copia certificada o compulsa del Acuerdo Ministerial, de los estatutos de la misma, además presentar la cédula de ciudadanía y certificado de votación. El Colegio Electoral se instalará en el lugar y hora señalados, con el quórum reglamentario; y, en caso de no existir se esperará una hora, luego de lo cual se instalará con los presentes.

Los integrantes de la terna deberán reunir los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República y leyes de la materia.

El vocal suplente designado durará en sus funciones por el período de tiempo que le falte al principal para completar el período para el cual fue elegido.

El Reglamento de Organizaciones y Funcionamiento de los Colegios Electorales, que se integrarán para la designación de los vocales del Tribunal Constitucional, publicado en el Registro Oficial, No. 9 de 24 de febrero del año 1997, está a disposición de los electores acreditados, en la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral.

Publíquese la presente convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación que se editen en las ciudades de Quito y Guayaquil y téngase como notificación a las Cámaras de la Producción.

Dado en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil uno.

*f) Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL".*

*f) Dr. Daniel Argudo Pesántez
SECRETARIO GENERAL*

3. Colegios para elegir Representantes ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud.

En el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre del 2001 se publica la "Ley de

la Juventud" aprobada por el H. Congreso Nacional como Ley No. 2001-49. Allí se establece la obligatoriedad del Tribunal Supremo Electoral de convocar a las organizaciones que corresponda para que se inscriban a fin de elegir Representantes ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud. El Tribunal procedió a realizar la correspondiente Convocatoria que dice:

**"CONVOCATORIA
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 16 de octubre del año 2001, la Función Legislativa expide la Ley No. 2001-49, Ley de la Juventud, promulgada en el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre del 2001, en cuya Disposición Transitoria Segunda determina que, el Tribunal Supremo Electoral, convocará a las organizaciones e instituciones determinadas para que se inscriban a fin de elegir a los Representantes ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud, de conformidad con los literales f), g) y h) del artículo 24 de la Ley.
En uso de la facultad legal determinada precedentemente,

CONVOCA:

A las Organizaciones juveniles legalmente constituidos y a las instituciones privadas sin fines de lucro, que trabajan a favor de los derechos y desarrollo de la juventud para designar a los siguientes representantes ante el Consejo Nacional de Políticas de la Juventud:

- 1.** Dos representantes de las organizaciones juveniles, constituidas legalmente, elegidos entre ellas, en forma directa;
- 2.** Dos representantes por los consejos locales de derechos, elegidos directamente por las organizaciones juveniles constituidas legalmente y que representen uno por las regiones Litoral e Insular y otro por las regiones Sierra y Amazónicas; y,
- 3.** Un representante de las instituciones privada sin fines de lucro que trabajan con la juventud y para los y las jóvenes, en forma directa.

Las organizaciones que tuvieron derecho a la inscripción, deberán realizarla hasta las 16:00 del día martes 15 de enero del 2002, en el Tribunal Provin-

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

cial Electoral de su domicilio, de lunes a viernes, en horario de oficina.

Para justificar la personería, el representante de la organización juvenil solicitante presentará en la Secretaría General del Tribunal Provincial Electoral, su nombramiento y en copias auténticas el Acuerdo Ministerial y los estatutos sociales; y, además, su cédula de ciudadanía y certificado de votación.

Los jóvenes que, en razón de su edad, no tuvieran cédula de ciudadanía o no estuvieron obligados a votar en los últimos comicios, bastará que acrediten su identidad presentando su cédula de identidad, carné estudiantil o de la organización, partida de nacimiento o cualquier otro documento probatorio.

Los representantes de una organización juvenil inscritos en uno de los tribunales provinciales electorales, se reunirán en la ciudad de Quito, el día lunes 21 de enero del 2002, a las 10:30, en el salón Auditorio de la Democracia del Tribunal Supremo Electoral situado en la avenida Seis de Diciembre No. 3606 y Bosmediano, para designar a los representantes determinados en la Ley.

La primera reunión del Consejo Nacional de Políticas de la Juventud, se desarrollará en la ciudad de Quito dentro del plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la elección de los representantes señalados precedentemente.

Publíquese esta convocatoria en los diarios de mayor circulación del país.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil uno.

f) Dr. Carlos Aguinaga Aillón
PRESIDENTE

Lcdo. Guillermo Astudillo Ibarra
SECRETARIO GENERAL".

En consecuencia, el día 21 de enero del 2002 debe tener lugar el Colegio Electoral convocado; sin embargo, es necesario advertir que la ley concedió, al Tribunal el plazo de 10 días para convocar, según la Disposición Transitoria, mas al no haberse dictado el Reglamento de Aplicación, se puede prever la existencia de inconvenientes para la organización de los Colegios Electorales.

PROCESOS ELECTORALES

El proceso electoral que culminó con las elecciones del 21 de mayo de 2000, donde, por primera vez se realizó elección directa de los Vocales de la Juntas Parroquiales de las parroquias rurales, no pudo realizarse, por diferentes motivos en las siguientes jurisdicciones:

Azuay,	parroquia San José de Raranga
Manabí,	parroquia San Pedro de Suma
El Oro,	parroquia Bella María
	parroquia Sinsao
	parroquia Salvias
	parroquia Zaracay
	parroquia Bella María
Orellana,	parroquia Cononaco
	parroquia Yasuní
	parroquia El Edén
Morona Santiago,	parroquia San Miguel del Cuy
	parroquia El Ideal
Galápagos,	parroquia Santa Rosa
Loja,	parroquia San Pedro de Tenta
Pichincha,	parroquia Valle Hermoso

Se realizó un Censo de Electores en las Parroquias Rurales de la provincia de El Oro, y en base a ello, se elaboró el Padrón para las elecciones.

De otra parte se realizó un intercambio de información con la Asociación de Municipalidades, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Obras Públicas para facilitar la "Zonificación Electoral", como mecanismo orientado a disminuir el ausentismo en futuras elecciones y procurar, al mismo tiempo, que el ciudadano, tenga mayores facilidades para el cumplimiento de su deber cívico de votar.

El Tribunal dictó el correspondiente Instructivo para estas operaciones, y de acuerdo con ello, se aprobó y dispuso implementar el nuevo criterio de la Zonificación

en dos de las ocho provincias en que se realizaban elecciones; concretamente en Manabí, parroquia San Pedro de Suma perteneciente al cantón El Carmen y en Orellana, parroquia Cononaco, de jurisdicción del cantón Aguarico.

En virtud de la disposición de realizar un censo electoral en las 5 parroquias rurales que estaban en procesos electorales, se procedió al análisis de las firmas en las boletas censales y a su comparación con las que pusieron en el padrón electoral en la última elección, a fin de determinar su legitimidad.

El Instructivo expedido es del siguiente tenor:

***“INSTRUCTIVO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE ELECTORES
EN LAS PARROQUIAS DE SUMA EN MANABÍ;
BELLA MARÍA, SINSAO, SALVIAS, SARACAY Y BELLA MARÍA EN EL
ORO; CONONACO, YASUNÍ Y EL EDEN EN ORELLANA; SAN
MIGUEL DEL CUYE Y EL IDEAL EN MORONA SANTIAGO; SANTA
ROSA EN GALÁPAGOS; Y, VALLE HERMOSO EN PICHINCHA.***

**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CONSIDERANDO:**

PRIMERO: *Que el artículo 209 de la Constitución de la República establece la obligación que tiene el Tribunal Supremo Electoral de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales.*

SEGUNDO.- *Que el artículo 235 de la Carta Magna establece que en cada parroquia rural habrá una junta parroquial de elección popular.*

TERCERO.- *Que la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales dispone que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones para designar los miembros de esos organismos en las jurisdicciones que no se efectuaron los comicios el 21 de mayo del 2000.*

CUARTO.- *Que por falta de electores empadronados, el 21 de mayo del 2000 no se realizaron elecciones de miembros de las juntas parroquiales rurales en las parroquias: San Pedro de Suma en Manabí, Bella María, Sinsao, Salvia, Saracay y Bella María en El Oro; Cononaco, Yasuní y El Edén en Orellana, San Miguel del Cuye y El Eden en Morona Santiago; Santa Rosa en Galápagos; y Valle Hermoso en Pichincha.*

QUINTO.- Que es deber de la Función Electoral elaborar los padrones electorales, así como dictar los instructivos para el efecto.

En uso de las atribuciones y facultades que le otorgan la Constitución y las leyes de la República.

RESUELVE:

Dictar el siguiente Instructivo para el empadronamiento de electores en las parroquias rurales de: San Pedro de Suma en Manabí; Bella María, Sinsao, Salvias, Saracay y Bella María en El Oro; Cononaco, Yasuní y El Edén en Orellana, San Miguel del Cuye y El Ideal en Morona Santiago; Santa Rosa en Galápagos; y, Valle Hermoso en Pichincha.

Art. 1.- Los tribunales provinciales electorales en el período comprendido del 9 al 24 de mayo del 2001, ejecutarán la campaña de empadronamiento en las parroquias rurales a que hace referencia este Instructivo.

Art. 2.- Los tribunales provinciales electorales constituirán Brigadas de Empadronamiento integradas por dos funcionarios de la institución, a quienes se les asignará un código individual, y serán las únicas personas autorizadas para realizar dicho empadronamiento.

Art. 3.- Los empadronadores, para el cumplimiento de su labor, utilizarán los formularios debidamente numerados en original y dos copias que para el efecto suministrará el Tribunal Supremo Electoral. En todos los formularios utilizados obligatoriamente deberán constar nombre, apellido, código y firma del empadronador.

Art. 4.- Cada Tribunal Provincial Electoral organizará el calendario de labores y forma de funcionamiento de las brigadas de empadronadores, en consideración a la extensión territorial, densidad poblacional, vías de comunicación, condiciones de transporte, organización de la sociedad, etc., de cada una de las parroquias.

Art. 5.- El ciudadano que desee registrarse, deberá hacerlo personalmente ante una brigada de empadronadores, portando su Cédula de Ciudadanía y llenando y firmando el "Formulario de Empadronamiento Electoral". No serán válidos los formularios en que falte información, la firma o la huella digital del interesado.

Los originales del formulario serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral pa-

ra efecto de auditoría informática, la primera copia será entregada al interesado y la segunda copia la conservará el tribunal provincial correspondiente.

Art. 6.- En los centros de cómputo de los tribunales provinciales, utilizando el programa denominado "Empadronamiento Electoral", elaborado y entregado por la Dirección de Sistemas, se ingresará la información contenida en los Formularios de Empadronamiento Electoral, luego de lo cual se la enviará al Tribunal Supremo Electoral.

Los originales de los formularios y la información del programa "Empadronamiento Electoral", se remitirán una vez por semana; y, terminado el período de la campaña, hasta tres días posteriores a la conclusión del empadronamiento.

Art. 7.- Las Direcciones de Mecanismo Electoral, Sistemas Informáticos y Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, conforme reciban los archivos y documentos de las diferentes provincias, previa la auditoría correspondiente, procesarán la información y concluirán la actualización del padrón electoral, en el plazo de hasta diez días de recibida la última información de las provincias. La actualización definitiva del padrón deberá contar con la aprobación del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.

Art. 8.- Solo podrán empadronarse las personas residentes en la parroquia en la cual van a realizarse las elecciones.

El ciudadano que al empadronarse cambió su domicilio electoral, no podrá volver a modificarlo hasta después de las elecciones generales del año 2002. Los organismos electorales están obligados a supervisar y garantizar el cumplimiento de estas disposiciones.

Art. 9.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Instructivo, será sancionado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los ocho días de marzo del año dos mil uno.

RAZÓN: Siento por tal que el Instructivo que antecede fue aprobado por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesiones del ocho de marzo del año dos mil uno.- LO CERTIFICO.

f) Dr. Juan David Chávez Pareja
SECRETARIO GENERAL
DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL".

El proceso electoral dió inicio el 4 de junio del 2001, con la siguiente Convocatoria a elecciones:

"CONVOCATORIA EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política de la República, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales que tengan lugar en el país, conciliando con lo dispuesto en los artículos 26, 102 y 235 de la Carta Magna;

Que, con fecha 5 de octubre del año 2000, la Función Legislativa expide la Ley No. 2000-29, Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales, promulgada en el Registro Oficial No. 193 de 27 de octubre del 2000, en cuya Disposición Transitoria Segunda determina que, el Tribunal Supremo Electoral, convocará a elecciones para la designación de miembros de juntas parroquiales, en aquellas parroquias rurales del país, en las cuales no se efectuaron los comicios el día 21 de mayo del 2000;

Que, de acuerdo con la resolución aprobada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral en sesión de 17 de abril del año 2001, dispone se proceda a convocar a elecciones populares, directas y secretas en las juntas parroquiales: San José de Raranga, en el cantón Sigsig de la provincia del Azuay; San Pedro de Suma, del cantón El Carmen de la provincia de Manabí; Bella María del cantón Santa Rosa; Sinsao y Salvias del cantón Zaruma; Saracay, del cantón Piñas y Bella María del cantón Balsas, de la provincia de El Oro; Cononaco y Yasuní del cantón Aguarico; y El Edén, cantón Francisco de Orellana de la provincia de Orellana; San Miguel de Cuye y El Ideal, cantón Gualaquiza de la provincia Morona Santiago; Santa Rosa del cantón Santa Cruz, de la provincia de Galápagos; San Pablo de Tenta, del cantón Saraguro, de la provincia de Loja; y, Valle Hermoso, del cantón Santo Domingo de los Colorados, de la provincia de Pichincha.

En uso de las facultades constitucionales y disposiciones legales consagradas

en los artículos: 209 de la Constitución Política de la República y Art. 20, literal f) de la Codificación de la Ley de Elecciones; y, Art. 7 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales.

CONVOCA:

A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en goce de sus derechos políticos, con domicilio electoral en las juntas parroquiales rurales que a continuación se especifican a elecciones universales, populares, directas y secretas, para elegir las siguientes dignidades:

1. Provincia de Azuay, cantón Sigsig, junta parroquial rural San José de Raranga: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de Manabí, cantón El Carmen, junta parroquial rural San Pedro de Suma: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, junta parroquial rural Bella María: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes; cantón Zaruma,

juntas parroquiales rurales Sinsao y Salvias: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes, en cada una; cantón Piñas, junta parroquial

rural Saracay: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

cantón Balsas, junta parroquial rural Bella María: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de Orellana, cantón Aguarico, juntas parroquiales rurales Cononaco y Yasuní: cinco (5) miembros principales con sus respectivas suplentes en cada una; cantón Francisco de Orellana, junta parroquial rural El Edén: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de Morona Santiago, cantón Gualaquiza, juntas parroquiales rurales San Miguel de Cuye y El Ideal: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes en cada una;

Provincia de Galápagos, cantón Santa Cruz, junta parroquial rural Santa Rosa: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de Loja, cantón Saraguro, junta parroquial rural San Pablo de Tenta: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

Provincia de Pichincha, cantón Santo Domingo de los Colorados, junta parroquial rural Valle Hermoso: cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes;

2. Las candidaturas de las Juntas Parroquiales Rurales deberán presentarse con al menos, el treinta por ciento (30%) de candidatas mujeres entre los principales y el treinta por ciento (30%) entre los suplentes.

Para la representación de la igualdad de género en candidaturas, se aplicará la fórmula de inscripción de dos (2) candidatas mujeres principales y suplentes, respectivamente.

3. En estas elecciones pluripersonales de miembros de las Juntas Parroquiales se aplicará el sistema de listas abiertas pudiendo el ciudadano escoger sus candidatos de una lista o entre listas.

Para la adjudicación de puestos se aplicará la fórmula de representación proporcional de reparto de escaños entre las listas, conocido como el método D'Hont o de divisores continuos.

4. Las inscripciones de todas las candidaturas se receptorán en los respectivos Tribunales Provinciales Electorales del país, desde el 25 de junio del año en curso, hasta las 18:00 horas (ó de la tarde) del día 24 de julio del año 2001.

5. Los candidatos deberán cumplir con los requisitos constitucionales y legales pertinentes, y no estarán incurso en las inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

6. La publicidad electoral podrá realizarse desde el día martes 7 de agosto hasta el jueves 20 de septiembre del año 2001.

7. El período de desempeño de los candidatos electos será el contemplado en la Constitución y en la Ley.

8. Los sufragios se receptorán el día domingo 23 de septiembre del año 2001, desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas (5 de la tarde), debiendo los ciudadanos concurrir con su cédula de ciudadanía a la Junta Receptora del Voto de la correspondiente parroquia donde consten empadronados para ejercer su derecho al sufragio.

Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial, y difúndase en los diarios de mayor circulación del país y por cadena nacional de radio y televisión.

RAZÓN.- Siento por tal, que la presente convocatoria fue aprobada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión del 6 de junio del 2001.
LO CERTIFICO.

f) Dr. Daniel Argudo Pesánte
SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (E)".

Las elecciones se efectuaron con toda normalidad y los resultados fueron los siguientes:

AZUAY:

Parroquia: SAN JOSÉ DE RARANGA

Listas presentadas

Izquierda Democrática
Movimiento Popular Democrático
Partido Roldosista Ecuatoriano
Democracia Popular

Votos	Blancos	Nulos
1.948	12	84

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Urgilés José	MPD	Presidente
2	Sánchez Edgar	MPD	Vicepresidente
3	Sánchez Wilfrido	DP-UDC	1er Vocal
4	Vasquez Vicente	MPD	2do Voca
5	Tirado Víctor	PRE	3er Vocal

EL ORO:

Cantón: BALSAS

Parroquia: BELLAMARÍA

Listas presentadas

Democracia Popular
Partido Social Cristiano
Izquierda Democrática
Movimiento Popular Democrático PACHAKUTIK
Partido Roldosista Ecuatoriano
Partido Unión Alfarista FRA

Votos	Blancos	Nulos
271	1	20

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Apolo Algel	DP-UDC	Presidente
2	Pereira Luis	PRE	Vicepresidente
3	Torres Juan	DP-UDC	1er Vocal
4	Maldonado Luz	PRE	2do Vocal
5	Ramírez Maritza	DP-UDC	3er Vocal

Cantón: PIÑAS

Parroquia: SARACAY

Listas presentadas

Democracia Popular

Partido Social Cristiano

Izquierda Democrática

Movimiento Popular Democrático PACHAKUTIK

Partido Roldosista Ecuatoriano

Partido Unión Alfarista FRA

Votos	Blancos	Nulos
332	1	26

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Eras Víctor	PRE	Presidente
2	Palacios Gloria	ID-MIS	Vicepresidente
3	Balcazar Rosa	PRE	1er Vocal
4	Balcazar Silvio	PRE	2do Vocal
5	Salazar Manuel	ID-MIS	3er Vocal

Cantón: SANTA ROSA

Parroquia: BELLAMARIA

Listas presentadas

Democracia Popular

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

Partido Social Cristiano
Izquierda Democrática
Movimiento Popular Democrático PACHAKUTIK
Partido Roldosista Ecuatoriano
Partido Unión Alfarista FRA

Votos	Blancos	Nulos
383	1	28

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Medinabeitia Oscar	PRE	Presidente
2	Silverio María	ID	Vicepresidente
3	León Julio	PRE	1er Vocal
4	Durán Jaime	ID	2do Vocal
5	Guzmán Goberth	DP-UDC	3er Vocal

Cantón: ZARUMA

Parroquia: SALVIAS

Listas presentadas

Democracia Popular
Partido Social Cristiano
Izquierda Democrática
Movimiento Popular Democrático PACHAKUTIK
Partido Roldosista Ecuatoriano
Partido Unión Alfarista FRA

Votos	Blancos	Nulos
189	4	26

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Ramón Oswaldo	DP-UDC	Presidente
2	Romero Alba	DP-UDC	Vicepresidente
3	Valarezo Judy	PRE	1er Vocal
4	Shune Antonio	DP-UDC	2do Vocal
5	Veintimilla Dositeo	PSC	3er Vocal

Cantón: ZARUMA**Parroquia: SINSAO****Listas presentadas**

Democracia Popular

Partido Social Cristiano

Izquierda Democrática

Movimiento Popular Democrático PACHAKUTIK

Partido Roldosista Ecuatoriano

Partido Unión Alfarista FRA

Votos

220

Blancos

3

Nulos

17

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Espinoza Jorge	PRE	Presidente
2	Romero Elfa	PRE	Vicepresidente
3	Suárez María	PRE	1er Vocal
4	Carrión Bolívar	ID	2do Vocal
5	Ramón Guido	PSC	3er Vocal

GALÁPAGOS:**Parroquia: SANTA ROSA****Listas presentadas**

Partido Roldosista Ecuatoriano

Partido Social Cristiano

Democracia Popular

Votos

114

Blancos

0

Nulos

4

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Altamirano Zurita Jaime	PRE	Presidente
2	Sánchez Sánchez Guandulfo	PSC	Vicepresidente
3	Herrera Prado Laura	PRE	1er Vocal
4	Amay Amay Adela	PSC	2do Vocal
5	Moncada Prado Margarita	DP-UDC	3er Vocal

LOJA:

Parroquia: SAN PABLO DE TENTA

Listas presentadas

Partido Social Cristiano

Partido Roldosista Ecuatoriano

Pachakutik

Votos	Blancos	Nulos
3.267	19	68

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Japón Contento Miguel	MUPP-NP	Presidente
2	Armijos Torres Elisa	MUPP-NP	Vicepresidente
3	Calderón Clever	MUPP-NP	1er Vocal
4	Cartuche Sandoval Jaime	MUPP-NP	2do Vocal
5	Ordoñez Gutiérrez Alfonso	PSC	3er Vocal

MANABÍ:

Cantón: El Carmen

Parroquia: SAN PEDRO DE SUMA

Listas presentadas

Partido Democracia Popular

Partido Social Cristiano

Partido Roldosista Ecuatoriano

Votos	Blancos	Nulos
2.196	7	49

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	López Navarrete Genito	PSC	Presidente
2	Pico Montalbán Letis	PSC	Vicepresidente
3	Loor Zambrano Antonio	PSC	1er Vocal
4	Loor Zambrano Medardo	PRE	2do Vocal
5	Mendoza Zambrano Tulio	DP	3er Vocal

MORONA SANTIAGO:**Cantón: GUALAQUIZA****Parroquia: IDEAL****Listas presentadas**

Partido Roldosista Ecuatoriano PRE

PACHAKUTIK MUPP-NP

Votos	Blancos	Nulos
145	0	6

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Lucero Sánchez Luis	PRE	Presidente
2	Fernández Cajamarca José	PRE	Vicepresidente
3	Pesántez García Blanca	MUPP-NP	1er Vocal
4	Orellana Criollo María	PRE	2do Vocal
5	Arias Orellana Macrinda	PRE	3er Vocal

Cantón: SAN MIGUEL DEL CUYE**Parroquia: SAN MIGUEL DEL CUYE****Listas presentadas**

Partido Roldosista Ecuatoriano PRE

PACHAKUTIK MUPP-NP

Votos	Blancos	Nulos
74	0	4

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

1	Fernández Suqui Gerardo	PRE	Presidente
2	Suqui Sagbay Segundo	PRE	Vicepresidente
3	Morocho Morocho Miguel	PRE	1er Vocal
4	López Jarro Bilma	PRE	2do Vocal
5	Pillacela Fernández Ninfa	PRE	3er Vocal

ORELLANA:

Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA

Parroquia: EL EDEN

Listas presentadas

Partido Social Cristiano

Votos	Blancos	Nulos
249	0	0

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

Salazar Coquinchí Daniel	Presidente
Macanilla Machoa Miguel	Vicepresidente
Alvarado Tanguila Adriana	1er Vocal
Ajon Urapari Ercilia	2do Vocal
Quindigua Grefa Clemente	3er Vocal

Cantón: AGUARICO

PARROQUIA: YASUNÍ

Listas presentadas

Alianza Política

Votos	Blancos	Nulos
39	0	0

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

Tangoy Yumbo Alfredo	Presidente
Calo Ipiales José	Vicepresidente
Tanguila Grefa Fidel	1er Vocal
Tangoy Tamboy Fanny	2er Vocal
Salazar Chimbo Rebeca	3er Vocal

Cantón: AGUARICO

Parroquia: CONONACO

Listas presentadas

Alianza Política

Votos	Blancos	Nulos
117	0	0

Ciudadanos electos como miembros de la Junta Parroquial

Aigua Aigua Guima	Presidente
Huabe Pegui Wey	Vicepresidente
Jaramillo Herrera Franco	1er Vocal
Kemo Yacata Yatebe	2do Vocal
Arba Omehuai Cúmencaqui	3er Vocal

Además, el H. Congreso Nacional insistió ante el Ejecutivo sobre la creación del cantón PABLO SEXTO, en la provincia de Morona Santiago, lo cual dio origen a la expedición de la Ley 2001-52 publicada en el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre del 2001.

La Ley de Elecciones tiene la siguiente disposición:

"Cuando se crearen nuevas provincias, cantones y parroquias rurales, el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones de diputados, prefectos, alcaldes, consejeros provinciales y miembros de las juntas parroquiales rurales, según el caso, en el plazo de noventa días contados a partir de la vigencia de la respectiva ley u ordenanza. Los electos permanecerán en funciones hasta que se realicen las primeras elecciones generales".

Y, en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales (Registro Oficial No. 115 de 15 de enero de 1999) correspondía que Asesoría Jurídica elabore la Convocatoria para elecciones directas de alcalde y concejales del cantón Pablo Sexto en la provincia de Morona Santiago.

En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral convocó para las mencionadas elecciones municipales, mediante el siguiente documento:

“CONVOCATORIA
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 209 de la Constitución Política del Estado, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales que tengan lugar en el país, conciliando con lo dispuesto en los artículos 26, 98, 99, 102 y 234 de la misma Carta Magna

Que, la Función Legislativa dictó la Ley No. 2001-52 de creación del cantón Pablo Sexto, en la provincia de Morona Santiago, promulgada en el Registro Oficial No. 439 de 24 de octubre del 2001,

Que, de conformidad a lo establecido en la Segunda Disposición Transitoria de la referida Ley en concordancia con lo dispuesto en los artículos 20 literal f), 44, 45 y 178 segundo inciso de la Codificación de la Ley de Elecciones y artículo 27 de la Ley de Régimen Municipal, el Tribunal Supremo Electoral convocará a elecciones de alcalde y concejales del cantón Pablo Sexto, en el plazo de noventa día contados desde la promulgación de la Ley de creación y además la convocatoria será hecha con al menos noventa días de anticipación al de las elecciones.

En uso de sus facultades constitucionales y legales:

CONVOCA:

A las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos en goce de sus derechos políticos, domiciliados en el cantón Pablo Sexto, de la provincia de Morona Santiago a elecciones universales, populares, directas y secretas para elegir las siguientes dignidades:

- 1.** Un (1) alcalde municipal; y,
- 2.** Cinco (5) concejales municipales principales con sus respectivos suplentes. Las candidaturas a concejales municipales, que constituyen elecciones pluripersonales deberán presentarse con al menos, el treinta y cinco por ciento (35%) de candidatas mujeres entre los principales y el treinta y cinco por ciento entre los suplentes.

Para la representación de la igualdad de género en candidaturas, se con-

siderará en forma alternada y secuencial al menos dos (2) candidatas mujeres como principales y dos (2) como suplentes, en las respectivas listas.

Las inscripciones de las candidaturas se receptorán en el Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago desde el día siguiente a esta Convocatoria, hasta las 18:00 horas (6 de la tarde) del día martes 20 de agosto del año 2002, y los candidatos deberán cumplir con los requisitos constitucionales y legales pertinentes, además, no estarán incurso en las inhabilidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

El período de desempeño de los electos en este proceso electoral, será del 5 de enero del 2003 al 10 de agosto del 2004, a excepción de dos concejales de minoría que cesarán en sus funciones el 5 de enero del 2006. Los tres concejales que constituyen la mayoría resultarán del sorteo que se realizará la segunda semana de marzo del 2004, previo a la convocatoria a las elecciones que se realizarán el 16 de mayo de ese año, en las que se designarán los alcaldes y se renovarán mayorías de concejales a nivel nacional.

La campaña electoral se iniciará el día martes 3 de septiembre y culminará el día jueves 17 de octubre del 2002 hasta las 24:00 horas (12 de la noche). Los sufragios se receptorán el día domingo 20 de octubre del año 2002, desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas (5 de la tarde), debiendo los ciudadanos concurrir portando la cédula de ciudadanía a la Junta Receptora del Voto, donde consten empadronados para ejercer su derecho al sufragio.

Publíquese esta convocatoria en el Registro Oficial, en los diarios de mayor circulación del país y por cadena nacional de radio y televisión.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los 20 días del mes de enero del año dos mil dos.

f) Dr. Carlos Aguinaga Aillón
PRESIDENTE

f) Ing. Alfredo Arévalo Moscoso
VICEPRESIDENTE

f) Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed
VOCAL

f) Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio
VOCAL

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

f) Sr. José María Cabascango
VOCAL

f) Sr. Juan Aguirre Espinosa
VOCAL

f) Dr. Armando Cazar Valenzuela
VOCAL

f) Lcdo. Guillermo Astudillo Ibarra
SECRETARIO GENERAL".

Por lo mismo, el 20 de octubre del 2002, tendrán lugar las primeras elecciones edilicias en el cantón Pablo Sexto de la provincia de Morona Santiago.

ACCIONES CONSECUENTES DE PROCESOS ELECTORALES

Vistos y analizados los resultados de los comicios del 21 de mayo del 2000, y en acatamiento de lo mandado por las correspondientes disposiciones legales, el Tribunal Supremo Electoral consideró la situación de los partidos que no habían participado en elecciones pluripersonales en diez provincias al menos (letra d) del Art. 35 de la Ley de Partidos Codificada; y encontró que estaban en aquella situación: el Partido Liberal Radical Ecuatoriano y, Concentración de Fuerzas Populares, Unión Popular Latinoamericana y Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana. También se ratificó a los Partidos 1, 11, 14, 15, 17, 18 y 21 por no haber obtenido, por lo menos el 5% de votos en las elecciones pluripersonales del 2000. En consecuencia, en sesión de 4 de julio del 2000, mediante la siguiente Resolución se inició el proceso de declaración de extinción de los cuatro partidos:

“RESUELVE:

- 1.** *Iniciar el procedimiento de declaración de extinción de los Partidos Políticos: Liberal Radical Ecuatoriano, Concentración de Fuerzas Populares, Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, y Unidad Popular Latinoamericana, listas 16, a efectos de cancelar la Inscripción del Registro de Partidos Políticos.*
- 2.** *Notificar a los Partidos Políticos, antes indicados con esta Resolución, a través del casillero electoral, la misma que se comunicará al Dirigente Máximo, por cuanto ejerce la representación legal al tenor de lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de Partidos Políticos.*
- 3.** *Conceder el plazo de sesenta días para que presenten las pruebas de descargo y alegatos que estimen pertinentes, conforme lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Partidos Políticos, contados a partir de la notificación.*
- 4.** *Se advierte de la obligación que tienen de señalar el domicilio en el Casillero Electoral y de que serán juzgados en rebeldía en caso de no contestar ni presentar pruebas de descargo.*
- 5.** *Deberán designar a un abogado Defensor que los patrocine, a fin de garantizar el derecho de defensa”.*

Cabe recoger los conceptos vertidos en el "Acápito IV. ANÁLISIS" del Informe de Mayoría, signado con el No. 193-CJ-TSE-2000, de 1 de julio del 2000 y que es el que sustenta la Resolución que hemos transcrito:

*"De las disposiciones legales enunciadas se puede determinar lo siguiente:
Un partido político para su reconocimiento debe contar con una organización nacional, la que deberá extenderse por lo menos a diez de la provincia del país, entre las cuales, dos deberán corresponder a las tres de mayor población (Art. 12, Ley de Partidos Políticos).*

*La norma legal prevista en el literal d) de Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos, expresa claramente: "Por no participar en un evento pluripersonal **por lo menos en diez provincias**, demostrándose la voluntad del legislador de que todo partido político está obligado a que la base de su estructura partidaria se extienda por lo menos en diez provincias, en razón de la división administrativa y geográfica del País, esto es que, su militancia se encuentra distribuida por lo menos en diez provincias, de entre las cuales dos serán las de mayor población, lo cual lleva implícito su dimensión o alcance territorial que es el lindero de la provincia.*

La cobertura en diez provincias para elecciones pluripersonales se establece para las representaciones populares en esas unidades territoriales que en el caso ecuatoriano y específicamente de las elecciones del 21 de mayo del 2000, corresponde al Consejo Provincial; por lo que mal se puede considerar que el electorado participó en diez provincias cuando se hizo a través del voto para candidatos en listas de Concejales Municipales y para miembros de las Juntas Parroquiales Rurales, ya que estas candidaturas son unidades cantonales y parroquiales, y no representan la unidad territorial que determina la ley, que es la provincia

No se discute el sentido de la elección pluripersonal, sino el alcance de la elección que en unos casos, es parroquial o cantonal, y por lo tanto no es provincial como así lo dispone la norma legal contenida en el literal d) del Art. 37. Por lo expuesto, un partido político debe participar con listas pluripersonales de carácter provincial por lo menos en diez provincias, entre las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor población.

El mandato Constitucional y la Ley de Partidos Políticos coinciden con los pro-

pósitos de fortalecimiento real y efectivo de los partidos políticos como "pilares del Sistema Democrático".

Y el mismo Informe en otro numeral agrega:

"8. Para mayor sustento jurídico, es necesario indicar que existe jurisprudencia respecto de este tema, toda vez que, el Tribunal Supremo Electoral en sesión del día jueves 1 de septiembre de 1988, Resolvió:

.....

2.- Aprobar la siguiente moción, respecto a los informes Art. 246 y 246-A-CJ-TSE-88, sobre el caso de los Partidos Políticos del Pueblo, Demócrata y Republicano, con el siguiente texto: "El Tribunal Supremo Electoral ratifica la decisión tomada por el Organismo en sesiones anteriores, en el sentido de que para que haya la participación de un partido en elecciones pluripersonales, en diez provincias, de las cuales dos deben ser de las tres de mayor población, se considera que los partidos políticos deben inscribir listas de consejeros o de diputados provinciales; y, en el caso de que un partido político en elecciones pluripersonales, inscribiera listas de diputados, por ejemplo en seis provincias y de consejeros provinciales, en cuatro provincias diferentes de las anteriores, siempre que estén incluidas 2 de las 3 de mayor población, se tomará como intervención en diez provincias del país y se entenderá que ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 37 literal d) de la Ley de Partidos Políticos.

3. Declarar la extinción de los Partidos Políticos Demócrata y Republicano y disponer que el Departamento de Partidos Políticos cancele su inscripción del registro correspondiente, porque se hallan incurso en la causal de extinción contemplada en el Art. 37, literal d) de la Ley de Partidos Políticos...." pese a que en el caso del Partido Demócrata, que participando en nueve provincias en las dignidades de diputados y consejeros provinciales y adicionalmente en tres de las dignidades de concejales municipales, el Tribunal Supremo Electoral de ese entonces resolvió "que estaba incurso en el Art. 37, literal d) de la Ley de Partidos Políticos, declarando su extinción"; de igual manera sucedió con el Partido Republicano quien participó en nueve provincias, conforme consta de los informes de la Comisión Jurídica y actas de dicha sesión del Ple-

no, creando un antecedente jurídico, que en estricto derecho debe ser aplicado en todos los casos, sin excepción ni discrimen alguno, para así fortalecer nuestra débil democracia”.

Después de citados legalmente, los cuatro, hicieron uso de su derecho de defensa, y de presentación de alegatos. En cada caso, el Pleno del Tribunal trasladó los expedientes a la Comisión Jurídica para que emita su informe previo a la resolución.

La Comisión Jurídica emitió sus dictámenes en los diferentes casos, en base a las normas constitucionales y legales, en base al Informe del Departamento de Organizaciones Políticas, sobre la participación en las elecciones y concordando con la jurisprudencia aplicada en 1988, que, a su vez, sustentó su pronunciamiento en lo aplicado en 1979, nueve años antes, en el caso de los Partidos ARNE y PATRIOTICO POPULAR que no habían participado en diez provincias en elecciones para miembros de la Cámara Nacional de Representantes; todo, en base a la Ley de Partidos Políticos que no ha sufrido al respecto reforma alguna desde su expedición en 1978, junto a una rectitud de procedimientos que enaltece a la Función Electoral a lo largo de diferentes épocas, en espacio de 22 años y en el desempeño de tres diferentes Tribunales Supremos Electorales.

Los argumentos usados por la Comisión Jurídica fueron similares para los cuatro casos, pero por las connotaciones que tuvo posteriormente, al llegar al Tribunal Constitucional, nos detendremos a comentar el Informe presentado en el caso de Concentración de Fuerzas Populares.

En sus alegatos CFP argumentó:

- La disposición constante en el segundo inciso del Art. 115 de la Constitución Política no es aplicable para las elecciones del 2000 porque ésta es la primera elección después de la vigencia de la Constitución de 1998, cuya disposición final “determina que entrará en vigencia el día en que se posesione el Presidente de la República”.
- La aplicación del literal d) del Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos “está equivocada” y pretendiendo demostrarlo acompaña los certificados de 14 Tribunales Provinciales Electorales de que en esas provincias presentó candidatos: El Oro, Los Ríos, Esmeralda, Manabí, Galápagos, Loja, Tungurahua, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Pastaza y Zamora Chinchipe.

- Invoca que la disposición constante en el literal d) del Art.37, fue declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante Resolución TGC-79-CP, publicada en el Registro Oficial No.202, de 2 de junio de 1993.

La Comisión Jurídica del Tribunal, emitió su Informe en este asunto, bajo el No. 007-CJ-TSE-2001 de 12 de febrero del 2001 y en el "ANÁLISIS" que efectúa se encuentra las siguientes consideraciones:

"De los informes de mayoría y minoría que obran en autos, de fojas 5 al 19; y de 20 a 21 de la Dirección de Organizaciones Políticas del expediente; al igual que de las certificaciones otorgadas por los diferentes tribunales provinciales electorales, presentadas por el Director de Partido Concentración de Fuerzas Populares CFP, constante de fojas 34 a 62; se prueba que dicha Organización política no se encuentra cumpliendo la norma legal contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, (anterior Art. 37, literal d) de la Ley de Ley de Partidos Políticos).

Considerando la vigencia plena en el derecho electoral ecuatoriano, de la norma contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, (anterior Art. 37, literal d de la Ley de Partidos Políticos), están obligados los Partidos Políticos legalmente reconocidos e inscritos en el Registro que mantiene para el efecto el Tribunal Supremo Electoral, a participar en elecciones pluripersonales nacionales por lo menos en diez provincias; requisito que conforme a la documentación que obra en el expediente no ha cumplido el PARTIDO CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES, LISTA 4; en los comicios de 21 de Mayo del 2000.

La norma jurídica mencionada en el acápite precedente, guarda concordancia con la disposición legal contenida en el Art. 37 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos (anterior 39 de la Ley de Partidos Políticos) cuando dispone que los Partidos Políticos, sin restricción de ninguna naturaleza, deben participar en elecciones pluripersonales por lo menos en 10 provincias, con candidatos propios o en alianzas; norma que se encuentra vigente desde el 28 de febrero de 1978, según publicación en el Registro Oficial No. 535 de dicha fecha; correspondiente a casi el 50% de las jurisdicciones electorales y que en 22 años de vida democrática no ha sido reformada a pesar de ha-

berse creado tres nuevas provincias. Por lo cual amerita una reforma legal en cuanto se refiere a elevar el porcentaje de provincias que no podría ser menor a la participación electoral por Partido Político en la mitad de provincias del País, cuyo incumplimiento por parte del Partido Concentración de Fuerzas Populares, se evidencia de las piezas procesales que obran en autos”.

La tesis del Partido Concentración de Fuerzas Populares, es decir, y extremando, que la presentación de listas de candidatos para una Junta Parroquial en una provincia, significa participación electoral en esa provincia, no resiste el menor análisis, pues querría decir que un Partido Político que inscribe lista de candidatos a una Junta Parroquial, en las diez provincias, de las cuales ocho son las menos pobladas del país, está cumpliendo con el requisito exigido por la ley. Es un despropósito utilizar como argumento de derecho.

En el mismo Informe de la Comisión Jurídica presentado respecto de CFP, encontramos, entre muchos argumentos y análisis, el siguiente:

“El Tribunal de Garantías Constitucionales, mediante Resolución signada con el No. TGC-79-CP, publicada en el Registro Oficial No. 202, de 2 de junio de 1993, declaró inconstitucional la disposición legal contenida en el literal d) del Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos. Esta resolución sostenía la existencia de una contraposición entre esta disposición legal y el contenido del Art. 38 de la Constitución Política vigente a esa fecha; por cuanto, la ley no podía crear normas que no existían dispuestas o contempladas en el Carta Magna.

El Máximo Tribunal de Justicia de la República, dando cumplimiento a la disposición constitucional para conocer y resolver en última y definitiva instancia las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Garantías Constitucionales; potestad vigente para aquella época, dictaminó la nulidad de todo lo actuado por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales desde el 8 de abril de 1993; y en particular en referencia a la demanda de inconstitucionalidad del literal d) del Art. 37 de la ley de Partidos Políticos, que fuera presentada por parte del Dr. Carlos Julio Arosemena en contra del Tribunal Supremo Electoral, causa signada con el No. 195-87-2; dicha nulidad se fundamentó en que la resolución en cuestión fue suscrita por el Lcdo. Eduardo Zurita, quien por ca-

recer de título de doctor en Jurisprudencia, no podía integrar el Tribunal de Garantías Constitucionales, toda vez que era requisito indispensable para el desempeño de dicha función. Y, existiendo violaciones legales expresas en la integración de dicho Tribunal, devienen en nulas todas las resoluciones emanadas por dicho organismo. Por tanto, el literal d) del Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos se encuentra vigente en la legislación electoral ecuatoriana”.

NOTA.- En la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, publicada en el Reg. Of. No. 196 de 1 de noviembre del 2000, el anterior Art. 37, es el Art. 35.

El extenso y documentado Informe de la Comisión Jurídica, termina sometiéndolo a consideración del Pleno del Tribunal, las siguientes conclusiones:

“1. Que se proceda a extinguir como Partido Político a **CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES, CFP**, signado con el número electoral 4, por hallarse incurso en la causal de extinción establecida en la disposición legal contenida en el literal d) del art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos (anterior art. 37 de la Ley de Partidos Políticos).

2. Que se disponga a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, proceda a anular la inscripción del Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP, LISTAS 4, de los correspondientes registros.

3. Que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos para que surtan los efectos legales del caso”.

El Informe de mayoría, del que hemos extractado algunos argumentos y razones jurídicas, fue aprobado por el Tribunal en sesión de 6 del marzo del 2001, mediante la siguiente Resolución:

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONSIDERANDO:

Que, la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 196, de 1 de Noviembre de 2000, en el Art. 35, literal d), dispone: “Puede declararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción, por las siguientes causales:.....d) Por no participar en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias”;

Que, de conformidad con lo que prescribe el Art. 37, inciso 1ro, de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos en mención: "Cada partido político deberá concurrir a las elecciones pluripersonales en la forma indicada en el artículo 31 de esta Ley, o aliados con otros partidos políticos sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor población".

Que, de conformidad con el cuadro de participación política del PARTIDO CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES (CFP) lista 4, elaborado por la Dirección de Organizaciones Políticas de este Organismo, y que obra a fojas 21 de expediente No. 132-CJ-2000, en las elecciones pluripersonales del 21 de mayo del 2000, ha inscrito listas de ámbito provincial, para consejeros provinciales, únicamente en 9 provincias: Cotopaxi, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Tungurahua, Zamora Chinchipe y Sucumbíos.

Que, mediante Oficio No. 00429, de 5 de julio del 2000, la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, notifica el 6 del mismo mes y año, al PARTIDO CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES, lista 4, la Resolución adoptada por el Pleno de este Organismo, de fecha 4 de julio del 2000, por la cual se inicia el respectivo procedimiento de declaración de extinción del Partido Concentración de Fuerzas Populares, entre otros; habiéndose de este modo, cumplido estrictamente lo contemplado en el Art. 41 de la Ley de Partidos Políticos, que corresponde al actual Art. 39 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, ya indicada:

Que, concluida la sustanciación del trámite establecido en el Art. 39 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, el PARTIDO CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES, Lista 4, no ha desvirtuado los fundamentos que existen para declarar su extinción, de acuerdo a la causal determinada en el literal d), del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos;

Que, de conformidad con el contenido del Art. 38, inciso 2do., de la Codificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, en tratándose de las causas de los literales c) y d), del Art. 35 del mismo cuerpo legal, el Tribunal Supremo Electoral actuará de oficio o a petición de cualquier ciudadano, para cancelar la inscripción de un partido político.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 36 y 63 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos y más disposiciones antes invocadas,

RESUELVE:

1.- Declarar la extinción del PARTIDO CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES (CFP) Lista 4, y disponer la cancelación de su inscripción del Registro de Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral, por hallarse incurso en la causal de extinción prevista en el literal d), del Art. 35, en concordancia con lo prescrito en el inciso 1ro. del Art. 37, de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

2.- Disponer se publique el contenido íntegro de esta resolución en el Registro Oficial, y su difusión por los medios de comunicación social, de conformidad a lo determinado en el Art. 40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; sin perjuicio de notificar esta resolución al partido político en mención, al casillero electoral asignado en este Organismo.

3.- Notificar esta resolución a la Dirección de Organizaciones Políticas, para que proceda conforme a la misma y surta los efectos legales pertinentes. Dado en la Sala de Sesiones del Tribunal Supremo Electoral, a los seis días del mes de marzo del dos mil uno”.

Atentamente,

f) Dr. Juan Chávez Pareja
SECRETARIO GENERAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL”.

Esta Resolución dió margen para que se presenten dos recursos de amparo constitucional, el úno en Guayaquil y, en Quito, el segundo.

Dichos recursos fueron conocidos por las Salas 1ª y 3ª del Tribunal Constitucional, donde se aceptó el presentado en Guayaquil y se rechazó el presentado en esta ciudad.

Cabe anotar que el Amparo planteado ante el Juez Duodécimo de la Civil del Guayas y cuyo accionante es el Dr. Averrroes Bucaram Záccida, desde su texto en el libelo inicial evidencia la fragua que manejaban, cuando dicen: “AL DEMANDADO DR. CARLOS AGUINAGA COMO REPRESENTANTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL QUE SE LO CITE CON ESTA DEMANDA POR INTERME-

DIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS O MEDIANTE DEPRECATORIO A UN JUEZ DE LA CIUDAD DE QUITO". Y la verdad es que, dijeron, que se cite al Presidente del Tribunal Supremo Electoral por medio de una boleta que se dice fue entregada a un Conserje del Tribunal Provincial del Guayas; pero aún en esa maniobra repudiable e ilegal fallaron torpemente con la cual se notificaba la resolución adoptada en la acción de amparo que supuestamente se expidió una hora antes de la que resolvía la cuestión sometida a conocimiento del Juez de la Primera Instancia Constitucional.

Pero mientras tanto, corría el tiempo dentro del cual se podía apelar; y, cuando el Tribunal Supremo Electoral había quedado en estado de INDEFENSIÓN Y NO PUDO HACER VALER SUS DERECHOS, el mismo juez emite un nuevo auto que concluye diciendo:

"CUARTO.- *Apareciendo de autos que el Tribunal Supremo Electoral no ha sido válida y legítimamente notificado con la providencia que contiene la resolución de 16 de marzo del 2001, que admite la acción de amparo constitucional; POR MANIFIESTA Y OSTENSIBLE, SE DECLARA LA NULIDAD O INVALIDEZ DEL ACTA DE NOTIFICACIÓN DE LA REFERIDA PROVIDENCIA, DISPONIENDO QUE SE VUELVA A NOTIFICAR EN LEGAL Y DEBIDA FORMA A LA PARTE LA REFERIDA PROVIDENCIA DE 16 DE MARZO DEL 2001".*

Pero en tanto, como dijimos, la Sala de lo Constitucional ya dio toda la razón al Partido extinguido.

Esto dijo el juez el 23 de mayo del 2001. El argumento irrecusable de la inexistencia de la citación, lo que vicia el trámite y proceso desde su origen, es ignorado por el Tribunal Constitucional así como el argumento de que se trata de materia electoral que corresponde exclusivamente a la Función Electoral. Tampoco se detiene a leer el Art. 63 de la Ley de Partidos Políticos Codificada, que dice:

"Art. 63.- *La aplicación de esta Ley corresponde al Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los medios necesarios para la organización y funcionamiento de los partidos políticos".*

Y cabe solo una mención adicional: las Resoluciones del Tribunal Constitucional, deben tener las características atribuidas en el Art. 13 de la Ley del Control Constitucional, que dice:

"Art. 13.- Contenido de las resoluciones.- Las resoluciones del Tribunal Constitucional, contendrán las siguientes partes: relación circunstanciada de los hechos, los fundamentos de derecho y la parte resolutive propiamente dicha. Igual contenido observarán los votos salvados, que se expresarán por separado y no afectarán la expedición de la resolución de mayoría".

La III Sala del Tribunal Constitucional expide su Resolución No. 306-2001 de 14 de septiembre, y que por lo profunda en sapiencia y en argumentación y respeto a las normas, transcribimos para consideración y estudio de los H.H. Señores Diputados.

"TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESOLUCION No. 306-2001-III-SALA-RA
CASO No. 488-2001-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- TERCERA SALA.- Quito, 14 de septiembre del 2001, las 11H45.

ANTECEDENTES:

El Dr. Averroes Bucaram Zúccida, por sus propios derechos, solicita que se declare que la Resolución de 16 de marzo de 2001, las 8H00, dictada por el Juez Duodécimo de lo Civil de Guayaquil, dentro de la acción de amparo constitucional No. 144, se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, y que el Tribunal Supremo Electoral, demandado, cumpla sin dilación lo ordenado por el Juez.

CONSIDERANDO:

Que, a fojas 91 del expediente, aparece la Resolución de 16 de marzo del 2001, las 8H00, a través de la cual el Juez Duodécimo Segundo de lo Civil de Guayaquil declara con lugar el amparo constitucional propuesto por el Dr. Averroes Bucaram Zúccida, a nombre y representación de Concentración de Fuerzas Populares, listas 4, como su Jefe de Acción Política, y suspende la Resolución dictada por el Tribunal Supremo Electoral, de 6 de marzo del 2001;

Que, a fojas 93 y vuelta consta la razón sentada por el Secretario del Juzgado el da cuenta de que dicha Resolución ha sido notificada en legal y debida forma a las partes.

Que, a fojas 94 y vuelta, a pedido del Dr. Averroes Bucaram Záccida, el Secretario del Juzgado Duodécimo de lo Civil de Guayaquil, con fecha 5 de abril del 2001, certifica que la Resolución se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley, toda vez, que no se apeló dentro del término legal.

Que, por tanto, el pedido de nulidad de la notificación solicitada por el Presidente del Tribunal Supremo Electoral de fecha 14 de mayo del 2001 constante de fojas 103 a 106 del expediente, es un trámite no previsto en la Ley de Control Constitucional, la misma que determina en su artículo 59: "No se admitirán incidentes de ninguna clase durante los trámites ante el Tribunal Constitucional y de los recursos para las garantías constitucionales".

Que, igualmente la posterior declaratoria de nulidad de dicho acto por parte del Juez de instancia, a través de providencia de 23 de mayo del 2001, las 11H45, constituye una diligencia improcedente.

Por lo expuesto, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional en ejercicio de sus atribuciones

RESUELVE:

- 1.** No admitir el recurso planteado; y,
- 2.** Remitir todo lo actuado tanto al Ministro Fiscal General cuanto al Consejo Nacional de la Judicatura a fin de que revisen las actuaciones cuestionadas.- NOTIFIQUESE.-

f) Dr. Hernán Rivadeneira Játiva
PRESIDENTE

f) Dr. René de la Torre Alcívar
VOCAL

f) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno
VOCAL

RAZÓN: *Siento por tal que la resolución que antecede se aprobó el día catorce de septiembre del dos mil uno.- LO CERTIFICO.-*

*f) Dra. Carmen Estrella Cahueñas
Secretaria de Sala (E)."*

Desde cuándo, nos preguntamos, la invocación de inexistencia de solemnidad de la citación, puede ser un "incidente" inaceptable?

Señores Diputados: nos hemos extendido en este Capítulo para someter a la ilustre consideración de Ustedes y solicitar el debido saneamiento de la situación de INSEGURIDAD JURIDICA ELECTORAL QUE SE HA PRESENTADO, cuestión sobre la que se insiste en el siguiente capítulo.

- 7 -

CONSTITUCIONALIDAD Y TRIBUNAL SUPREMO LA INDISPENSABLE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA ELECTORAL

El contexto de la constitucionalidad, se supone lo proyecta y le da forma, el Legislador Constituyente, para determinar un perfecto equilibrio y efectiva funcionalidad, bajo el supuesto de que todos los Organos del Estado y todos los ciudadanos involucrados, ejerzan las atribuciones que les están asignadas y respeten las que, a otros, corresponden. Ningún Organo de Poder es, no puede considerarse, ínsula única, y que, por lo mismo, puede extender sus funciones y competencias mucho más allá de la órbita dentro de la cual le circunscribe la ley; mucho más, si esta Ley es la Ley Suprema de la República.

El Art. 209 de la Constitución Política de la República establece:

"Art. 209.- El Tribunal Supremo Electoral.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona jurídica de derecho público. Gozará de autonomía administrativa y económica, para su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos políticos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.

Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley.

Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de los partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes.

Los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.

El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio".

El Art. 275 de la misma Carta Magna dice:

“Art. 275.- Conformación.- El Tribunal Constitucional, con jurisdicción nacional, tendrá su sede en Quito. Lo integrarán nueve vocales, quienes tendrán sus respectivos suplentes. Desempeñarán sus funciones durante cuatro años y podrán ser reelegidos. La Ley orgánica determinará las normas para su organización y funcionamiento, y los procedimientos para su actuación. Los Vocales del Tribunal Constitucional deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y estarán sujetos a las mismas prohibiciones. No serán responsables por los votos que emitan y por las opiniones que formulen en el ejercicio de su cargo.

Serán designados por el Congreso Nacional por mayoría de sus integrantes, de la siguiente manera:

Dos, de ternas enviadas por el Presidente de la República;

Dos, de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia, de fuera de su seno;

Dos, elegidos por el Congreso Nacional, que no ostenten la dignidad de legisladores;

Uno, de la terna enviada por los alcaldes y los prefectos provinciales;

Uno, de la terna enviada por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, legalmente reconocidas; y,

Uno, de la terna enviada por las cámaras de la Producción legalmente reconocidas.

La Ley regulará el procedimiento para la integración de las ternas a que se refieren los tres últimos incisos.

El Tribunal Constitucional elegirá, de entre sus miembros, un presidente y un vicepresidente, que desempeñarán sus funciones durante dos años y podrán ser reelegidos”.

Anótese que por disposición constitucional, el Tribunal Supremo, “es persona jurídica de derecho público”, “gozará de autonomía administrativa y económica para su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales....”

El Art. 275 de la misma Constitución no instituye ninguna de esas características y facultades para el Tribunal Constitucional

La Ley Orgánica de Elecciones le reconoce a la Electoral, como FUNCIÓN DEL ESTADO. En efecto, en el Art. 20 se dice: "AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL COMO MÁXIMO ORGANISMO DE LA FUNCIÓN ELECTORAL", y el literal e) del mismo artículo, al hablar de la gestión económica ratifica lo de Función, cuando dice: "Estos prepuestos serán en base a las partidas globales generales que consten en el Presupuesto General del Estado para la Función Electoral.

A más abundamiento, el primer inciso del Art. 13 de la Ley de Elecciones dice:

"Art. 13.- *Los organismos electorales tienen competencia privativa para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta Ley; a los reclamos que interpongan los sujetos políticos a través de sus representantes legales, apoderados o mandatarios especiales; según el caso, y los candidatos; y, a la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley.*

Para los efectos de esta Ley, los partidos políticos, movimientos, organizaciones, alianzas electorales y candidatos independientes, se denominarán sujetos políticos".

El Art. 191 de la misma ley señala:

"Art. 191.- *Las dudas y controversias que puedan presentarse o que pudieran suscitar la aplicación de lo dispuesto en esta Ley serán resueltas por el Tribunal Supremo Electoral.*

Y el Art. 68 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, establece que:

"Art. 68.- *Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales provinciales será fundamentada; tiene el carácter de resolución administrativa de última instancia y causará ejecutoria".*

Es el Art. 3 de la Ley Orgánica del Control Constitucional el que concede al Tribunal Constitucional atributos que la Constitución dio al TSE y no le otorgó al Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la Constitución Política el TSE tiene facultad exclusiva y excluyente en materia electoral; por repetida disposición legal es la máxima autoridad en ese sistema; el Tribunal Constitucional, por la ley, es la máxima autoridad en materia constitucional pero eso le vale para aquéllo que está bajo su competencia y nunca para resolver sobre materia que la Constitución atribuye con carácter de exclusivo a otro ente, muy menos si, ese ente, por expresa disposición de Ley está reconocido como "FUNCIÓN DEL ESTADO".

Para terminar ésta primera parte sobre esta materia es conveniente recordar lo que prescribe el Art. 272 de la Constitución Política:

"Art. 272.- Jerarquía de la Constitución. Conflicto de leyes.-

La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros aspectos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones.

Si hubiere conflicto entre las normas de distintas jerarquías, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior.

Art. 273.- Aplicación obligatoria de la Constitución.- *Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente".*

En el lapso a que se refiere el presente Informe, el Tribunal Constitucional ha conocido y resuelto dos tipos de casos relacionados con materia electoral: tratase de "amparo constitucional" planteado respecto de resoluciones del Tribunal, tanto estableciendo una sanción de multa a un partido, cuanto sobre resoluciones de extinción de partidos, y de movimientos que no han participado "en un evento electoral pluripersonal, al menos en diez provincias" (literal d) del Art. 35 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Todos los casos son innegablemente electorales, pues sobre esta materia casi siempre se funde en un solo acto la aplicación de disposiciones de las Leyes de Elecciones y de Partidos Políticos, por ejemplo: el que un sujeto político no llegue al cinco por cinco de los votos válidos, es realidad que se evidencia en un acto electoral; el sujeto político que no participe al menos en diez provincias en elecciones pluripersonales, se evidencia en la elección.

Consideramos que las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional, y el asunto que ha admitido a consideración por demanda del señor Miguel Llucó, respaldado por firmantes, se deben a que hay desvío de consideraciones bajo tres aspectos:

1. La competencia del Tribunal Constitucional para conocer y resolver asuntos electorales y los correspondientes a sujetos políticos.-

En efecto, y repitiendo: por la naturaleza, los asuntos de la referencia, son de exclusivo conocimiento y resolución del Tribunal Supremo Electoral por el Art. 209 de la Constitución Política; porque los organismos electorales tienen competencia privativa para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley (Art. 13); porque es el "Máximo Organismo de la Función Electoral (Art. 20 de la Ley Orgánica de Elecciones); porque, por el Art. 191 de la misma ley: "las dudas y controversias que puedan presentarse o que pudiera suscitar la aplicación de lo dispuesto en esta ley serán resueltas por el Tribunal Supremo".

2. Por la consideración de quien puede presentar recurso de amparo.-

El Tribunal Constitucional atribuye al Art. 23 de la Constitución una extensión no solo excesiva, sino ilógica. En efecto: el Art. 23 trata de los "Derechos civiles"; su encabezamiento lo define cuando dice: "Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las PERSONAS los siguientes...."; no solo ese artículo, todo el capítulo y los capítulos que siguen, todos pertenecientes al "TÍTULO III - DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES, se refieren a "la persona humana"; es desproporcionado, fuera de si-

tio que el Tribunal Constitucional, aplique esas garantías a las PERSONAS JURÍDICAS y en el caso que nos preocupa, concretamente, a las PERSONAS JURÍDICO-POLÍTICAS.

3. El concepto que se tiene de “acto ilegítimo”, en función de justificar el amparo.- El Art. 95 de la Constitución crea el recurso de amparo contra “acto ilegítimo de autoridad”. Las resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral nada tienen de “ilegítimo”; al contrario, adoptó, en cada caso, un acto mandado por la ley; lo adoptó ajustado a derecho, de su propia competencia y de carácter LEGÍTIMO. Cabanellas, dice: “LEGÍTIMO: legal o conforme a ley (v). Ajustado a derecho”.

El Art. 95 de la Constitución instituye el recurso de amparo contra el “acto ilegítimo” de autoridad. Como en los casos que nos preocupan no existe “acto ilegítimo”, no es, no puede considerarse materia de amparo constitucional, y al acogerlos como tal, se incurre en un acto prohibido y contrario al ordenamiento jurídico.

4. Aparte, y además, nosotros creemos que en los asuntos relacionados con el Tribunal Supremo se afectó el “Debido Proceso”; éste, es un bien que está garantizado por la Constitución Política de la República.- No hubo cuidado por asegurarse que el reclamante esté revestido de su calidad de representante y personero autorizado del sujeto político.- Se desatendió la importancia de que el Tribunal Supremo Electoral sea citado legalmente, hasta llegar a la situación que aparezca que se lo hizo en hora anterior a la que lleva la Resolución que aparece como materia de la citación.- No se examinó si se había cumplido u omitido solemnidades sustanciales.- En algún caso se ignoró que después de establecida la competencia y el cumplimiento de solemnidades sustanciales, débese hacer una relación circunstanciada de los hechos y de los fundamentos de derecho para concluir en la resolución.- Se ignoró expresos textos legales: la Ley Orgánica de Partidos en su Art. 68, que habla de que cada decisión del TSE tiene carác-

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

ter de "resolución de última instancia y causará ejecutoria" y la propia Ley de Control Constitucional que establece: "Para los efectos de la demanda de inconstitucionalidad se entenderá como acto administrativo el relativo a "SITUACIONES JURÍDICAS INDIVIDUALES".

Y, como dejamos enunciada la existencia de una demanda de inconstitucionalidad planteada por el señor Miguel Llucó, y que se halla pendiente de resolución, cabe hacer unas consideraciones adicionales sobre el tema:

El máximo dirigente del Movimiento Pachacutik, señor Miguel Llucó, se presentó ante el Tribunal Constitucional, demandando la inconstitucionalidad de la resolución de 6 de Marzo del 2001, y así tenemos nuevamente a dicho Tribunal convertido en juez de actos electorales, que son de indiscutible y exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral, contribuyendo nuevamente a alimentar la inseguridad jurídica en materia tan sensible y contribuyendo, sin lugar a duda, para acumular recelos respecto al endeble sistema democrático que vive el país.

El acto administrativo ejercido con la Resolución de 6 de Marzo es legítimo, porque la Constitución le instituye al Tribunal como el único responsable de "las funciones organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales....".

El Art. 20, literal n) de la Ley de Elecciones Codificada dispone:

"Art. 20.- Al Tribunal Supremo Electoral como máximo organismo de la Función Electoral le compete:

.....
n) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la presente Ley, de la de partidos políticos y de la Ley Orgánica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y de sus Reglamentos".

El Art. 191 dice:

"Art. 191.- Las dudas y controversias que puedan presentarse o que pudie-

ra suscitar la aplicación de lo dispuesto en esta Ley serán resueltas por el Tribunal Supremo Electoral”.

Perdón, por tener que repetir la transcripción del

“Art. 68.- Toda decisión del Tribunal Supremo Electoral o de los tribunales provinciales será fundamentada; tiene el carácter de resolución administrativa de última instancia y causará ejecutoria”.

Tratando de ordenar las argumentaciones inconsistentes del señor Llucó, podemos hacer el siguiente resumen:

1. Se ha violado el Art. 23 de la Constitución, numeral 3 que dice:

“Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigente, el ESTADO RECONOCERÁ Y GARANTIZARÁ A LAS PERSONAS LOS SIGUIENTES.....

3. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole”;

2. El Art. 99 de la Constitución dice:

“En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La ley conciliará este principio con el de la representación proporcional de las minorías”.

El Art. 37 de la Ley de Elecciones “ES INAPLICABLE E IMPROCEDENTE”, es decir que existe un gran vacío legal, pues la norma constitucional no ha sido desarrollada en la norma secundaria, como corresponde.....

En tercer lugar, jamás se indica en qué norma jurídica consta la fórmula o procedimiento de cálculo que se aplicó para establecer el porcentaje de representación electoral que le correspondía a cada partido político o movimiento político independiente”.

Es decir existe vacío legal, y en tales circunstancias, no es explicable el

hecho de que no existiendo norma jurídica para estos casos, el Tribunal Supremo Electoral expida una resolución que no tiene sustento jurídico en su aplicación”

- 3.** *Petición: Inconstitucionalidad de la resolución del TSE, 06-03-2001 que manda notificar a los Partidos y Movimientos que tuvieron menos del 5% en las elecciones de 21-05-2000, porque..... y se invoca el Art. 272 de la Constitución.*

Respecto de tales “argumentos” cabe el siguiente comentario:

Una pésima lectura de la Constitución y las leyes, ha permitido que se escriba y presente una larga demanda huérfana de sustento jurídico. En efecto, el siguiente breve comentario así lo demuestra:

- 1.** La invocación del art. 23 literal a) es totalmente fuera de sitio, porque se refiere a PERSONAS NATURALES, y las acciones del TSE a que se refiere la demanda es en relación con personas jurídicas políticas. El Art. 4 de la Ley de Partidos Políticos dice:

“Los Partidos Políticos reconocidos son personas jurídicas de derecho privado, en cuyo carácter pueden realizar actos y contratos de acuerdo con el derecho común. Tienen además personería política para el ejercicio de los derechos que esta ley les reconoce”.

Consideramos que, con lo dicho, queda perfectamente claro que para el caso no es aplicable ni cabe invocar la garantía constante en el numeral 3 del Art. 23 de la Constitución Política. Y, si el TC hubiere dictado una norma que pueda amparar tal pedido, dicha norma carece de valor por lo preceptuado en el Art. 272 de la Constitución Política.

- 2.** En todo el largo amontonamiento de palabras que se pretende sean argumentos, se cae en la confusión total de querer tratar como sinónimos a los partidos y a los movimientos, y por lo mismo sujetos de las mismas situaciones, beneficiados

con los mismos privilegios y garantizados por los mismos derechos; y, la verdad es totalmente distinta. La realidad es que la Constitución Política desde el primer momento se refiere a los Partidos en tono totalmente distinto del usado para los Movimientos. Así tenemos: el Art. 114 dice "..... Los Partidos Políticos gozarán de la protección del Estado para su organización y funcionamiento". LOS PARTIDOS, SOLO LOS PARTIDOS.

El Art. 115 señala los requisitos que ha de cumplir el Partido para ser reconocido.- Los PARTIDOS, SOLO LOS PARTIDOS.

Estamos hablando de derecho público; en derecho público solo lo que está escrito, no hay interpretaciones extensivas, tampoco lecturas antojadizas.

El Art. 115 en su segundo inciso y por primera vez equipara al Movimiento con el Partido pero para una situación puntual: cuando en dos elecciones pluripersonales no alcanzan el CINCO POR CIENTO DE LOS VOTOS VALIDOS. CINCO POR CIENTO ES UNA OPERACIÓN DE ELEMENTAL MATEMATICA PERFECTAMENTE DEFINIDA y que no necesita desarrollarse en ninguna ley para ser aplicada.

El Art. 116 también equipara los movimientos a los partidos para la rendición de cuentas: Nada más.

Por consiguiente: en la Carta Política no hay institucionalización alguna de los Movimientos, ni siquiera referencia a la posibilidad de que existan en la forma que hoy se pretende.

La referencia legal respecto a existencia de Movimiento, está en la Ley de Partidos Políticos, Art. 10.

La Ley de Partidos Políticos afirma que, éstos: LOS PARTIDOS

"Constituyen un elemento fundamental del sistema democrático: expresarán y orientarán la voluntad política del pueblo, promoverán la activa participación cívica de los ciudadanos, capacitarán a sus afiliados para que intervengan en

la vida pública, y seleccionarán a los mejores hombres para el ejercicio del Gobierno"

Aunque resulte repetitivo: "LOS PARTIDOS, SOLO LOS PARTIDOS". Ni entre líneas asoma " el movimiento".

Y si hablamos de que "gozarán de la protección del Estado para su organización y funcionamiento", menciona exclusivamente a "Los partidos políticos", y desarrollando ese texto constitucional, la Ley Orgánica de Partidos Políticos dice:

"Art. 59.- El Estado contribuye al financiamiento de los PARTIDOS Y PARA EL EFECTO CREA EL FONDO PARTIDARIO PERMANENTE.....

El Tribunal Supremo Electoral lo distribuirá entre los PARTIDOS que tengan derecho.....

Art. 60.- En los años en que se realicen elecciones, en el Presupuesto General del Estado constará otra partida..... que permita afrontar el gasto electoral realizado por los PARTIDOS....."

En el título VIII.- Disposiciones Generales, se lee:

Art. 63.- La aplicación de esta ley corresponde al Tribunal Supremo Electoral, siendo su obligación facilitar los medios necesarios para la organización y funcionamiento de los PARTIDOS POLÍTICOS".

En el Título V, el Art. 35, dice:

Puede declararse la extinción de un partido político y cancelarse su inscripción por las siguientes causales:.....

c) Por no obtener el porcentaje mínimo del cinco por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales sucesivas.

La disposición constitucional: 2do inciso del Art. 155, incluyó de hecho en el literal c) de la ley, a los movimientos:

El segundo inciso del Art. 38 dice:

En los casos previstos en los literales c) y d) el Tribunal actuará de oficio o a petición de cualquier ciudadano y CANCELARÁ LA INSCRIPCIÓN DEL PARTIDO".

Igualmente, en todo lo relativo a financiamiento la ley se refiere a Partidos, solo a Partidos.

Tanto en el caso de la notificación a los sujetos políticos que no llegaron al 5%, cuanto en la búsqueda de la mejor fórmula de equilibrio para el reembolso del gasto electoral, el Tribunal Supremo lo hizo sobre las disposiciones constitucionales y los mandatos de la ley; no solo debía actuar, estaba obligado a hacerlo: es imperativo el Art. 38 de la Ley de Partidos.

No podemos dejar de insistir en el Art. 209 de la Constitución Política, al 20 literal n) y 191 de la Ley Orgánica de elecciones y 68 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que fueron ya transcritos.

La situación de los independientes está contemplada en la Constitución:

"Art. 98.- Segundo inciso: "PODRÁN TAMBIÉN PRESENTARSE COMO CANDIDATOS LOS CIUDADANOS NO AFILIADOS NI AUSPICIADOS POR PARTIDOS POLÍTICOS".

El capítulo IV de la Ley Orgánica de Elecciones que se titula "De la participación de los independientes", en el Art. 70 no se refiere a movimientos sino a organizaciones de la más variada naturaleza; igual es la tónica del Art. 71. Solamente el Art. 72 se refiere a los movimientos que hubieren pasado el 5% en dos elecciones, lo cual ratifica la necesidad de advertir su eliminación cuando no se ha llenado tal requisito en una primera elección. Esta disposición guarda concordancia con el Art. 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

3. El texto de la demanda, repetidamente, menciona al Art. 272, cuyo texto transcribimos:

"Art. 272.- La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones. Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior".

Y el 273, dice:

"Art. 273.- Aplicación obligatoria de la Constitución.- *Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente".*

Los procedimientos del Tribunal se sustentan, justamente y en primera instancia, en los preceptos constitucionales, como queda indicado. Es el demandante quien encuentra contradicción entre los Artículos 35 y 37 de la Ley de Partidos Políticos y la Constitución. De ser esto cierto (que nosotros no lo aceptamos), el mandato del segundo inciso es terminante y respalda el procedimiento del Tribunal:

"Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior".

Constituye un inaceptable sacrilegio jurídico sostener, como hace el Señor Llucó, que por haber una contradicción con una norma inferior no puede aplicarse el mandato constitucional.

Esto contradiría lo que es norma en el país desde 1830; y que lo reconoció el Legislador Constituyente cuando dijo:

"Efectivamente, la supremacía de la Constitución ha sido siempre reconocida en el Ecuador desde 1830, mediante expresas declaraciones en las mismas Cartas Políticas y por la práctica legislativa y la jurisprudencia de los Tribunales".

Podrá decirse que hay conceptos que están en contraposición con cuestiones que ya el Tribunal Constitucional las tiene definidas como la extensión del Derecho de amparo a las instituciones, organismos, etc.; pero, justamente lo estamos haciendo constar en documento como éste, dirigido al H. Congreso Nacional, con poder y capacidad para corregir entuertos y extensivas interpretaciones de la ley. El Tribunal Constitucional tiene sus propias facultades y normativas: no es legislador.

Por último, y respecto de este caso, cabe mencionar que a lo largo de varios capítulos, quedó ya precisado que estos asuntos son de exclusiva y excluyente competencia del Tribunal Supremo Electoral, y que sobre sus resoluciones no existe instancia alguna, salvo que se trate del Recurso de Queja, que tiene un juzgador distinto y un trámite diferente también.

Nos hemos detenido en este asunto porque es cuestión que aún se halla pendiente y a consideración del Tribunal Constitucional.

Resumiendo: Creemos que el Tribunal Constitucional ha resuelto varios asuntos relativos a materia electoral, y aún tiene más de uno en trámite, y por consiguiente de exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo después de adoptada la Resolución en cada caso pudo expresar su opinión, e, inclusive resistirse a su cumplimiento, pero llevado del alto espíritu que inspira sus actos, para que no se afecten las circunstancias del Ecuador y para no crear más desequilibrio y confrontaciones, ha mantenido su postura de cívica ponderación; pero consideramos que es momento de decirlo, y de advertir, sobre las gravísimas proyecciones que estos hechos pudieran tener sobre el sensible, y delicado proceso electoral. Si en todo momento o en cualquier momento un resentido por una resolución del TSE pudiera recurrir a una instancia que parecería superior, (lo que negamos rotundamente), y conseguir que se eche abajo, ya inscripción de candidaturas, ya resultado de escrutinios, ya proclamación de resultados; por sanidad nacional, por respeto a la democracia, por defensa y aplicación del orden constitucional, no puede permitirse, decimos, que quede la menor puerta abierta, para creer que, pueda haber variación de resultados electorales, por conseguirlo ante otra instancia. Y, por ello venimos a plantearlo al H. Congreso Nacional, único autorizado para hacerlo, y, pedimos se ratifique la independencia y autoridad de los pronunciamientos del Tribunal Supremo Electoral, en ratificación del sistema jurídico electoral vigente y para propia seguridad de los sujetos políticos.

- 8 -

INSTRUMENTOS JURÍDICOS

El 11 de julio del 2000 entró en vigencia la Codificación de la Ley de Elecciones, trabajo de la Comisión de Legislación y Codificación y ello obliga a que se dicten normas secundarias y de procedimiento que faciliten su aplicación. Inspirados en tal urgencia, el Tribunal, durante el año 2001 ha expedido varios instrumentos, siendo los principales los que, para mayor conocimiento de los señores Diputados y para conocimiento general se publican en este Capítulo.

Reglamento Interno.- El mero hecho de que la expedición del anterior data de 30 de Octubre de 1978, determinaba la necesidad de actualizarlo.

“EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONSIDERANDO:

***Que,** de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de la República, es el máximo organismo de la Función Electoral con las atribuciones de organizar, dirigir, vigilar, garantizar los procesos electorales y juzgar las cuentas que rinden los sujetos políticos;*

***Que,** la Ley de Elecciones Codificada, artículo 20 literales o) y q), en concordancia con el artículo 186, establecen que este Tribunal mediante Reglamentos regulará la actividad administrativa interna así como su régimen de sesiones; y,*

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y especialmente de lo dispuesto en el Art. 186 de la Ley de Elecciones Codificada (Reg. Of. No. 117 de 11 de julio del 2000), expide el siguiente

REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANISMOS: NACIONAL Y PROVINCIALES DE LA FUNCION ELECTORAL CAPÍTULO PRIMERO AMBITO DE APLICACIÓN Y JURISDICCIÓN

Art. 1.- El presente Reglamento tiene aplicación para el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales, en conformidad y con suje-

ción a lo dispuesto en los artículos 209 y 210 de la Constitución Política de la República, en la Ley de Elecciones Codificada y demás disposiciones legales relacionadas con su estructura, funciones y desempeño.

Art. 2.- El Tribunal Supremo Electoral, máximo Organismo de la Función Electoral, tiene su sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional. En cada provincia y con asiento en su capital, existe un Tribunal Provincial Electoral, y en el cumplimiento de sus funciones constantes en la ley, ejerce jurisdicción en la respectiva provincia.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES SUPREMO Y PROVINCIALES ELECTORALES

Art. 3.- Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral así como los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales son servidores públicos excluidos del servicio civil y carrera administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa

Art. 4.- Los Vocales del Tribunal Supremo Electoral gozarán de inmunidad mientras duren en sus funciones; y los Vocales de los Tribunales Provinciales, entre el día en que se publique la convocatoria a elecciones y hasta treinta días después de verificados los escrutinios.

Art. 5.- Son deberes y atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, los siguientes:

- a) Designar de entre sus Vocales, un Presidente y Vicepresidente del Organismo, quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos;
- b) Implantar su propio sistema de administración y desarrollo del personal, aprobar normas para el buen funcionamiento administrativo y financiero interno de los Organismos Electorales y nombrar al secretario abogado del Tribunal y a los funcionarios y empleados de la administración;
- c) Organizar los Tribunales Provinciales Electorales, supervigilar su funcionamiento y reorganizarlos total o parcialmente si estimare necesario;
- d) Elaborar los padrones electorales;
- e) Aprobar el presupuesto general de cada ejercicio económico así como los presupuestos electorales especiales, para cada proceso, y sus respectivas dis-

posiciones generales, los mismos que entrarán en vigencia y aplicación inmediata sin ningún otro requisito. Estos presupuestos serán en base a las partidas globales generales que consten en el Presupuesto General del Estado para la Función Electoral;

- f) Convocar a elecciones, realizar los escrutinios definitivos en las de Presidente y Vicepresidente de la República, y representantes ante el Parlamento Andino y proclamar los resultados;*
- g) Convocar a los colegios electorales integrados por los alcaldes municipales y los prefectos provinciales; por las centrales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional; y, por las cámaras de la producción legalmente reconocidas, que de acuerdo con el reglamento deben designar las ternas de candidatos de las que, el Congreso Nacional elegirá un Vocal principal y un suplente, por cada colegio electoral, para que integre el Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 275 de la Constitución Política de la República;*
- h) Convocar a colegios electorales, nominadores o designadores previstos por la Constitución, leyes especiales o reglamentos generales de aplicación de leyes vigentes, que de acuerdo con el reglamento deban designar ternas o nominar candidatos para la integración de cuerpos colegiados de conformidad con la ley;*
- i) Convocar a consulta popular nacional, realizar los escrutinios definitivos y proclamar los resultados;*
- j) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en la ley;*
- k) Señalar el plazo dentro del cual los Tribunales Provinciales Electorales han de imponer las sanciones previstas en la ley, luego de concluido cada proceso de elección, consulta popular y proceso de revocatoria del mandato;*
- l) Velar porque la propaganda electoral se realice con toda corrección de acuerdo a la ley;*
- m) Resolver en única y última instancia, las quejas que se presentaren contra las autoridades civiles, en materia electoral;*
- n) Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones de la Codificación de la Ley de Elecciones, de la de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y de sus reglamentos;*

- o) Dictar las disposiciones necesarias para establecer el régimen de sanciones y multas a los ciudadanos, en caso de infracciones a la ley;
- p) Determinar las normas a las que han de sujetarse los servidores de la Organización Electoral, conforme a los principios del derecho administrativo, si son funcionarios o empleados; o para los que están sujetos al Código del Trabajo; y,
- q) Ejercer todas las demás atribuciones señaladas en la ley.

Art. 6.- A los Tribunales Provinciales Electorales les corresponde:

- a) Designar Presidente y Vicepresidente, de entre sus Vocales;
- b) Nombrar al Secretario del Tribunal, que preferentemente será abogado, y a los demás funcionarios y empleados de la administración;
- c) Dirigir y vigilar, dentro de su jurisdicción, los actos electorales; impartir las instrucciones necesarias para su correcta realización; cumplir y hacer cumplir las órdenes emanadas del Tribunal Supremo Electoral;
- d) Realizar los escrutinios de las elecciones unipersonales y pluripersonales que correspondan a la respectiva circunscripción, convocar y escrutar los resultados de las consultas populares provinciales y proceso de revocatoria del mandato de su respectiva jurisdicción; así como los escrutinios provinciales de las elecciones realizadas en la misma, para Presidente y Vicepresidente de la República, representantes ante el Parlamento Andino y Consulta Popular Nacional;
- e) Resolver sobre las reclamaciones que formulen los sujetos políticos acerca de irregularidades anotadas en el proceso electoral;
- f) Designar Vocales de las Juntas Receptoras del Voto;
- g) Imponer las sanciones que sean de su competencia, conforme a lo previsto en la ley; y,
- h) Ejercer todas las demás atribuciones que se encuentren señaladas en la Ley y Reglamentos.

CAPÍTULO TERCERO DE LAS SESIONES

Art. 7.- Los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales sesionarán ordinaria y extraordinariamente.

Las sesiones las dirige el Presidente, en su ausencia el Vicepresidente y ocasio-

nalmente el Vocal que se designe, cuando falten tales dignatarios.

Art. 8.- Las sesiones ordinarias se realizarán tres días a la semana, de conformidad al horario que acuerden el Pleno de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales. Las sesiones podrán suspenderse y reinstalarse al día siguiente.

Art. 9.- Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cuando sean convocadas por el Presidente, con anticipación de 24 horas, por propia iniciativa o a solicitud de cuatro Vocales por lo menos, a excepción de que por unanimidad, los 7 Vocales resuelvan sesionar extraordinariamente.

En las sesiones extraordinarias se tratará única y exclusivamente los asuntos determinados en el orden del día, salvo que el Tribunal con el voto afirmativo de los siete Vocales, resuelva agregar otros asuntos.

Art. 10.- CONVOCATORIA.- Al finalizar cada sesión ordinaria, el Presidente convocará para la siguiente.

Art. 11.- QUORUM.- El quórum para instalar las sesiones y para adoptar resoluciones será de 4 Vocales.

Art. 12.- Los Vocales concurrentes votarán por las resoluciones; éstas se adoptan con el voto conforme de la mayoría, que se obtiene con 4 en 6 o 7 y con 3 en 4 o 5.

A las sesiones asistirán los Vocales y cuando fuese necesario, los funcionarios que los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, si fuere el caso, requieran.

Art. 13.- VOTO DIRIMIENTE.- En caso de empate se repetirá la votación y de persistir la igualdad, decide el voto de quien preside.

Art. 14.- La votación es nominal, pero puede ser secreta, por pedido de cuatro Vocales, por lo menos.

Art. 15.- Las sesiones de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, tanto ordinarias como extraordinarias, son reservadas, sin embargo, a petición de cuatro Vocales, pueden declararlas públicas.

Art. 16.- En las sesiones reservadas no se admitirán en el recinto, medios de difusión.

De lo tratado en las sesiones reservadas, únicamente pueden dar información a los medios de comunicación social, el Presidente, el Vicepresidente o los Vocales en su caso.

Las sesiones para escrutinios son audiencias públicas.

Art. 17.- Los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales podrán constituirse en comisión general para escuchar a personas naturales o jurídicas que lo soliciten o que sean citadas por el Organismo.

Las intervenciones en comisión general durarán el tiempo que determine el Pleno del Tribunal.

Art. 18.- Un Vocal puede presentar una moción y se la someterá a discusión, pues no necesita apoyo.

Mientras se discute una moción no puede proponerse otra ni tratar asuntos diferentes a ella, sino en los casos siguientes:

- a) Cuando es una moción previa;
- b) Cuando implique modificación, siempre que la acepte el proponente; y,
- c) Para pedir que pase a comisión.

Estas mociones tienen prioridad según el orden expresado y si hay duda de si es previa o modificatoria, los Tribunales lo resolverán por mayoría de votos y sin debate.

Art. 19.- Los Vocales podrán intervenir en la discusión de cada asunto hasta por tres ocasiones, en la primera pueden exponer hasta por cinco minutos y en las subsiguientes hasta por tres minutos.

Art. 20.- Los Vocales que no hayan intervenido en la discusión tendrán derecho a razonar su voto, utilizando para su exposición un tiempo máximo de 5 minutos.

Art. 21.- Las resoluciones de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales se ejecutarán sin necesidad de la aprobación del acta de la sesión en que se hubiesen adoptado, salvo resolución en contrario.

Art. 22.- Las reconsideraciones necesitan del voto favorable de 5 Vocales de 7 y 4 de 6 ó 5 y se las puede proponer en la misma sesión o en la siguiente. Prohíbese la reconsideración de lo reconsiderado, salvo que sea por unanimidad, con la presencia de los siete Vocales.

CAPÍTULO CUARTO DE LAS COMISIONES

Art. 23.- Existen tres comisiones permanentes: Jurídica, Económica y Técnica; pudiéndose designar comisiones especiales cuando los Tribunales Supre-

mo y Provinciales Electorales estimen conveniente. Las permanentes tienen las funciones específicas detalladas en el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución; y, las especiales, las que les asigne el Pleno de cada Organismo Electoral expresamente.

Art. 24.- Las comisiones estarán conformadas por tres Vocales, quienes elegirán de su seno al Presidente.

Art. 25.- Las sesiones ordinarias de las comisiones permanentes: Jurídica, Económica y Técnica se realizarán de acuerdo al horario que establezcan sus Vocales miembros o extraordinariamente cuando el caso lo amerite.

Art. 26.- Los Vocales que no conforman las comisiones podrán integrarse a cualquiera de ellas para el estudio de un asunto determinado, con voz pero sin voto.

Art. 27.- Cuando la comisión presente más de un informe, los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales conocerán todos, y se pronunciarán respecto a ellos.

Art. 28.- De la asistencia a sesiones ordinarias, extraordinarias y a las comisiones permanentes y especiales se dejará constancia en el correspondiente registro que implemente cada secretaría.

CAPÍTULO QUINTO

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DEL PRESIDENTE

Art. 29.- Es elegido de entre los Vocales designados por el H. Congreso Nacional. Durará dos años en sus funciones y puede ser reelegido. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Organismo Electoral. Sus funciones son las siguientes:

- a) Representar al Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con las disposiciones legales establecidas;
- b) Presidir el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, dirigir el debate, precisar el orden de discusión de los asuntos, ordenar la votación, disponer la proclamación del resultado y su rectificación a pedido de un Vocal;
- c) Dirigir y supervisar la ejecución de planes, y programas del Tribunal Supremo Electoral;

- d) Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Tribunal Supremo Electoral e implantar las medidas correctivas que estime necesarias;
- e) Proponer acuerdos y resoluciones relacionadas con la actividad electoral;
- f) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia administrativa, económica y electoral;
- g) Celebrar contratos, acuerdos y convenios, de acuerdo con la delegación establecida por el Pleno del Tribunal y las disposiciones legales vigentes;
- h) Recibir y dar trámite a las impugnaciones o recursos que se presentaren en los procesos electorales;
- i) Imponer las sanciones que sean de su competencia de acuerdo con lo previsto en la ley;
- j) Presentar el informe anual de labores ante el Pleno del Organismo y suscribir el informe que será remitido al H. Congreso Nacional;
- k) Formular el orden del día, convocar, instalar y clausurar las sesiones del Pleno; y, disponer al Secretario General lo pertinente;
- l) Coordinar las acciones del Organismo Electoral con las demás entidades públicas y privadas;
- m) Suscribir las credenciales designando a los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales, así como las credenciales y contratos del personal del Tribunal Supremo Electoral, de conformidad a las resoluciones del Pleno y las disposiciones legales existentes; y,
- n) Las demás establecidas en leyes y reglamentos vigentes y las que le asigne el Tribunal en Pleno.

DEL VICEPRESIDENTE

Art. 30.- Es elegido de entre los Vocales designados por el H. Congreso Nacional. Durará dos años en su cargo y podrá ser reelegido. Sus funciones son las siguientes:

- a) Subrogar al Presidente en los casos señalados en la Ley y en el Reglamento;
- b) Participar de las decisiones que le competen como Vocal del Tribunal Supremo Electoral; y,
- c) Las demás determinadas en las disposiciones legales y reglamentarias.

DE LA SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA GENERAL

Art. 31.- **Son funciones de la Secretaría General:**

- a) Cumplir con las leyes, reglamentos, resoluciones, instructivos, procedimientos y demás disposiciones normativas vigentes para la Función Electoral;
- b) Dar fe de los actos que realice el Organismo, asegurando oportunidad y reserva en el manejo de la documentación oficial; además, certificará la autenticidad de copias, compulsas o reproducciones de documentos oficiales;
- c) Preparar y redactar las actas de las sesiones del Organismo y suscribirlas con el Presidente, una vez aprobadas. Además, preparar y redactar las resoluciones y suscribirlas;
- d) Custodiar, supervisar y responder, por las comunicaciones, documentos y archivo del Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con las normas técnicas existentes para el efecto;
- e) Suscribir la correspondencia de trámite y/o la que disponga el Pleno del Tribunal;
- f) Registrar las resoluciones emanadas del Pleno del Organismo y llevar un libro de dichas resoluciones;
- g) Tramitar de forma completa: informes, certificaciones, correspondencia y demás documentos sobre los que tenga competencia;
- h) Previa disposición del Presidente convocar individualmente a los Vocales, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Organismo;
- i) Elaborar, de acuerdo a instrucciones del Presidente el orden del día correspondiente a las sesiones y entregarlo a los Vocales;
- j) Comunicar las resoluciones del Tribunal a: directores, jefes departamentales, personas naturales o jurídicas y Tribunales Provinciales Electorales, de acuerdo a su contenido;
- k) Colaborar con funciones de secretariado en las comisiones especiales, cuando así lo disponga el Pleno del Tribunal; y,
- l) Las demás que señalen leyes, reglamentos, resoluciones o las asignadas por las autoridades competentes.

Art. 32.- **Son funciones de la Prosecretaría:**

- a) Coordinar sus tareas con la Secretaría General y colaborar en la planificación, organización, ejecución y control de sus actividades; y,

b) *Asumir las funciones propias de la Secretaría General, en caso de ausencia del titular.*

Si faltaren el Secretario y el Prosecretario, el Tribunal designará a la persona que ejerza las funciones de Secretario en forma ocasional, mientras dure la ausencia de aquéllos.

CAPÍTULO SEXTO

TRIBUNALES PROVINCIALES ELECTORALES DEL PRESIDENTE

Art. 33.- *Es elegido de entre los Vocales designados por el Tribunal Supremo Electoral. Durará dos años en sus funciones y puede ser reelegido. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Organismo Electoral. Sus funciones son las siguientes:*

- a) Representar al Tribunal Provincial Electoral de acuerdo con las disposiciones legales establecidas;*
- b) Presidir el Pleno del Tribunal Provincial Electoral;*
- c) Dirigir y supervisar la ejecución de las políticas y estrategias establecidas para la gestión administrativa del Organismo Provincial Electoral;*
- d) Dirigir y supervisar la ejecución de planes y proyectos del Tribunal Provincial Electoral en armonía con las políticas establecidas por el Tribunal Supremo Electoral, en el marco de la modernización del Estado;*
- e) Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Tribunal Provincial Electoral y sugerir las medidas correctivas que estime necesarias;*
- f) Proponer acuerdos y resoluciones relacionados con la actividad electoral, en el ámbito de su competencia;*
- g) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia administrativa, económica y electoral;*
- h) Celebrar contratos, acuerdos y convenios de acuerdo con la autorización dada por el Pleno del Tribunal Provincial o del Tribunal Supremo Electoral y constantes en las disposiciones legales vigentes;*
- i) Representar al Pleno del organismo provincial en la convocatoria a elecciones en su jurisdicción;*
- j) Recibir y dar trámite a las impugnaciones o recursos que se presentaren con ocasión de los procesos electorales;*

- k) Imponer las sanciones que sean de su competencia conforme a lo previsto en la ley;*
- l) Presentar el informe anual de labores ante el Pleno del organismo y ante el Tribunal Supremo Electoral;*
- m) Formular el orden del día de las sesiones del Pleno, conjuntamente con el Secretario;*
- n) Coordinar las acciones del Tribunal Provincial Electoral con otras instituciones, públicas y privadas;*
- o) Suscribir las credenciales y contratos del personal a nivel provincial de conformidad a las resoluciones del Pleno y a las disposiciones legales existentes; y,*
- p) Las demás establecidas en leyes y reglamentos vigentes y las que les asigne el Tribunal en Pleno, tanto del Supremo como del Provincial.*

DEL VICEPRESIDENTE

Art. 34.- *Es elegido de entre los Vocales designados por el Tribunal Supremo Electoral, durará dos años en su cargo; sus funciones son las siguientes:*

- a) Subrogar al Presidente en los casos señalados en la Ley y en el reglamento;*
- b) Participar en decisiones que le competen como Vocal del Tribunal Provincial Electoral; y,*
- c) Las demás determinadas en las disposiciones legales y los reglamentos.*

DE LA SECRETARÍA Y PROSECRETARÍA

Art. 35.- *Son funciones de la Secretaría:*

- a) Cumplir con las leyes, reglamentos, resoluciones, instructivos, procedimientos y demás disposiciones normativas vigentes para la Función Electoral;*
- b) Dar fe de los actos que realice el organismo provincial, asegurando oportunidad y reserva en el manejo de la documentación oficial; además, certificará la autenticidad de copias, compulsas o reproducciones de documentos oficiales;*
- c) Preparar y redactar las actas de las sesiones del organismo provincial y suscribir las con su Presidente, una vez aprobadas. Además preparar y redactar las resoluciones y suscribir las;*
- d) Custodiar, supervisar y responder por las comunicaciones y documentos de archivo del Tribunal Provincial Electoral, de acuerdo con las normas técnicas existentes para el efecto;*

- e) Suscribir la correspondencia de trámites y/o la que disponga el Pleno del Tribunal Provincial Electoral;
- f) Registrar las resoluciones emanadas del Pleno del Organismo Provincial y llevar un libro de las mismas;
- g) Tramitar: informes, certificaciones, correspondencias y demás documentos sobre los que tenga competencia;
- h) Convocar, previa disposición del Presidente del Tribunal Provincial Electoral, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Organismo;
- i) Elaborar, conjuntamente con el Presidente el orden del día correspondiente a las sesiones y entregarlo a los Vocales;
- j) Comunicar las resoluciones del Tribunal Provincial a: jefes departamentales, funcionarios y personas naturales o jurídicas de acuerdo con su contenido;
- k) Actuar de Secretario General en las comisiones especiales cuando así lo disponga el Pleno del Tribunal Provincial;
- l) Dar debida atención y trámite a las comunicaciones y disposiciones del Tribunal Supremo Electoral, y,
- m) Las demás que señalen leyes, reglamentos, resoluciones y las asignadas por autoridades competentes.

A la Prosecretaría, en los Tribunales que cuentan con esta dependencia, le corresponden las siguientes funciones:

- a) Coordinar sus tareas con la Secretaría y colaborar en la planificación, organización, ejecución y control de sus actividades; y,
- b) Asumir las funciones propias de la Secretaría en caso de ausencia del titular.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS VOCALES

FUNCIONES, LICENCIAS, VACACIONES, SUBROGACIONES Y AÑOS DE SERVICIO

Art. 36.- El Tribunal Supremo Electoral se integra por siete Vocales elegidos en la forma prescrita por el artículo 209 de la Constitución Política de la República.

Sus principales funciones son:

- Desempeñarse como miembros del Pleno.

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
- Integrar las comisiones permanentes y especiales.
- Presentar los informes que se les encomiende.
- Actuar como coordinadores de las provincias que se les asigne.
- Preocuparse en todo momento del prestigio institucional.
- Las demás constantes en la Constitución, la Ley y los Reglamentos.

Art. 37.- Cada uno de los veintidós Tribunales Provinciales Electorales se compone de siete Vocales principales, que serán designados por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, para un período de dos años. Las principales funciones de los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales son:

- Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal.
- Integrar las comisiones permanentes y especiales.
- Presentar los informes que se les requiera.
- Desempeñarse como coordinadores de los cantones que se les asigne.
- Organizar, dirigir y vigilar los actos de pronunciamiento popular en su circunscripción.
- Defender en todo momento el prestigio de la Función Electoral.
- Las demás constantes en las leyes, reglamentos y resoluciones del Pleno del Tribunal Supremo Electoral.

Art. 38.- Los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales tienen derecho a gozar de licencias con sueldo o sin sueldo, según el caso, y de acuerdo a lo que a continuación se indica:

Las licencias a los Vocales deberán ser autorizadas por el Pleno del Organismo respectivo.

Tendrán derecho a licencia con sueldo en los siguientes casos:

- a) Por enfermedad hasta sesenta días cada año;
- b) Por maternidad doce semanas;
- c) Por calamidad doméstica hasta ocho días; y,
- d) Por invitaciones oficiales o comisiones que correspondan a sus funciones por el tiempo que duren las mismas.

En estos casos, el Vocal suplente que actúe tendrá derecho al pago de dieta equivalente al dos punto cinco por ciento (2.5%) de la sumatoria del sueldo básico, gastos de representación, gastos de residencia y gastos de responsabilidad, del titular, por cada sesión.

Licencia sin sueldo:

Los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, podrán gozar de licencia sin sueldo hasta por ciento ochenta días calendario al año, exceptuándose para la prestación de servicios en otras instituciones del sector público. En este caso actuará el suplente con los beneficios que dejó de percibir el titular, pero de acuerdo a su situación personal.

Art. 39.- VACACIONES.- *Tendrán derecho a treinta días de vacaciones después de once meses por lo menos de servicio continuo e ininterrumpido, contados a partir del 1 de agosto del 2000, fecha desde la cual rige la Resolución N° 25 expedida por el CONAREM.*

Las vacaciones se gozarán obligatoriamente al cumplirse el tiempo previsto en el inciso precedente.

El Vocal suplente que reemplace al titular que se encuentre en goce de vacaciones tendrá derecho al pago de dietas calculadas conforme lo indica el artículo anterior.

Art. 40.- SUBROGACIONES.- *Cuando por resolución del Pleno de un Organismo Electoral, el Vicepresidente o un Vocal deba subrogar temporalmente al Presidente por más de 30 días, percibirá la diferencia de la remuneración que corresponda al puesto de Presidencia por el tiempo que dure el reemplazo.*

Art. 41.- AÑOS DE SERVICIO.- *Para el cómputo de tiempo de años de servicio de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales, que no hayan desempeñado funciones en el sector público, se tomará en cuenta los años de servicio prestados a la Función Electoral, en calidad de Vocales con un mínimo de cuatro años, previa certificación de la Secretaría General y/o de la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral.*

CAPÍTULO OCTAVO

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LOS VOCALES

Art. 42.- INHABILIDADES.- *Los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales estarán incurso en las siguientes inhabilidades, por cuya causa no podrán desempeñar estas funciones:*

- a) Los funcionarios y empleados de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo no podrán integrar los Tribunales Electorales;
- b) Los demás servidores públicos, excepto que obtengan licencia con o sin sueldo, para prestar sus servicios en los Tribunales Electorales, previo a su posesión;
- c) Por el hecho de haber caducado su designación al tenor del Art. 167 de la Ley de Elecciones Codificada;
- d) Si formaren parte de las directivas nacionales o provinciales de las organizaciones políticas, según el caso; y,
- e) Las demás que estipule el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 43.- PROHIBICIONES.- A los Vocales de los Tribunales Electorales les está prohibido:

- a) Dejar de asistir a las sesiones ordinarias, sin causa de justificación;
- b) Intervenir en contiendas o procesos electorales;
- c) Hacer proselitismo o propaganda política durante el ejercicio de sus funciones;
- d) Contravenir lo dispuesto en la Ley de Elecciones Codificada; y,
- e) Las demás determinadas en el ordenamiento jurídico vigente.

Art. 44.- DE LAS SANCIONES.- Los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales de encontrarse incurso en las prohibiciones señaladas en el artículo anterior, serán sancionados de la siguiente manera.

En el caso del literal a):

1. Por inasistencia injustificada o incompleta a una sesión, con amonestación escrita, que impondrá el Presidente del respectivo Organismo Provincial;
2. Por inasistencia injustificada o incompleta a dos sesiones consecutivas, con multa equivalente al diez por ciento del sueldo básico, que impondrá el Pleno del respectivo Tribunal Provincial; y,
3. Por inasistencia injustificada o incompleta a tres o más sesiones consecutivas, se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que juzgue y aplique la sanción que corresponde.

Para los casos previstos en los literales b), c), d) y e), igualmente se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para el respectivo juzgamiento.

Art. 45.- LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN.- Los Vocales de los Tribunales Provinciales Electorales, ostentarán estas dignidades durante el período de duración de las funciones, pero serán de libre designación y remo-

ción, en base a lo dispuesto en el Art. 20 literal c) de la Codificación de la Ley de Elecciones.

No se emitirán acciones de personal con nombramiento sino credenciales suscritas por el Presidente del Tribunal Supremo Electoral y certificadas por la Secretaría General del mismo, de acuerdo a las resoluciones de designación.

Art. 46.- CAUSAS DE REORGANIZACIÓN PARCIAL O TOTAL.-

Son causas de reorganización parcial o total de los Tribunales Provinciales Electorales, las siguientes:

- a) Por incumplimiento de la ley, los reglamentos o resoluciones del Tribunal Supremo Electoral;
- b) Por otras causas determinadas en la ley; y,
- c) Por resolución del Pleno a pedido de un Vocal del Tribunal Supremo Electoral.

Art. 47.- HORARIO.- Los Tribunales Electorales laborarán en el horario de ocho horas diarias, en una o dos jornadas de acuerdo a lo que resuelva el Pleno.

Art. 48.- PLURIEMPLEO.- De conformidad con el Art. 125 de la Constitución se prohíbe el pluriempleo, razón por la cual, los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales no podrán tener ni ocupar dos funciones públicas, peor aún podrán percibir dos remuneraciones en forma simultánea en instituciones del sector público, salvo los docentes universitarios.

CAPÍTULO NOVENO

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 122 de la Constitución Política de la República, al inicio de su gestión, y antes de la posesión de sus cargos, están obligados a presentar bajo juramento una declaración patrimonial, debidamente notariada; y así mismo, luego de finalizar su gestión, y en forma previa para recibir la liquidación a que tuvieren derecho, en la forma prevista en el Acuerdo No. 022-CG, expedido por la Contraloría General del Estado y publicado en el Registro Oficial No. 119 de 13 de julio del 2000.

Estas declaraciones se presentarán en la Secretaría del respectivo Tribunal; dicha Secretaría, inmediatamente, enviará una copia a la dependencia de la

Contraloría General del Estado de la respectiva jurisdicción; y, otra copia, a la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral

SEGUNDA.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 125 de la Constitución, los Vocales de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales en un plazo no mayor a treinta días a partir de su designación, deberán obtener la licencia con o sin sueldo en el caso de encontrarse desempeñando otro cargo público. Si la licencia es con sueldo recibirán del Tribunal Supremo y Provinciales Electorales, la diferencia, caso de existir.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el término de sesenta días a partir de la promulgación del presente Reglamento en el Registro Oficial, la Dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, creará un archivo independiente que contendrá los documentos actualizados que legalicen y respalden la relación de dependencia de los Vocales con la institución, beneficios a que son acreedores, curriculum, instrucción, capacitación y otros, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias.

DEROGATORIA.- Se deroga el Reglamento Interno de los Tribunales Supremo y Provinciales Electorales, publicado en el Registro Oficial No. 188 del 20 de octubre del 2000 y su reforma al artículo 38 publicada en el Registro Oficial No. 263 de 9 de febrero del 2001.

DISPOSICIÓN FINAL- Se dispone la publicación del presente reglamento en el Registro Oficial.

RAZÓN.- Siento por tal, que el presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de jueves 28 de Junio del 2001.-
LO CERTIFICO.

f) Dr. Daniel Argudo Pesántez

SECRETARIO GENERAL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (E)".

Reglamento de Consultas Populares y Revocatoria del Mandato.-

En esta materia la Constitución de 1998 incorpora nuevas y diferentes instituciones. Al respecto, la Ley de Elecciones, solamente tenía el Capítulo titulado "Del Plebiscito y Referéndum"; siempre ese titular fue equivocado, equivocado

por doble motivo: porque la Constitución no preveía ninguna de esas dos instituciones y porque el desarrollo de la ley tampoco podía hacerlo, y, en efecto tenía, pocos artículos referidos a la única institución constitucional: la consulta popular por iniciativa presidencial.- La consulta popular por iniciativa popular y la consulta popular seccional, tanto por iniciativa de los organismos seccionales, son nuevas instituciones de la Constitución del 98. Al no haber ley que desarrolle dichos mandatos, las consultas planteadas tuvieron que hacerse al margen de normas que las regulen, asunto al que nos referimos en el Informe presentado al H. Congreso Nacional hace un año, cuando entregamos el proyecto de Código de la Instituciones de la Democracia compuesto de cinco Estatutos, el segundo titulado "II De la Consulta Popular y de la Revocatoria del Mandato", que, hasta este momento no se ha expedido.

Ante tal panorama, la Comisión de Legislación y Codificación, al codificar la Ley de Elecciones, consciente de no tener capacidad para reformar la ley, resolvió el asunto, comenzando por cambiar el nombre al Título correspondiente y poniéndole: "Título V.- Consulta Popular y Revocatoria del Mandato", pero dicho título tiene como articulado el que constaba en la Ley de Elecciones bajo el título "Plebiscito y Referéndum", agregando textual todas las disposiciones del Capítulo II del Título IV de la Constitución Política que se titula "Capítulo II.- De otras formas de Participación Democrática.- Sección 1ª de la Consulta Popular" y "Sección 2ª.- De la revocatoria del Mandato". Ante tal cuadro y después de publicada la Codificación de la Ley de Elecciones en el Suplemento del Registro Oficial No. 117 de 11 de julio del 2000, era obligante, para el Tribunal Supremo Electoral, expedir el Reglamento de Consultas Populares y de la Revocatoria del Mandato.

"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL CONSIDERANDO:

Que: *el artículo 26 de la Constitución establece: "Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a las dignidades de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas".*

Que, el Capítulo Segundo del Título Cuarto de la Constitución Política, en los artículos del 103 al 113, relacionado con "otras formas de participación democrática", desarrolla lo dispuesto por el Art. 26.

Que la Ley de Elecciones Codificada, en el Título V, Capítulo Único se refiere a la Consulta Popular y la Revocatoria del Mandato y es procedente reglamentar sus Disposiciones.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y especialmente de lo dispuesto en el Art. 186 de la Ley de Elecciones Codificada (Reg. Of. No. 117 de 11 de julio del 2000), expide el siguiente

REGLAMENTO PARA CONSULTA POPULAR Y REVOCATORIA DEL MANDATO

TÍTULO PRIMERO

DE LA CONSULTA POPULAR NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

Art. 1.- *Procede la consulta popular nacional en los siguientes casos:*

- 1)** *Por iniciativa del Presidente de la República, para:*
 - a) Reformar la Constitución previo el trámite señalado en la misma; y,*
 - b) Resolver sobre cuestiones distintas a la reforma constitucional, y que a su juicio sean de trascendental importancia; y*
- 2)** *Por iniciativa de ciudadanos en uso de sus derechos políticos, que lo soliciten al Tribunal Supremo Electoral, en un número que represente por lo menos el ocho por ciento (8%) del Padrón Electoral Nacional.*

CAPÍTULO SEGUNDO

CONSULTA DE INICIATIVA PRESIDENCIAL

Art. 2.- *El Presidente de la República se dirigirá al Tribunal Supremo Electoral pidiéndole que convoque a consulta popular nacional, e indicando una fecha tentativa para que se realice; además, deberá expresar con claridad, cuál de sus dos facultades está ejercitando, y en el caso de tratarse de la facultad prevista en el Art. 283 de la Constitución, acompañará los documentos que certifiquen la respectiva calificación de parte del Congreso Nacional.*

Art. 3.- El Tribunal Supremo Electoral, previo Informe de su Comisión Jurídica Permanente, calificará el pedido, sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, debiendo hacerlo dentro del término de cinco días de recibida la comunicación presidencial.

Art. 4.- De haberse cumplido con los requisitos de la Constitución, la Ley y este Reglamento, El Tribunal Supremo Electoral, en el plazo de quince días a partir de la recepción del correspondiente pedido, hará la Convocatoria para la Consulta, cumpliendo las solemnidades y procedimientos previstos en el Art. 44 de la Ley de Elecciones Codificada. La Convocatoria determinará la fecha en que se efectuará la consulta propuesta por el Presidente de la República, que en todo caso, no exceda de cuarenta y cinco días a partir de dicha Convocatoria.

CAPÍTULO TERCERO

CONSULTA NACIONAL POR INICIATIVA POPULAR

Art. 5.- Si los ciudadanos se proponen recoger firmas para solicitar una consulta popular de carácter nacional, los responsables obtendrán del Tribunal Supremo Electoral, el "Formulario de adhesiones para pedir consulta popular nacional", debiendo dejar constancia de que se responsabilizan del proceso a iniciarse.

Art. 6.- El modelo de "Formulario" destinado a la recolección de adhesiones será proporcionado por el Tribunal Supremo Electoral, y lo multiplicarán los interesados. El formulario contendrá los siguientes datos: El texto de la materia de consulta, fecha de pedido y circunscripción territorial; del adherente: nombre y apellidos, número de cédula y firma; de igual modo: nombres y apellidos, número de cédula y firma del responsable de cada página. Al solicitante, el Tribunal, le entregará también disketes que contendrán, el "Software para registro de adhesiones a la Convocatoria a la consulta popular, acompañado de la correspondiente técnica de uso".

Art. 7.- Las consultas populares de iniciativa ciudadana, de acuerdo con los Arts. 105 y 108 de la Constitución Política, no podrán versar sobre materia constitucional, entendiéndose por tal, tanto el propósito de cambiar el texto de la Constitución, cuanto el hecho de plantear preguntas para cuyo cum-

plimiento se requiera, igualmente, reforma de dicho texto constitucional. La consulta de iniciativa popular tampoco puede versar sobre materia tributaria, entendiéndose por tal; la imposición, la recaudación o la distribución de tributos.

Art. 8.- Recibido por el Tribunal Supremo Electoral el pedido de consulta, acompañado de las firmas de adhesión, en el plazo de tres días organizará el o los equipos necesarios para comprobar la autenticidad y veracidad de las firmas de respaldo. Si para cumplir con este fin necesita recurrir a instancias especializadas de fuera de la organización electoral, así procederá.- En el plazo máximo de sesenta días, el Tribunal, debe haber cumplido con el correspondiente análisis.

Art. 9.- Determinado que existe un número de firmas válidas y auténticas que cubra el ocho por ciento del padrón electoral nacional, en ocho días de presentado el correspondiente Informe de la Comisión Jurídica, y de cualquier otro que juzgue conveniente, el Pleno del Tribunal comprobará el cumplimiento de los requisitos constitucionales, legales y de este Reglamento; y en base a ello, calificará las preguntas.

Art. 10.- Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos anteriores, el Tribunal procederá a hacer la convocatoria a consulta popular nacional, dentro de los cinco días siguientes; y señalará la consulta para que se realice a más tardar cuarenta y cinco días después de dicha Convocatoria.

CAPÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES A LAS CONSULTAS NACIONALES

Art. 11.- Las convocatorias a consultas nacionales se publicarán en el Registro Oficial, en los periódicos de mayor circulación del país y se difundirán en cadena nacional de radio y televisión en los términos señalados en el artículo 44 de la Ley de Elecciones.

Art. 12.- Las preguntas sobre reforma constitucional se presentarán como textos normativos a ser incorporados en la Carta Fundamental. Las demás preguntas serán sobre una o varias tesis o planteamientos, sin calificativo de ninguna naturaleza que pueda influir en la determinación del votante; se tratará siempre de una alternativa, a fin de que el ciudadano haga pleno uso de su derecho de pronunciarse por el SI o por el NO.

Art. 13.- Desde la Convocatoria hasta el término de la campaña: cuarenta y ocho horas antes del sufragio, el Tribunal Supremo Electoral realizará una campaña de difusión imparcial de las propuestas sometidas a consulta.

Art. 14.- A las 21 horas del día de la votación, cada Tribunal Provincial Electoral se instalará para el escrutinio de su jurisdicción y levantará acta de resultados; si el escrutinio dura más de un día, se redactará actas parciales de cada jornada. Proclamados resultados, los actores políticos facultados por ley para hacerlo, pueden apelar para ante el Tribunal Supremo Electoral. El escrutinio provincial terminará a lo más en ocho días a partir del día de la votación. Existirán veinticuatro horas para enviar al Tribunal Supremo: las actas del escrutinio provincial, las actas de las Juntas Receptoras del Voto, y caso de haberse presentado, las apelaciones.

Art. 15.- El Tribunal Supremo Electoral se instalará en audiencia de escrutinio, el noveno día después de la votación y procederá en el siguiente orden:

- a) Resolverá previamente sobre las apelaciones que se hubieren presentado.
- b) Realizará el escrutinio en base a las actas de escrutinio de los Tribunales Provinciales.
- c) En caso de excepción, que la importancia lo justifique, comprobará, por muestreo, una o algunas de las ánforas de votos, debiendo señalar el procedimiento para realizarlo.

Art. 16.- Terminado el escrutinio nacional, proclamará los resultados; y la decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes, razón por la que, se cuentan los votos nulos y los blancos.

Art. 17.- El Tribunal Supremo Electoral ordenará la publicación inmediata en el Registro Oficial, de los resultados, lo que será obligatorio para gobernantes y gobernados a partir de dicha promulgación.

Art. 18.- Si el Director del Registro Oficial no publicare dentro de quince días de remitida la orden, el Tribunal Supremo Electoral lo destituirá del cargo suspendiéndole por un año en el ejercicio de sus derechos políticos y lo comunicará a la autoridad nominadora para los fines legales consiguientes.

Art. 19.- El Tribunal Supremo Electoral expedirá el Presupuesto para la Consulta y el Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los valores correspondientes con la debida oportunidad en los términos de la Ley Orgánica de Elecciones.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA CONSULTA POPULAR EN EL RÉGIMEN SECCIONAL
CAPÍTULO PRIMERO

Art. 20.- *Procederá la consulta popular en el Régimen Seccional en los siguientes casos:*

Cuando un Consejo Provincial, un Concejo Municipal o una Junta Parroquial Rural con el voto conforme de las tres cuartas partes de sus integrantes, solicite las convocatorias al Tribunal Provincial Electoral de su jurisdicción, para asuntos de trascendental importancia atinentes a su comunidad; y,

Cuando un número de ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos, que representen por lo menos un veinte por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción, lo soliciten al Tribunal Provincial Electoral correspondiente, para que la ciudadanía se pronuncie sobre circunstancias de carácter atinentes a su comunidad.

Art. 21.- *Se entenderá que se cumplen las condiciones exigidas por la Constitución y la ley, cuando se trate de circunstancias excepcionales, sobrevinientes y que competan exclusivamente a una jurisdicción y no tengan, relación ni consecuencia, ni afecten a otra jurisdicción.*

CAPÍTULO SEGUNDO
CONSULTA POR INICIATIVA DE ORGANISMOS SECCIONALES

Art. 22.- *Las Organizaciones Seccionales: Consejos Provinciales, Concejos Municipales o Juntas Parroquiales Rurales se dirigirán al Tribunal Provincial Electoral de la circunscripción, pidiéndole que convoque a consulta popular para que el electorado se pronuncie sobre asuntos de trascendental importancia atinentes a dicha circunscripción. Documentadamente demostrarán que el pedido ha sido aprobado en forma legal mediante votación conforme, de por los menos, las tres cuartas partes de los integrantes de la entidad peticionaria. Se acompañarán las preguntas, en concordancia con las disposiciones constitucionales y legales.*

Además, el peticionario acompañará una orden de transferencia dirigida al Banco Central del Ecuador, para que, de sus fondos, transfiera a la cuenta

del Tribunal Supremo Electoral, el valor total del Presupuesto que dicho Tribunal expida para la consulta popular solicitada.

Art. 23.- El Tribunal Provincial Electoral se pronunciará sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de la petición y de las preguntas, y las calificará previo Informe de la Comisión Jurídica, lo que deberá cumplir dentro del plazo de ocho días de presentada la solicitud.

Art. 24.- Si el Tribunal Provincial Electoral considera que no se llenan los requisitos señalados en el Art. 107 de la Constitución Política y en el Art. 120 de la Ley de Elecciones Codificada, rechazará el pedido y lo notificará a la entidad seccional peticionaria.

Art. 25.- Los peticionarios pueden volver a presentar la solicitud, si el rechazo se fundamentó en motivos subsanables, y siempre que hayan desaparecido las causas que determinaron dicho pronunciamiento.

Art. 26.- El Tribunal Provincial Electoral elaborará la Proforma de Presupuesto para la consulta y la someterá a conocimiento, discusión y aprobación del Tribunal Supremo Electoral.

Art. 27.- Aprobado el Presupuesto, el Tribunal Supremo Electoral pondrá en conocimiento del organismo peticionario, y notificará al Banco Central del Ecuador, para que, de los fondos de dicho organismo, transfiera a la Cuenta del Tribunal Supremo Electoral, la totalidad del monto presupuestado, y en concordancia con la orden de transferencia dada inicialmente según lo previsto en el segundo inciso del Art. 22 del presente Reglamento.

Art. 28.- Cumplido satisfactoriamente el proceso anterior y lo dispuesto en el artículo precedente, el Tribunal Provincial Electoral, en el término de tres días hará la Convocatoria a consulta, la misma que se realizará dentro de los siguientes cuarenta y cinco días.

CAPÍTULO TERCERO

CONSULTA POPULAR POR INICIATIVA POPULAR

Art. 29.- Si los ciudadanos de una provincia o cantón se proponen recoger firmas de adhesión para pedir una consulta popular seccional por motivos sobrevientes, de gran trascendencia y que afecten exclusivamente a esa jurisdic-

ción, los responsables solicitarán al respectivo Tribunal Provincial Electoral el Modelo de "Formulario de adhesiones para pedir consulta popular en el régimen seccional", a fin de proceder a la recolección de firmas, dejando constancia por escrito que se responsabilizan del proceso a iniciarse.

Art. 30.- El Tribunal Provincial Electoral proporcionará el modelo de Formulario aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, y los responsables lo multiplicarán en la cantidad que requieran. El Formulario contendrá los siguientes datos: El texto materia de la consulta, fecha del pedido y circunscripción territorial; del adherente: nombres y apellidos, número de cédula, y firmas. De igual modo: nombres y apellidos, número de cédula y firmas del responsable de la página.

Art. 31.- El Tribunal Provincial Electoral que recibe el pedido de consulta acompañado de los formularios con las firmas de adhesión, dentro de los tres días siguientes a la recepción, organizará el o los equipos necesarios para comprobar la autenticidad de la información contenida en ellos. Si no dispusiere de los medios necesarios para hacerlo, pedirá la asistencia del Tribunal Supremo Electoral a través de sus Departamentos Especializados. De requerirse una asistencia especial adicional, se la buscará, a fin de asegurar el completo acierto en las resoluciones.

Art. 32.- Si el pedido no cuenta con el número de adhesiones válidas requerido, esto es, el veinte y cinco por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción, se rechazará la solicitud.

Art. 33.- Si existe el número de adhesiones válidas requeridas, se remitirá a la Comisión Jurídica del Tribunal Supremo Electoral para que informe si las preguntas reúnen los requisitos señalados en la Constitución, la ley y este Reglamento; y, en tal caso se calificarán las preguntas.

Si no hay asidero legal para calificar las preguntas, el Tribunal rechazará el pedido y notificará a los interesados a través del domicilio señalado, por éstos, para el efecto.

En cambio, si se califican las preguntas, en tres días procederá a realizar la Convocatoria para consulta popular seccional, señalándose para su realización una fecha dentro de los cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de la Convocatoria.

CAPÍTULO CUARTO

DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS CONSULTA POPULARES

Art. 34.- La convocatoria para consulta popular seccional, se publicará en el Registro Oficial y se difundirá en los medios de comunicación de alcance en la respectiva jurisdicción.

Art. 35.- En ningún caso la consulta podrá referirse a materia constitucional o a temas tributarios.

Art. 36.- Las consultas versarán sobre una tesis o planteamiento sin calificaciones de ninguna naturaleza, ni de bondad ni de descalificación; se tratará siempre de una alternativa, a fin de que el votante haga pleno uso de su derecho de pronunciarse por el SI o por el NO.

Art. 37.- Desde el día de la Convocatoria hasta dos días antes del Sufragio, el Tribunal Provincial Electoral, hará difusión imparcial de los temas materia de la consulta.

Art. 38.- A las 21 horas del día de la votación el Tribunal Provincial Electoral se instalará en audiencia de escrutinios y se levantará acta de resultados. Si el escrutinio durare más de un día, se levantarán actas parciales correspondientes a cada jornada. El escrutinio debe terminarse a lo más en cinco días y la proclamación de resultados se hará con el acta del último día.

Art. 39.- Los actores políticos que tienen facultad para hacerlo pueden apelar de los resultados numéricos, en dos días contados desde la notificación de los resultados.

Art. 40.- De producirse apelaciones, de oficio el Secretario del Tribunal Provincial Electoral remitirá inmediatamente las actas del escrutinio provincial y las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras del Voto, junto con los documentos correspondientes a la apelación, para que resuelva el Tribunal Supremo Electoral, el que se pronunciará sobre las apelaciones en tres días contados desde la recepción de documentos y proclamará resultados; si no varían los resultados proclamados por el inferior, le devolverá los documentos para que ratifique la proclamación de resultados hecha anteriormente.

Art. 41.- El Tribunal Provincial Electoral enviará el resultado de la consulta al Tribunal Supremo Electoral para que disponga la publicación en el Registro Oficial. La resolución favorecida por el voto de la mayoría absoluta de votan-

tes, y publicada en el Registro Oficial, obliga, desde ese día, a gobernantes y gobernados. Si el Registro Oficial no publica los resultados hasta quince días después de su envío, el Tribunal Supremo Electoral destituirá a su Director, suspendiéndole por un año de sus derechos políticos y notificará a la Autoridad Nominadora para los fines de ley.

TÍTULO TERCERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 42.- *Los peticionarios firmantes de la solicitud para consulta popular seccional, deberán, obligatoriamente, estar empadronados y haber votado en el último evento electoral en dicha circunscripción; caso contrario su firma de adhesión será desechada. Se exceptúa el caso de quien se halle exento del voto obligatorio por disposición de ley.*

Art. 43.- *Junto con los formularios que contengan las firmas para pedido de consulta popular, nacional o seccional, los responsables, entregarán, al respectivo Tribunal, por triplicado, en CDs y/o Diskettes que contengan la información y que servirán para que el Tribunal Supremo Electoral por medio de su Dirección de Sistemas realice la comparación o cotejo de los demás datos correspondientes a cada suscriptor del pedido, esto es: circunscripción electoral, número de cédula, nombres y apellidos, su firma y rúbrica.*

Art. 44.- *Solamente los Partidos Políticos, los Movimientos y Organizaciones independientes legalmente reconocidos e inscritos en el Tribunal Supremo Electoral por medio de sus representantes legales, y los inscritos como responsables el pedido de convocatoria a consulta popular, podrán impugnar la validez de los escrutinios realizados por el Tribunal Provincial Electoral, en los términos del Art. 132 de la Ley de Elecciones Codificada.*

La apelación se presentará ante el Tribunal Provincial, que sin más trámite la trasladará al Tribunal Supremo Electoral, que la resolverá en tres días de haber avocado conocimiento del caso.

TÍTULO CUARTO
DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 45.- *Un treinta por ciento de ciudadanos en uso de sus derechos políticos, correspondientes a una provincia o cantón, según el caso, en concordancia con los Arts. 122 y 123 de la Ley de Elecciones Codificada, tienen derecho a pedir al respectivo Tribunal Provincial Electoral que inicie el proceso de revocatoria del mandato de Diputados, Prefectos Provinciales y de Alcaldes, en caso de corrupción comprobada o de incumplimiento injustificado de su plan de acción.*

Si se invoca corrupción, el pedido puede hacerse en cualquier momento; en cambio, si la causal invocada es incumplimiento injustificado del plan de acción, puede hacerse después de cumplido un año de su desempeño y antes del último año de terminación de su período.

Art. 46.- *Si ciudadanos de una provincia o cantón, se proponen recoger firmas, para un proceso de revocatoria del mandato, los responsables, dejando constancia escrita de que asumen tal responsabilidad, pedirán al respectivo Tribunal Provincial Electoral el modelo de formulario para la recolección de firmas.*

Art. 47.- *El Tribunal Provincial Electoral proporcionará el modelo de formato, que los responsables lo multiplicarán a su costa en la cantidad que requieran. El formulario llevará: impreso el motivo invocado por los demandantes; fecha del pedido y circunscripción territorial; respecto del firmante: nombres y apellidos, número de cédula, número de certificado de votación en el último proceso electoral y firma. Igualmente: nombres y apellidos, número de cédula y firma del responsable de cada página.*

Art. 48.- *El Tribunal Provincial Electoral, en cuanto reciba el pedido, organizará el equipo o los equipos técnicos necesarios para comprobar la autenticidad y veracidad de las firmas. De considerar necesario recurrirá al Tribunal Supremo Electoral para que complete el trabajo por medio de su Departamento de Sistemas Informáticos y para que de ser necesario, recurra a alguna otra asesoría especializada. Todo, para garantizar el mayor acierto de el pronunciamiento.*

Art. 49.- *Si el pedido no cuenta con el número de firmas válidas requerido;*

esto es, por lo menos el treinta por ciento del total de empadronados de la correspondiente circunscripción, rechazará la solicitud y notificará a los responsables de la petición..

Art. 50.- Si existe el número de firmas necesario, toda la documentación presentada, se pondrá a estudio de la Comisión Jurídica a fin de que informe. El mismo día se notificará con el pedido, al funcionario o autoridad contra quien está dirigida la solicitud de revocatoria del mandato, para que en tres días, presente los documentos de su defensa.

Si se tratare de casos en que se invoque corrupción, los solicitantes deben acompañar documentos que certifiquen la existencia de sentencia ejecutoria emitida por autoridad competente.

Art. 51.- Con el Informe de la Comisión Jurídica el Tribunal Provincial Electoral resolverá lo que corresponda. Si hay causales para hacerlo y rechaza el pedido, notificará a los solicitantes en la persona de quien les representa sin perjuicio de llevar el asunto al ámbito penal si hubieren presunciones que así lo justifiquen. En cambio, si se acepta el pedido, procederá inmediatamente a convocar, señalando día para las votaciones, que no será más allá de cuarenta y cinco días posteriores a la convocatoria.

Art. 52.- La Convocatoria se publicará en el Registro Oficial y se difundirá por los medios de comunicación de alcance en la respectiva jurisdicción.

Art. 53.- El Tribunal Provincial difundirá en forma imparcial, e igualitaria, tanto el planteamiento de los peticionarios como la defensa del acusado; hasta dos días antes del señalado para el sufragio.

Art. 54.- A las veintiún horas del día de votación el Tribunal Provincial Electoral se instalará en audiencia de escrutinio; si durare más de un día se levantará acta, de cada jornada. La proclamación de resultados se hará con el acta del último día; y se procederá a la notificación con los resultados. Habrá dos días a partir de la notificación para que los interesados puedan apelar para ante el Tribunal Supremo Electoral.

Art. 55.- Se enviará a resolución del Superior, las Actas de escrutinio del Tribunal Provincial Electoral y las Actas de las Juntas Receptoras del Voto. Si en el conocimiento del recurso, surge en el Tribunal Supremo Electoral alguna duda fundamentada, podrá recurrir a una auditoría de votaciones con la revisión del contenido de ánforas por muestreo.

Art. 56.- Si el pronunciamiento del Supremo Electoral varía resultados, hará la correspondiente proclamación. En cambio, si se ratifica lo proclamado por el Tribunal Provincial Electoral, le devolverá el expediente para que ratifique la proclamación y notifique nuevamente con dichos resultados, los mismos que quedan en firme.

Art. 57.- Publicados los resultados en el Registro Oficial, son obligatorios para todos. Por lo mismo, si se aprobó el pedido de revocatoria del mandato, el funcionario cesa automáticamente en su desempeño y es reemplazado por quien corresponda en términos de ley.

Art. 58.- Los peticionarios que suscriben el pedido de revocatoria del mandato, deben estar empadronados en dicha circunscripción y haber votado en ella en el último sufragio, salvo que se halle exento del voto obligatorio por otra disposición de ley.

TÍTULO QUINTO

DISPOSICIONES COMUNES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 59.- En la votación de consulta popular, nacional o seccional y en el proceso para revocatoria del mandato, están obligados a votar todos los ciudadanos de la circunscripción correspondiente, bajo pena de las sanciones previstas, en la ley para el caso de incumplimiento.

Art. 60.- En todos los casos de consulta popular y de revocatoria del mandato, el Tribunal Supremo Electoral diseñará las papeletas que se utilizarán para la votación, así como las actas de instalación y de escrutinios; y, más documentos necesarios para el evento.

Art. 61.- Igualmente, en todos los procesos seccionales, los Tribunales Provinciales Electorales elaborarán las Proformas de Presupuesto, que serán consideradas por el Tribunal Supremo Electoral, que es el único Organismo facultado por ley para expedir los presupuestos.

Art. 62.- En el caso de solicitud de iniciativa popular para consulta o para revocatoria del mandato, como en toda petición presentada a cualquier autoridad, se presume su veracidad y hallarse encuadrado en el marco de la Ley.

Si se establecieren presunciones de haber falsificación o alteración de cualquier naturaleza, la falta se perseguirá y sancionará en el campo penal, y los primeros responsables serán los patrocinantes del proceso y el responsable de la respectiva página.

Los modelos de formulario que entreguen los Tribunales para recoger adhesiones al pedido, llevarán impresas en forma destacada, la advertencia de sanción penal.

Art. 63.- *En los casos de consultas populares y de revocatoria del mandato, la decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes, razón por la que, cuentan los votos nulos y blancos.*

Art. 64.- *A la consulta popular y a la revocatoria del mandato se aplicarán las disposiciones de la Ley de Elecciones en todo lo que fueren aplicables; y en caso de duda, resolverá el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley de Elecciones Codificada.*

Art. 65.- VIGENCIA.- *El presente Reglamento regirá desde su aplicación en el Registro Oficial, y deroga cualquier norma de similar o inferior categoría que se le oponga.*

RAZÓN.- *Siento por tal, que el presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de miércoles 27 de Junio del 2001.- LO CERTIFICO.*

f) Dr. Daniel Argudo Pesántez
SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (E)".

REGLAMENTO RELATIVO A FORMULARIOS DE FIRMAS DE ADHESIÓN A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES Y FORMULARIOS PARA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS

En Consulta Popular de 28 de agosto de 1994, la ciudadanía aprobó la siguiente pregunta:

"¿Considera usted que los ciudadanos independientes no afiliados a partido político alguno deberían tener derecho a participar como candidatos en toda elección popular?".

De consecuencia del pronunciamiento ciudadano y reformada, y en consonancia, como la Constitución de la República, desde las elecciones de 1996, participan como candidatos ciudadanos no afiliados a partidos políticos, y de hecho, han surgido y participado movimientos políticos, alguno permanente, y también sectoriales; pero la normatividad legal correspondiente no tuvo el desarrollo correlativo para un cumplimiento ajustado a normas; y, así tenemos el contrasentido de que se crea que en cierto aspectos, para el ejercicio de determinados derechos, para la estructura, organización, disciplina, etc., los movimientos independientes, pueden disfrutar de derechos ilimitados, mucho más amplios aún que los que asisten a los partidos que, por disposición constitucional "gozarán de la protección del Estado para su organización y funcionamiento"; y a pesar de que la Ley reconoce que "Constituyen un elemento fundamental del sistema democrático", y a pesar de que se hallan asistidos de su ley que es la "Ley Orgánica de Partidos Políticos".

Las únicas dos asimilaciones que la Constitución hace de los movimientos a los partidos, son que: "rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales" y que si no obtienen en dos "elecciones pluripersonales sucesivas.....el porcentaje mínimo del cinco por ciento de votos válidos, quedarán eliminados del registro electoral".

En definitiva, no hay en la ley normativas claras respecto de la organización, estructura, requisitos, características de los movimientos independientes; el Tribunal hace un año sometió a consideración del H. Congreso Nacional el proyecto de Código de las Instituciones de la Democracia, y allí consta un Estatuto, denominado "III.- De las Organizaciones Políticas y de los Candidatos Independientes".

Tratando de encauzar el asunto, por lo menos en uno de los aspectos, el Tribunal aprobó el Reglamento relativo a formularios de firmas de adhesión a candidatu-

ras independientes y formularios para inscripción de candidaturas, que tienen el siguiente texto:

"TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Considerando:

Que, el artículo 209 de la Constitución Política de la República dispone que al Tribunal Supremo Electoral le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales;

Que, por disposición del artículo 185 de la Ley de Elecciones Codificada el Tribunal debe proporcionar los formularios de recepción de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes y los formularios de inscripción de candidaturas;

Que, es necesario reglamentar el modo y forma de cumplir con dichas funciones señaladas en la ley; y,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Elecciones Codificada, (Reg. Of. No. 117 de 11 de julio del 2000), expide el siguiente

**REGLAMENTO RELATIVO A FORMULARIOS
DE FIRMAS DE ADHESIÓN Y CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES Y FORMULARIOS PARA
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS**

DE LA ENTREGA DE LOS FORMULARIOS

Art. 1.- Desde los ciento ochenta días antes del día de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral entregará a los Movimientos Independientes y a los ciudadanos que lo soliciten por escrito, el "Formulario de recepción de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes para dignidades de elección nacional". Los interesados dejarán constancia escrita de que se responsabilizan del proceso a iniciarse.

Al solicitante, el Tribunal, le entregará también diskettes que contendrán el "Software para el registro de firmas de adhesión", acompañado de la respectiva técnica de uso.

Art. 2.- Desde los cientos cincuenta días antes del día de las elecciones los Tribunales Provinciales Electorales entregarán a los Movimientos Independientes y a los ciudadanos que lo soliciten por escrito, el "Formulario de recepción de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes para dignidades de elección provincial, cantonal, o parroquial".- Los interesados, bajo su firma, dejarán constancia escrita de que se responsabilizan del proceso a iniciarse.

Art. 3.- Los modelos de Formularios destinados a recoger firmas de patrocinantes a candidatos a una elección popular directa proporcionados por los Tribunales Electorales, los multiplicarán los interesados a su costo. El Formulario contendrá los siguientes datos: Denominación de la candidatura y fecha de elección. Del Adherente: nombres y apellidos, número de la cédula de ciudadanía y firma del responsable de cada página.

PROCESAMIENTO EN EL CASO DE INDEPENDIENTES

Art. 4.- Al momento de proclamación para inscripción de candidaturas de los independientes, el representante legal de éstos entregará al Tribunal los formularios de adhesión de firmas que deben contar, con, al menos el 1% de firmas de los ciudadanos empadronados en la jurisdicción a la que aspiran representar, así como los diskettes con la información requerida.

Art. 5.- los formularios y diskettes que contienen la información serán entregados al respectivo Tribunal Electoral, a través del Secretario del Organismo, para el proceso de verificación. El departamento técnico correspondiente presentará su informe a la Comisión Jurídica en el plazo de ocho días y ésta lo trasladará al Pleno con su opinión a fin de que tome la resolución en el término de tres días.

Si un Tribunal Provincial Electoral no cuenta con todos los medios para establecer la veracidad y autenticidad de las firmas, pedirá asistencia al Tribunal Supremo Electoral, con carácter de urgencia. Si el Tribunal Supremo Electoral, en caso de que a él le competa o si lo conoce por pedido de un Tribunal Provincial, debe recurrir a una asistencia exterior especializada, así procederá en búsqueda del mayor acierto y respeto para los derechos ciudadanos.

ENTREGA DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 6.- Después de la convocatoria a elecciones, los Tribunal Electorales, Supremo o Provincial, según el caso, entregarán a las organizaciones políticas y a los ciudadanos que lo soliciten por escrito, los formularios de solicitud de inscripción de candidaturas, acompañados de un diskett que contendrá el "Software para la inscripción de candidaturas" y la correspondiente guía técnica de uso.

Art. 7.- Al momento de proclamación de las candidaturas para su inscripción, el representante legal o apoderado de los candidatos, entregará al Tribunal Electoral respectivo, lo siguiente:

- a) Original y dos copias de la solicitud de inscripción de candidaturas, llenados a máquina o con letra de imprenta y con fotografías a color tamaño carné;
- b) Dos fotografías a color tamaño carné, adicionales, en cuyo reverso conste con claridad: nombres, apellidos, partido o movimientos que auspicia al candidato y función para la que se postula;
- c) Un diskett con el "Software para la inscripción de candidaturas" que contendrá la siguiente información: dignidad a la que se postulan los candidatos; circunscripción territorial correspondiente, nombres y apellidos completos y número de la cédula de ciudadanía.
- d) Original y copia legible de la cédula de ciudadanía de cada candidato;
- e) Para el caso de candidaturas a diputados provinciales, prefectos provinciales y alcaldes, deberá presentarse el respectivo plan de trabajo, con sujeción al Art. 54 de la Ley de Elecciones Codificada;
- f) En el caso de alianzas entre diferentes actores políticos, en la solicitud de inscripción de candidatos deberá constar claramente los nombres y apellidos y firmas de responsabilidad de los representantes o apoderados de las candidaturas coaligadas, señalando el orden y número de listas y símbolos con que aparecerá la alianza en la papeleta electoral.

Art. 8.- El nombre del Movimiento Político o Alianza Electoral deberá individualizarlos sin lugar a equívocos. No podrán expresar antagonismos, ni

contener el nombre del país y tampoco nombres propios de personas naturales vivas.

Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo, la bandera del Ecuador, ni sus colores. En el caso de movimientos de ámbito seccional, tampoco pueden utilizar el escudo, símbolos o colores de la bandera de dicha circunscripción.

Art. 9.- Una vez recibida la documentación en la Secretaría del Tribunal Electoral correspondiente, ésta la pasará a la Comisión Jurídica y los diskettes al Departamento Técnico. Los informes de las dos instancias se presentarán al Pleno del Tribunal Electoral, el que, con esos elementos de juicio tomará la resolución pertinente.

Art. 10.- El área de Cómputo con toda la información recibida de las organizaciones políticas, generará una base de datos de los candidatos inscritos en cada Tribunal Electoral y que le servirán al Departamento Técnico del Tribunal Supremo Electoral para generar una base de datos de los candidatos a nivel nacional.

Art. 11.- Un Vocal del Tribunal Provincial Electoral designado expresamente o un funcionario delegado por el Organismo Provincial Electoral, entregará en la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, los siguientes documentos: Originales de las solicitudes de inscripción de candidaturas, fotocopias de las cédulas de ciudadanía, dos fotografías a color tamaño carné, de cada candidato y el diskett conteniendo la base de datos de las ciudadanía de la provincia, generadas por el área de Cómputo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 12.- Si del examen de los formularios previstos en este Reglamento se establecieren presunciones de falsificación o alteración de cualquier naturaleza, la falta se perseguirá y sancionará en el campo penal, y los primeros responsables serán los patrocinantes del proceso y el responsable de la respectiva página.

Los modelos de formularios que entreguen los Tribunales para recoger adhesiones al pedido, llevarán impresa en forma destacada, la advertencia de sanción penal.

Art. 13.- El presente Reglamento deroga cualquier otra disposición de igual o inferior categoría que se lo oponga, y, especialmente el Reglamento para

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

entrega o procesamiento de los formularios de recepción de firmas de respaldo o adhesión a las candidaturas independientes: Registro Oficial No. 4 de 27 de enero del 2000; y, al Reglamento para la entrega de formularios de solicitud e inscripción de candidaturas: Registro Oficial No. 31 de 8 de marzo del 2000; y, entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

RAZÓN.- *Siento por tal, que el presente Reglamento fue aprobado por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de día jueves 2 de Agosto del 2001.- LO CERTIFICO.*

*Secretario General
Tribunal Supremo Electoral".*

PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS NUEVAS SOLICITUDES

En cuanto a los sujetos políticos a que se refiere el segundo inciso del Art. 13 de la Codificada Ley Orgánica de Elecciones, los partidos se hallan perfectamente definidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, pero no sucede lo mismo con los Movimientos. Así tenemos, en un breve resumen:

- La Constitución de la República en el Título IV, "DE LA PARTICIPACION DEMOCRÁTICA", titula al Capítulo III: "DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS", y en el Art. 115 establece la forma cómo serán reconocidos los Partidos Políticos, pero nada dice de los movimientos; sin embargo en el segundo inciso establece que los unos y los otros desaparecerán si : "en dos elecciones pluripersonales nacionales sucesivas, no obtengan el porcentaje mínimo del cinco por ciento del voto válidos....".

Esta disposición autoriza la existencia de los movimientos y su presencia para más de un proceso electoral, pero no establece los requisitos que deberán reunir, su necesaria inscripción, la forma de su aprobación, la extinción y sus causas, etc.

- El Art. 116 da a los partidos y a los movimientos iguales obligaciones para rendir cuentas sobre ".....el monto, origen y destino de los recursos que utilizan en las campañas electorales". Lo cual tácitamente vuelve a repetirse en el Art. 209 al instituir al Tribunal Supremo Electoral como juez de dichas cuentas.
- La Ley Orgánica de Elecciones dice en el Art. 55:
"Los partidos políticos legalmente, reconocidos, pueden presentar candidatos a sus afiliados o de independientes para las dignidades de elección popular".
- En el Art. 66, dice que:
"Los partidos políticos.....podrán presentar impugnaciones de conformidad con la presente ley".

- El Art. 70, de la Ley de Elecciones, establece:
***"Art. 70.-** La asignación de número, aprobación de simbología, reserva y derecho del nombre de las organizaciones nacionales, provinciales, o cantonales y de independientes deberá ser aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, si se realiza antes del proceso de inscripción de candidaturas; en caso contrario, se realizará ante el Tribunal que deba calificar las candidaturas. Cuando se trate de elecciones de juntas parroquiales rurales, ejercerá estas atribuciones el Tribunal Provincial Electoral respectivo".*
- Este no es antecedente lógico del Art. siguiente, pues, el Art. 71, comienza diciendo: "LA REPRESENTACIÓN DE ESTAS CANDIDATURAS SE EFECTUARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA.....".

Es ilógico, porque el Art. 70 que es el antecedente no se refiere a "CANDIDATURAS"; y como los Arts. siguientes se refieren a "candidatos independientes" que pueden presentar sus candidaturas a elecciones unipersonales y pluripersonales, con respaldo de firmas, hemos de concluir que en la Ley de Elecciones no hay facultad expresa para que los "movimientos" puedan presentar candidaturas, ".....con excepción de los movimientos políticos independientes que hubieren alcanzado en las dos últimas elecciones pluripersonales" el 5% hoy, señalado en la Constitución de la República.

- La Ley Orgánica de Partidos Políticos solo acepta la formación de "movimiento político" en el caso de que "....se hayan agrupado con el propósito de constituir un partido....." (Art. 10).
- La misma Ley, en su Título II: RECONOCIMIENTO, Título III: ORGANIZACIÓN, Título IV: PRERROGATIVAS, Título V, Título VI, Título VII: FINANCIAMIENTO, en ningún, menciona a los "MOVIMIENTOS POLÍTICOS".

De tal manera que, hemos de llegar a reconocer que los Movimientos Políticos, por una situación de hecho, están viviendo una vida al margen de la Ley, una que, en muchos casos, han creado situaciones de privilegio que dejan a los partidos en situación deprimida para decir lo menos; basta decir que no tienen

obligación de participar en elecciones en determinado número de provincias, no tienen impedimento para "constituir organizaciones, paramilitares", no están obligados a "respetar el carácter no deliberante de las FF.AA. y de los Policía Nacional en servicio activo, so pena de ser extinguidos", etc.

Las breves anotaciones que preceden, obligan, a que de manera urgente se expida la legislación que regule las situaciones anotadas. Mientras esté vigente la participación de independientes en los procesos electorales, es indispensable normar la situación mediante ley; por ello, el Tribunal, al poner a consideración del H. Congreso, el proyecto de Código de las Instituciones de la Democracia, hizo constar como el III Estatuto el "De las Organizaciones Políticas y de los Candidatos Independientes".

En el año sobre el que estamos informando, se han presentado dos solicitudes de aprobación de Partidos Políticos: "Partido Renovador Independiente ÁLVARO NOBOA", el 25 de Octubre del 2001, y Partido "SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO", el 21 de Noviembre del 2001. Por la mayor transparencia de los procedimientos del Tribunal Supremo Electoral, transcribimos las solicitudes a continuación:

"Quito, a 25 de Octubre del 2001

Sr. Doctor

CARLOS AGUINAGA AILLON,

Presidente del Tribunal Supremo Electoral

Quito.-

De nuestra Distinguida Consideración:

De conformidad al Artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos, reformada mediante decreto supremo 2262 publicado en el registro oficial 535 de Febrero 28 de 1978, cumplimos con poner a vuestra consideración para su trámite respectivo, la correspondiente solicitud previo al reconocimiento como partido legalmente reconocido de nuestra consideración con el nombre de

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

"PARTIDO RENOVADOR INDEPENDIENTE ÁLVARO NOBOA".

Para el efecto, acompañamos la siguiente documentación requerida por el organismo de su dirección en el artículo 10 de la citada Ley.

- a) Acta de fundación del partido denominado "PARTIDO RENOVADOR INDEPENDIENTE ÁLVARO NOBOA".*
- b) Declaración del Principios Ideológicos del partido.*
- c) Programa de Gobierno, el mismo que contiene las acciones básicas que se propone ejecutar.*
- d) Estatutos del PARTIDO RENOVADOR INDEPENDIENTE ALVARO NOBOA.*
- e) Símbolos, Siglas, Emblemas y Distinción de partido*
- f) Nómina de la Dirección Nacional*
- g) Registro de afiliados de más del doble del 1.5% de los inscritos en el último padrón electoral requerido por ley, con las correspondientes fichas de afiliación.*
- h) Prueba de que cuenta el PARTIDO RENOVADOR INDEPENDIENTE ALVARO NOBOA con una organización de carácter nacional de conformidad al art. 12 de la Ley de Partidos Políticos, para lo que se adjuntan las actas constitutivas de las directivas provinciales provisionales de las Provincias de: ESMERALDAS, MANABÍ, GUAYAS, LOS RIOS, EL ORO, CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA, COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLÍVAR, CAÑAR, AZUAY, LOJA, SUCUMBÍOS, ORELLANA, MORONA SANTIAGO, PASTAZA, NAPO, ZAMORA CHINCHIPE Y GALÁPAGOS.*

Del señor Presidente, sin otro particular.

Muy atentamente,

*f) Abg. Wilson Sánchez Castello
Director Nacional*

*f) Abg. Vicente Taiano Alvarez
Secretario General.*

PARTIDO RENOVADOR INDEPENDIENTE ÁLVARO NOBOA

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

Nosotros, ecuatorianos, hombres y mujeres libres del campo y la ciudad, blancos, indígenas, negros, mestizos, orientales y de todas las razas trabajadores ejecutivos profesionales empleados y desempleados ante la crisis mundial y ecuatoriana crisis económica espiritual y de valores que estamos atravesando, hemos resuelto fundar el PARTIDO INDEPENDIENTE RENOVADOR ALVARO NOBOA. Para tomar el poder que se hará por las vías constitucionales y democráticas para al hacerlo fundar una NUEVA NACION un NUEVO ECUADOR.

Esto lo hacemos inspirados por Dios. Nuestros principios ideológicos son los siguientes: Creemos en la libre empresa y en el libre mercado como base firme para la producción económica; Creemos que solo la reactivación económica en un libre ambiente producirá la riqueza necesaria para el sostenimiento y mejoramiento de los ecuatorianos y sobre todo de las clases más pobres y desvalidos que tan golpeados están al momento. Combatiremos la miseria, la ignorancia, las enfermedades, el odio y la pobreza espiritual. En la PATRIA NUEVA habrá educación que prepare a los ecuatorianos a producir económicamente a un nivel superior y a vivir mejor en paz unidos, con Dios reinando entre nosotros reinará el amor, la honestidad, la paz y el bienestar económico mental y espiritual.

Erradicaremos las enfermedades combatiéndolas, pero sobre todo mediante la prevención desde que nace un niño o niña hasta su tercera edad. La prevención evitará la alta mortalidad infantil y luego cuando la persona llegue a ser un adulto cortará a tiempo la enfermedad que lo ataque. Nos superaremos día a día, mes a mes, año a año y convertiremos al NUEVO ECUADOR a la NUEVA NACIÓN en un ejemplo para todos los humanos del mundo.

Certifico que la presente declaración de principios ideológicos, fue leída y aprobada por la asamblea constitutiva de fundación del Partido Renovador Independiente Álvaro Noboa, del cinco de enero del año dos mil uno y en dos

*sesiones de la directiva nacional provisional, realizadas en la ciudad de Guayaquil, los días 1 de abril y 1 de mayo del año dos mil uno.
Lo certifico*

*f) Ab. Vicente Taiano Alvarez
Secretario General”.*

“SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD PATRIÓTICA “21 DE ENERO” COMO PARTIDO POLITICO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Quito, 21 de Noviembre del 2001

Señor

CARLOS AGUINAGA A.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Presente.-

La Sociedad Patriótica “21 de enero”, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Partidos Políticos, solicita la inscripción, el registro y por consiguiente el reconocimiento de nuestro movimiento como Partido Político. Para el efecto, acompañamos los siguientes documentos que cumplen con lo establecido en los requisitos que define la Ley antes referida.

- a) Acta de Fundación;*
- b) Declaración de los Principios Ideológicos;*
- c) Programa de Gobierno;*
- d) Estatutos;*
- e) Simbología, siglas, emblema y distintivos;*
- f) Nómina de las Directivas:*
 - 1. Directiva Nacional*
 - 2. Directiva Provincial de Pichincha*

3. Directiva Provincial de Guayas
4. Directiva Provincial de Manabí
5. Directiva Provincial de Los Ríos
6. Directiva Provincial de Azuay
7. Directiva Provincial de El Oro
8. Directiva Provincial de Chimborazo
9. Directiva Provincial de Tungurahua
10. Directiva Provincial de Esmeraldas
11. Directiva Provincial de Cotopaxi
12. Directiva Provincial de Imbabura
13. Directiva Provincial de Bolívar
14. Directiva Provincial de Napo
15. Directiva Provincial de Morona Santiago
16. Directiva Provincial de Sucumbíos
17. Directiva Provincial de Pastaza
18. Directiva Provincial de Francisco de Orellana

g) Registro de Afiliados y sus respectivas fichas

Atentamente,

f) Cml. Ing. Lucio Gutiérrez
PRESIDENTE NACIONAL

f) Dr. Carlos Teran
SECRETARIO".

El Tribunal Supremo Electoral está empeñado en que se terminen los exámenes técnicos, luego los estudiará la Comisión Jurídica, y el Informe de dicha Comisión, en cada caso, pasará a estudio del Pleno del Organismo.

Asimismo durante el año 2001, se han presentado cuatro solicitudes de asignación de número y reserva de nombre y aprobación de símbolo de Movimientos. Estos son:

- 1.** Movimiento Independiente "Realidad Nacional 2000".
- 2.** Movimiento Independiente "Renovación Democrática".
- 3.** Movimiento "TRANSFORMACIÓN SOCIAL INDEPENDIENTE".

4. Movimiento "NUEVO AMANECER"

Los cuatro Movimientos tienen asignados provisionalmente, los números 19, 20, 21 y 22, respectivamente.

EL CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y LA LEY QUE LO RIGE

De acuerdo con el pronunciamiento ciudadano en la encuesta del 25 de mayo del 1997, que, al contestar la quinta pregunta, por casi dos millones de votantes aprobó lo siguiente:

"¿Está usted de acuerdo que se fijen límites a los gastos electorales y se establezcan mecanismos para controlar el origen de los recursos destinados a las campañas electorales?"

En coincidencia, y cumplimiento del mandato correspondiente, la Constitución de 1998 hizo constar el Art. 116, que dice:

"Art. 116.-Control de gastos electorales.- *La Ley fijará los límites de los gastos electorales. Los partidos políticos, movimientos, organizaciones independientes, rendirán cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.*

La publicidad electoral a través de los medios de comunicación colectiva, solo podrá realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la campaña electoral .

La Ley sancionará el incumplimiento de estas disposiciones".

La misma Carta Fundamental en el Art. 209, asigna al Tribunal Supremo Electoral la función de "juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales".

En concordancia, el Congreso de la República, expidió la Ley del Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, (Reg. Of. No. 41 de 22 de marzo del 2000).

A pesar de expedida la Ley el 22 de marzo tuvo como Segunda Disposición Transitoria:

“Disposición Transitoria.- Segunda. La presente Ley Orgánica se aplicará también en los comicios del año 2000 no obstante se las hubiere convocado con anterioridad a la vigencia de esta Ley”.

El señor Presidente de la República reglamentó inmediatamente la ley. El Decreto Ejecutivo correspondiente, No. 345, se publicó en el Registro Oficial No. 73 de 27 de mayo del 2000.

De acuerdo con la Ley, el Tribunal, con anterioridad a la convocatoria a elecciones debía tomar ciertas providencias, como la de señalar el límite máximo de gasto para cada candidatura. Esto, al no haber otra alternativa, tuvo que realizarse a posteriori, encontrándose situaciones contradictorias inadecuadas; en algún caso, risibles. Por esto el Tribunal consideró adecuado llamar la atención del H. Congreso Nacional acerca de la necesidad de introducir modificaciones en la ley, y así, en lo relativo al límite de gasto por candidato, dijimos que se debió

“hacer frente a problemas como señalar el máximo gasto de cada candidato a miembro de la Junta Parroquial, cuando 3.945 candidatos, tienen un límite total de gasto de 25.000 dólares, dando un promedio de menos de SEIS DÓLARES para cada uno, pero ya en la asignación individualizada, hay candidatos que tienen como límite de gasto CUARENTA CENTAVOS, y la ley les obliga a llevar contabilidad con CONTADOR AUTORIZADO!!!, varias de estas incongruencias se han ido salvando en el camino de aplicación, el Tribunal expidió el correspondiente INSTRUCTIVO, para el control y juzgamiento del control del gasto electoral”.

Lo anotado para el caso de candidatos a Vocales de una Junta Parroquial, no tiene aplicación para las elecciones del 2002 en que no se eligen integrantes de las Juntas Parroquiales; pero, en cambio, se elegirá Representantes ante el Parlamento Andino, y tenemos que, según la Ley el límite máximo de gasto para esa campaña es de CINCUENTA MIL DÓLARES, de tal manera que cada candidato

al Parlamento Andino, para una campaña a nivel nacional, tendrá un gasto máximo autorizado de DIEZ MIL DÓLARES.

Aún para campaña de Presidente de la República, el límite dejado en la Ley, de UN MILLÓN DE DÓLARES parece estar bastante alejado de la realidad. Si recordamos que un solo aportante para la campaña de 1998 entregó, según propia confesión, TRES MILLONES CIENTO MIL DÓLARES.- No es que el Tribunal propicie que la campaña electoral se convierta en una feria donde el factor dinero lo compre todo, pero sí creemos que, procurando limitar el expendio y limitar el gasto, las cifras tengan alguna relación con la verdad, inclusive, para propiciar que la rendición de cuentas tenga relación con la verdad y no se propicie la desviación, el ocultamiento o alteraciones; a fin de que la rendición de cuentas corresponda lo más legítimamente posible a la verdad, permitiendo de esta manera, que la institución de control del gasto electoral se cumpla de la mejor manera.

Estas breves anotaciones para expresar la limitada experiencia y aplicación de la Ley respecto al Gasto Electoral del 2000, nos dice de la urgente necesidad de reformar las normas, cuanto más que se aproxima la campaña presidencial del presente año. Una de las definiciones que se debe precisar es lo que se entenderá por "Gasto Electoral"; la ley circunscribe la publicidad electoral a cuarenta y cinco días anteriores a las elecciones, una de las inspiraciones para ello es que a ese breve período de tiempo se circunscriba el Gasto Electoral, pero la realidad, y el país lo está sintiendo y comprobando, es distinta, y todo ese enorme gasto podría quedar excluido de la rendición de cuentas y por lo mismo no sirve de componente para el cálculo del Gasto Electoral realizado y que en total no debe exceder el límite que la ley señala para cada dignidad. La Ley tiene que conjurar condignamente la posibilidad de que los gastos de las campañas puedan hacerse desde varias vertientes: solo una autorizada por la ley y por lo mismo sujeta a controles. Estos pocos casos, para insistir que la ley necesita reforma y perfeccionamiento. En capítulo anterior dejamos anotado que la Ley Orgánica de Elecciones, la Orgánica de Partidos, necesitan modificaciones; aparte, dejamos expuesto el criterio de que sería deseable un Estatuto diferente para la Consulta Popular y la revocatoria del Mandato; todo esto para indicar que la legislación electoral requiere una profunda reforma, y, con la indicación de un ágil

procedimiento que podría adoptarse para posibilitar, estaremos proponiendo en el "Capítulo 18, Elecciones 2002".

Volviendo a lo relacionado con el juzgamiento del gasto electoral en las elecciones del año 2000, para el desempeño del Grupo de Auditores se expidió el necesario Instructivo.

La tarea cumplida por los Auditores, puede resumirse en lo siguiente:

- 1.** Distribución de responsabilidades de los miembros de la Unidad.
- 2.** Capacitación intensiva sobre el manejo y aplicación de la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y Propaganda Electoral.
- 3.** Desarrollo del Borrador de Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica del Control del Gasto Electoral y Propaganda Electoral.
- 4.** Elaboración del Borrador del Plan de Cuentas para la presentación de los Balances por parte de los sujetos políticos.
- 5.** Elaboración de Manuales para la presentación de cuentas por parte de los sujetos políticos.
- 6.** Reuniones de asesoramiento en cada uno de los Tribunales Provinciales Electorales, según calendario de ejecución para cada uno de los miembros de la Unidad.
- 7.** Elaboración de un Instructivo para la calificación y resolución sobre la presentación de cuentas de los sujetos políticos.
- 8.** Calendario regresivo para la presentación y juzgamiento de las cuentas presentadas por los sujetos políticos.
- 9.** Procedimiento para el juzgamiento de las cuentas con plazos y términos.

10. Instructivo para la absolución de los recursos presentados por sujetos políticos en esta materia.

11. Resolución en última instancia de los recursos de apelación y queja presentados a este máximo organismo electoral.

Todo, respaldado en documentos que “se encuentran en los archivos de dicha unidad de Auditoría”.

Los cuatro cuadros anexos que se insertan a continuación, recogen los resultados del Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, que no dieron margen para adoptar mayores procedimientos correctivos o de sanción.

TOTAL CONSOLIDADO DE PARTIDOS POLITICOS A NIVEL NACIONAL

**ELECCIONES 21 DE MAYO DEL 2000
EN DOLARES**

			GASTOS						DIFERENCIAS		INGRESOS vs GASTOS	
	A		B	C		D		E	F = E-B	G = E-B	H = A-E	I = A-E
ORGANIZACIONES POLITICAS	INGRESOS	%	LIMITE LEGAL	PUBLICIDAD	%	OTROS	%	TOTAL	EM MAS	EM MENOS	SUPERAVIT	DEFICIT
PARTIDO CONSERVADOR ECUATORIANO	33.906,30	15,16	223.643,24	27.631,03	81,40	6.314,57	18,60	33.945,60		-189.697,64		-39,30
LIBERAL RADICAL ECUATORIANO	698,00	105,88	659,21	20,00	2,87	678,00	97,13	698,00	38,79			
CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES	88.026,46	19,17	459.221,51	63.893,84	72,59	24.128,93	27,41	88.022,77		-371.198,74	3,69	
DEMOCRACIA POPULAR	282.640,84	63,50	445.110,09	159.593,01	56,33	123.716,93	43,67	283.309,94		-161.800,15		-669,10
PARTIDO SOCIAL CRISTIANO	420.391,91	72,35	581.082,68	289.141,84	69,59	126.323,20	30,41	415.465,04		-165.617,64	4.926,87	
PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO	286.943,68	49,27	582.335,29	201.715,10	70,03	86.321,37	29,97	288.036,47		-294.298,82		-1.092,79
ALIANZA NACIONAL	37.343,11	22,95	162.729,58	18.211,90	48,12	19.634,39	51,88	37.846,29		-124.883,29	-503,18	
IZQUIERDA DEMOCRATICA ACCION POPULAR	212.812,42	51,77	411.080,77	151.353,06	73,24	55.299,68	26,76	206.652,74		-204.428,03	6.159,68	
REVOLUCIONARIA ECUA.	59,26	0,14	43.237,45	5,00	8,58	53,26	91,42	58,26		-43.178,82	1,00	
FRENTE RADICAL ALFARISTA	95.398,68	80,47	118.545,45	77.111,98	80,83	18.286,30	19,17	95.398,28		-23.147,17	0,40	
MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO	29.164,54	28,39	102.740,06	13.901,75	47,25	15.521,35	52,75	29.423,10		-73.316,96		-258,56
UNION POPULAR LATINOAMERICANA	26.418,22	15,65	168.812,09	25.809,95	97,70	608,27	2,30	26.418,22		-142.393,87		
PARTIDO SOCIALISTA	57.578,97	71,75	80.247,30	40.310,38	65,31	21.410,21	34,69	61.720,59		-18.526,71		-4.141,62
TOTAL GENERAL	1.571.382,39	46,50	3.379.444,35	1.068.698,84	68,20	498.296,46	31,80	1.566.995,30	38,79	-1.812.487,84	10.588,46	-6.201,37

FUENTE: T.P.E.

ELABORACION: U.C.G.E.Y.P.E.

**TOTAL CONSOLIDADO DE
ALIANZAS A NIVEL NACIONAL**
ELECCIONES 21 DE MAYO DEL 2000
EN DOLARES

ANEXO No.2

			GASTOS						DIFERENCIAS		INGRESOS vs GASTOS	
	A		B	C		D		E	F = E-B	G = E-B	H = A-E	I = A-E
ORGANIZACIONES POLITICAS	INGRESOS	%	LIMITE LEGAL	PUBLICIDAD	%	OTROS	%	TOTAL	EM MAS	EM MENOS	SUPERAVIT	DEFICIT
ALIANZA 5 - 6	12.167,53	67,16	18.155,94	7.108,04	58,45	5.052,32	41,55	12.160,36		-5.955,58	7,17	
ALIANZA 10 - 2	50.144,09	57,55	87.135,70	42.540,87	84,84	7.603,23	15,16	50.144,10		-36.991,60		-0,01
ALIANZA 12-15 - 17 - 18	16.212,73	45,75	35.439,26	7.051,50	42,32	9.611,15	57,68	16.662,65		-18.776,61		-449,92
ALIANZA 15 - 17	13.836,07	25,35	54.586,87	6.672,10	42,81	8.914,94	57,19	15.587,04		-38.999,83		-1.750,97
ALIANZA 15-18	14.915,22	28,35	52.608,43	6.490,65	40,37	9.587,54	59,63	16.078,19		-36.530,24		-1.162,97
ALIANZA 15-17 - 18	4.355,81	7,95	54.787,08	2.887,52	66,29	1.468,29	33,71	4.355,81		-50.431,27		0,00
OTRAS ALIANZAS	150.908,85	48,89	308.698,58	75.722,94	52,13	69.533,94	47,87	145.256,88		-163.441,70	5.651,97	
TOTAL GENERAL	262.540,30	42,94	611.371,86	148.473,62	57,05	111.771,41	42,95	260.245,03		-351.126,83	5.659,14	-3.363,87

FUENTE: T.P.E.

ELABORACION: U.C.G.E.Y.P.E.

**TOTAL CONSOLIDADO DE
MOVIMIENTOS A NIVEL NACIONAL**
ELECCIONES 21 DE MAYO DEL 2000
EN DOLARES

			GASTOS						DIFERENCIAS		INGRESOS vs GASTOS	
	A		B	C		D		E	F = E-B	G = E-B	H = A-E	I = A-E
ORGANIZACIONES POLITICAS	INGRESOS	%	LIMITE LEGAL	PUBLICIDAD	%	OTROS	%	TOTAL	EM MAS	EM MENOS	SUPERAVIT	DEFICIT
MOVIMIENTO PLURINACIO -												
NAL PACHAKUTIC-NUEVO PAIS	43.012,60	24,52	175.413,47	10.923,04	22,33	38.003,98	77,67	48.927,02		-126.486,45		-5.914,42
MOVIMIENTO CIUDADANOS												
NUEVO PAIS	20.494,12	64,57	31.738,48	13.310,75	40,61	19.463,18	59,39	32.773,93	1.035,45			-12.279,81
OTROS MOVIMIENTOS	287.168,17	52,11	551.031,41	216.378,07	75,20	24,80	24,80	287.749,96		-263.281,45		-581,79
TOTAL GENERAL	35.674.89	46,25	758.183,36	240.611,86	65,13	34,87	34,87	369.450,91	1.035,45	-389.767,90		-18.776,02

FUENTE: T.P.E.

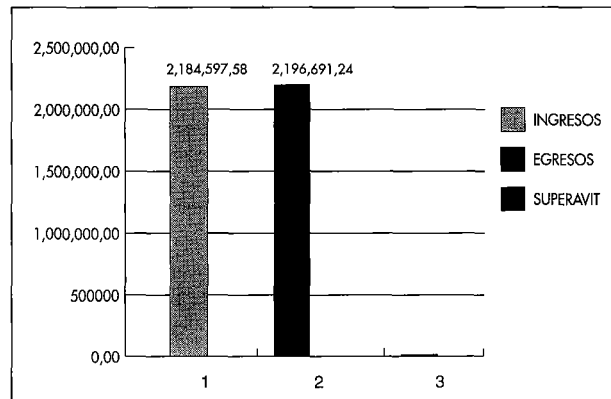
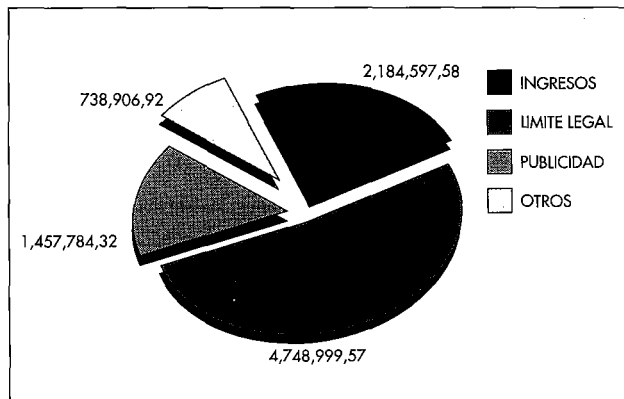
ELABORACION: U.C.G.E.Y.P.E.

**TOTAL CONSOLIDADO GENERAL DE
PARTIDOS POLITICOS, ALIANZAS Y MOVIMIENTOS**
ELECCIONES 21 DE MAYO DEL 2000
EN DOLARES

ORGANIZACIONES POLITICAS			GASTOS						DIFERENCIAS		INGRESOS vs GASTOS	
	INGRESOS	%	LIMITE LEGAL	PUBLICIDAD	%	OTROS	%	TOTAL	EM MAS	EM MENOS	SUPERAVIT	DEFICIT
TOTAL	2.184.597,58	46,00	4.748.999,57	1.457.784,32	66,36	738.906,92	33,64	2.196.691,24	1.074,24	-2.553.382,57	16.247,60	-28.341,26

FUENTE: T.P.E.

ELABORACION: U.C.G.E.Y.P.E.



En definitiva, el juzgamiento del gasto electoral sobre el evento del año 2000, fue un primer ensayo, que nos ha dejado experiencias valiosas y que constituirá un elemento de juicio para futuros procedimientos. Además, ha de tenerse en cuenta que las elecciones fueron seccionales: no fueron generales, y en el procedimiento se evidenció el conflicto: la Constitución, en el Art. 209, refiriéndose al Tribunal Supremo Electoral dice:

“Gozará de autonomía administrativa y económica, parajuzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales”.

En cambio la ley da la facultad de juzgamiento para el mayor número de elecciones a los Tribunales Provinciales Electorales, creando una extensión indebida y no prevista en la Carta Magna; en efecto, el Art. 8, dice:

“Art. 8.- *El control y juzgamiento del gasto electoral y de la propaganda electoral, estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral, en el caso de elecciones nacionales, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, parlamentarios andinos, Consulta Popular Nacional y cualesquiera otra elección de carácter nacional; y, por los tribunales provinciales electorales, en el caso de elecciones provinciales electorales, en el caso de elecciones provinciales, cantonales o parroquiales, para elegir a diputados, prefectos, alcaldes, consejeros provinciales y concejales municipales, consultas populares seccionales y de Iniciativa Popular provincial y cantonales, Revocatoria del Mandato y juntas parroquiales en su respectiva jurisdicción.*

De la resolución de juzgamiento de las cuentas de campaña y promoción electoral emanadas de los tribunales provinciales electorales, cabe el recurso de apelación, para y ante el Tribunal Supremo Electoral dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación”.

Las elecciones próximas son de carácter nacional y de carácter provincial y cantonal; de acuerdo con la ley debería haber dos juzgamientos: El Tribunal Supremo Electoral, para la elección presidencial y de Parlamento Andino, y del

Tribunal Provincial para las de diputados y concejales, con respecto al mismo sujeto político si participó para todas las dignidades, serían 23 juzgamientos en el caso de que dicho sujeto político participe en todas las provincias. Esta confusión y diseminación de procedimientos, amerita, igualmente, una urgente reforma de la ley, la que se justifica plenamente, pues se trata de una temática por primera ocasión aplicada en el país.

- 11 -

PROYECTO DE LEY DE VOTO EN EL EXTERIOR: EN TRÁMITE EN EL CONGRESO NACIONAL

En el Capítulo III, del Título III correspondiente a los “Derechos Políticos”, nuestra Constitución dice:

“Los ecuatorianos domiciliados en el exterior podrán elegir Presidente y Vicepresidente de la República, en el lugar de su registro o empadronamiento. La ley regulará el ejercicio de este derecho”.

A pesar de la compleja redacción de la norma, hemos querido entender que los ecuatorianos domiciliados en el exterior pueden consignar su voto en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Y, de ahí, se ha pasado a la posibilidad de realizar, elecciones en el exterior.

A esta altura del análisis, cabe recordar que el Art. 209 de la Constitución Política establece:

“Art. 209.- El Tribunal Supremo Electoral.- El Tribunal Supremo Electoral, con sede en Quito y jurisdicción en el territorio nacional, es persona jurídica de derecho público. Gozará de autonomía administrativa y económica, para su organización y el cumplimiento de sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos políticos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.

Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley.

Se integrará con siete vocales principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes, en representación de los partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan obtenido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluripersonales, en el ámbito nacional, los que presentarán al Congreso Nacional las ternas de las que se elegirán los vocales principales y suplentes.

Los vocales serán designados por la mayoría de los integrantes del Congreso,

permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. El Tribunal Supremo Electoral dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio”.

Lo transcrito, basta para dejar precisado que, por mandato constitucional, la materia electoral: “Organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales ” es facultad exclusiva y excluyente de la Función Electoral. Por consiguiente, nadie, salvo que recibiere encargo del máximo Organismo del sufragio, puede intervenir en dichos procesos. La Constitución establece y garantiza la independencia de las Funciones del Estado. Ni siquiera en virtud de una ley puede alterarse algo dicho y repetido por la Constitución de la República. Y esto, que es una garantía fundamental para el sufragio, fue conquista y consecuencia de un gran movimiento nacional, que, parece se pretende olvidar; insurgió triunfante el 28 de mayo de 1944 para que el EJECUTIVO NUNCA MAS PONGA SUS MANOS EN EL PROCESO ELECTORAL; movimiento que, justamente estalló en rebelión que no puede tener ocaso; rebelión expresada contra el proceso electoral en manos del Ejecutivo. En efecto, hasta 1944 por la concurrencia de una serie de circunstancias, el Gran Elector era el Ministro de Gobierno en base a arbitrariedad; ahora, en base a ley, se estaría consagrando otro Gran Elector: el Ministro de Relaciones Exteriores.

Esto lo estamos diciendo ante un proyecto de Ley de Voto Exterior que se halla a consideración del H. Congreso Nacional, que luego comentaremos ligeramente, pero antes conviene considerar:

ALGUNOS CASOS PARA COMPARACIÓN.-

El ejercicio del voto en el Exterior es asunto harto complejo, costoso y que requiere de mucha preparación. Algunas personas que no han profundizado en la materia, creen que todo es cuestión de poner un artículo en la ley y que se comienza a ejecutar y cumplir como haya sido “in mente” su idea y deseo; en este caso, de quien hizo el Estatuto Constitucional.

Que el asunto es harto complejo, han encontrado muchos países que han afrontado el asunto, y en prueba de ello, de los 35 países de América solo ocho tie-

nen el voto en el Exterior: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos de América, Perú, Puerto Rico y Venezuela; en seis países está pendiente y suspenso la aplicación: Chile, México, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Es saludable una breve revisión imparcial sobre la situación en diferentes países de América.

PERU, tiene establecida la votación en el extranjero, y lo encuentra sistema adecuado. Así lo oímos a Augusto Arzubíaga, Cónsul General del Perú en Estados Unidos, en la "Conferencia Trilateral Canadá - Estados Unidos- México, sobre el voto en el Extranjero" (ciudad México, Septiembre, 1999).- Perú tiene establecido el voto por correo y el Cónsul manifestó que lo encuentran satisfactorio.- En Europa es medio corriente para la expresión del voto en el Extranjero; muchos países tienen este sistema: España, Inglaterra, Alemania, entre otros. En el Estado de Oregón en los EE.UU. en la última elección presidencial "todos los votos se emitieron por correo", dijo Bruce Rickerson, Ph. D., Especialista Principal de la OEA, en la IX Conferencia de Organismos Electorales de América del Sur, realizada en Quito, (29,30,31-08-2001).

La Legislación peruana radica la dirección y responsabilidad del ejercicio del voto en el extranjero en el Jurado Nacional Electoral (que es el Máximo Organismo Electoral) **y en la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE** (que es su órgano operativo), y solo muy lateralmente anota que dichos organismo (ellos en aplicación de su autonomía e independencia) dispondrá la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Establece que el elector que no sufrague pagará una multa. En Ecuador también existe la multa. ¿Cómo se cobraría en el exterior?, o es que se querría instituir ciudadanos privilegiados?

BOLIVIA.- Al crear, en el correspondiente documento el voto en el exterior, establece que se expedirá un estatuto "expreso" para el objeto, y que quien lo expida será la "CORTE NACIONAL ELECTORAL", tal es la denominación del Máximo Organismo del Sufragio de ese país.- Lo hicieron así por doble razón: el reconocimiento de la autonomía e independencia de la Función Electoral; y,

reconociendo que el Derecho Electoral a la época, ha devenido en una Especialización del Derecho.

BRASIL.- En su legislación sobre la materia, establece:

- Los ciudadanos con derecho al voto se dirigirán por escrito a los Embajadas y Consulados para que se les haga constar en el Padrón.
- Se realizarán elecciones siempre que haya para la Misión o Consulado, por lo menos 30 inscritos en el Padrón.
- TODO EL PROCEDIMIENTO SE CUMPLIRÁ BAJO EL SISTEMA VIGENTE PARA LA ELECCIÓN EN TERRITORIO NACIONAL.
- El voto **es obligatorio y el remiso sancionado como en el país.**
- Todo el **proceso está subordinado directamente al Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal**, (equivalente al Tribunal Supremo Electoral de Ecuador).

CANADÁ.- Cosntance Kaplan, alta personera de UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales) confesándose, decidida partidaria del voto en el Exterior, dice, sin embargo, que los países antes de adoptar el sistema deben hacerse las preguntas que se hizo Canadá, y que se pudo contestar satisfactoriamente, después de lo que, adoptó el sistema de voto en el exterior:

- ¿Quién va a supervisar y a ser responsable del programa de voto?
- ¿Hay procedimientos listos para seguir?
- ¿Cuál es el tiempo necesario para implementar el programa?
- ¿Cómo va a determinarse el procedimiento?
- ¿Cómo van a ser notificados o informados los ciudadanos sobre el proceso electoral y especialmente del día de la votación, horas, requerimientos?
- ¿Cuántos ciudadanos potencialmente pueden votar?
- ¿Quién va a conducir el voto?
- ¿Dónde tendrán lugar las votaciones?
- ¿Qué tipo de seguridad será requerida?
- ¿Qué tipo de materiales se requerirán?
- ¿Cómo y dónde serán contadas las papeletas de votación?
- ¿Está asegurada la transportación?

NICARAGUA.- A este respecto, la Legislación de Nicaragua dice textualmente:

"Para la emisión de voto en este caso es necesario entre otros requisitos:

- 1. Habilitar locales como territorio nicaragüense en el extranjero bajo la ficción de extraterritorialidad*
- 2. Desplazar personal y material electoral del Consejo Supremo Electoral*
- 3. Presencia de fiscales de los partidos o alianzas políticas participantes en las elecciones con las mismas facultades de esta Ley para el sufragio dentro del país.*
- 4. Elaboración de un registro por el Consejo Supremo Electoral que permita determinar e inscribir el número de ciudadanos nicaragüenses residente en el Exterior con derecho a voto*

PARA LAS ELECCIONES DE 1996 EL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL MEDIANTE EVALUACIÓN NECESARIA DEBERA ESTABLECER CON SUFICIENTE ANTELACIÓN SI PUEDEN CUMPLIRSE LAS CONDICIONES ENUMERADAS EN ESTE ARTÍCULO Y DECIDIRAN EN CONSONANCIA"

Y, llegado el momento, como determinó que las condiciones no estaban dadas, el Consejo Supremo Electoral, expidió el correspondiente instrumento jurídico, y descartó la posibilidad de realizar elecciones en el exterior; situación que así se mantiene.

CHILE.- En Chile, a pesar de que la Constitución de 1980 reconoce la igualdad de todas las personas ante la Ley, no se ha llegado a expedir una ley para implementar el voto en el Exterior: la Cámara de Diputados desde marzo de 1994 tiene un proyecto de ley que no concluye en su trámite. Los conductores de opinión en esta materia, hacen muchos interrogantes al respecto. He aquí algunas de tales observaciones:

- "Solo deben tener derecho al Sufragio los ciudadanos que residen en su país por ser ellos los que tienen real interés en la determinación de las autoridades que los gobernarán y cuyas actuaciones les afectarán directamente".
- "Encontramos dificultades de orden práctico tales como, son de suponer, ante quien se presentan los reclamos, quien recibe las informaciones y contrainfor-

maciones, tiempo que demora la revisión de los antecedentes para ante el Tribunal Calificador de Elecciones para que resuelva, teniendo presente, además, la brevedad de los plazos para proclamar los elegidos”.

- “Para el ciudadano es obligatorio votar. Esta situación **plantea la insalvable dificultad** que se presenta para el caso de los ciudadanos que no concurren a las urnas o en el caso que se vote más de una vez; que suplante la firma de un elector; que confeccione actas de escrutinio de una mesa receptora que no haya funcionado; que falsifique, sustraiga, oculte o destruya algún Registro Electoral, acta de escrutinio o cédula electoral; que se apropie de una urna que contenga votos emitidos, o sin escrutinio, etc.”
- ¿Cómo extender la competencia del Servicio Electoral, de las Juntas Electorales o de la Justicia Criminal para aplicar las multas o sanciones penales previstas por la ley para los ciudadanos que han sufragado también dentro del territorio nacional?”.

MÉXICO.- En 1996 reformó su Constitución dando paso al voto en el extranjero. Se consideró la complejidad del tema y en 1998, se reformó el “Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, y se estableció:

*“Con el propósito de examinar las modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero puedan ejercer el derecho al Sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) **designará una comisión de especialistas en diversas disciplinas relacionada con la materia electoral**, para que realicen los estudios conducentes, procediéndose a proponer, en su caso, a las instancias competentes, las reformas legales correspondientes”.*

El 29 de abril de 1998, el IFE estructuró una Comisión de 13 Especialistas, que debían afrontar de inicio, los siguientes temas:

- La aplicación de normas jurídicas fuera del territorio nacional;
- El marco jurídico de las relaciones bilaterales con aquellos países en donde residen mexicanos con derechos;

- El registro de ciudadanos residentes en el extranjero
- Los procedimientos administrativos para establecer los centros de votación en el extranjero

La Comisión, dotada de una impresionante disponibilidad presupuestaria, hizo un gran trabajo que comenzó por realizar un censo de todos los mexicanos residentes en el exterior, llegando a conclusiones tan importantes como determinar que el 13% del padrón está fuera del país, que el 98% de ese total está en los Estados Unidos de América, y que, a su vez, el 98% de los residentes en los Estados Unidos, están en solo tres Estados, concentración que les facilitaría realizar las elecciones en el Exterior.

Cabe anotar como un paréntesis, que, en el caso de Ecuador, siendo similar el porcentaje de inmigrantes en el Exterior, la situación es totalmente distinta a México, porque se halla diseminada en, por lo menos dos Continentes; y, en los Estados Unidos en casi toda su geografía. Además, el voto de los mexicanos es para los residentes, mientras que, por el Art. 27 nuestra Constitución, se refiere a "DOMICILIADOS"

Después del paréntesis, cabe decir que la Comisión Mexicana de Especialistas, no solo hizo consultas y estudios al interior del país, sino que promovió 2 consultas internacionales para reunir las más altas autoridades y especialistas electorales. Los dos certámenes fueron:

"Seminario Internacional sobre el voto en el Extranjero" (11 y 12 de agosto de 1998) y la

"Conferencia Trilateral Canadá - Estados Unidos - México sobre el voto en el Extranjero" (2 y 3 de Septiembre de 1999).

La Comisión Mexicana de Especialistas, el 29 de Noviembre de 1999, presentó al IFE su amplio Informe que concluyó diciendo que era "técnicamente" posible realizar la elección presidencial en el extranjero en el año 2000.- A propósito elaboró un Proyecto de Ley para posibilitar la operación, y el Congreso, cuya Cámara de Diputados está compuesta de 500 Representantes, llegó a aprobar

dicho proyecto, el que, pasado al Senado, fue descartado.

En el fondo, la conducta mexicana, expresa el sentimiento profundo de no aceptar la posibilidad de que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sea electo por quienes no viven en el país.

Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales de IFE, en el curso de la IX Conferencia de Organismos Electorales de América del Sur - Protocolo de Quito, realizada en esta ciudad los días 29, 30 y 31 de Agosto último, después de exponer el proceso mexicano que queda resumido, concluyó así: "se había diluido toda posibilidad de que los mexicanos en el extranjero pudieran votar en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2000.....para su eventual concreción, hasta las elecciones del 2006, se mantiene, por tanto, como asignatura pendiente en la agenda de las nuevas reformas electorales".

Carrillo Poblano en el curso de su Exposición dijo, que el cálculo de costo hecho para cada voto en el Exterior, está entre \$ 25.00 y \$ 54.70. Para nuestro país, el costo por CADA SUFRAGANTE, en las elecciones del año 2000 fue de UN DOLAR CUARENTA CENTAVOS (\$ 1,40).

Nos hemos extendido algo en el CASO DE MÉXICO, por las similitudes que tiene con la situación de Ecuador, guardando desde luego las debidas proporciones.

BREVE REFERENCIA SOBRE EL PROYECTO DE LEY.-

En el Congreso Nacional, por una parte los señores Diputados Dalton Bacigalupo y Jhon Argudo, y por ótra, el señor Diputado Oswaldo Molestina Zavala y varios señores Diputados, han presentado sendos proyectos de Ley, para procesar el voto en el Exterior. El Informe de Comisión que está para estudio y consideración del H. Congreso dice expresamente "...para el ejercicio del derecho de los ECUATORIANOS **RESIDENTES** EN EL EXTERIOR". Es decir que el Informe de Comisión para segundo debate, ratifica la confusión de términos que se está manejando en este asunto, y que, dadas las circunstancias que lo rodean, tiene una importante connotación. Hablamos de la confusión entre "residentes" y "domiciliados". En efecto: el carácter de residente se constituye por un hecho físico,

que, en última instancia es PRESENCIA, en tanto que el DOMICILIADO tiene un carácter diferente, que, resumiendo a última expresión, podríamos decir que es la PRESENCIA ACOMPAÑADA DE UN VÍNCULO JURÍDICO CON EL PAÍS Y ACTIVAMENTE CONCEDIDO POR ESE PAÍS. En el caso de Ecuador, que muy alto porcentaje se considera ilegal, hay residencia que no les da derecho para acogerse al derecho constante en el Art. 27 de la Constitución; no así el DOMICILIADO que es el residente que recibió del nuevo país el vínculo jurídico que le convierte en tal. O, dicho en otras palabras: la RESIDENCIA es un HECHO REAL; el DOMICILIO ES UN HECHO REAL, ACEPTADO Y ACOMPAÑADO por la concesión DE UN VINCULO JURIDICO. Tal vez podría considerarse innecesaria esta disquisición, pero se vuelve imperativo hacerla porque, como queda apuntado más arriba, el Informe de la Comisión para segunda discusión en el Congreso, emplea indebidamente el término "RESIDENTES", lo que desvirtúa el texto constitucional y puede alimentar falsas expectativas que se convertirían en indebidas presiones sobre el Tribunal Supremo Electoral.

Largo sería un comentario a cada artículo del proyecto, que evidencia graves contradicciones, incongruencias y la inspiración de romper la unidad del proceso electoral, pero basta recoger las observaciones de la Comisión Especializada Permanente de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, al informar sobre el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo. Hay una referencia puntual a lo locativo. Allí se lee:

"Por otra parte, no se puede dejar de anotar que la reforma propone que el ejercicio del derecho al voto de los ecuatorianos domiciliados en el exterior, se hará en la respectiva sede diplomática, si ésta está ubicada en la capital de cada País, en donde ejercerían quienes no residen en la capital?.- Una sola sede no podría prestar las facilidades, al gran número de ciudadanos que residen en el exterior".

IX CONFERENCIA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES DE AMERICA DEL SUR

Los Organismos Electorales de América están asociados: los de Norteamérica en UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales), los de América Central y el Caribe, según el Protocolo de Tikal; los de América del Sur se reunieron en Quito el 21 de septiembre de 1989 y formaron la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur con el "Protocolo de Quito", que es del siguiente tenor:

"ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS ELECTORALES DE AMÉRICA DEL SUR (Protocolo de Quito)

Los suscritos, representantes de los Organismos Electorales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; Reafirmando nuestra fe inquebrantable en la Democracia como el sistema que ofrece a los pueblos la posibilidad de lograr sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, en legítimo ejercicio de su libertad y soberanía;

Conscientes de que el intercambio de información sobre procesos electorales, la observación de los mismos y los métodos de consulta y recomendaciones entre los organismos encargados de realizarlos constituyen factores que contribuyen al logro de la consolidación efectiva de la democracia a través de las elecciones;

Compenetrados de la necesidad de formalizar, por medio de un instrumento, la cooperación entre las autoridades nacionales electorales, inquietud que se puso de manifiesto durante el Primer Encuentro de Organismos Electorales de América del Sur, evento que celebramos en la ciudad de Quito, a invitación del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, en coauspicio con el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL);

Aspirando que esta iniciativa, hermanada con la ya existente Asociación de

Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe confluya en la constitución de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Organismos Electorales o en una unión de Asociaciones, como una instancia superior de encuentro;

RESOLVEMOS:

Artículo 1ro: Constitución

Suscribir el Acta Constitutiva de la "Asociación de Organismos Electorales de América del Sur".

Artículo 2do: Naturaleza de la Asociación

La Asociación es una entidad integrada por Organismos Electorales con fines de información, cooperación y consulta, sin que ninguna de sus resoluciones o recomendaciones tenga carácter obligatorio para sus respectivos miembros. Como consecuencia de la naturaleza no gubernamental de la Asociación, ni ésta ni sus miembros, pueden arrogarse representación nacional o internacional alguna.

Constituyen objetivos de la Asociación

a) Incrementar la cooperación de todos los organismos miembros. Con tal propósito se pondrá de relieve la necesidad de la vigencia democrática permanente en Sudamérica, a través del voto libre, universal y secreto. Asimismo, podrá sugerir la adopción de normas y procedimientos que tiendan al mejor perfeccionamiento de los procesos electorales que garanticen su absoluta nitidez y el respeto irrestricto de sus resultados.

b) Impulsar el intercambio de información relacionada con los sistemas electorales de los países del área.

c) Propiciar la participación de los representantes de los organismos miembros de la Asociación, como observadores de las elecciones a invitación del país donde éstas se realicen.

d) Formular recomendaciones en materia electoral, de carácter general, sobre asuntos que pudieren interesar a los organismos miembros.

e) Mantener relaciones de intercambio y cooperación con la Asociación de Organismos Electorales de Centro América y del Caribe.

Artículo 4to: Órgano Superior

El Órgano Superior de la Asociación es la Conferencia de los Organismos Electorales. Esta se reunirá periódicamente en los diversos países miembros, en forma rotativa, en la fecha y lugar que cada Conferencia disponga para

la celebración de la siguiente. La Conferencia estará integrada por dos delegados de cada organismo miembro de la Asociación.

La agenda de la Conferencia será preparada por el comité de Coordinación y Seguimiento, integrado por el Organismo Electoral de la sede de la Conferencia, por el representante del Organismo electoral de la anterior sede y la Secretaría Ejecutiva. Este Comité tendrá como funciones las siguientes:

- a) Coadyuvar en la promoción de las actividades de la Asociación y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y acuerdos emanados de las Conferencias;
- b) Presentar su informe ante cada Conferencia; y,
- c) Realizar consultas a los miembros, sobre asuntos extraordinarios que se presenten en el lapso intermedio de las Conferencias, pudiendo convocar, con la anuencia de todos los miembros, reuniones extraordinarias.

El Organismo Electoral de la sede, conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva, cursará las invitaciones a los miembros de la Asociación para asistir a la Conferencia, al igual que a los observadores representantes de Organismos Electorales y entidades afines, a quienes se considere conveniente invitar.

La Presidencia de la Conferencia la ejercerá el representante del Organismo Electoral sede de la misma y será el encargado de presidir las sesiones y someter a consideración de la Conferencia los asuntos que figuren en la agenda.

Art. 5to: Régimen Interno

La Conferencia se instalará válidamente con la presencia de la mayoría de los miembros y se realizará conforme a las normas usualmente aceptadas para esta clase de eventos.

Las resoluciones y acuerdos de la Conferencia se tomarán por consenso.

La Secretaría Ejecutiva elaborará un reglamento interno de funcionamiento de las Conferencias que será puesto a consideración de los miembros de la Asociación para su aprobación.

Artículo 6to: Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva de la Asociación, que estará, por ahora, a cargo del "Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral" (CAPEL), se encargará de ejecutar los programas y proyectos aprobados por la Conferencia y realizará otras actividades que se acuerden en consulta con los miembros de la Asociación.

Artículo 7mo: Intercambio de Documentación y Presentación de Sugerencias

Los Organismos Electorales que integran la Asociación se comprometen a enviar a la Secretaría Ejecutiva informaciones sobre el desarrollo de sus reglamentos, instructivos, memorias electorales y lo que consideren necesario para su mejor análisis y comprensión. Los miembros podrán asimismo enviar a la Secretaría Ejecutiva todas aquellas sugerencias que juzguen convenientes. La Secretaría Ejecutiva cursará y distribuirá a todos los miembros de la Asociación la documentación y sugerencias recibidas.

Artículo 8vo: Cooperación Horizontal

Los Organismos miembros se comprometen prestarse cooperación, en la medida de sus posibilidades, para el adecuado cumplimiento de los objetivos de la Asociación.

Artículo 9no: Adhesión de otros Miembros

La Conferencia podrá aceptar como nuevos miembros de la Asociación a Organismos Electorales de carácter nacional oficial pertenecientes a países sudamericanos. La solicitud será dirigida a la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 10mo: Aprobación

El presente convenio de Asociación, no gubernativo, será sometido a la aprobación de cada uno de los organismos electorales de los respectivos países. La aprobación se comunicará a la Secretaría Ejecutiva de la Asociación. Al comunicarse cinco aprobaciones este convenio adquirirá pleno vigor. Inmediatamente, la Secretaría Ejecutiva lo comunicará oficialmente a los miembros de la Asociación.

Si por razones de orden interno, algunos de los Organismos que suscriben este convenio, no pudieren suscribirlo antes de la próxima Conferencia, les será asegurada su participación, en las actividades de la Asociación.

En constancia de lo que queda expuesto, suscriben la presente acta, las siguientes delegaciones:

Artículo 11vo:

La Asociación se reserva el derecho de no convocar a cualquiera de sus miembros a las reuniones o conferencias, cuando la designación o integración, o autonomía de éstos, se vea afectada como resultado de la ruptura del orden institucional en su país.

Esta decisión deberá ser adoptada por el voto favorable de por lo menos tres quintas partes de los miembros, en la Conferencia anual ordinaria o por consulta escrita del Comité de Coordinación y Seguimiento, entre una Conferencia y otra.

Por la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina

Enrique Víctor Rocca

Presidente

Por la Corte Nacional Electoral de la República de Bolivia

Edmundo Aráuz Rea

Vocal

Por el Tribunal Superior Electoral de la República del Brasil

Torcuato Lorena Jardim

Juez de Corte

Por el Servicio Electoral de la República de Chile

Juan Ignacio García Rodríguez

Director

Por el Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia

Alvaro Campo Posada

Presidente

Por el Tribunal Supremo Electoral de la República del Ecuador

Francisco Ramón Gallégo

Presidente

Por la Junta Electoral Central de la República del Paraguay

Expedito Rojas Benítez

Presidente

Por el Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú

Carlos Castañeda Lafontaine

Presidente

Por la Corte Electoral de la República del Uruguay

Carlos Alberto Urruty Navatta

Vicepresidente

Por el Consejo Supremo Electoral de la República de Venezuela

Eduardo Rocha Lander

Segundo Vicepresidente

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

Por el Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)

Daniel Zovatto Garretto

Director Asistente a Cargo

Firmado en Quito, República del Ecuador, Jueves, 21 de septiembre de 1989".

De acuerdo a ese Estatuto, la Asociación debe tener una reunión anual en uno de los países miembros, Quito estaba señalada como sede para la reunión del año 2000, sensiblemente por la realización de las elecciones de ese año tuvimos que pedir se nos exonere de llevar adelante el certamen. Perú estaba señalado como sede alterna y bien pudo realizarse el evento en ese país, pero hubo solidaridad comprensión de los demás países y se nos esperó; en una reunión de coincidencia en Antigua - Guatemala donde se realizó la reunión oficial de UNIORE, durante los días 20, 21, 22 de Noviembre del 2000, se resolvió que la IX Conferencia no realizada en Quito en ese año, se difiera para el 2001 en nuestro país.

El Instituto de Derechos Humanos- Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-/CAPEL), con asiento en San José de Costa Rica se desempeña como Secretaría Permanente de la Organización regional Sudamericana, y en esa calidad coordinó la acción y organización de la IX Conferencia, cuyo desarrollo se señaló para los días 30 y 31 de agosto y 1ro de septiembre.

De acuerdo con la resolución de Antigua a que nos referimos, debía tener como tema fundamental el "FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES".

El Tribunal Supremo Electoral de Ecuador deja constancia expresa del más cumplido agradecimiento a CAPEL por el grande y eficiente trabajo organizativo para la preparación, realización y pleno éxito de este evento trascendental; pero, señalada y especialmente tiene que hacerlo para:

Roberto Cuéllar

Director Ejecutivo del IIDH

José Thompson-

Director de CAPEL

Sofía Vincenzi-

Oficial de Programas IIDH/CAPEL

Ricardo Valverde-

Oficial de Programas IIDH/CAPEL

María de Lourdes González

Oficial de Programas IIDH/CAPEL

Los costos del evento fueron sufragados por partes iguales por CAPEL y por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador.

El evento reunió a las más altas autoridades de América en esta materia, a distinguidos estudiosos y especialistas. El listado de asistentes que es el siguiente, así lo atestigua:

Bruce Rickerson - Especialista Principal (OEA) - Estados Unidos
Sofía Vincenzi - Oficial de Programas (IIDH/CAPEL) - Costa Rica
Ricardo Valverde - Oficial de Programas (IIDH/CAPEL) - Costa Rica
María Lourdes González - Oficial de Programas (IIDH/CAPEL) - Costa Rica
Enrique Tapia Witting - Ministro - Tribunal Calificador de Elecciones - Chile
Domingo Yurac Soto - Ministro - Tribunal Calificador de Elecciones - Chile
Manuel Carrillo Poblano - Coord. Asuntos Internacionales - (IFE) - México
Rafael Dendia Aguayo - Magistrado - Tribunal Superior Justicia Electoral - Paraguay
Alberto Ramírez Zambonini - Magistrado - Tribunal Superior Justicia Electoral - Paraguay
Carlos H. Amado - Director - Representante (OEA) - Washington
Carlos Urruty Navatta - Presidente - Corte Electoral - Uruguay
Wilfredo Penco - Ministro - Corte Electoral - Uruguay
Roberto Ruiz - Presidente - Consejo Nacional Electoral - Venezuela
Vicente González - Director Principal - Consejo Nacional Electoral - Venezuela
Rodolfo Emilio Munné - Presidente - Cámara Nacional Electoral - Argentina
Felipe González Roura - Secretario Judicial - Cámara Nacional Electoral - Argentina
Rolando Costa Ardúz - Expositor (ex Magistrado) - Corte Nacional Electoral - Bolivia
Fernando Neves da Silva - Ministro - Tribunal Superior Electoral - Brasil
Walter Costa Porto - Ministro - Tribunal Superior Electoral - Brasil
Orlando Solano Bárcenas - Magistrado - Consejo Nacional Electoral - Colombia
Iván Duque Escobar - Registrador - Registraduría Nacional - Colombia
José Thompson - Director - (CAPEL) - Costa Rica
Roberto Cuéllar - Director Ejecutivo - (IIDH) - Costa Rica
Juan Ignacio García - Director - Servicio Electoral - Chile
René Schmitt - Director Regional - Servicio Electoral - Chile
Raúl Ávila Ortiz - Coord. Asuntos Internacionales - (TEPJF) - México
Manuel Sánchez- Palacios - Presidente - Jurado Nacional de Elecciones - Perú

Ramiro de Valdivia Cano - Magistrado - Jurado Nacional de Elecciones - Perú

Fernando Tuesta Soldevilla - Jefe - (ONPE) - Perú

Tatiana Mendieta - Jefatura Nacional - (ONPE) - Perú

Benito Portocarrero - Gerente de Informática Electoral - (ONPE) - Perú

(La lista obedece al orden de llegada a Ecuador)

Disertaron sobre los siguientes temas las personalidades internacionales que se enumeran:

- "Nuevas Perspectivas en materia de Fortalecimiento Institucional de Organismos Electorales" Juan Ignacio García (Chile) y Roberto Cuéllar (IIDH).
- "Juicio político ciudadano" Orlando Solano Bárcenas (Colombia).
- "Padrón Electoral" (Base Registral, Actualización Depuración y Avances Tecnológicos) Carlos H. Amado (OEA)
- "Sistema Electoral de los Estados Unidos de Norteamérica" Bruce Rickerson (OEA). Alexander Featherstone (Embajada Americana), Edgar Terán Terán (ex Canciller y ex Embajador en los Estados Unidos)
- "El Territorio y su influencia en la Votación (Circunscripciones Electorales, Voto Domiciliario y Cartografía Electoral): Fernando Tuesta Soldevilla (Perú) y Rolando Costa Ardúz (Bolivia).
- "El Voto en el Extranjero": Manuel Carrillo Poblano (México)

CAPEL hizo la presentación de su importante obra en dos tomos: Diccionario Electoral, (segunda edición).

El Tribunal vuelve a agradecer a los intervinientes cuya participación determinó el éxito del evento.- Agradece igualmente a todas las autoridades nacionales y locales que dieron su valioso aporte en el momento en que fue requerido: el primero, el Señor Presidente de la República que recibió en cordial saludo a los Delegados; al Señor Vicepresidente de la República, que en acto solemne, declaró inaugurada la IX Conferencia, a la Señora Ministra de Turismo; a los Señores Alcaldes de Quito y Prefecto Provincial de Pichincha; a los Departamentos de Es-

tado y las instituciones particulares que nos brindaron su aporte y ayuda. Todo, contribuyendo para que los Delegados sean mensajeros, en sus respectivos países, de las grandes virtualidades del nuestro.

Entre las valiosas y trascendentes resoluciones tomadas, nos permitimos señalar:

**"IX CONFERENCIA DE LA ASOCIACION DE ORGANISMOS
ELECTORALES DE AMERICA DEL SUR
(Protocolo de Quito)
DECLARACIÓN DE QUITO, ECUADOR 2001**

Los delegados representantes de los Organismos Electorales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, reunidos durante la IX Conferencia del Protocolo de Quito, celebrada en la capital de la República de Ecuador, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2001, en nuestra calidad de miembros de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur;

Al reafirmar nuestra fe inquebrantable en la democracia como el sistema que ofrece a los pueblos las posibilidades de lograr sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el legítimo ejercicio de su libertad y soberanía, y luego de las deliberaciones sostenidas,

ACORDAMOS:

1. Destacar la importancia que ha tenido esta Asociación en el fortalecimiento y desarrollo de la democracia y el derecho electoral en los países representados. A la vez, renovamos nuestro compromiso de difundir la existencia de la Asociación, sus objetivos y actividades, así como las proyecciones y proyectos que despliega para favorecer el perfeccionamiento de los procesos electorales en la región.

2. Reiterar la importancia de los procesos de cooperación horizontal, bilateral o multilateral, así como intensificar los esfuerzos tendentes a aumentar y fortalecer las relaciones de comunicación, información y colaboración entre los Organismos Electorales y recomendar a la Secretaría Ejecutiva dar continuidad a esta línea de trabajo.

- 3.** *Recomendar la adopción de las acciones necesarias para impulsar el fortalecimiento institucional de los Organismos Electorales de la región, en los aspectos organizativos y en la aplicación de la informática y el desarrollo tecnológico, según corresponda a la naturaleza de cada institución.*
- 4.** *Auspiciar el estudio de la incidencia que las circunscripciones electorales tienen en el sistema electoral de cada país.*
- 5.** *Destacar la importancia de que los padrones electorales de nuestros países estén sustentados en una estructura registral civil sólida y confiable, que sirva de base a la conformación de los respectivos documentos y registros electorales, y subrayar la relevancia de que estos esfuerzos integrados sean considerados como una tarea primordial en la estrategia de fortalecimiento institucional de los Organismos Electorales de la región.*
- 6.** *Impulsar la adopción de mecanismos de promoción y difusión que permitan incrementar la participación ciudadana en los procesos electorales, en la medida que lo permitan las correspondientes legislaciones nacionales.*
- 7.** *Celebrar la Carta de Intención firmada en el marco de esta Conferencia que involucra a los Organismos Electorales de Brasil y Venezuela, pues refuerza una línea de acción aprobada por la Asociación en materia de cooperación horizontal.*
- 8.** *Trasladar en el transcurso del mes de septiembre del 2001 a la Secretaría Ejecutiva de UNIORE, las iniciativas y propuestas de temas que los miembros del Protocolo de Quito tengan a bien sugerir para la conformación del temario de la VI Conferencia de UNIORE que tendrá lugar en Asunción Paraguay, en el segundo semestre del año 2002.*
- 9.** *Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que el temario de las futuras Conferencias de la Asociación, sea consultado a los Organismos Electorales con suficiente antelación, para recoger sus observaciones y recomendaciones.*
- 10.** *Apoyar los procesos de modernización que la Secretaría Ejecutiva está desarrollando para hacer más ágil y dinámico el Sistema Integrado de Información Iberoamericana (SIII), y renovar el compromiso de hacer uso de las herramientas de comunicación e información que éste brinda, entre ellos, el Calendario de Actividades, Publicaciones en Línea y los Foros Electrónicos, iniciando con el Foro Virtual sobre Justicia Electoral en asocio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México.*

11. Reconocer el esfuerzo de la Secretaría Ejecutiva por publicar mensualmente la Carta Informativa que se edita con base en la documentación que los mismos Organismos Electorales miembros entregan a la Secretaría. Asimismo, destacar la importancia de utilizar este instrumento como un medio de difusión de las actividades de los Organismos Electorales miembros.

12. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la realización de los proyectos de investigación sobre los procedimientos para hacer efectivo el ejercicio del sufragio por parte de personas con alguna discapacidad física.

13. Tomar nota de la presentación del Proyecto de Educación para la Vida en Democracia que la Secretaría ha sometido a conocimiento de esta Conferencia, para estudiarlo y enriquecerlo con sus aportes, a fin de que sirva de base para los trabajos del X Curso Interamericano de Elecciones y Democracia.

14. Aceptar el ingreso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú como miembro pleno de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur.

15. Adoptar como símbolo oficial de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, el logotipo propuesto por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, cuya motivación se adjunta a la presente Resolución.

16. Expresar el reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva por el Informe de Actividades 1999 - 2001 que ha presentado ante esta IX Conferencia de la Asociación.

17. Manifestar nuestro agradecimiento por su hospitalidad a las máximas autoridades nacionales de la República de Ecuador, en la persona del Excelentísimo Señor Presidente del país, doctor Gustavo Noboa Bejarano y del Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República, Ingeniero Pedro Pinto Rubianes. Asimismo, agradecer al hospitalario pueblo de Quito, representado por su Alcalde Metropolitano, general retirado Paco Moncayo Gallegos.

18. Expresar felicitación y agradecimiento al Tribunal Supremo Electoral de la República de Ecuador, a su Presidente Carlos Aguinaga Aillon, a sus Vocales Alfredo Arévalo Moscoso, Eduardo Villaquirán Lebed, Juan Aguirre Espinosa, José María Cabascango, Armando Cazar Valenzuela, Jorge Valdospinos Rubio y a su Secretario General Guillermo Astudillo Ibarra ; por la excelente organización, y su generosa y cálida hospitalidad ofrecidas a las delegaciones participantes.

19. *Expresar nuestro agradecimiento a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, muy especialmente al señor José Gabriel Terán Varea, a la señora Ruth Astudillo, y a todo su equipo por la eficiente organización de la IX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur.*

20. *Agradecer al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), a través de su área programática el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Secretaría Ejecutiva del Protocolo de Quito, al Director Ejecutivo Roberto Cuéllar Martínez, al Director de CAPEL, José Thompson y a sus funcionarios, por la labor desarrollada en procura del fortalecimiento de la Asociación, su disposición para atender las solicitudes y requerimientos de los miembros de la Asociación y por el apoyo brindado al Tribunal Supremo Electoral de Ecuador para la preparación y organización de esta Conferencia.*

21. *Expresar nuestro agradecimiento a los doctores Carlos Amado, economista uruguayo, representante de la OEA; Juan Ignacio García, Director del Servicio Electoral de Chile; Roberto Cuéllar, Director Ejecutivo del IIDH; Orlando Solano, Magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia; Fernando Tuesta Soldevilla, Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú; Rolando Costa Arduz, ex-Vocal de la Corte Nacional Electoral de Bolivia; Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos Internacionales del Instituto Federal Electoral de México; Bruce Rickerson, de la Organización de Estados Americanos; Alexander Featherstone, de la Embajada de los Estados Unidos de América en Ecuador; Edgar Terán, ex Canciller de Ecuador, por su destacada participación en esta IX Conferencia del Protocolo de Quito, en calidad de expositores. Asimismo, la Conferencia agradece la presencia del doctor Raúl Ávila, Jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, en calidad de observador.*

22. *Designar a la República del Perú como sede de la X Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, que se celebrará en el año 2002. Asimismo, se designa a la República Oriental del Uruguay como sede de la XI Conferencia que tendrá lugar en el año 2003.*

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de agosto del año 2001.

Por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador

Carlos Aguinaga Aillón
Presidente

Alfredo Arévalo Moscoso
Vicepresidente

Eduardo Villaquirán Lebed
Magistrado
Jorge Valdospinos Rubio
Magistrado

Armando Cazar Valenzuela
Magistrado

Juan Aguirre Espinosa
Magistrado

José María Cabascango
Magistrado

Por la Cámara Nacional Electoral de Argentina

Rodolfo Emilio Munné
Presidente

Felipe González-Roura
Secretario Judicial de Cámara

Por el Tribunal Superior Electoral de Brasil

Walter Costa Porto
Ministro

Fernando Neves da Silva
Ministro

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

Por el Consejo Nacional de Electoral de Colombia

*Orlando Solano Bárcenas
Magistrado*

Por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia

*Iván Duque Escobar
Registrador*

Por el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile

*Enrique Tapia Witting
Ministro*

*Domingo Yurac Soto
Ministro*

Por el Servicio Electoral de Chile

*Juan Ignacio García Rodríguez
Director*

*René Schmidt
Director Regional*

Por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay

*Rafael Dendia
Magistrado*

*Alberto Ramírez Zambonini
Magistrado*

Por el Jurado Nacional de Elecciones de Perú

*Manuel Sánchez-Palacio Paiva
Presidente*

Por la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú

*Fernando Tuesta Soldevilla
Jefe*

*Tatiana Mendieta
Asesora*

*Benito Portocarrero
Gerente de Información y Educación Electoral*

Por la Corte Electoral de Uruguay

*Carlos Alberto Urruty Navatta
Presidente*

*Wilfredo Penco
Ministro*

Por el Consejo Supremo Electoral de la República Bolivariana de Venezuela

*Roberto Ruiz
Presidente*

*Vicente González
Segundo Vicepresidente*

Por la Secretaría Ejecutiva (IIDH/CAPEL):

*José Thompson
Director
IIDH/CAPEL".*

Queda dicho que se aprobó el emblema de la Asociación que fue propuesto por el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. Fue propicio el hecho de que en once años la Asociación no lo haya tenido. A continuación, el Acuerdo de adopción del emblema y la presentación del mismo.

El Tribunal se halla preparando la "Memoria de la Novena Conferencia", que se publicará como volumen 11 de la serie "DOCUMENTOS ELECTORALES"

"ACUERDO

LA IX CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTORALES DE AMERICA DEL SUR - PROTOCOLO DE QUITO

Teniendo en cuenta:

Que, es imperativo para la Organización, adoptar un logotipo que la identifique y se constituya en su emblema, y,

Que, el proyecto de insignia propuesto por Ecuador, recoge junto con el simbolismo completo y su descripción, el desagregado de elementos que, asocian a los países de América del Sur en su empeño de reafirmación democrática, fortalecimiento del voto ciudadano y respeto a la expresión popular,

RESUELVE:

- 1.** Adoptar como logotipo oficial de la Asociación y sus Conferencias el que se acompaña a la presente Resolución;
- 2.** Disponer que el emblema a que se refiere el numeral anterior, así como el presente Acuerdo, se conservarán como documento único e integrado, en el ARCHIVO de la Secretaría Permanente de la Asociación: CAPEL.

Dado, etc.



PROTOCOLO DE QUITO

DESCRIPCIÓN DEL EMBLEMA

Un círculo, cerrado imaginariamente en su extremo inferior, todo de color blanco. Simboliza la voluntad popular expresada en el voto libre, directo, universal y transparente.

Un arco superior, conformado con la leyenda "ASOCIACIÓN DE ORGANISMOS ELECTORALES DE AMÉRICA DEL SUR", en letra negra de molde. Simboliza la MISIÓN de la Asociación, como custodio permanente de la Democracia en América del Sur. La leyenda se constituye en una barrera que instituye a la Asociación en centinela de la pureza del sufragio.

Mapa de América del Sur, dibujado al interior del círculo, de color verde, sin límites fronterizos. Simboliza el ámbito jurisdiccional de la Asociación, en una América del Sur unida, solidaria, llena de esperanza.

La leyenda adjunta al mapa variará para cada Conferencia, y de acuerdo a su propia realidad.

Banderas de los diez Países Miembros, una junto a la otra, en estricto orden alfabético, en el extremo inferior del logotipo. Simbolizan la decisión de los diez pueblos hermanos de sustentar irrestrictamente la Democracia, de aunar esfuerzos para fortalecer la institucionalidad de los Organismos Electorales, de cooperar en las tareas comunes respetando su legítima soberanía.

La leyenda "PROTOCOLO DE QUITO", en letra negra de molde, cierra el arte para consignar el nombre asignado a la Asociación de los Países Miembros.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL LO CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO ELECTORAL

El Señor Presidente Constitucional de la República en uso de la función que le atribuye el Art. 281 de la Constitución Política del Ecuador, presentó a consideración del Congreso Nacional un proyecto de reforma política. Además, dicho proyecto se lo entregaba para análisis y observación de las otras Funciones y Organismos del Estado, de los actores políticos y sociales y de la ciudadanía en general.

Interesa y compete al Tribunal Supremo Electoral lo que, de dicho texto, se refiere a materia electoral; por lo mismo extraemos textualmente, las disposiciones que a ello se refieren, y son las siguientes:

"I. REFORMA A LOS DERECHOS POLÍTICOS.-

1. El inciso primero del Art. 27 dirá: "El voto popular será universal, igual, directo y secreto. Su ejercicio no será obligatorio salvo en los casos de consulta popular para reformar la Constitución. Tendrán derecho al voto los ecuatorianos que hubieren cumplido dieciocho años de edad y se hallaren en el goce de los derechos políticos".

2. En el último inciso del Art. 27 sustitúyase la frase "la ley regulará el ejercicio de este derecho" por "El ejercicio de este derecho se hará en la respectiva sede diplomática conforme a las normas que al efecto dictará la Comisión Nacional de Elecciones en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores".

(Se refiere al ejercicio del derecho de voto de los ecuatorianos domiciliados en el Exterior).

"II. REFORMAS A LA FUNCIÓN LEGISLATIVA.-

3. "El Art. 126 dirá:

La Función Legislativa será ejercida por el Congreso Nacional con sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier otra parte del territorio

nacional. Estará integrado por dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados. La Cámara del Senado estará compuesta por 10 Senadores elegidos en la Región Costa y la Insular y 10 Senadores elegidos en la Región Sierra y la Amazonía.

La Cámara de Diputados estará integrada por diputados elegidos en cada uno de los distritos electorales en que se divida el país. Cada ciento sesenta mil habitantes que residan en una misma circunscripción geográfica constituirán un distrito electoral. Las provincias con menos de ciento sesenta mil habitantes conformarán por excepción un distrito electoral y elegirán a un diputado. El trazado de los distritos electorales será hecho por la Comisión Nacional de Elecciones (TSE) y procurará que los distritos queden dentro de los límites internos de cada provincia, salvo que por razones demográficas ello no sea posible. Podría ser revisado cada once años de acuerdo al último censo nacional de población, el mismo que deberá llevarse a cabo cada diez años. La elección de senadores y de diputados se realizará en la fecha prevista para la segunda votación para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, aunque ésta última no tenga lugar caso de haber triunfado uno de los binomios en primera vuelta."

"5.- al final del Art. Agréguese un inciso que diga: La Cámara del Senado y el Congreso Pleno serán presididos por el Vicepresidente de la República".

"VI. REFORMAS A LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL

22.- El Título IX de la Constitución se denominará "De la Función Electoral"

23.- Derógase el Art. 209 y sustitúyase su texto por el siguiente:

La Función Electoral la ejercerá la Comisión Nacional de Elecciones con sede en Quito y jurisdicción en todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de Elecciones gozará de autonomía administrativa y económica para su organización. A ella le compete organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales de manera imparcial y eficiente, así como juzgar las cuentas que rinden los partidos, movimientos políticos, organizaciones y candidatos sobre el monto, origen y destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales.

Su organización, deberes y atribuciones se determinarán en la ley.

Se integrará con siete comisionados, ninguno de los cuales podrá estar, ni haber estado afiliado a partido político o movimiento alguno durante al menos un año antes de que sea nominado como candidato así como tampoco debió haber participado como candidato, en las elecciones inmediatas anteriores.

Los comisionados, para ser tales, deberán cumplir con los mismos requisitos que se exigen para ser Contralor General del Estado y serán designados para un período de siete años por el Congreso Nacional, de dos ternas provenientes del Presidente de la República, dos ternas de la Corte Suprema y el resto del Congreso Nacional.

El Congreso Pleno deberá pronunciarse sobre los candidatos luego de 30 días de la fecha en que las nominaciones fueron recibidas. Durante ese período el Congreso o la respectiva Comisión Legislativa, podrá solicitar la comparecencia de cada uno de los candidatos y podrá recibir los criterios de la ciudadanía sobre su idoneidad.

De no existir pronunciamiento alguno por parte del Congreso en los siguientes 15 días a la expiración del mencionado plazo de 30 días, se entenderá que el candidato ha sido aceptado y se posesionará de su cargo de inmediato. Para rechazar al candidato propuesto se requerirá del voto negativo de al menos tres quintos de los integrantes del Congreso Nacional.

No habrá comisionados suplentes.- De producirse una vacante se seguirá el mismo procedimiento previsto para la elección inicial, pero el comisionado elegido para llenar una vacante solo ejercerá sus funciones por el tiempo que faltaba hacerlo a quien reemplaza.- Mientras dure este procedimiento, la Comisión Nacional de Elecciones podrá designar temporalmente a un comisionado.

El Congreso Nacional con el voto de al menos dos tercios de sus integrantes y previo informe del Ministerio Fiscal General podrá destituirlos de sus cargos pero únicamente por cohecho, concusión o delito flagrante.

Las resoluciones de la Comisión Nacional de Elecciones y la de sus órganos dependientes que afecten los derechos o intereses de terceros, serán impugnables directamente ante los órganos judiciales de competencia distrital o nacional según el caso. La Ley establecerá recursos expeditos y preferentes que serán aplicables durante los procesos electorales una vez que ellos concluyan.

La Comisión Nacional de Elecciones dispondrá que la fuerza pública colabore para garantizar la libertad y pureza del sufragio. La Comisión actuará de manera desconcentrada, establecerá comisiones con competencia en una o más provincias para cumplir con ellas las respectivas funciones electorales"

"IX DISPOSICIÓN GENERAL

"27.- *Estas reformas, salvo disposición transitoria en contrario se empezarán a aplicar a partir de su publicación en el Registro Oficial y deberán regir para las elecciones del año 2002"*

El Tribunal Supremo Electoral en los asuntos relacionados con la Función Electoral, hizo el comentario adecuado, después de profundo y meditado estudio de la propuesta. La posición del Tribunal Supremo Electoral frente a la proyectada reforma se resume en el siguiente documento:

"EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL ANTE EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PROPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EXPONE ANTE EL CONGRESO NACIONAL Y EL PAÍS

SU POSICIÓN

ADOPTADA POR UNANIMIDAD

EN SESION DEL PLENO DE 2 DE OCTUBRE DEL 2001

1.- CONTRADICCIÓN INICIAL.- *Está aceptado, que el Derecho Electoral es una novísima especialidad de las Ciencias Jurídicas. Para un Despacho de Estado es imposible disponer de especialistas en todas las materias, circunstancia que explicaría de alguna manera, la existencia de fallas conceptuales en la redacción del proyecto. Consta que se "PROPONE QUE ESTAS REFORMAS SE APLIQUEN A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2003". "LOS CAMBIOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AL TRIBUNAL CONSTITU-*

CIONAL Y AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SE HARAN IGUALMENTE A PARTIR DE DICHA FECHA Y NO DURANTE EL MANDATO DEL PRESIDENTE GUSTAVO NOBOA", dice textualmente la propuesta (página 4 de la Exposición de Motivos); y, a renglón seguido consta "DISPOSICION GENERAL .- 27.- ESTAS REFORMAS, SALVO DISPOSICIÓN TRANSITORIA EN CONTRARIO, SE EMPEZARAN A APLICAR A PARTIR DE SU PUBLICACION EN EL REGISTRO OFICIAL Y DEBERAN REGIR PARA LAS ELECCIONES DEL AÑO 2002", (página 8 del articulado).

2.- PROPONE EL VOTO VOLUNTARIO.- Es indiscutible que la obligatoriedad del voto asegura una mayor expresión de la voluntad popular, comunica legitimidad a la autoridad elegida y contribuye para la gobernabilidad.

La propuesta trae como argumento: que muchos países de Europa y EE.UU tienen el voto facultativo, pero ignora que se trata de realidades étnico - culturales distintas. No creemos que la intención del Señor Presidente de la República quisiera llevar la reforma hasta el límite de, como en el país del Norte, suprimirles a los ecuatorianos el derecho de elegir con su voto directo al Presidente de la República. De los 35 países americanos, solo Colombia tiene voto facultativo y puede ser que ese voto no expresado contribuyera al ejercicio de la violencia, en el país hermano. A este momento en América, el voto facultativo es anacrónico.

Se corre el riesgo de que, por ejemplo, en una revocatoria del mandato, un mínimo voto facultativo contradiga un pronunciamiento o una elección realizada con gran favor popular. Igualmente traería contradicciones para la consulta popular seccional. Por lo mismo, no se justifica, conceptualmente hablando, mantener voto obligatorio para el caso de consulta sobre reforma constitucional, voto obligatorio de quienes, en el caso de aceptarse la reforma, ya habrían perdido el hábito de ejercer el derecho.

3.- VOTO DE LOS ECUATORIANOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR.- El Tribunal Supremo Electoral expresa su adhesión al Mandato del artículo 27 de la Constitución; y, por tanto, al real ejercicio de este derecho que faculta a los ecuatorianos domiciliados en el exterior votar para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, en la forma que regule la ley. El Tribunal Supremo Electoral es garante de la igualdad de derechos de todos

los ecuatorianos. Considera que éste es un asunto que debe atenderse a través de una Ley Orgánica, como corresponde de acuerdo con la Constitución de la República; por lo mismo, el Tribunal discrepa del evidente propósito de restar al Congreso Nacional facultades propias y excluyentes, como es, dictar las leyes.- Aún en el supuesto de aprobarse el Reglamento que se sugiere, la facultad del Congreso para dictar la Ley quedaría intacta por disposición de la Constitución arts. 141 numeral 1 y 142 numerales 2 y 3, que no se modifican.- La Ley que se dicte al respecto sabrá preservar los principios de la soberanía nacional, igualdad de derechos y obligaciones de los ecuatorianos; financiación de la operación: México calcula que el voto en el Exterior representa un costo cincuenta veces mayor que el voto emitido en el país. Esto, no es cuestión de normas logísticas: son asuntos con profunda trascendencia, que corresponden a la ley como fuente primaria de derechos y obligaciones que, el Organismo Electoral solo debe aplicar.

Países como Perú, Brasil, México, Bolivia, han tratado sobre el voto en el Exterior, pero bajo la conducción del Máximo Organismo del Sufragio, como debe ser, y sin transferirlo a ningún Ministerio ni dependencia del Ejecutivo, evitándose de esta manera la injerencia de dicha Función del Estado, lo que contradiría totalmente al Art. 209 de la Constitución de la República. Se trata de un asunto de profunda reflexión para el país.

4.- DISTRITOS ELECTORALES.- El concepto de provincia es sustancia misma del país, es un sentimiento profundamente arraigado, y en función de ella está organizado el sistema electoral. Alterar la división territorial podría conducir a regionalizar el país y sentar elementos que conduzcan a la disolución nacional.

El proyecto de distritos electorales por cada 160.000 habitantes, conduciría al fraccionamiento de cantones y aún de provincias, creando confusión en las votaciones.

La Disposición Transitoria que se propone, ordenando que la "Comisión Electoral" "fijará los distritos electorales para la elección de diputados hasta el primer lunes de agosto del 2002", es no estar familiarizado con la problemática electoral: las elecciones deben estar convocadas por lo menos 91 días antes del día en que deben realizarse, es decir en julio, y se supone que para entonces estén dadas todas las reglas del juego y las normas son inamovi-

bles desde la convocatoria. Aún más, frente a una elección de la complejidad que tendrá, a no dudarlo la del 2002, sería una ofensa nacional mantener sin definir las normas que regirán, hasta el último momento.

Aparte, la Distritación, exige ley: no puede ser que se pretenda que las decisiones más trascendentes se tomen por acto administrativo.

Sin dejar de considerar, además, que se crea un Senado sin determinar la forma de su elección.

5.- REFORMA LEGISLATIVA.- El Tribunal expresa sus reservas sobre la reforma propuesta en esta materia, de modo particular, en lo que se refiere al sistema electoral.

El señor Presidente propone la bicameralidad, ésto es un Congreso Nacional integrado por la Cámara del Senado con veinte senadores: diez elegidos por la Costa y las Islas Galápagos y diez por la Sierra y el Oriente; y diputados elegidos por distritos electorales en los que se divida el país, uno por cada ciento sesenta mil habitantes que residan en un mismo distrito.

Nos pronunciamos por la necesidad de asegurar la legitimidad en la representatividad y el derecho que asiste a todas las provincias de tener su representante.

Se asigna a la "Comisión Nacional de Elecciones" el "trazado de los distritos electorales" procurando "que los distritos queden dentro de los límites internos de cada provincia, salvo que por razones demográficas ello no sea posible". Hay aparente contradicción con la propuesta que establece que "las provincias con menos de ciento sesenta mil habitantes conformarán por excepción un distrito electoral y elegirán un diputado". ¿Cómo aplicaría la "Comisión" este mandato, en el caso de la excepción propuesta por razones demográficas? Se entenderá facultada para juntar provincias en un mismo distrito electoral, para constituir un distrito con los habitantes que sobren de otro distrito y completar el número de ciento sesenta mil que faltan a un tercero?

Hacer la división en distritos electorales es una técnica electoral que podría aplicarse al sistema en la votación uninominal, pero es preciso que, primero, se expida la Ley correspondiente, y luego se la proponga y realice guardando los límites políticos administrativos de cada provincia, cantón o parroquia, de tal suerte que los elegidos representen genuinamente a esas circunscripciones. Hacerlo de otro modo, sin considerar este criterio, es alentar el peligro de

desintegración o lo que es peor la pugna entre cada pueblo y sus autoridades. Se vuelve a incurrir en el error de tener la población como único referente para determinar el número de legisladores, con lo que, una provincia tendría tantos diputados como 16 provincias juntas; aparte que, al no atenderse a fracciones de población, se niega derechos a importantes minorías.

6.- FUNCIÓN ELECTORAL.- Como debe ser, se le denomina, a la Electoral, Función del Estado, pero se la degrada por su estructura y denominación. Ningún país de los otros 34 de América tiene una "COMISIÓN" como máximo organismo electoral. Como primera cosa se establecería que los Vocales de la "Comisión Electoral Nacional" no se pertenezcan ni se hayan pertenecido a un partido o movimiento político alguno. Cabe indicar que, no hay afiliación a movimiento político; y tampoco hay modo para demostrar la no afiliación a partido político. La expresión ciudadana a través del voto es una actitud política por excelencia, el organismo que rija esa expresión tiene que ser un Organismo Político. Cabe preguntar: ¿desde cuándo la actividad política es denigrante, condenable, contaminada, dañina, digna de eliminación?.- Al contrario, es la más alta actividad de la vida en democracia; nadie tiene derecho para disminuirla; ser miembro de un partido político honra a hombres y mujeres.

Se trata de cambiar el modo de designación de los Vocales, olvidando que la actual forma de designación fue dispuesta por la ciudadanía en la consulta popular del 25 de mayo de 1997 y éso; desde entonces, es obligatorio para gobernantes y gobernados. Consta en el proyecto, la forma como serían designados los "Vocales de la Comisión Electoral" y vuelven al sistema vigente hasta 1998; en efecto, se dice que serán nombrados: dos de ternas del Presidente de la República, dos de ternas de la Corte Suprema de Justicia "y el resto (es decir tres) del Congreso Nacional". Esto significaría que se elegirán entre los legisladores?. De seguro que, no se quiso decir éso; pero, éso es lo que está diciendo, el proyecto de reforma.

Si se objeta que los Vocales del Tribunal Supremo Electoral de hoy son políticos, los que se proponen para miembros de la "Comisión Electoral", lo serían mucho más porque pasarían no solo por una, sino por dos instancias políticas, así: la Presidencia de la República y el Congreso.

De acuerdo con el Proyecto Presidencial, ni los Vocales de la "Comisión Elec-

toral" ni los Legisladores tendrían suplentes, es decir que si hoy nos quejamos de la atomización del Congreso, con la reforma sería peor, mucho peor, aparte de que se trastocaría, en un momento dado y en el caso de diversos su- puestos, el pronunciamiento ciudadano, la expresión de la voluntad popular.- Es fácil advertir la multiplicación de casos de cesación definitiva al interior del Congreso para conseguir el incremento del número de miembros de las ban- cadas.

La reforma establece, refiriéndose a las ternas de candidatos para miembros de la "Comisión Electoral",

"De no existir pronunciamiento alguno por parte del Congreso en los siguientes 15 días a la expiración del mencionado plazo de 30 días se entenderá que el Candidato ha sido aceptado y se posesionará de su cargo de inmediato..." Nuevamente, nos encontramos con errores de concepto, y es imperativo pre- guntar ¿Cuál de los miembros de la "terna es el que ha sido aceptado y se posesionará del cargo de inmediato?"

7.- CONCLUSIÓN.- Así, queda expresada la opinión del Tribunal Supre- mo Electoral sobre el Proyecto de Reforma Constitucional enviado por el Eje- cutivo al Congreso. Estamos seguros que esta opinión servirá para que la ciu- dadanía tenga un referente de lo que se está proponiendo y los Honorables Señores Legisladores analicen con la debida profundidad el texto puesto a su consideración"

Cabe agregar brevísimas consideraciones: De acuerdo con el proyecto ejecutivo, las resoluciones de la FUNCION ELECTORAL, serían materia de conocimiento y resolución de los "órganos judiciales de competencia distrital o nacional", por el mero hecho de que los ciudadanos consideren que las resoluciones "afectan los derechos o intereses de terceros". Cabe preguntar ¿qué candidato o partido per- didor no va a considerar que se afectan sus derechos o sus intereses? . Con tal procedimiento ¡Cuándo llegarán a proclamarse resultados?.

Se agrega que la "ley establecerá recursos expeditos y preferentes que serán apli- cables durante los procesos electorales una vez que ellos concluyan. "Esto querrá decir que haya recursos judiciales que se presenten y sustancien, mientras se es- tán cumpliendo los pasos precisos del "CALENDARIO ELECTORAL", tales como

calificación e inscripción de candidaturas o el escrutinio electoral?..

Esta posibilidad que sí tiene el Sistema de los Estados Unidos, creó situaciones de grandes aprietos en ese país maduro y respetuoso de las leyes, en el escrutinio Bush- Gore; ya podemos imaginarnos la barbarie que puede crearse en nuestro medio. Pero aún más, en E.E.U.U. por iniciativa de tres ex -Presidentes, se ha puesto en marcha una propuesta de reforma del sistema, mientras aquí se propone adoptarlo!!!

De otra parte, hay claridad o hay contradicción al referirse a tiempo " durante los procesos electorales una vez que ellos concluyan", porque si es durante, es mientras se realicen los procesos, y, si son "una vez que ellos concluyan", nunca pueden ser "durante".

Resumiendo: para atender la demanda del pueblo ecuatoriano, que es de todos los pueblos que viven en sistema democrático, hay que disminuir los pasos, limitar los recursos, eliminar acciones paralelas; en definitiva "Garantizar la seguridad electoral", y el proyecto que comentamos, llevaría a todo lo contrario.

Nótese que el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el proyecto de reforma fue del 26 de septiembre del 2001; de entonces acá, han transcurrido casi cuatro meses, y hemos entrado en el año 2002, año electoral, en el que, por razones que están a la vista y no tienen necesidad de ser explicados, sería absolutamente ilógico pensar en que pueda realizarse una reforma constitucional, menos de esta magnitud y con implicaciones directas y peligrosas en vista de lo que se dice en Materia Electoral.

REPOSICIÓN DEL GASTO ELECTORAL

El Art. 114 de la Constitución Política del Estado dice:

"Art. 114.- (Garantías).- *Se garantizará el derecho a fundar partidos políticos y participar en ellos en las condiciones establecidas en la Ley. Los partidos políticos gozarán de la protección del Estado para su organización y funcionamiento."*

La Ley Orgánica de Partidos Políticos tiene las siguientes disposiciones:

"Art. 59.- *El Estado contribuye al financiamiento de los partidos y para el efecto crea el Fondo Partidario Permanente. En el Presupuesto General del Estado constará anualmente una partida por un monto equivalente al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en él.*

El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que tengan derecho, de la siguiente manera: el sesenta por ciento en partes iguales a cada uno de ellos y el otro cuarenta por ciento en proporción a los votos obtenidos en las últimas elecciones pluripersonales, a nivel nacional."

"Art. 60.- *En los años en que se realicen elecciones, en el Presupuesto General del Estado constará otra partida equivalente al cero punto cinco por mil de los egresos fiscales constantes en él, que permita afrontar el gasto electoral realizado por los partidos. El Tribunal Supremo Electoral la distribuirá entre los partidos que tengan derecho, en proporción a los votos que hayan obtenido en las elecciones pluripersonales realizadas a nivel nacional"*.

En el año 2001 al que corresponde el presente Informe había que atender, por consiguiente, a los partidos políticos con el Fondo Partidario Permanente correspondiente al 2001 y con la Reposición del Gasto Electoral realizado con oportunidad del proceso electoral del año 2000.

Hay que confesarlo, que, con la intervención de las alianzas, y agravado con que éstas puedan ser nacionales, provinciales, cantonales y aún parroquiales, se

ha complicado el cálculo del porcentaje a que los sujetos políticos tienen derecho en la asistencia económica de Estado. La Ley prevé que en el caso de alianzas se ha de desagregar los valores de los diferentes participantes en las alianzas en relación con su volumen de votos en las elecciones inmediatamente anteriores, pero son múltiples los casos en que los integrantes de la alianza no tienen antecedentes de tal participación.

Esta realidad hace que el problema deje de ser fundamentalmente legal y pase a ser matemático. No es menos cierto y hemos de reconocerlo que en el afán de facilitar la participación ciudadana y la intervención electoral, las alianzas han tomado, de hecho, una expresión que no se ajusta estrictamente a la ley. En efecto, el Art. 37 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos primer inciso, dice:

Art. 37.- *Cada partido político deberá concurrir a las elecciones pluripersonales en la forma indicada en el artículo 31 de esta Ley, o aliados con otros partidos políticos sin restricción alguna y participar al menos en 10 provincias, de las cuales dos deberán corresponder a las tres de mayor población.*

Las elecciones del año 2000 presentaron características de complejidad: fueron las primeras realizadas bajo la vigencia de una nueva Constitución, la de 1998; se expidió un Estatuto que en parte era de coyuntura: la Ley 2000 -1, que debió sufrir un trámite acelerado y de última hora, basta recordar que se publicó paralelamente con la Convocatoria a elecciones mandadas en dicha ley (18 de febrero del 2000).

El Tribunal organizó una Comisión de expertos para que estudie lo relacionado con la Reposición del Gasto Electoral, y presentaron su informe mediante el Memorando 202-DF-TSE-2001.

Designada una Comisión Especial del área financiera para que el informe sobre la distribución de fondos correspondientes al Gasto Electoral, se presentó el cuadro con el porcentaje de votos obtenidos por cada sujeto político interviniente en las elecciones del 2000; y de acuerdo con tales datos y en consonancia con la Ley de Partidos Políticos Codificada, solo tienen derecho a la reposición:

PSC-	32,09%
PRE-	17,08%
ID-	14,52%
DP-UC-	10,33%
MPD-	4,41%
MUPPNP-	4,40%

En consecuencia, y de acuerdo con memorando 202-DF-TSE-2001, de 26 de Noviembre del 2001, se hizo la siguiente distribución de valores en aplicación del Art. 60 de la Ley:

PSC-	\$ 204.027,76
PRE-	\$ 112.435,37
ID-	\$ 92.281,86
DP-UC-	\$ 65.658,01
MPD-	\$ 28.002,77
MUPPNP-	\$ 27.949,73

- 16 -

CAPACITACIÓN

Capacitación como camino para una formación ciudadana responsable y con plena capacidad para discriminar sobre situaciones y respecto de elección de personas es tarea larga y comprometida en la que todos debemos empeñarnos. De otro lado es indispensable la capacitación correspondiente para quienes han de ser los responsables de la administración electoral en los diferentes niveles, porque eso es garantía de respeto al voto ciudadano y, por consiguiente, de respeto al electorado.

En el año al que se refiere el presente Informe, el Tribunal Supremo Electoral, y aprovechando que se trataba de un año sin las premuras de proceso electoral, dió atención a este asunto. Había de antecedente que el 18 de Agosto del 2000 se firmó el Convenio Marco con el Centro de Estudios Políticos y Sociales de España - CEPS - y vino como su enviado para colaborar en la asesoría y ejecución, el Experto Paú Caparrós i Girones, a partir del mes de marzo del 2001. De otra parte, el Pleno del Tribunal, acogió el proyecto de la Comisión de Capacitación denominado "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procedimientos Electorales", al que, el CEPS dio su conformidad, por intermedio de la Generalité Valencia, el 16 de noviembre del 2000. El proyecto conjunto representó un egreso de 27.000 dólares, aportando el Tribunal con el 20%, es decir 5.400 dólares.

El informe presentado sobre la ejecución del Proyecto, indica que los meses de abril, mayo y junio se dedicaron a la preparación de materiales didácticos, módulos y contenidos, así como el plantel de capacitadores y el ajuste al presupuesto económico del proyecto.

Se proyectó la realización de seminarios en todas las provincias. Se comenzó por la provincia de Pastaza donde el trabajo tuvo lugar los días 29 y 30 de junio, terminando en El Oro, los días 26 y 27 de octubre después de cubrir veintiún provincias, a excepción de Galápagos. Los beneficiarios con los cursillos fueron Alcaldes, Consejeros, Concejales Municipales, Miembros de Juntas Parroquiales

elegidos, como sabemos, por votación popular, indígenas, campesinos, y dirigentes de movimientos sociales.

El mismo Informe de la referencia dice que el proyecto fue ejecutado por la Comisión de Capacitación presidida por el Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, y contó con el respaldo del Pleno del Tribunal Supremo y con la participación efectiva de los Tribunales Provinciales, que fueron los encargados de organizar el evento, de acuerdo con las instrucciones previamente impartidas.

Uno de los objetivos expuestos era: Fomentar el compromiso de la población indígena en el sistema democrático, entendiendo que profundizar la democracia social significa que los y las ciudadanas sin distinción de nacionalidades, pueblos ni origen social se incorporen progresivamente al proceso de toma de decisiones del país. El Ecuador al ser un país con una gran diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, así como actores políticos y sociales que componen la sociedad ecuatoriana también tiene una diversidad de intereses que aspiramos que con estos elementos podamos lograr la unidad dentro del universo de diferencias. Si la democracia es entendida como un sistema que asegure la equidad, la libertad, la paz y el respeto para todos los seres humanos, vale la pena sumar todos los esfuerzos por alcanzar estos objetivos; aún más, diríamos que es imperativo hacerlo.

Más allá de instruir a los ciudadanos sobre su derecho a votar y asegurar la garantía de que ese voto será respetado; más allá de realizar periódicamente los eventos electorales señalados en la ley para escoger Mandatarios y Representantes, está otra grande y obligante tarea: proyectar una imagen, lograr un acercamiento con la población en períodos en los cuales no hay procesos electorales. En esta línea de pensamiento tenemos firmado con el Ministerio de Educación un convenio, y hemos vuelto a reclamar que se cumpla, de acción conjunta en base a desarrollar en los alumnos de Educación Media una Educación en Valores cívicos, que, comenzando por la cátedra de Moral Individual en Primer Año, llegue al Sexto con enseñanza de Derecho Electoral y formación cívica, materia que sería requerimiento haberla cursado, como requisito para obtener el Bachillerato. Además, se impartiría la formación necesaria para un garantizado desempeño en

los actos electorales, como es la actuación en las Juntas Receptoras del Voto, a fin de que ello constituya una garantía plena de desempeño correcto y eficiente; y de respeto al pronunciamiento ciudadano expresado en el voto.

Con estas prolongaciones de acción, se persigue contar con una ciudadanía informada, responsable y participativa. Para lograr esta actitud se requiere de una definición firme en la educación en los valores de la democracia, el conocimiento del sistema político ecuatoriano, la legislación sobre partidos políticos y legislación sobre el sistema electoral, que son temas que tienen que ser comprendidos como parte de la cultura nacional.

Coordinación con los Tribunales Provinciales Electorales.- Desde la iniciativa de los Tribunales Provinciales Electorales, una vez concluido el Proyecto, se han lanzado algunas iniciativas de reproducir estos Seminarios en los cantones de las provincias en una mancomunada coordinación entre la Función Electoral y los Municipios; tal es el caso de la Provincia de Cotopaxi; donde se ha repetido el Seminario en cada uno de sus siete cantones. Así se han desplegado otras iniciativas como en los Tribunales de Imbabura y Pichincha, donde las respectivas Comisiones de Capacitación están duplicando la actividad cumplida por la Comisión de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral.

Es importante señalar que en varios Tribunales Provinciales Electorales se pudo coordinar con las Comisiones de Capacitación, mesas redondas, foros, para debatir el tipo de democracia que queremos construir o aplicar en el país y cuál es la concepción de país que tienen los actores políticos y sociales, quienes, además, deben ir deponiendo intereses particulares en función de trabajar por los sectores sociales, pueblos y etnias que aún permanecen excluidos de la vida política, y, deben buscar así el necesario consenso en torno a los problemas nacionales.

Es necesario destacar que esta primera experiencia en capacitación desde el Tribunal en colaboración con una experimentada institución extranjera fue totalmente positiva y muy bien recibida por los beneficiarios del Proyecto. Será conveniente continuar con la realización de Seminarios de Capacitación, tanto más cuanto que existe interés y expectativa en las organizaciones sociales para esta continui-

dad. Será igualmente beneficioso, y de momento, necesario, realizar un diagnóstico de cuáles pueden ser los temas, de acuerdo con la realidad nacional y las provinciales, los tópicos más adecuados para continuar con la tarea iniciada. Una segunda etapa, para ser aún más fructífera, ha de contar, necesariamente con los sectores beneficiarios de la primera etapa, y abriendo la participación a otros sectores que es necesario se vayan sumando.

El Tribunal en el proyecto de Código de las Instituciones de la Democracia, entregado, hace justamente un año, contempla la creación del

"Instituto de Desarrollo de la Democracia, para la promoción de la cultura cívica, de la formación y capacitación de líderes políticos a escala nacional, y para la investigación de las realidades socio-políticas de Ecuador y de su entorno y factores geopolíticos".

Ese Instituto sería el centro de donde parta la capacitación a través de los 22 Tribunales Provinciales. Allí se señalarían los objetivos, las metas y nuevos retos que se debe asumir en la dinámica global en los aspectos socio-políticos. Esto, posibilitaría avanzar en la creación de una instancia técnica y permanente de capacitación, educación cívica e información.

A lo largo del cumplimiento del programa en las diferentes provincias bajo organización directa encomendada a los Tribunales Provinciales cabe destacar la cobertura brindada por los medios de comunicación, básicamente prensa escrita y radio, y en algunas provincias grandes que disponen de televisión. El papel que los medios cumplieron al difundir la realización del Seminario de Capacitación, los objetivos del mismo y quienes eran los beneficiarios del proyecto, aportaron en gran medida para que esta labor sea conocida por los ciudadanos del país, pues el interés de los medios fue tan comprometido, que, en algunos casos, llegaron a realizar transmisión directa del evento.

Sobre esta primera experiencia, son recomendaciones de la Comisión, las siguientes:

1. La Comisión de Capacitación debe ser creada oficial y jurídicamente en el Tribunal Supremo Electoral, y para el respectivo ámbito en los Tribunales Provinciales Electorales. Su trabajo debe ser constante y permanente en base a una programación, ejecución y evaluación, de acuerdo a sus competencias, funciones y atribuciones.
2. Orientar su esfuerzo en un proyecto de educación ciudadana para promover la formación de una verdadera cultura democrática a través de la participación de todos los ciudadanos en los aspectos de política nacional.
3. Desarrollar las acciones que correspondan para que se cumplan los propósitos del Convenio Marco firmado con el Centro de Estudios Políticos y Sociales de España, en la formación de valores cívicos y de la democracia, con estudiantes de los Colegios de educación media y universidades, así como los pueblos en general.

Algunos Tribunales Provinciales, en sus informes, emiten, sobre el tema, los siguientes conceptos:

AZUAY.- *"Como parte de un proceso de capacitación que ha emprendido la Función Electoral, el 28 y 29 de septiembre, se llevó a cabo el Seminario denominado "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procedimientos Electorales", capacitación que fue dirigida a los líderes de las organizaciones campesinas y miembros de las Juntas Parroquiales, para la que se conformó una comisión especial, que estuvo, al frente de la organización del evento, el mismo que fue clausurado por el Señor Licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente de la Comisión de Capacitación. Posterior evaluación indica que los objetivos trazados tuvieron cabal cumplimiento."*

BOLÍVAR.- *"Se efectuó un seminario Taller sobre "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procesos Electorales" en que participaron Autoridades indígenas de elección popular de la provincia, Presidentes de las Juntas Parroquiales, dirigentes de Organizaciones Indígenas y Campesinas, y Líderes Políticos".*

CAÑAR.- *"Con apoyo de la Comisión de Capacitación del Tribunal Supre-*

mo Electoral, exitosamente se desarrolló el Seminario sobre "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas", dirigido a líderes y ciudadanos electos indígenas y campesinos".

CARCHI.- "En el mes de julio se realizaron los preparativos para el Seminario Taller denominado: "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y formación en Procesos Electorales".....

En el mes de agosto, los días 3 y 4 se realizó el Seminario Taller con la presencia del Lic. Eduardo Villaquirán y José María Cabascango, Presidente y Vocal de la Comisión de Capacitación del Organismo Superior; de la misma manera, se contó con la presencia del Señor Jorge Valdospinos Rubio, Vocal del Tribunal Supremo Electoral y el Señor Paú Caparrós, Miembro del Centro de Estudios Políticos y Sociales de España.....

COTOPAXI.- "En la ciudad de Latacunga durante los días 6 y 7 de julio del 2001 se realizó un Seminario de Capacitación sobre el tema "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procedimientos Electorales" al que asistieron los Presidentes o representantes de las Juntas Parroquiales de la Provincia, medios de comunicación, invitados especiales. Este Seminario estuvo auspiciado por el TSE y el Centro de Estudios Políticos y Sociales de España. A la inauguración de este importante evento asistieron los señores Vocales Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente de la Comisión de Capacitación, el Señor José María Cabascango, Vocal de la Comisión de Capacitación, el Doctor Armando Cazar Valenzuela, Vocal del TSE, autoridades e invitados especiales.- Se cumplió un amplio Programa.

El Tribunal Supremo Electoral, las siete Municipalidades de los cantones de la Provincia y el Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi, con el propósito de capacitar al mayor número de ciudadanos, hemos organizado 7 seminarios de Capacitación, que, con su realización, cubren toda la provincia".

CHIMBORAZO.- En consideración a que la capacitación es parte importante para el desarrollo de los pueblos, la Comisión de Capacitación creyó conveniente la realización de varios eventos en los que hubo una participación activa del Tribunal Supremo Electoral, el Pleno del Tribunal Provincial Electoral de Chimborazo, del Personal Administrativo y de la ciudadanía en general.

EL ORO.- Se ha procedido conjuntamente con la Comisión de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral y el Centro de Estudios Políticos y Socia-

les de España a dictar un seminario sobre "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procedimientos Electorales en el Ecuador", Seminario que se desarrolló durante los días 12 y 13 de Octubre del 2001, seminario que fue todo un éxito, con 54 participantes de todos los cantones de la Provincia. El público felicitó y solicitó que se continúe con la capacitación.

IMBABURA.- "Dando cumplimiento al calendario propuesto por el TSE y la Comisión de Capacitación de este organismo, en la ciudad de Ibarra se realizó, el seminario de capacitación "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y formación en Procedimientos Electorales" dirigido a autoridades electas, juntas parroquiales, líderes indígenas, habiendo sido invitados a participar en este seminario ilustres pensadores en los diferentes campos que abarcó el seminario. Los expositores fueron los siguientes:

Dr. José Chávez Zaldumbide- La Constitución y el Régimen Político

Dr. Juan Cordero- La Democracia y sus Factores Políticos

Dr. Juan Manuel Fuertes- Democracia y Participación Política

Master Luz María de la Torre- Movimientos Indígenas

Myr. Galo Larrea- Juntas Parroquiales

Sr. José Yerovi- Proceso Electoral

La organización de este evento en la provincia estuvo a cargo de la comisión de Capacitación del TPEI, presidida por el Dr. Washington Cabezas, que mereció las entusiastas felicitaciones de parte de todos quienes asistieron a este acto.

Hemos tenido la colaboración en los diferentes eventos realizados por este Organismo de todos los medios de comunicación tanto escrito como radiales.

LOJA.- "Los días viernes 21 y sábado 22 de septiembre en este Tribunal se llevó a efecto el curso de Capacitación denominado "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS Y FORMACION EN PROCESOS ELECTORALES", organizado por la Comisión de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral y apoyado logísticamente por este Organismo".

MANABÍ.- "Se realizó el Seminario de Capacitación "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y formación en Procesos Electorales", desarrollado en las dependencias de nuestro Organismo Electoral, los días viernes 20 y sábado 21 de julio del 2001, en donde mantuvimos una excelente concurrencia de los diferentes delegados de los Partidos Políticos, Juntas Parroquiales Ru-

rales y sectores sociales, existiendo comentarios positivos en nuestra provincia de la labor que desarrolla el H. Tribunal Supremo Electoral y el H. Tribunal Provincial Electoral de Manabí”.

MORONA SANTIAGO.- “SEMINARIO TALLER.- La comisión de Capacitación del TSE que, en su planificación luego de haber diagnosticado en los últimos años que se ha hecho evidente a consecuencia de la crisis económica desde los años 80, ha provocado una polarización social en el sector indígena, creyó conveniente capacitar a los actores políticos, especialmente de las comunidades indígenas y el proyecto financiado por el Gobierno Valenciano y aprobado por el TSE; los beneficiarios, fueron directamente los líderes indígenas de Morona Santiago.- El cronograma de Capacitación le correspondió a Morona Santiago, el 12 y 13 de Octubre; realizándose con la participación activa de las autoridades y con la presencia de facilitadores de gran trayectoria.”.

NAPO.- “Conocedores del deber y obligación como Función Electoral de capacitar e informar a nuestros conciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral y su Comisión de Capacitación, gracias a un Convenio de Capacitación con el Centro de Estudios Políticos y Sociales de España, se desarrolló en Tena los días 7, 8 y 9 de septiembre del 2001, “el Seminario Taller “FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS Y FORMACION EN PROCESOS ELECTORALES” compuesto de 3 módulos:

- a) Democracia y Gobernabilidad
- b) Partidos y Sistema Político
- c) Legislación Electoral

El Seminario fue dirigido a Autoridades y líderes políticos de Napo..... Los participantes llevaron a sus comunidades, sólidos conocimientos sobre la materia expuesta en los 3 módulos del Taller”.

ORELLANA.- “El TSE, el Centro de Estudios Políticos y Sociales de España en coordinación con el Tribunal Provincial Electoral de Orellana llevó a efecto un Seminario de Capacitación denominado “FORTEALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS Y FORMACION EN PROCESOS ELECTORALES”, los días 5 y 6 de Octubre del 2001, al que asistieron Autoridades Seccionales, Organizaciones Indígenas y Dirigentes Políticos.

PICHINCHA.- Entre el 6 y 7 de julio, cumpliendo con la programación del

TSE, se realizó el Seminario "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en Procedimientos Electorales" respecto del cual se presentó oportunamente un Informe Relatoría, del cual se apunta un breve resumen:

Se encargó a la Comisión de Capacitación todo lo referente a programación, logística y realización del evento, la cual contactó con la Comisión de Capacitación del TSE y con el representante del Centro de Estudios Políticos y Sociales de España, para establecer la fecha más oportuna, rediseñar el seminario y a dar los pasos necesarios para su mejor éxito.

Se cursaron invitaciones solicitando el envío de candidatos a participar en el seminario a todos los partidos políticos, a entidades públicas y a organizaciones indígenas y campesinas de la provincia. En base a las candidaturas presentadas y tomando en cuenta su situación como autoridades electas y en funciones o como dirigentes, se aceptó la participación de las 34 personas.

De acuerdo con la programación, se contó con la presencia del doctor Gandhi Burbano, capacitador designado por el Tribunal Supremo Electoral, quien desarrolló los siguientes temas: Democracia y régimen político en el Ecuador; Incidencia en la globalización en la democracia latinoamericana y ecuatoriana; Sistema Político Ecuatoriano; Legislación sobre los partidos políticos y Legislación sobre sistema electoral.

Un aspecto importante fue el Foro con representantes de los partidos políticos en el cual participaron representantes de aquellos que tienen mayor presencia nacional. Los participantes fueron:

Dr. Patricio Moncayo (ID)- Definición de Democracia y proceso democrático en el país.

Dr. Marco Proaño Maya (PRE)- La democracia y la gobernabilidad.

Dra. Nina Pacari (Pachacutik)- La democracia y sus actores políticos.

Dr. Oswaldo Rossi (PSC)- Democracia y participación política.

Dr. Michel Pineda (DP)- La Constitución y el régimen político.

Un tercer momento fue el Conversatorio: Movimiento Indígena, participación política y ciudadana mantenido en forma solvente por el Eco. Pablo Dávalos. Por último se concretó un taller sobre el Sistema Electoral que se inició con una presentación introductoria realizada por el Doctor Gandhi Burbano. El tema se dividió en tres grandes bloques.

Actos Preelectorales

El Doctor Eduardo García explicó los siguientes aspectos:

- *Elaboración y difusión de los padrones electorales*
- *Convocatoria a elecciones*
- *Proclamación e inscripción de candidaturas*
- *Elaboración de papeletas electorales y otros documentos*
- *Gasto Electoral y su control*

El día de las votaciones

El Señor Edmo Muñoz, Secretario del TPEP, enfrentó los siguientes subtemas:

- *Conformación de las Juntas Receptoras del Voto*
- *Instalación de las Juntas y labores específicas*
- *Papel de los delegados de los partidos políticos y movimientos independientes*
- *Cierre del proceso y escrutinio*
- *Entrega de documentos, materiales e información*
- *Nulidad de las votaciones*

Acciones posteriores a las elecciones

El Lic. Andrés León Calderón, trató las siguientes partes:

- *Escrutinios en el Tribunal provincial*
- *Acta de las Juntas*
- *Función de los representantes de los partidos políticos, movimientos y candidatos*
- *Apertura de urnas (casos de excepción)*
- *Sistema informático y mecanismos de control*
- *Adjudicación de puestos (Método D' Hont)*
- *Recursos de impugnación, apelación y queja*

Para dar mayor realce al evento se organizaron dos sesiones especiales: de inauguración y de clausura.

SUCUMBÍOS.- *Comisión Especial de Capacitación.- Desde enero a julio se armó una propuesta de capacitación para los miembros de las Juntas Parroquiales sobre su propia ley. Desde el mes de abril a septiembre, la ejecución del proyecto de Capacitación sobre "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas Y Formación en los Procesos Electorales". Cabe destacar que para la ejecución de este proyecto se contó con el apoyo económico de*

\$480,00 dólares del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Valencia-España.

TUNGURAHUA.- Hecho preponderante constituyó la organización del Seminario sobre "Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas y Formación en los Procesos Electorales", dirigido a Representantes de los sectores Campesinos e Indígenas, patrocinado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales (España), realizado los días jueves 18 y viernes 19 de Octubre del presente año, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral; mismo que tuvo una honrosa aceptación y también la participación de hombres presentes de la vida política de la ciudad y de la provincia, dando como resultado una gran reflexión cívica de los asistentes y el pedido de que se produzcan nuevos foros de esta naturaleza a fin de fortalecer el conocimiento de los Representantes de las comunidades rurales."

ZAMORA CHINCHIPE.- "Con el aporte del Tribunal Supremo Electoral se "impartió" un taller a los líderes indígenas, dirigentes de organizaciones sociales, representantes de elección popular y ótros. El tema fue "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y FORMACIÓN EN PROCESOS ELECTORALES".

Paú Caparrós i Girones, Experto del Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia - España, en su Informe, entre otras conclusiones destaca que se ha despertado interés en los Tribunales Provinciales Electorales, incentivados por el Seminario. Al respecto, textualmente dice:

"Entre las conclusiones de los Seminarios, destaca la necesidad de la población civil, a los medios de comunicación y a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Algunos de los Tribunales Provinciales Electorales han decidido, producto de los seminarios FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, poner en marcha cursos parecidos en la totalidad de los cantones de las respectivas provincias. De hecho, solo esto ya constituye un éxito del proyecto por lo que éste ha conseguido animar e impulsar la capacitación desde la Función Electoral".

Por último, agrega el Experto:

"Debo consignar la felicitación del CEPS al Tribunal Supremo Electoral, a la Comisión de Capacitación y al conjunto de Tribunales Provinciales del país, por el trabajo realizado y por la satisfactoria conclusión del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS Y FORMACION EN PROCESOS ELECTORALES EN ECUADOR".

- 17 -

ARCHIVO NACIONAL DEL CIUDADANO DOCUMENTO ÚNICO

El Tribunal Supremo Electoral cuando realiza los análisis del proceso electoral, encuentra dos debilidades:

- El Padrón Electoral
- La lentitud de los escrutinios, y por ende la demora en el conocimiento de resultados.

Creemos que la falta de perfección del Padrón, en gran parte se debe a faltas de su fuente: el Registro Civil. El Tribunal propuso al Gobierno la creación de un Documento Único de Identidad, donde se acumule toda la información que requiere el ciudadano:

- Partida de nacimiento
- Cédula de Identidad
- Certificado de votación
- Carnet de identificación sanguínea
- Licencia de conducir
- Libreta Militar
- Carnet del Seguro Social
- Comprobante militar para salir del país
- Partida de matrimonio
- Registro Unico de contribuyentes

El documento sería extendido con aplicación de la mejor y más sofisticada tecnología, garantizando la imposibilidad de falsificación.

La adopción del proceso, a la par que aliviaría los trámites, y los documentos que debe portar el ciudadano, permitiría obtener una información completa como Base de Datos, para tener un Padrón Electoral totalmente confiable, como primera garantía para elecciones generales puras, transparentes.

En base al planteamiento hecho por el Tribunal se tuvo varias sesiones de los representantes de los Organismos responsables de los diez actuales documentos, y se elaboró un proyecto de Decreto Ejecutivo, dando paso al PROGRAMA que implementaría la expedición y manejo del "DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA DE LOS ECUATORIANOS", y en acuerdo con el CONAM se lo presentó a consideración del Señor Presidente de la República.

El texto del documento propuesto es el siguiente:

**"GUSTAVO NOBOA BEJARANO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA**

CONSIDERANDO:

Que es necesario modernizar la expedición del documento de identificación y volverlo invulnerable a las falsificaciones;

Que es imperativo simplificar el sistema de múltiples documentos que requiere el ciudadano para su vida normal, ajustada a los requerimientos de diferentes entidades del sector público;

Que, dentro de la modernización del Estado que lleva adelante el Gobierno, es necesario buscar el aporte y coincidencia de diferentes Departamentos e Instituciones para ofrecer al ciudadano el más ágil y simplificado servicio;

Que es obligación del Gobierno Nacional facilitar los trámites y requisitos que debe cumplir y llenar cada ciudadano para satisfacer las exigencias de las leyes, de las instituciones y organismos; y,

En uso de las facultades establecidas en la Constitución Política de la República y en las leyes,

DECRETA:

Art. 1º.- Con la participación del CONAM, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobierno, Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General de la Policía, Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Cruz Roja, créase el PROGRAMA

que implementará la expedición y manejo del DOCUMENTO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN Y CIUDADANÍA DE LOS ECUATORIANOS, que certificará la existencia numerada de los certificados que emiten, cada cual en su órbita, todas las instancias participantes en este Programa.

Art. 2º.- Fundamento indispensable para expedir y actualizar el Documento a que se refiere el Art. 1, es la formación del ARCHIVO NACIONAL DE ECUATORIANOS.

Art. 3º.- OBJETIVO.- El propósito del Programa es armonizar las políticas interinstitucionales para que el Estado pueda prestar los servicios que le corresponden con la mayor eficacia y sencillez, y que eso se traduzca para el usuario del servicio, en agilidad de los despachos y simplificación de los documentos que requiere y necesita.

Art. 4º.- DIRECTORIO.- El PROGRAMA estará a cargo de un Directorio con representación de todos los Organismos empeñados (responsables), en el propósito.- Por consiguiente, contará con los siguientes Representantes:

Uno designado por el Tribunal Supremo Electoral

Uno designado por el Presidente del CONAM

Uno designado por el Jefe de Comando Conjunto de las FFAA

Un representante del Registro Civil, designado por el Ministro de Gobierno

Uno designado por el Director del SRI

Uno designado por el Comandante General de la Policía.

Uno designado por el Director General del IESS

Uno designado por el Presidente de la Cruz Roja Nacional

El Representante del Presidente de la República será el Presidente del Directorio, y tendrá voto calificado en caso de empate.

Art. 5º.- FUNCIÓN DEL DIRECTORIO.- El Directorio, con el aporte técnico de las instituciones participantes, diseñará la operación, inclusive la especie del DOCUMENTO ÚNICO y lo pondrá en marcha mediante REGLAMENTO, que, para su aplicación, requiere la conformidad del CONAM, a fin de garantizar que se encuadre dentro de las regulaciones tendentes a la modernización del Estado.

Art. 6º.- El Directorio dictará sus propias normas de organización y funcionamiento; todas, dentro de completa austeridad, y orientadas al más cabal cumplimiento de sus propósitos y función.

Art. 7º.- Con la expedición de este Decreto no se afecta, disminuye, ni limita las facultades y derechos que por ley corresponden a los organismos participantes.

Art. 8º.- Para el mejor y más completo cumplimiento de sus funciones, el Directorio podrá buscar asistencia y financiamiento de entidades y organismos nacionales y extranjeros.

Art. 9º.- El quórum para instalar las sesiones y para continuarlas es de cinco miembros del Directorio.

Art. 10º.- La primera sesión será convocada por el Presidente del Directorio dentro de cinco días de haberse hecho las designaciones.

Art. 11º.- El presente Decreto entrará en vigencia con la publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárgase a los señores Ministros de Gobierno, Defensa Nacional y Economía.

Dado, etc....

Es evidente que se han presentado en la vida nacional otros ingredientes que tienen indiscutible influencia en el Padrón Electoral y su confiabilidad; por esta razón se han hecho nuevas aproximaciones institucionales: así, con las Fuerzas Armadas para conocer, dentro de absoluta confiabilidad los nombres que deben salir del Padrón por alta en las F.F.A.A. y Policía Nacional y los que deben incluirse en el Padrón en razón de baja en dichas instituciones.- Igualmente, se ha buscado datos en las Dirección de Inmigración, pues, dado el considerable éxodo de migrantes, es necesario recurrir a nuevos expedientes (antes ni sospechados) para buscar los mejores modos a fin de sanear el Padrón Electoral, que, es indiscutible, está sobredimensionado, lo cual es perjudicial en varios sentidos: nos impide tener referentes claros y precisos en esta materia, altera la información, distorsiona las estadísticas hace aparecer abultado el ausentismo y encarece el proceso, al tener un referente sobredimensionado para número de mesas receptoras del voto, impresión de papeletas y todos los materiales, personal de capacitación, distribución en toda la República de lo necesario para el acto electoral, etc., etc.

Las medidas tendentes a analizar lo relacionado con la necesidad de agilizar el escrutinio, se consideran en el siguiente capítulo.

- 18 -

ELECCIONES 2002

La Constitución Política de la República en su Art. 27 establece el

"(DERECHO A VOTO).- El voto popular será universal, igual, directo y secreto; obligatorio para los que sepan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores de sesenta y cinco años. Tendrán derecho a voto los ecuatorianos que hayan cumplido dieciocho años de edad y se hallen en el goce de los derechos políticos....."

La Ley Orgánica de Elecciones en sus Arts. 44, 45 y 46 dice:

"Art. 44.- A todo acto electoral, precederá la correspondiente convocatoria que será publicada en el Registro Oficial, en los diarios de mayor circulación del país y por cadena nacional de radio y televisión, mediante el empleo de los espacios que dispone el Gobierno Nacional.

Art. 45.- El Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para elecciones populares directas con, al menos noventa días de anticipación al de las votaciones, en ella determinará la fecha en que se han de realizar las elecciones, las dignidades que deban elegirse, el período legal de duración de las mismas, la fecha de cierre de inscripción de candidaturas y la fecha de culminación de la campaña electoral.

Si el Tribunal Supremo Electoral no cumpliera con este deber, el Tribunal Constitucional le requerirá para que lo observe. Si no se realizare la convocatoria cuarenta y ocho horas después del requerimiento, el Tribunal Constitucional hará la convocatoria; destituirá a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y llamará a los suplentes para que actúen por el tiempo que faltaba a los principales para completar su período.

Si los suplentes no concurrieren a pesar del llamamiento del Tribunal Constitucional, éste designará interinamente a los vocales cuyo nombramiento corresponde al Congreso Nacional y notificará a éste, para que designe nuevos vocales. En estos casos no regirá el plazo previsto en el inciso primero.

Art. 46.- Las elecciones directas se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario:

La primera vuelta electoral el tercer domingo de octubre de cada cuatro años, para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, representantes ante el Parlamento Andino, diputados al Congreso Nacional y minoría de los concejales municipales.

La segunda vuelta electoral se efectuará el último domingo de noviembre del año en que deba elegirse Presidente y Vicepresidente de la República.

No habrá segunda vuelta electoral para Presidente y Vicepresidente de la República, si en la primera vuelta un binomio hubiese obtenido más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos o si el que obtuvo el primer lugar hubiese alcanzado más del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos y una diferencia de por lo menos, diez puntos, porcentuales sobre el binomio que le sigue en votación. Los diez puntos porcentuales serán calculados sobre la totalidad de los votos válidos”.

En consecuencia, a lo más noventa días antes del domingo 20 de octubre día en que deben realizarse las elecciones del primera vuelta, esto es, el 21 de julio, el Tribunal debe convocar a elecciones, y las dignidades a elegirse son:

Presidente y Vicepresidente de la República

Representantes ante el Parlamento Andino

Diputados de todas las provincias, y,

Concejales Municipales de Minoría.

Para preparar debidamente las elecciones nos preocupa el represamiento legal; estamos empeñados en mejorar la tecnología, y, capacitar al personal que debe intervenir en el acto eleccionario.

En el ámbito legal, aunque sea repetitivo, resulta impostergable la realización de reformas.

Es el caso, que vigente la Constitución de 1998 no se han hecho reformas que viabilicen nuevas instituciones o que pongan en armonía las leyes con las disposiciones constitucionales. La única reforma real fue la ley 2000 -1 de 18 de febrero del 2000, que tiene dos orientaciones perfectamente identificables: posibilitan la realización de elecciones de mayo del 2000, y, segundo, se aprovechó la oportunidad para introducir reformas relativas al género, que son poco claras,

dando margen a que se comente: "En apenas 27 artículos que tiene la Ley, una insistencia atosigante que creó una serie de contradicciones y confusión".

De tal manera, que, no solo hay que atender a los asuntos que antes lo requerían, sino que deben corregirse las disposiciones que así lo exigen en el asunto relativo al género, justamente, en el empeño de que las legítimas aspiraciones de esa naturaleza sean atendidas, al amparo de la sencillez y claridad de las normas.

Sin ser, ni mucho menos, un listado completo de los temas que merecen definición, cambio o tratativa en la legislación, presentamos algunos, y que tienen más que ver con situaciones ya confrontadas en la práctica. Así tenemos:

- Es necesario definir qué debe entenderse por "elecciones generales"
- Más si en la legislación se usa también "elecciones nacionales", expresión que también merece definirse.
- La Ley dice expresamente que "los partidos políticos pueden formar alianzas".
- Se ha de entender que solo a esas alianzas se refiere la ley cuando expresa: "De producirse alianza permitidas por la ley....."?
- Esto significa que los otros "sujetos políticos no pueden formar alianzas?
- Los partidos políticos, que hayan recibido al menos el 4% de los votos válidos en una elección tienen derecho al financiamiento del Estado. ¿ Los otros sujetos políticos no están asistidos de este derecho?
- Los votos obtenidos en qué elecciones se han de tomar en cuenta para establecer el total de votos obtenidos por el partido político para asignarle dicha participación?
- Si los sujetos políticos están autorizados para recibir fondos y ayudas, ¿Porqué solo los partidos están sujetos a las normas del Art. 62 de la Ley de Partidos Políticos?
- Hay que definir lo que se entenderá por "Domicilio Electoral"
- En el caso de alianzas, si uno o más de los participantes no ha tenido participación anterior en procesos electorales, no hay referente alguno para determinar el porcentaje en que deben contabilizarse los votos para asignar los que le corresponden?
- Mucho más se complican los casos si se tiene en cuenta que se dan alianzas diferentes para elecciones nacionales, provinciales, cantonales y, aún parroquiales?

- Es necesario hablar en éste y otros casos de “registro de partidos”.
 - No hay disposición expresa en la ley que autorice a los movimientos políticos a lanzar candidaturas para las elecciones populares directas.
 - Debe agregarse como disposición expresa la facultad para el Tribunal Supremo Electoral de convocar a elecciones de diputados, prefectos provinciales, consejeros provinciales, alcaldes cantonales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales.
 - Hay que corregir las incongruencias, y contradicciones y formas repetitivas, respecto de género, constantes en la Ley 2000 -1, y, ahora incorporadas en la Ley de Elecciones en virtud de la Codificación: RO 117: 11-Julio-2000.
 - Debe resolverse el caso de los integrantes de Organismos Seccionales cuyo período termina el 10 de agosto del 2002.
- En la Ley de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral debe:
 - Modificarse las cantidades señaladas como monto máximo de Gasto Electoral para cada función, por ser ridículas aparte de no guardar relación entre ellas.- Debe suprimirse la obligación de llevar contabilidad para algunos candidatos; por ejemplo: candidatos a Vocales de las Juntas Parroquiales.
 - Hay que resolver la dicotomía entre la Constitución que manda que el TSE es el juez de cuentas y la Ley que establece que lo serán los Tribunales Provinciales en el caso de las elecciones de su jurisdicción. Con tales disposiciones cuántos juzgamientos va a haber para el mismo sujeto político, después de las elecciones del presente año: 23?

A partir de estas observaciones y muchas más que pueden agregarse, la legislación electoral tiene que ser materia de una reforma considerable. Para resolver los problemas definitivamente, el Tribunal Supremo Electoral tiene propuesta la expedición del Código de las Instituciones de la Democracia.

Dada la fecha en que nos encontramos, sería casi imposible que el H. Congreso pueda afrontar su estudio y expedición, razón por la cual, nos permitimos pedir, al H. Congreso, la integración de la Comisión de Legislación y Codificación a la mayor brevedad; integrada la Comisión donde cinco sitios están vacantes, iríamos allá con el proyecto de Código y otros estudios que posteriormente ha reali-

zado la Comisión de Reforma Política y con el Reglamento de Consultas Populares y de Revocatoria del Mandato, con el pedido de que estructuren su propio proyecto de Código (con asistencia de este Tribunal) y lo presenten en término perentorio para que el H. Congreso lo apruebe mediante el "Trámite Especial" previsto en la Constitución, y tengan, el país y los actores políticos, con oportunidad, las reglas y normas que regirán para el proceso electoral.- No está por demás decir que en el proyecto de Código de las Instituciones de la Democracia consta el "Estatuto de la Oposición", que el H. Congreso está obligado a expedir en virtud del artículo 117 de la Constitución.

Dijimos al iniciar el Capítulo que estamos empeñados en mejorar la Tecnología, y, para ello se han tomado diferentes acciones:

- Se elabora el "Proyecto Elecciones 2002", que junto con el señalamiento de objetivos y metas; precisa la secuencia de las acciones; asigna responsabilidades, señala el personal necesario, enlista los requerimientos de adquisiciones y por consiguiente los contratos que deben celebrarse; adjudica tareas más puntuales, adicionales algunas, tanto a los Tribunales Provinciales Electorales cuanto a los diferentes Departamentos del Tribunal Supremo. Prioridad será corregir los problemas operativos que observamos en comicios pasados. Tenemos en mientes mejorar la coordinación con el Registro Civil, que es la fuente de información del Tribunal Supremo Electoral para la conformación de los Padrones Electorales.

Los errores más frecuentes en lo relativo a la información para el Padrón son: la aparición de personas fallecidas y de residentes en el extranjero; se dan casos de que las personas que cumplieron 18 años no son incorporadas en el padrón, al igual que los militares pasivos. En esta misma línea de acción, como ya lo dijimos, se podrían firmar convenios con las F.F.A.A. y con la Policía para que informen las nuevas incorporaciones que se den en esos importantes estamentos y que deben dejar de constar en el Padrón, y, al mismo tiempo, presten información sobre el personal que se retira de dichas organizaciones y que, por lo mismo, debe ser incorporadas al Padrón.

Será importante aproximar una relación con Inmigración para conocer los ciuda-

danos que salen al Exterior, con datos realmente más actuales de los que hoy se manejan. Estas informaciones adicionales a la ofrecida por el Registro Civil, pueden, efectivamente, corregir el Padrón Electoral, ponerle más en acuerdo con la realidad; su corrección llevará seguramente a depurar el documento y a disminuir el abultamiento que, seguramente, tiene.

Colocándonos en términos de realidad, se obtendrá, además, una economía en costos: papelería en general, impresión de votos, útiles, transporte, número de Juntas Receptoras del Voto; es decir: una economía de costos en todas las facetas de la operación.

En búsqueda de bajar el "ausentismo electoral", se introducirán la cartografía y la zonificación electoral. Mucha gente no vota por las distancias que le separan del sitio de funcionamiento de la Junta Receptora del Voto. Por lo mismo, apoyados en datos obtenidos en el último censo, se instalará juntas receptoras del voto en los lugares más alejados de las parroquias rurales, para dar comodidades a esos lejanos votantes.

En lo que dice relación con la Informática, hemos dispuesto ya por cuarto año consecutivo de la asistencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su Unidad Especializada: Unidad para la Promoción de la Democracia.

El Especialista Félix Ortega diseña las tareas que deben cumplir dos Especialistas permanentes que laboran en coordinación con la Dirección de Sistemas del Tribunal Supremo Electoral.

Al efecto, y para las elecciones del presente año, se aprovecharán los siguientes trabajos desarrollados en el 2001:

Mejoramiento continuo de los Sistemas Electorales.- Se han efectuado varias modificaciones a los mismos, lo que ha permitido aumentar su confiabilidad y seguridad.

Página WEB del TSE.- Se aumentó en el módulo de Consulta al Padrón,

los datos de los ciudadanos que no sufragaron en las elecciones de mayo del 2000, para que dichas personas puedan conocer su situación a través del Internet.

Centro de Información y documentación electoral.- Se realizó el análisis técnico de una biblioteca virtual de fácil acceso, que contenga la información de todos los eventos y documentos electorales que se hayan realizado en la República del Ecuador a partir del año de 1978.

Padrón Electoral.- Debido a que es parte fundamental de todo proceso electoral, se realizó el análisis para el Sistema de Padrón Electoral, a fin de optimizar los procesos para su actualización, bajo una base de datos confiables, a la cual podamos acceder por medio de herramientas gráficas para realizar: reportes, estadísticas y consultas al padrón.

Elecciones, 23 de septiembre del 2001.- Se modificó los Sistemas de Escrutinios y Presentación de Resultados, para cumplir adecuadamente con todos los controles necesarios para aplicar la Ley D'Hont en la elección de Vocales de Juntas Parroquiales. Además, se adaptaron los sistemas electorales para aumentar las zonas y acercar así el centro de votación a votantes lejanos. En base a lo indicado se han diseñado nuevas actividades para las elecciones del 2002:

Planificación Estratégica.- Se realizó en conjunto con el personal del TSE un documento en el cual se especifican todas las actividades relacionadas con el proceso electoral del 2002.

Migración y afinamiento de los sistemas ORACLE.- Con la adquisición de licencias de la base de datos de ORACLE, se tomó la decisión de migrar todos los sistemas electorales a esta nueva plataforma y de esta manera estandarizar las herramientas de trabajo.

Adicionalmente, se están rediseñando los procesos de los sistemas para obtener mayor confiabilidad y rapidez en los tiempos de respuesta.

Sistema de Difusión de Resultados.- Se está realizando un estudio completo y diagnóstico de la conveniencia del uso de la tecnología de IVR's para la transmisión de los resultados, en las elecciones del 2002, u otro sistema que sea confiable y versatil. Además, se están investigando otras alternativas para la transmisión de los resultados.

CIDE.- Se dará todo el apoyo técnico necesario para la realización de la página WEB en la cual estará la información del Centro de Información y Documentación Electoral, que acaba de crearse.

La CAPACITACIÓN (Capítulo 17), va en la misma dirección, siendo nueva modalidad y aporte de proyección permanente, se manifestarán resultados positivos, en primera instancia, en las Elecciones 2002.

LA DEMOCRACIA HACIA EL FUTURO

Mientras no se invente un nuevo y diferente sistema de organización de Gobierno, la Democracia es el mejor sistema de gobierno y de vida: capaz de permitir el pleno desarrollo de la persona humana en un ambiente de libertad.

Nuestra Democracia a pesar de todos los problemas que contra ella conspiran y la disminuyen en categoría, estamos obligados, y es tarea de todos, defenderla, buscar su reafirmación y perseguir su perfeccionamiento.

La permanencia de la Función Electoral: fuente y legitimación de los procesos electorales como origen de poder de Mandatarios y de Representantes, es vivencia que garantiza la vocación democrática de Ecuador.

Hay gentes que de memoria y sin conocimiento alguno de realidades, se refieren a la Función Electoral y concretamente al Tribunal Supremo Electoral, en términos peyorativos y desproporcionados. No se reflexiona en que tal conducta, al carecer de fundamento, contribuye para disminuir la calidad de nuestra democracia.

El Tribunal Supremo Electoral tiene íntimo convencimiento de que cumple con su deber y frente a procesos electorales, revestido de toda serenidad, descarta el favor y el desfavor, y mediante un cumplimiento impersonal de la Ley y de sus disposiciones, da la razón y el derecho a quienes lo tienen; y, esto aun prescindiendo de la época y de las personas que se desempeñan, pues todas las Misiones y Observadores Internacionales que han venido a certificar el desarrollo de los procesos electorales realizados desde 1988, han emitido opiniones, no solo satisfactorias, sino encomiásticas; y, esas Misiones y Observadores han sido del más alto nivel: Organización de Estados Americanos- OEA; Instituto Federal de Elecciones - IFE; Unión Interamericana de Organismos Electorales - UNIORE; Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL; etc. Y los personeros y representantes de los más altos organismos Electorales de América y de España.- Si los más calificados expertos y estudiosos de materia electoral han destacado su fe y confianza en la Función Electoral de Ecuador, hora es que los nacionales: sean sujetos políticos, estructuras sociales, sectores de diversa naturaleza, y los ciudadanos todos, afirmen su confianza plena en que, frente a las elecciones, y en el año presente, en las elecciones próximas, la voluntad ciudadana expresada en el voto estará plenamente garantizada.

Que todos los ecuatorianos tengan la seguridad, el convencimiento que, los candidatos que el Tribunal Supremo Electoral declare triunfantes, serán quienes legítimamente recibieron la mayoría de los votos que fueron depositados para la elección.

La permanencia del Tribunal Supremo Electoral adquiere nuevas características, nuevo compromiso con el inicio de éste, que es año electoral y con elecciones trascendentes: el país elegirá Presidente y Vicepresidente de la República, Representantes al Parlamento Andino, Diputados para integrar la Función Legislativa. La Función Electoral deberá redoblar sus esfuerzos y dedicación para preparar, organizar, dirigir y realizar elecciones que sean libres, diáfanas, inobjectables. El Tribunal sabrá cumplir con su deber ante ésta trascendente elección que puede llegar a ser histórica.

En la labor que realiza el Tribunal Supremo Electoral y que queda brevemente resumida en este Informe, tienen parte decisiva las diferentes Comisiones Permanentes y Especiales, que son las encargadas de estudiar a profundidad cada asunto con ellas relacionado, y presentar sus Informes que sirven para que el Pleno del Tribunal adopte la definitiva resolución en cada caso. Debemos consignar el mayor agradecimiento a los integrantes de esas Comisiones, y cuyos Informes se acompañan al presente, dentro de este volumen.

Igualmente, constituyen base y respaldo del trabajo del Tribunal Supremo Electoral quienes integran la planta de servidores de la Institución, y que con dedicación y abnegado trabajo se sienten profunda y convencidamente unimismados con la Función y con plena conciencia de cuán trascendente tarea se presenta con el inicio del año electoral.

Merecen, igualmente, cumplida gratitud.

Y, la labor de la Función Electoral se completa y se hace posible con el desempeño de los Tribunales Provinciales Electorales, casi todos responsables, sensibles ante su compromiso y entregados al cumplimiento de sus tareas; y, en los casos de excepción que se han presentado, el Tribunal ha procedido a realizar las reorganizaciones que las circunstancias imponían.

La democracia del país, que es sistema de gobierno y cuya perfección todos debemos buscar, a fin de que se traduzca en un sistema de vida, requiere, para alcanzar tal propósito, el empeñoso y responsable empeño de todos, cada cual en el ámbito de su desempeño, comenzando por los Mandatarios y Representantes, cuya sensibilidad y patriotismo, esperamos, se multipliquen frente al gran compromiso de patria. Invocamos igualmente la vocación patriótica, la abnegación y sacrificio, el renunciamiento a personalismos, de los partidos y demás sujetos políticos. Esto, está en su propio interés para que suba el concepto, el criterio que la ciudadanía, el ciudadano mismo, tienen respecto de los políticos. Realicemos una cruzada conjunta que eleve la categoría de lo político; nuestro convencimiento es que el elemento político es determinante y por lo mismo indispensable en el sistema democrático.

En ése superarse, que esperamos, de parte de todos los actores de la democracia, el Tribunal Supremo Electoral superará su propio desempeño, agotará todo el aporte y entrega que pueda dar, esmerará su imparcialidad frente a los actores, llevará al máximo su ilímite respeto al voto ciudadano, y tiene la seguridad, que, en esa forma, contribuirá eficientemente para que el importante proceso electoral del presente año signifique un evento digno de la mejor democracia, con lo que, los Mandatarios y Representantes que se elijan lleguen plenos de legitimidad a su desempeño para el bien de la patria.

Señores Legisladores

Dr. Carlos J. Aguinaga A.
Presidente

Ing. Alfredo Arévalo Moscoso
Vicepresidente

Sr. Juan Aguirre Espinosa
Vocal

Sr. José María Cabascango
Vocal

Dr. Armando Cazar Valenzuela
Vocal

Lcdo. Jorge Valdospinos Rubio
Vocal

Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed
Vocal

INFORME DE LA COMISIÓN JURÍDICA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MEMORANDO No. 067-CJ-TSE-2001

PARA : Señor Dr. Carlos Aguinaga
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DE : Señor José María Cabascango
PRESIDENTE DE LA COMISION JURIDICA
FECHA : Quito, 20 de diciembre de 2001

Por medio de la presente, me permito en mi calidad de Presidente de la Comisión Jurídica, remitir a Usted el Informe de Labores de dicha Comisión durante el año 2001

Atentamente,

SR. JOSE MARIA CABASCANGO
Presidente

INFORME DE LABORES DE LA COMISIÓN JURÍDICA DEL AÑO 2001

INFORME No.: 001-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: SR. Humberto Moscoso Mora
ENTIDAD: Juez Primero de lo Civil de los Ríos
RESUMEN PETICIÓN: Recurso de Amparo Constitucional
BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 155, literal e) de la Codificación
de la Ley
de Elecciones.

CONCLUSIÓN: a) El Pleno del Tribunal Supremo Electoral deberá desechar la solicitud del Ab. Humberto Moscoso Mora, de Revocar la resolución adoptada

en sesión de 4 de octubre del 2000, en la que se sanciona al Ab. Humberto Moscoso Mora. con la destitución de su cargo de Juez Primero de Civil de Los Ríos y la suspensión de los derechos políticos por el tiempo de un año, en aplicación de lo que prescribe el Art. 155, literal e) de la Codificación de Ley de Elecciones, toda vez que su pronunciamiento en este caso, ya constituye Cosa Juzgada.- **b)** Una vez adoptada esta nueva resolución que ratifica la adoptada en sesión de 4 de octubre del 2000, será comunicada entre otras instituciones al Consejo Nacional de la Judicatura, de conformidad a lo que prescribe el Art. 147, inciso tercero de la Codificación a la Ley de Elecciones.

RESOLUCION DEL PLENO: Aprobado el martes 23 de enero del 2001.

INFORME No.:

002-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Sr. Rodrigo Largo y María Estrella Niveló

ENTIDAD:

Movimiento Independiente Alli Causay

RESUMEN PETICIÓN:

Recurso de apelación

BASE LEGAL DEL INFORME:

Control

Arts. 33 y 32 de la Ley Orgánica de
de Gasto electoral.

CONCLUSIÓN: 1. La Sanción impuesta a la señora María Estrella Niveló Tenezaca, es procedente y deberá ratificarse por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en aplicación estricta a lo prescrito en la primera parte del Art. 33 de la Ley Orgánica de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, pues la infracción ya se configuró al no haber cumplido lo contemplado en el Art. 32 del mismo cuerpo legal.- **2.** Se tiene que conminar a los órganos directivos del Movimiento Alli Causay, para que presenten las cuentas, en el plazo adicional de 15 días, conforme a la segunda parte del Art.33 de la Ley de la materia, toda vez que este plazo adicional nunca fue concedido por el Tribunal Provincial Electoral del Cañar.- **3.** La apelación que es materia de este informe debe ser aceptada parcialmente con efecto suspensivo de la sanción impuesta al Movimiento Independiente Alli Kausay, hasta que se cumpla con lo establecido en la segunda parte del Art.33 de cuerpo legal en mención. Para lo cual el Tribunal inferior deberá notificar al Movimiento, concediéndole el plazo de 15 días para que presente las cuentas.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe No. 002-CJ-TSE-2001, de la Comisión Jurídica en sesión de 6 de febrero del 2001.

INFORME No.:

003-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Napoleón Morales

ENTIDAD:

Presidente de la Junta Parroquial Matus,
Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo.

RESUMEN PETICIÓN:

Referente a que tres miembros principales con sus respectivos suplentes de la Junta Parroquial Matus han renunciado a sus cargos.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209 de la Constitución Política, Art.53, inciso 4to. De la Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: En observancia a la norma jurídica contemplada en el Art. 53, inciso 4to. de la Codificación a la Ley de Elecciones, permite aplicar con precisión los resultados de las elecciones del 21 de mayo del 2000, las personas que deben reemplazar a quienes renunciaron y por lo tanto ejercerán las Vocalías 1era. 2da. y 3ra. de la Junta Parroquial de Matus, Cantón Penipe, Provincia de Chimborazo.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, el martes 6 de febrero del 2001.

INFORME No.:

004-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

Se inicie el proceso de declara en extinción al Partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana APRE, listas 13.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 35 literal d), de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: **1.** Que se proceda a extinguir como partido político a Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana PARE, que tiene el número 13, por estar incurso en la disposición legal contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos (anterior Art.37).- **2.** Que se disponga a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, proceda a anular la inscripción del Partido Acción Popular Revolucionaria del Ecuador, APRE, lista 13, de los correspondientes registros. **3.** Que se proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, para que surta los efectos legales del caso **4.** Que se elabore un proyecto de re-

forma al literal d) del Art. 35 de la Ley Codificada en mención, considerando la existencia de 22 provincias e igual número de circunscripciones electorales del país, determinando por lo menos el 50% de ellas como requisito básico de participación para establecer su extinción.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 004-CJ-TSE-2001, en sesión de 6 de marzo del 2001.

INFORME No.: 005-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN: Iniciar el proceso de extinción del Partido Unión Popular Latinoamericana, Listas 16.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 35 literal d), de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda a extinguir como partido político a Unión Popular Latinoamericana, quien tiene el número electoral 16, por estar incurso en la disposición legal contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 196, de 1 de noviembre del 2000, que antes correspondía al Art.37 de la Ley de Partidos Políticos. **2.** Que se disponga a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, proceda a anular la inscripción del Partido Unión Popular Latinoamericana listas 16, de los correspondientes registros. **3.** Que se proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, para que surtan los efectos legales del caso **4.** Que se elabore un proyecto de reforma al literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, considerando la existencia de 22 provincias e igual número de circunscripciones electorales del país, determinando como causal de extinción de un partido político, el hecho de no participar en elecciones pluripersonales, en al menos el cincuenta por ciento del total de provincias existente en el país, al momento de la elección.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 005-CJ-TSE-2001, de la Comisión Jurídica, en sesión de martes 6 de marzo del 2001.

INFORME No.: 006-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:**RESUMEN PETICIÓN:**

Iniciar el proceso de declaración de extinción del Partido Liberal Radical Ecuatoriano, Listas 2.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 35 literal d), de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda a extinguir como partido político al Partido Radical Ecuatoriano, PLRE signado con el número 2, por hallarse incurso en la causal establecida en la disposición legal contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos (anterior Art. 37, literal d) de la Ley de Partidos Políticos.- **2.** Que se disponga a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, proceda a anular la inscripción del Partido Radical Ecuatoriano, PLRE, lista 2, de los correspondientes registros. **3.** Que se proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley Codificada de la materia, para que surtan los efectos legales del caso **4.** Que se elabore un proyecto de reforma al literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos, considerando la existencia de 22 provincias e igual número de circunscripciones electorales del país, determinando por lo menos el 50% de ellas como requisito básico de participación para establecer su extinción.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 006-CJ-TSE-2001, en sesión de 6 de marzo del 2001.

INFORME No.:

007-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:**RESUMEN PETICIÓN:**

Iniciar el proceso de declaración de extinción del Partido Concentración de Fuerzas Populares, listas 4.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 35 literal d), de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda a extinguir como partido político al Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP signado con el número electoral 4, por hallarse incurso en la causal de extinción establecida en la disposición legal contenida en el literal d) del Art. 35 de la Codificación de la Ley de Partidos Políti-

cos (anterior Art.37, literal d) de la Ley de Partidos Políticos).- **2.** Que se disponga a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, proceda a anular la inscripción del Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP, listas 4, de los correspondientes registros. **3.** Que se proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 40 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, para que se surtan los efectos legales del caso.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 007-CJ-TSE-2001, en sesión de 6 de marzo del 2001.

INFORME No.:

08-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 115, inciso segundo y Art. 35, literal c) de la Codificación a la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: En consideración a las disposiciones Constitucionales y legales anteriormente citadas, es criterio de la Comisión Jurídica notificar a los Partidos y Movimientos Políticos con participación nacional que no hayan obtenido el cinco por ciento de votos válidos en las elecciones del 21 de Mayo del 2000, los mismos que, de no alcanzar en las elecciones pluripersonales nacionales próximas a realizarse en el año 2002 el porcentaje mínimo que establece la Constitución Política del Estado en su Art.115 inciso segundo y el Art.35, literal d) de la Ley de Partidos Políticos, se cancelará la inscripción de Art.35 literal c) de la Ley de Partidos Políticos, se cancelará la inscripción de dichos partidos y movimientos políticos del Registro Electoral.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 008-CJ-TSE-2001, en sesión de 6 de marzo del 2001.

INFORME No.:

09-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

Que la Comisión Jurídica, con el apoyo del Se-

critario General, elabore un informe que será conocido por el Pleno.

BASE LEGAL DEL INFORME:

Art. 65 de la Ley de Partidos Políticos (actual art. 63 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos en vigencia); y, Art. 137 de la Constitución Política (actual 209); Art. 58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos vigente.

CONCLUSIÓN: La Comisión Jurídica considera: 1. Que el Tribunal es competente para conocer y juzgar la infracción que se investiga, en virtud de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley de Partidos Políticos (actual Art.63 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos en vigencia; y, Art. 137 de la Constitución Política. (Actual Art.209).- De la acusación particular presentada por el señor Dr. Fernando Aspiazu Seminario en contra el Señor Ramón Yulee y otros, que es materia de la providencia dictada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 8 de diciembre de 1999, de las contestaciones presentadas por el Dr. Ramiro Rivera Molina y Lcdo. Eduardo Mahuad Witt, de los dos cheques que son parte del expediente, de las cuentas remitidas al Tribunal Supremo Electoral por el partido político Democracia Popular y el Lcdo. Eduardo Mahuad Witt, y más diligencias actuadas, se establece: 1. La constancia de la entrega de los tres millones cien mil dólares por parte del señor Doctor Fernando Aspiazu Seminario al señor Ramón Yulee, Eduardo Mahuad Witt y Alejandro Aguayo.- 1.2. Que el aporte del Dr. Fernando Aspiazu Seminario no se efectuó en forma lícita, configurándose la infracción tipificada en el art. 60 de la Ley de Partidos Políticos (actual Art.58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos vigente).- 1.3.- Que los tres millones cien mil dólares aportados, ni el aportante fueron registrados en la cuenta especial que el o los destinatarios de los cheques estuvieron obligados a llevar para permitir el control o revisión de las cuentas por el Tribunal Supremo Electoral, infringiendo también la antes citada disposición.- 1.4.- Que el destino de los fondos solo se conoció cuando el aportante denunció y acusó públicamente de desvío y distracción de fondos puesto que había destinado su aporte para la campaña electoral del Dr. Jamil Mahuad Witt, de la ocultación del aporte y su anónimo como aportante, acusando de tal omisión a la Democracia Popular y solo entonces el país conoció la conducta observada por el aportante y los receptores de los fondos.- 1.5.- Que el Art.60 de la Ley de Partidos Políticos (actual Art. 58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos vigente), prohíbe entregar y recibir ningún aporte si proviene de personas naturales o jurídicas y mantengan

vínculo contractual con el Estado. O de empresas, instituciones o estados extranjeros y lo hace bajo prevención de sufrir una pena; pero permite que cualquier otra persona pueda realizar erogaciones a los partidos políticos y a éstos recibirlos, siempre y cuando se lo haga como donación, lo que no se hizo, violando una vez más el Art. 60 de la Ley de Partidos Políticos vigente); y finalmente para efectos de control, dispone el registro obligatorio de las donaciones en una cuenta especial y faculta al Tribunal Supremo Electoral examinarlas y hasta publicarlas, de lo cual tampoco hay constancia. 1.6.- Por último el Art.60 de la Ley de Partidos Políticos, (actual Art.58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos), tipifica como infracción la violación a las regulaciones y formalidades que exige sobre la procedencia de los aportes, aceptación y entrega, cuantía y monto de la donación con registro obligatorio y establece la pena. 2. De lo expuesto aparece que la conducta del Dr. Fernando Aspiazu Seminario, del Dr. Jamil Mahuad Witt, del Lcdo. Eduardo Mahuad Witt, del Lcdo. Ramón Yulee Changuin, y del partido político Democracia Popular lista 5, se adecúa al tipo de infracción señalada en el referido Art. 60 de la Ley de Partidos Políticos, actual Art. 58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, publicada en el Registro Oficial No. 156, de 1 de noviembre del 2000, y que por tanto merecen ser sancionados con la pena señalada en la misma disposición.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 09-CJ-TSE-2001, en sesión de 8 de marzo del 2001.

INFORME No.:

010-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: La Comisión Jurídica acoge el informe No. 004-DAJ-TSE-2001, y la Conclusión a la que llega el señor Dr. Gustavo Araujo Rocha, de tal forma que, sugerimos que el TSE, brinde el asesoramiento técnico y logístico para que, se lleve a cabo el proceso de consulta y a indicado, siempre y cuando así lo decida la Asamblea General de los miembros de la nacionalidad Tsáchila.- 2.- Que

dicho asesoramiento técnico se lleve a efecto, si el proceso de consulta se halla debidamente financiado por los interesados.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, 010-CJ-TSE-2001, en sesión de martes 3 de abril del 2001.

INFORME No.:

011-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Tribunal Supremo Electoral

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

Dar por conocido el Oficio No. 158-DOP-TSE-2000, suscrito por el Director de Sistemas Informáticos y Director de Organizaciones Políticas, referente a las Elecciones de las Juntas Parroquiales de Patricia Pilar y La Esperanza, de la Provincia de Los Ríos; y , pasar a la Comisión Jurídica, a fin de que presenten un informe al respecto, para ser conocido por el Pleno del Organismo.

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: 1. Que se tome en consideración el informe signado con el No. 158-DOP-TSE-200, que se basa en los datos constantes en el archivo informático del TSE, remitidos por el Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos, según lo cual los ganadores de las elecciones para Juntas Parroquiales en Patricia Pilar y La Esperanza, son las siguientes personas.

PARROQUIA PATRICIA PILAR CANTÓN BUENA FE:

PABLO J. ZAMBRANO BASURTO PRE

DIGNA M. ALVARIO MONCAYO PRE

RAMON S. MENDOZA ALAVA DP

GUSTAVO B. VALVERDE MORALES DP

ALEXANDER R. ZAMBRANO SABANDO PSC

PARROQUIA LA ESPERANZA CANTÓN QUEVEDO

NILO ANTONIO MUÑOZ VELIZ PSC

ROSA MARIA ANZULES ZAMORA PSC

LUIS ALBERTO VELASQUEZ VERA PSC

CARLOS JULIO CEVALLOS QUIROZ DP

ELVITO ALIBERT YANEZ FLORES

DP

1. Que sobre la base de datos de los resultados que dispone el TSE, se proceda a la posesión oficial por parte del Tribunal Provincial Electoral de los Ríos, de las personas que siendo ganadoras aun no han sido posesionadas en calidad de miembros de las Juntas Parroquiales Patricia Pilar y la Esperanza respectivamente, dejándose por tanto sin efecto la posesión efectuada por el mencionado Tribunal a las personas que no constan como ganadores según los datos del archivo informático del TSE, según se indica en el Informe No. 158-DOP-TSE-2000, en mención.

2. Que en futuros procesos electorales, se tome los correctivos necesarios, a fin de que proclamados los resultados en firme, sean remitidos en forma inmeditata, para que el TSE pueda contar con una base de datos fidedigna, precisa y completa, para lo cual se llevará a efecto la correspondiente capacitación, con el objeto de que el proceso de escrutinios se lleve a cabo con la mayor transparencia, celeridad y de conformidad con el marco jurídico aplicable a la materia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: En sesión de 3 de abril, ha resuelto que, el Informe No. 011-CJ-TSE-2001, se desagregue y se presenten dos informes independientes sobre las Juntas Parroquiales de Patricia Pilar y la Esperanza.

INFORME No.:

012-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Ab. Ernesto Fuentes Tapia

ENTIDAD:

Movimiento Independiente Renovación
Democrática

RESUMEN PETICIÓN:

Solicitando asignación de número, aprobación de simbología, reserva y derecho del nombre del Movimiento.

BASE LEGAL DEL INFORME:

Art.70 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos y el Art. 12 del Instructivo para la reserva del nombre, símbolo y asignación del número de los Movimientos Independientes emitido por el Pleno del TSE.

CONCLUSIÓN: En virtud de que el nombre y símbolo del Movimiento Nacional Independiente " Renovación Democrática, cumple con lo dispuesto con el Art. 70 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos y el Art.12 del Instructivos para la reserva del nombre, símbolo y asignación del número de los Movimientos Independientes emitido por el Pleno del TSE, sugerimos que se disponga la co-

correspondiente publicación bajo su costo, en al menos un diario de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues en el presente caso se expone que se trata de un movimiento de carácter nacional; previo el cumplimiento de este requisito, se sugiere que se asigne el número de lista 20, así como también se reserve el nombre y el símbolo conforme lo dispone la Ley.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe en sesión de 3 de abril del 2001.

INFORME No.:

013-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Marco Vinicio Harb

ENTIDAD:

Movimiento Independiente "Realidad 2000".

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita la asignación de número, aprobación de simbología, reserva y derecho del nombre para el Movimiento.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 70 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos y el Art.12 del Instructivo para reserva del nombre, símbolo y asignación del número de los Movimientos Independientes emitido por el Pleno del TSE.

CONCLUSIÓN: En virtud de que el nombre y símbolo del Movimiento Independiente "Realidad 2000", cumple con lo dispuesto con el Art. 70 de la Codificación de la Ley de Elecciones y el Art.12 del Instructivo para la reserva del nombre, símbolo y asignación del número de los Movimientos Independientes emitido por el Pleno del TSE, sugerimos realizar la correspondiente publicación en al menos un diario de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues en el presente caso se trata de un movimiento de carácter nacional; previo el cumplimiento de este requisito, se sugiere que se asigne el número de lista 19, así como también se reserva el nombre y el símbolo conforme dispone la ley.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe en sesión de martes 3 de abril del 2000.

INFORME No.:

0014-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Partido Alianza Nacional, lista 11

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN:

Solicitan el cambio de denominación; Reforma

a sus Estatutos; Actualización de la Declaración de Principios; aprobación de símbolo y su número electoral.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 20, 22 y 27 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Aprobar el nuevo nombre que identifique al Partido Alianza Nacional fusionado con el Movimiento Independiente Libertad por el nombre de Partido Movimiento Libertad, listas 11.- 2. Que se aprueben las Reformas a la Declaración de Principios Ideológicos y la ratificación de su simbología con la nomenclatura al presente informe.- 3. Que se aprueben las Reformas a los Estatutos, con las observaciones contenidas en el Informe No. 130-DOP-TSE-2000, adjunta al presente informe.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Dar por conocido el Informe en sesión de 26 de abril del 2001.

INFORME No.: 015-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Pleno del TSE

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN: En relación con la resolución del Pleno, con el asunto del Partido Político Alianza Nacional, lista 11.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 114 y 115 de la Constitución Política y Arts. 3, 20, 22, 27 y 28 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: Que se apruebe en el Pleno del TSE, el cambio de nombre del Partido Político Alianza Nacional, por el de Partido Político LIBERTAD, por cumplir con las disposiciones legales.- Que se tome en consideración que el cambio de nombre del Partido Político Alianza Nacional por Partido Político LIBERTAD, no implica modificación ni extinción de los derechos y obligaciones derivados de la Ley de Partidos Políticos, adquiridos con anterioridad a la fecha de esta aprobación, entre otras el contenido de la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral sobre la base del Informe No. 08-CJ-TSE-2001, de la Comisión Jurídica.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el Informe, en sesión de 31 de mayo del 2001.

INFORME No.: 016-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Pleno del TSE

ENTIDAD: Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN: Sobre el Expediente Investigativo para determinar irregularidades cometidas en el proceso de empadronamiento realizado por el Tribunal Provincial Electoral de El Oro.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209 de la Constitución Política y Art.20, literal c) de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que se procede a realizar una depuración de la base de datos de digitalización de firmas en base a las declaraciones juramentadas. 2. Que se estudie conjuntamente con el Departamento Técnico los mecanismos más idóneos para que en el tiempo que falte para la realización del próximo proceso electoral, se corrijan los errores existente en la base de datos de digitalización de firmas, producto de la información errada enviada por los Tribunales Provinciales Electorales, con copias de la cédula de ciudadanía, de ser procedente. 3. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral conozca del trabajo realizado por los Vocales Alternos del Tribunal Provincial Electoral de El Oro, previo un informe minucioso y detallado del Departamento Técnico. 4. Que se proceda a la convocatoria a elecciones conforme al calendario aprobado. 5. De las experiencias recabadas de este caso, se destaca la necesidad de exigir fotocopias de la cédulas para todo proceso de empadronamiento y recolección de firmas de respaldo para los diferentes casos de consulta popular y revocatoria del mandato; sólo así se podrá realizar una verificación eficiente y real con la base de datos de firmas digitalizadas que reposa en el archivo del Departamento Técnico del Tribunal Supremo Electoral.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de jueves 21 de junio del 2001.

INFORME No.: 017-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Pleno del TSE

ENTIDAD: Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN: Se presente dos informes independientes sobre las Juntas Parroquiales de Patricia Pilar y la Esperanza.

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: 1. Que se tome en consideración el informe signado con el No.

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

158-DOP-TSE-2000, que se basa en los datos constantes en el archivo informático del TSE, remitidos por el Tribunal Provincial Electoral de los Ríos, según el cual de acuerdo a los resultados firmes los ganadores de las elecciones para la Junta Parroquial de La Esperanza, son las siguientes personas:

PARROQUIA LA ESPERANZA, CANTÓN QUEVEDO:

NILO ANTONIO MUÑOZ VELIZ	PSC
ROSA MARIA ANZULES ZAMORA	PSC
LUIS ALBERTO VELASQUEZ VERA	PSC
CARLOS JULIO CEVALLOS QUIROZ	DP
ELVITO ALIBERT YANEZ FLORES	DP

2. Que sobre la base de datos de los resultados que dispone el TSE, se proceda a la posesión oficial por parte del Tribunal Provincial Electoral de los Ríos, de las personas que siendo ganadoras aún no han sido posesionadas en calidad de miembros de la Junta Parroquial de La Esperanza, dejándose por tanto sin efecto la posesión efectuada por el mencionado Tribunal a las personas que no constan como ganadores según los datos del archivo informático del TSE, según se indica el Informe No. 158-DOP-TSE-2000 en mención.

3. Que en futuros procesos electorales, se tome los correctivos necesarios, a fin de que proclamados los resultados en firme, sean remitidos en forma inmediata, para que el TSE pueda contar con una base de datos fidedigna, precisa y completa, para lo cual se llevará a efecto la correspondiente capacitación, con el objeto de que el proceso de escrutinios se lleve a cabo con la mayor transparencia, celeridad y de conformidad con el marco jurídico aplicable a la materia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de miércoles 11 de julio del 2001.

INFORME No.:

018-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Pleno del TSE

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN:

Se presente dos informes independientes sobre las Juntas Parroquiales de Patricia Pilar y La Esperanza.

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: Que se tome en consideración el informe signado con el No.158-DOP-TSE-2000, que se basa en los datos constantes en el archivo informático del TSE, remitidos por el Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos, según el cual, de acuerdo a los resultados firmes de las elecciones, los ganadores para la Junta Parroquial de Patricia Pilar, son las siguientes personas:

PARROQUIA PATRICIA PILAR CANTON BUENA FE:

PABLO J. ZAMBRANO BASURTO	PRE
DIGNA M. ALVARIA MONCAYO	PRE
RAMON S. MENDOZA ALAVA	DP
GUSTAVO B.VAVERDE MORALES	DP
ALEXANDER R. ZAMBRANO SABANDO	PSC

2. Que sobre la base de datos de los resultados que dispone el TSE, se proceda a la posesión oficial por parte del Tribunal Provincial Electoral de los Ríos, de las personas que siendo ganadoras aún no han sido posesionadas en calidad de miembros de la Junta Parroquial de Patricia Pilar, dejándose por tanto sin efecto la posesión efectuada por el mencionado Tribunal a las personas que no constan como ganadores según los datos del archivo informático del TSE, según se indica en el informe No. 158-DOP-TSE-2000, en mención.

3. Que en futuros procesos electorales, se tome los correctivos necesarios, a fin de que proclamados los resultados en firme, sean remitidos en forma inmediata, para que el TSE pueda contar con una base de datos fidedigna, precisa y completa, para lo cual se llevará a efecto la correspondiente capacitación, con el objeto de que el proceso de escrutinios se lleve a cabo con la mayor transparencia, celeridad y de conformidad con el marco jurídico aplicable a la materia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio del 2001.

INFORME No.:

PETICIONARIO:

ENTIDAD:

019-CJ-TSE-2001

Señor Gilberto Coloma Parreño

Director Provincial del Partido Izquierda Democrática de Pastaza.

RESUMEN PETICIÓN: Hace conocer la expulsión del señor José Francisco Ruiz Armas de las filas del Partido Izquierda Democrática.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 164 del Reglamento General a la Ley de Elecciones y Art. 6 del Instructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que no se proceda al registro de la expulsión del señor José Francisco Ruiz Armas, del Partido Político Izquierda Democrática, pues no se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco jurídico antes invocado. 2. Que se notifique al Partido Izquierda Democrática, la correspondiente resolución.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de miércoles 11 de julio del 2001.

INFORME No.: 020-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Prof. Angel Villacrés y Marco Reinoso, Presidente y Secretario, respectivamente.

ENTIDAD: Partido Movimiento Popular Democrático

RESUMEN PETICIÓN: Sobre la expulsión de las filas de MPD al señor Rómulo Álvarez Pacheco.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 164 del Reglamento General a la Ley de Elecciones y Art. 6 del Instructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: Se sugiere: 1. Que no se proceda al registro de la expulsión del señor Rómulo Álvarez Pacheco, de las filas del Movimiento Popular Democrático, pues no se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco jurídico antes invocado. 2. Que se notifique al Movimiento Popular Democrático, la correspondiente resolución.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio del 2001.

INFORME No.: 021-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Lcdo. Fernando Sánchez

ENTIDAD: Secretario Provincial de la Unión Alfariata -
Frente Radical Alfariata de El Oro.

RESUMEN PETICIÓN: Indican que el Ab. Carlos Almache Olmedo ha
sido expulsado del Partido Unión Alfariata Frente Radical Alfariata.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.164 del Reglamento General a la
Ley de Elecciones y Art.6 del Instructivo para registrar desafilaciones y expulsio-
nes de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: Se sugiere: 1. Que no se proceda al registro de la expulsión
del señor Ab. Carlos Almache Olmedo, de las filas del Partido Unión Alfariata -
FRA, pues no se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco
jurídico antes invocado.- 2. Que se notifique al Partido Unión Alfariata-Frente Ra-
dical Alfariata UA-FRA, la correspondiente resolución.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio
del 2001.

INFORME No.: 022-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Señor Alfonso Pérez Serrano

ENTIDAD: Presidente del Tribunal de Disciplina del
Partido Social Cristiano.

RESUMEN PETICIÓN: Sobre la sanción impuesta al señor al
Ab.Enrique Campozano.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts.40 y 41 de los Estatutos del Partido Social
Cristiano; Art.164, primer inciso del Reglamento General de la Ley de Elecciones
y Art.6 y 7 del Instructivo para registrar desafilaciones y expulsiones de los parti-
dos políticos.

CONCLUSIÓN: Se sugiere se registre la expulsión del Ab. Enrique Campozano
del Partido Social Cristiano, a partir de cuya fecha surtirá los efectos legales que
el caso, amerita, debiéndose notificar tal resolución al Partido Político en mención,
al señor Ab. Enrique Campozano y al señor Director de Organizaciones Políticas
del TSE, para los fines de Ley pertinentes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio
del 2001.

INFORME No.: 023-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Ing. Lucio Gutiérrez

ENTIDAD

Lider Nacional de la Sociedad Patriótica
21 de Enero.

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita se indique si la ficha de afiliación que han elaborado para afiliación y proceder al registro legal de todos los simpatizantes, cumple con los requisitos exigidos por las leyes existentes y que controlan y regulan esta materia.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.13 de la Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del TSE, absuelva la consulta de la Sociedad Patriótica 21 de Enero, en el sentido de que, tanto la ficha de afiliación, así como también el carnet que se adjunto a la petición materia de este informe, si cumple con los requisitos establecidos en la Ley.- 2. Además deberán ceñirse a las disposiciones constantes en los Reglamentos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral dictados para estos casos.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio del 2001.

INFORME No.:

024-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Pleno del TSE

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral.

RESUMEN PETICIÓN:

Se refiere a los expedientes investigativos para determinar si el Partido Conservador Ecuatoriano y la Democracia Popular han recibido aportes irregulares para la campaña electoral de 1998.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 97, numerales 1, 4, 14 y 17; 16 y 209 de la Constitución Política; Arts.58; 63; 68 y 69 de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Tribunal Supremo Electoral es competente para juzgar la infracción contemplada en el Art.58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.- 2. Que con la contestación remitida a la Comisión Jurídica del TSE, por parte de la Contraloría General del Estado, mediante Oficio No.1688808-DCP, de 31 de mayo del 2001, se ha establecido que la compañía Hidalgo & Hidalgo, ha obtenido informe para el proyecto de contrato con la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito; habiendo dicha compañía aportado para la campaña electoral de 1998 al Partido Conservador Ecu-

toriano-Unión Nacional- Uno, la cantidad de ciento cincuenta millones de sucres, equivalente a seis mil dólares de Estados Unidos de América.- 3. Que el aporte de la compañía Hidalgo & Hidalgo, se efectuó en forma ilícita, configurándose la infracción tipificada en el Art.58 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, pues teniendo vínculo contractual con el Estado Ecuatoriano, estaba impedida de realizar cualquier tipo de aporte o donación a partido político alguno.- 4. Que de todos estos antecedentes, se puede establecer que, tanto la Compañía Hidalgo & Hidalgo a través de quien lo representa legalmente y el Partido Conservador Ecuatoriano, Unión Nacional- Uno, han incurrido en la infracción tipificada en el R.O. No156, del 1 de noviembre del 2000, y que por lo tanto merecen se les imponga la pena señalada en dicha disposición legal.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 11 de julio del 2001.

INFORME No.:

025-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Ramiro Rivera Molina

ENTIDAD:

Presidente Nacional del Partido Democracia Popular.

RESUMEN PETICIÓN:

Comunican sobre la expulsión del Dr. Reynaldo Yanchapaxi Cando, del Partido por haber cometido infracciones políticas extremadamente graves.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones, en concordancia con el Art.6 del Instructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los partidos políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda al registro de la expulsión del señor Reynaldo Yanchapaxi Cando, de las filas del Partido Político Democracia Popular - Unión Demócrata Cristiana, listas 5, pues se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco jurídico antes invocado. 2. Que se notifique al Partido Político Democracia Popular - Unión Demócrata Cristiana, listas 5,; y, al señor diputado Reynaldo Yanchapaxi Cando, con la correspondiente resolución, así como también al señor Director de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, para que surtan los efectos legales que el caso amerita.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 25 de julio

del 2001.

INFORME No.: 026-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: Señor Alfonso Pérez Serrano
ENTIDAD: Presidente del Tribunal Nacional de Disciplina del Partido Social Cristiano.

RESUMEN PETICIÓN: Comunica sobre la expulsión de las filas del Partido Social Cristiano al Ab.Hugo Quevedo Montero, Diputado por la Provincia de El Oro ante el H. Congreso Nacional.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.114 de la Constitución Política; Arts. 1 y 2 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; Art.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones y Arts.6 y 7 del Instructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda al registro de la expulsión del señor Ab.Hugo Quevedo Montero, Diputado por la Provincia de El Oro, de las filas del Partido Social Cristiano, listas ó, pues se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco jurídico antes invocado.- 2. Que se notifique al Partido Social Cristiano, al señor diputado Ab.Hugo Quevedo Montero, la correspondiente resolución, así como también al señor Director de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, para que surtan los efectos legales que el caso amerita.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 25 de julio del 2001.

INFORME No.: 027-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: Pleno del TSE
ENTIDAD: Tribunal Supremo Electoral.
RESUMEN PETICIÓN: Dar por conocida la Primera discusión de la denuncia penal presentada por parte del Tribunal Supremo Electoral, en contra de los señores ex Vocales del Tribunal Provincial Electoral de El Oro, que participaron en el proceso de empadronamiento para la elección de los Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 24, 193 y 194 de la Constitución Política; Arts.42 y sgtes. del Código de Procedimiento Penal.

CONCLUSIÓN: 1. Que se delegue al Dr. Carlos Aguinaga, Presidente del Tribunal Supremo Electoral, para que presente la denuncia respectiva a la brevedad posible, acorde a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en actual vigencia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 1 de agosto del 2001.

INFORME No.:

028-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señores Econ. Manuel Villafuerte y
Dr. Franklin Realpe

ENTIDAD:

Director y Subdirector del Movimiento
Independiente "Somos Rumiñahui"

RESUMEN PETICIÓN:

Solicitan reserva del nombre del Movimiento, con el número 31 y la simbología del Rostro del General Rumiñahui.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.70 Ley de Elecciones; Arts.11, 12, 13 y 14 del Instructivo para la reserva de nombre, símbolo y asignación de número de los Movimientos Independientes.

CONCLUSIÓN: Sobre lo esencial de la petición del Movimiento Independiente "Somos Rumiñahui", es necesario que, se le notifique que, previamente debe determinar con precisión lo siguiente: Si el Movimiento Independiente "Somos Rumiñahui", va a tener una participación nacional, provincial, cantonal o parroquial? Y, además que, adjunte un arte o logotipo con todas las características que menciona en la petición, para que quede debidamente singularizado su símbolo. Con lo cual, de acuerdo al caso, se aplicará el marco jurídico específico de conformidad con las normas anotadas anteriormente.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 1 de agosto del 2001.

INFORME No.:

029-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Manuel Minuche Trujillo

ENTIDAD:

RESUMEN PETICIÓN: Solicita se le reintegre a las funciones de Vocal Principal del Tribunal Provincial Electoral de El Oro.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.209 de la Constitución Política; Arts.18, 20, literal c) y 91 de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, se ratifique en su resolución adoptada en sesión de 21 de junio del 2001, y deseche la solicitud del señor Dr.Manuel Minuche, por improcedente, ya que dicha resolución está ejecutoriada y pasada en Autoridad de Cosa Juzgada. 2. Que se notifique la respectiva resolución al señor Dr. Manuel Minuche y al Tribunal Provincial Electoral de la Provincia de El Oro, a efectos de que, se reafirme la seguridad jurídica de lo resuelto por el Pleno del TSE, en este caso.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 1 de agosto del 2001.

INFORME No.: 030-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Señor Ciro Guzmán

ENTIDAD: Director Nacional del Movimiento Popular Democrático.

RESUMEN PETICIÓN: Comunica de la expulsión de las filas del MPD al Diputado Edgar Iván Rodríguez, por haber traicionado a los principios, la línea política y las orientaciones del Partido.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.114 de la Constitución Política; Arts.1 y 2 de la Codificación a la Ley de Elecciones; Art.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones y Arts.6 y 7 del Instructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda al registro de la expulsión del señor diputado Edgar Iván Rodríguez, de las filas del Movimiento Popular Democrático, pues se ha cumplido con todos los requisitos contemplados en el marco jurídico antes invocado.- 2. Que se notifique la correspondiente resolución al Partido Movimiento Popular Democrático, al señor diputado por la Provincia del Carchi, Edgar Iván Rodríguez, y también al señor Director de Organizaciones Políticas del TSE, para fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de agosto del 2001.

INFORME No.:

031-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Marco Vinicio Harb

ENTIDAD:

Director Nacional del Movimiento "Realidad 2000"

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita al Tribunal Supremo Electoral los formularios correspondientes para la recolección de firmas, con miras a participar en las elecciones general del ese año. Los formularios no fueron utilizados y permanecen bajo custodia y responsabilidad de Realidad 2000.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 1 de Reglamento para la entrega y procesamiento de los formularios de recepción de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes.

CONCLUSIÓN: 1. Que se niegue la solicitud expuesta por el señor Marco Vinicio Harb, Director Nacional del Movimiento Independiente Realidad 2000, para utilizar los formularios de recolección de firmas que no fueron utilizadas por dicho movimiento para las elecciones del 21 de mayo de 1998, por ser improcedente.- 2. Que se notifique al Movimiento Independiente Realidad 2000, en la persona de su Dirección Nacional, señor Marco Vinicio Harb, a fin de que para el nuevo proceso electoral observe plenamente, la norma jurídica contemplada en el Art. 1 del Reglamento para la entrega y procesamiento de los formularios de recepción de firmas de respaldo o adhesión a candidaturas de independientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de agosto del 2001.

INFORME No.:

032-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Ramiro Rivera e Ing. Pedro Salas Montalvo.

ENTIDAD:

Presidente Nacional y Secretario General del Partido Democracia Popular.

RESUMEN PETICIÓN:

Comunicación sobre la expulsión de las filas del Partido Democracia Popular del diputado Juan Cantos Hernández por haber cometido las infracciones políticas tipificadas en el Art. 46 del Estatuto Partidario, numerales 1, 2 y 3.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.114 de la Constitución Política; Arts.1 y 2 de la Codificación a la Ley de Elecciones; Art.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Ratificar la resolución adoptada por unanimidad por el Pleno del Tribunal Provincial Electoral de Chimborazo, adoptada en sesión de 2 de agosto del 2000, en que se niega la solicitud presentada por el señor Juan Cantos Hernández, de desafiliarse de las filas del Partido Político Democracia Popular.- 2. Que se deseche la solicitud de desafiliación de la Democracia Popular por parte del señor Juan Cantos Hernández, en observancia de lo que dispone el Art.52 de los Estatutos de dicho Partido Políticos y en virtud de que dicha solicitud no fue presentada personalmente por el peticionario como lo dispone el Art.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones. 3. Que se disponga la inscripción de la expulsión del señor diputado por la Provincia de Chimborazo, señor Juan Cantos Hernández, de las filas del Partido Democracia Popular - Unión Demócrata Cristiana lista 5, ya que se han cumplido con todas las normas jurídicas aplicables a casos de esta naturaleza.- 4. Que se notifique la respectiva resolución del Pleno del Tribunal Supremo Electoral al Partido Político Democracia Popular - Unión Demócrata Cristiana, lista 5; al señor Juan Cantos Hernández, Diputado por la Provincia de Chimborazo; y al señor Director de Organizaciones Políticas del Máximo Organismo Electoral, para fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de agosto del 2001.

INFORME No.:

033-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Enrique Camposano Núñez

ENTIDAD:

Diputado por la Provincia del Guayas

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita la revocatoria de la resolución del Pleno del Tribunal Supremo Electoral adoptada en sesión de miércoles 11 de julio del 2001.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts.209 y 124 de la Constitución Política, Arts. 1, 2 y 20, literal n) de la Codificación a la Ley de Partidos Políticos; Arts.164 del Reglamento General de la Ley de Elecciones; y Arts. 6 y 7 del Ins-

tructivo para registrar desafiliaciones y expulsiones de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, ratifique su resolución adoptada en sesión de 11 de julio del 2001, en que resuelve registrar la expulsión del Abg. Enrique Camposano, de las filas del Partido Social Cristiano.- 2. Que se deseche por impoedente, la solicitud de revocatoria de la resolución adoptada por el Pleno del TSE en sesión de 11 de julio del 2001, planteada por el Ab. Enrique Camposano.- 3. Que se notifique la respectiva resolución, al Ab. Enrique Camposano, al partido Social Cristiano y al señor Director de Organizaciones Políticas del Máximo Organismo Electoral.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 8 de agosto del 2001.

INFORME No.:

034-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Econ. Ramiro González

ENTIDAD:

Vicepresidente Provincial de Izquierda Democrática

RESUMEN PETICIÓN:

En relación al recurso de apelación en contra de la calificación de la lista de candidatos a miembros de la Junta Parroquial de Valle Hermoso del Partido Unión Alfarista FRA.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 26, 98, 101, numeral 2 de la Constitución Política; Art. 142, literal a) de la Ley de Régimen Municipal; Arts. 1, 2, y 3, literal g) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Art. 56, literal e) de la Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Ratificar la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, en sesión de 25 de julio del 2001, en que resolvió calificar la lista de candidatos a Miembros de la Junta Parroquial de Valle Hermoso, Cantón Santo Domingo de los Colorados, presentada por el Partido Unión Alfarista - FRA y por lo tanto desechar el recurso de apelación planteada por el señor Econ. Ramiro González, Vicepresidente Provincial de Partido Izquierda Democrática, contra la calificación de las candidatura de Regis Manuel Bravo López y la lista Unión Alfarista - FRA.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de agosto del 2001.

INFORME No.: 035-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Señor Dr. Jorge Sánchez Armijos

ENTIDAD: Presidente Provincial del Partido Izquierda Democrática en El Oro.

RESUMEN PETICIÓN: Presenta el recurso de apelación de conformidad con el Art.59 del Reglamento General de la Ley de Elecciones apela a la calificación de la candidatura del señor Arnulfo Egberto Carvallo Navarrete, para la Junta Parroquial de Sinsao, del Cantón Zaruma, por el Movimiento Pachakutik.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 26 y 98, incisos 2do. y último de la Constitución Política; Art.56, literal e), numeral 4 de la Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: Que se deseche el recurso de apelación a la calificación de la candidatura del señor Arnulfo Egberto Carvallo Navarrete, para la Junta Parroquial de Sinsao, Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, por el Movimiento Pachakutik Nuevo País, planteada por el señor Dr. Jorge Sánchez Armijos, Director Provincial de la Izquierda Democrática de la Provincia de El Oro, por cuanto no se ha justificado que el candidato en mención haya incumplido el requisito contemplado en el Art.56, literal e), numeral 4, de la Codificación de la ley de Elecciones.- Que se notifique, la correspondiente resolución a las Organizaciones Políticas en forma inmediata, para fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de miércoles 8 de agosto del 2001.

INFORME No.: 036-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Señor Carlos González Albornoz

ENTIDAD: Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del H. Congreso Nacional.

RESUMEN PETICIÓN: Solicitando se informe por escrito sobre el expediente que se hizo llegar a esa Comisión, contentivo de la documentación presentada por el doctor Averroes Bucaram Zaccida.

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: Con relación al proceso materia de la acción de amparo constitucional signado con el No. 144-2001-A, planteada por el Dr. Averroes Bucaram Záccida, Jefe de Acción Política del Partido Concentración de Fuerzas Populares, en contra de la resolución del Pleno del Tribunal Supremo Electoral, adoptada en sesión de 6 de marzo del 2001, y cuyo conocimiento correspondió al señor Juez Duodécimo de los Civil de Guayaquil, debo indicar que, habiéndose dictado la correspondiente sentencia en esta causa, tiene que ser resuelta por el Tribunal Constitucional, resolución que estamos esperando”.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Conocido en sesión de 5 de septiembre del 2001.

INFORME No.:

037-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Juan Pacurucu Riera y Lic. Laura Armas,
Presidente y Secretario, respectivamente.

ENTIDAD:

Partido Movimiento Popular Democrático

RESUMEN PETICIÓN:

Solicitan la inscripción de la nueva Directiva Nacional del Partido Movimiento Popular Democrático.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 114 de la Constitución Política; Arts. 22 de la Codificación a la Ley de Partidos Políticos; Art. 13 del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos; Arts. 1 y 2 del Instructivo para la inscripción de Directivas Nacionales y Provinciales de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Acogiendo el informe de la Dirección de Organizaciones Políticas, sugerimos que, se proceda a aprobar la reforma de los Estatutos del Partido Político Movimiento Popular Democrático.- 2. Que se proceda a la inscripciones de la nueva Directiva Nacional del Movimiento Popular Democrático, presidida por el señor Prof. Gustavo Terán Acosta, nombrada en la XIII Convención Nacional del partido político en mención, celebrada el 20 y 21 de julio del año en curso en la ciudad de Cuenca.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de miércoles 5 de septiembre del 2001.

INFORME No.:

038-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Dr. Ramiro Aguilar Torres

ENTIDAD: Abogado Patrocinador del señor Eduardo Mahaud Witt.

RESUMEN PETICIÓN: Solicitando aclaración de resolución de 8 de marzo del 2001

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 209 y 24, numeral 13, Constitución Política de la República; Art.68 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: El Pleno del Tribunal Supremo Electoral adoptó una resolución amparada en la Constitución Política de la República y la Codificación de la Ley de Partidos Políticos, por lo que en el presente caso no amerita ninguna aclaración, tomando en consideración, además que, el Máximo Organismo Electoral no es una entidad de consulta sino de juzgamiento.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de martes 18 de septiembre del 2001.

INFORME No.: 039-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Dr. Jacinto Velásquez Herrera y Abg. Luis Santillán.

ENTIDAD: Movimiento Político Transformación Social Independiente.

RESUMEN PETICIÓN: Solicita la reserva y derecho del nombre. Aprobación de la simbología y reserva del número.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.23, numeral 19, Arts. 98, inciso segundo; y, Art.209 de la Constitución Política, Art.70,, Codificación de la Ley de Elecciones; Art.49, Reglamento General a la Ley de Elecciones, Arts.11, 12 y 13 del Instructivo para la reserva de nombre, símbolo y asignación de número de los Movimientos Independientes y Art.8 del Reglamento Relativo a formularios de firmas de adhesión a candidaturas independientes y formularios para inscripción de candidaturas.

CONCLUSIÓN: 1. Que se notifique al señor Dr. Jacinto Velásquez Herrera, Director General del Movimiento Político Transformación Social Independiente, a efectos de que, previo a la aprobación de la denominación del Movimiento Político Transformación Social Independiente, presente al Tribunal Supremo Electoral, una nueva sigla de su organización política que no tenga ninguna identidad con las siglas del Tribunal Supremo Electoral ni de los Tribunales Provinciales Electorales del País.- 2. Que, se le asigne el No.22, al Movimiento Político Transformación Social Independiente.- 3. Que se apruebe los símbolos del Movimiento Polí-

tico Transformación Social Independiente.- 4. Que, una vez aprobada la solicitud del Movimiento Político Transformación Social Independiente, se procede a cumplir con la correspondiente publicación a su costa, conforme a lo dispuesto en el Art.13 del Instructivo para la reserva de nombre, símbolo y asignación de número de los Movimientos Independientes, en al menos un diario de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues en el presente caso se expone que se trata de un movimiento de carácter nacional.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Conocido en sesión de martes 18 de septiembre del 2001.

INFORME No.:

040-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señores Errol Cartwright, Dr. Germán Dalgo, Director Nacional y Secretario Ejecutivo, del partido Frente Radical Alfarista, lista 14.

ENTIDAD:

Partido Unión Alfarista - FRA.

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita la inscripción de la nueva Directiva Nacional del Partido presidida por el Ing. Errol Cartwright Betancourt.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.114, Constitución Política; Art.22, Codificación de la Ley de Partidos Políticos; Art 13, Reglamento de la Ley de Partidos Políticos; Arts 1 y 2 del Instructivo para la inscripción de Directivas Nacionales y Provinciales de los Partidos Políticos.

CONCLUSIÓN: 1. Que se proceda a la inscripción de la nueva Directiva Nacional del Partido Político Unión Alfarista -FRA, listas 14, electa en la Convención Nacional celebrada el 9 de junio del 2001, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.- 2. Que se notifique la correspondiente resolución al Partido Político Unión Alfarista - FRA, listas 14, en su casillero electoral que tiene asignado en el Máximo Organismo Electoral; así como también a la Dirección de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, para fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Conocido en sesión de miércoles 3 de octubre del 2001.

INFORME No.:

041-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Pleno del Tribunal Supremo Electoral.

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN:

Expediente investigativo a los problemas surgi-

dos por la no entrega oportuna de formularios al Partido Político Unión Alfarista - FRA, para inscribir candidatos a miembros de la Junta Parroquial Rural de San José de Raranga, Cantón Sigsig, Provincia del Azuay, para las elecciones del 23 de septiembre del 2001.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209, Constitución; Art.20, literal c); 23, literal c). Codificación de la Ley de Elecciones; Art.8, literal a), c) y k); 38, literal a), b); Art.2, literal c), j); 3, literal c); 24, literal a) y b); y, 34, literal b) del Reglamento Interno del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales.

CONCLUSIÓN: 1. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral debe conminar a la señora Presidenta y a los señores Vocales del Tribunal Provincial Electoral del Azuay a que observen a plenitud todas las normas Constitucionales, legales, reglamentarias y administrativas, en el cumplimiento de sus funciones.- 2. Es un imperativo que, se sienten precedentes administrativos internos en el Organismo Provincial, a efectos de corregir esta clase de conductas de funcionarios que, cometen esta clase de faltas, debiéndose determinar las respectivas responsabilidades por la no entrega oportuna al Partido Político Unión Alfarista - FRA, de los formularios de inscripción de candidaturas para miembros de la Junta Parroquial de San José de Raranga, del Cantón Sigsig, Provincia del Azuay.- 3. La Comisión Jurídica sugiere se realice un llamado de atención a la Presidenta del Tribunal Provincial Electoral del Azuay, por la negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, alertándole que de presentarse hechos como los sucedidos, se procederá a la destitución de quién incurra en estas infracciones que atenta contra la libertad de participación democrática de los entes políticos, produciendo intranquilidad e inseguridad en la colectividad, lo cual acarrea desconfianza en la Función Electoral y por ende desestabilidad del sistema democrático.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 4 de octubre del 2001.

INFORME No.:

042-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

El Pleno del TSE

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN:

Dar por conocido el contenido de los oficios Nos. 173 y 176-STEa, suscritos por la señora Dra. Dalia Clavijo Barahona, Secretaria Ad-Hoc del Tribunal Provincial Electoral del Azuay, referente al Sumario

Administrativo de la Abg. Esperanza Vega Zamora; y, al respecto se dispone, que por Secretaría General, se pase dichos documentos a la Comisión Jurídica para informe.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.24, numerales 1, 7, 10, 11, 12 y 13 de la Constitución Política; Art.23, literal h), Codificación de la Ley de Elecciones; Art. 38, literal i) del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales; y, Arts.34, numeral 16; 32, numeral 4; 7, numeral 7; 37; y, 85 literal f), del Reglamento de Administración de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales.

CONCLUSIÓN: 1. Que se devuelva al Tribunal Provincial Electoral del Azuay, el expediente materia del sumario administrativo seguido en contra de la señora Ab. Esperanza Vega Zamora, Secretaria Titular de dicho Organismo Electoral, ya que, el recurso de apelación interpuesto en esta causa, es improcedente.- 2. Que se conmine a los miembros del Pleno del Tribunal Provincial Electoral del Azuay a observar a cabalidad las normas reglamentarias que regulan los sumarios administrativos, ya que, no se pueden conceder recursos que no constan expresamente en el ordenamiento jurídico.- 3. Que, en el futuro se establezca con total certeza la relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción que debe cumplir el servidor electoral, puesto que, en el presente caso, sanción es muy leve en comparación con la gravedad de la falta cometida, al no haberse entregado en forma oportuna e injustificada los formularios para la inscripción de los candidatos de Partido Político Unión Alfarista - FRA, listas 14, para participar en la elección de miembros de la Junta Parroquial de San José de Raranga, del Cantón Sigsig, de la Provincia del Azuay, con lo cual se coartó el derecho a una participación en igual de condiciones en un proceso electoral, contribuyendo definitivamente a crear un ambiente de inestabilidad del sistema democrático imperante en el país.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe No. 042-CJ-TSE-2001, en sesión de 4 de octubre del 2001.

INFORME No.:

043-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Santiago Nivela Cruz

ENTIDAD: Secretario del Tribunal Provincial Electoral de los Ríos.

RESUMEN PETICIÓN: Se remite el oficio No. 097/S/TPELR, solicita se emita un criterio jurídico respecto del planteamiento por el señor Walter Carriel Salazar, Ex - Alcalde de Vinces, que consta en un escrito y manifiesta que el señor Francisco Díaz Ronquillo, es absoluto ganador de las elecciones en la Parroquia de Antonio Sotomayor, del Cantón Vinces, de dicha provincia, por lo que dice tiene derecho a ejercer la Presidencia de la Junta Parroquial de dicha jurisdicción territorial, argumento que se basa en el Art.7 y disposiciones generales 2 y 3 de la Ley de Juntas Parroquiales Rurales.

BASE LEGAL DEL INFORME:

CONCLUSIÓN: Se sugiere que se conteste señalando que las Juntas Parroquiales Rurales elegidas el 21 de mayo del 2000 podría haber designado como Presidente a cualquier de sus miembros; pero en aquellas Juntas elegidas después del 27 de octubre del 2000, fecha de la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la Presidencia la ocupará el miembro que obtuvo la mayor votación, a menos que por unanimidad se decida elegir a otro miembro. Notificar con la presente resolución al Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 3 de octubre del 2001.

INFORME No.: 044-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: El Pleno del TSE

ENTIDAD: Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN: Dar por conocidos los oficios N° 05-UCGPE-001 y 06-UCGPE-001, suscritos por los miembros de la Unidad de Control de Gasto y Propaganda Electoral y, al respecto, se dispone pasar a la Comisión Jurídica para que se presente el informe que será conocido por el Pleno del Organismo.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209 y 116 de la Constitución Política; Arts. 1, 2, 3, 17, 29, 30, 31, 32, 33 y 35, Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; Arts. 1, 2, 5, 22, 23 y 25, Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica y de la Propaganda Electoral.

CONCLUSIÓN: Se sugiere: 1. Que se revoque la resolución del Pleno del Tribu-

nal Provincial Electoral de Loja, adoptada en sesión de 26 de diciembre del 2000, en virtud de que no se han observado las normas que rigen el juzgamiento del gasto electoral, toda vez que, ni siquiera se ha contado con la comparecencia o intervención del Procurador Común y/o el Representante del Manejo económico de la campaña electoral de la Alianza formada entre el partido Roldosista Ecuatoriano y la Alianza Cívica Progresista en el Cantón Espíndola de la Provincia de Loja.- 2. Que se aplique el requerimiento contemplado en el Art. 32 de la Ley de Control del Gasto y de la Propaganda Electoral, al responsable del manejo económico de la campaña electoral de la alianza política ya mencionada, a fin de que presente las respectivas cuentas del gasto electoral.- 3. Que se notifique la respectiva resolución del Máximo Organismo Electoral, tanto al Tribunal Provincial Electoral de Loja, así como también al Responsable del manejo económico de la campaña electoral de la Alianza formada entre el Partido Roldosista Ecuatoriano y la Alianza Cívica Progresista en el Cantón Espíndola de la Provincia de Loja, para fines legales consiguientes.

RESOLUCION DEL PLENO: Aprobado en sesión de 3 de octubre del 2002.

INFORME No.:

045-CJTSE-2001

PETICIONARIO:

El Pleno del TSE

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN:

"Dar por conocidos los oficios Nos. 05-UCGPE-001 y 06-UCGPE-001, suscritos por los miembros de la Unidad de Control de Gasto y Propaganda Electoral y, al respecto, se dispone pasar a la Comisión Jurídica para que se presente el informe que será conocido por el Pleno del Organismo.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209 y 116 de la Constitución Política; Arts. 1, 2, 3, 17, 29, 30, 31, 32, 33 y 35, Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral; Arts. 1, 2, 5, 22, 23 y 25, Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica y de la Propaganda electoral.

CONCLUSIÓN; Se sugiere lo siguiente: 1. Que se revoque la resolución del Pleno del Tribunal Provincial Electoral de Loja, adoptada en sesión de 26 de diciembre del 2000, en virtud de que no se han observado las normas que rigen el juzgamiento del gasto electoral.- 2. Que se disponga la aplicación de la disposi-

ción contemplada en el Art. 32 de la Ley de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, a fin de que quien fue designado responsable del manejo económico de la campaña electoral de los candidatos a Alcalde y Concejales del Partido Político Izquierda Democrática, en el Cantón Macará, presente las respectivas cuentas del gasto electoral en el plazo de ley.- 2. Que se notifique la respectiva resolución del Máximo Organismo Electoral, tanto al Tribunal Provincial Electoral de Loja, y al Partido Político Izquierda Democrática, para los fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 3 de octubre del 2001.

INFORME No.:

046-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Prof. Pablo Martínez

ENTIDAD:

Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago

RESUMEN PETICIÓN:

Se remite el oficio N° S-237-TEMS-01, en el que se hace las consultas planteadas por los señores Presidentes de las Juntas Parroquiales Sinaí y Sangay, de los Cantones de Morona y Palora, respectivamente.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 209 y 99, Constitución Política; Arts. 105, 106 y 99, Codificación de la Ley de Elecciones; Arts. 10 y 11, Reglamento General a la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que, una vez asignados los escaños a través del método D'Hont; y, de presentarse posteriormente la circunstancia de la falta temporal o definitiva del vocal suplente que tiene derecho a ejercer.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

047-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Sr. Kléber Paz y Miño Flores

ENTIDAD:

Alcalde del Cantón Santo Domingo de los Colorados

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita al Tribunal Supremo Electoral, para que en la consulta popular dispuesta por la Presidencia de la República sobre las autonomías, se incluya una papeleta en la que conste la pregunta ¿QUEREMOS

SER PROVINCIA INCLUYENDO LA CONCORDIA?. Los costos que correspondan a esta consulta que propone esta Municipalidad, será financiada, con nuestros recursos propios.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 103, 106, 107, 147, 224 y 228 de la Constitución Política; Arts. 115, 119 y 120 de la Codificación de la Ley de Elecciones; Art. 4 de la Ley de Régimen Provincial; Arts. 1 y 2 del Decreto Supremo N° 1189: R.O. N° 291, de 9 de marzo de 1977.

CONCLUSIÓN: La Comisión Jurídica determina que en base al marco jurídico invocado, es atribución privativa del Presidente de la República el presentar proyectos de Ley para la modificación de la división político administrativa del país, debiendo observarse en estos casos, la legislación vigente, esto es, la Ley de División Territorial y el Decreto Supremo N° 1189, a fin de que el Congreso Nacional previo el trámite respectivo, y de ser procedente disponga la creación de una nueva provincia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión del 13 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

048-CJTSE-2001

PETICIONARIO:

Sr. Miguel Iluco

ENTIDAD:

Coordinador Nacional del Movimiento
Independiente Unidad Plurinacional Pachakutik

RESUMEN PETICIÓN: Se notifica al Tribunal Supremo Electoral la resolución adoptada en sesión de 2 de agosto del 2000, relativa a la expulsión del Diputado por la Provincia de Morona Santiago, señor Káiser Arévalo, de ese Movimiento.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 26, 98, 115 de la Constitución Política; Art. 20, literal n) de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; Arts. 163, 164 y 165 del Reglamento General a la Ley de Elecciones. Art. 30, literales a), c) y m) del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Máximo Organismo Electoral, en virtud de que no existe norma jurídica que faculte al Tribunal Supremo Electoral el proceder al registro de desafiliaciones y expulsiones de los Movimientos Políticos Indepen-

dientes, resuelve dar por conocidos el oficio N° KAB-DMS-123-2000, de 3 de agosto del 2000, remitido por el Diputado Káiser Arévalo Barzallo, al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el que expone su desafiliación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País, debiendo correrse traslado al Coordinador Nacional de dicho Movimiento Político Independiente; y, el oficio N° SG-PP-2000 Of. 00108MLL, de 3 de agosto del 2000, dirigido por el señor Miguel Llucu, Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País, al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, en el que comunica la expulsión de dicha organización política del Diputado Káiser Arévalo, a quien se correrá traslado con la resolución; a efecto de que se sujeten en ambos casos, a las disposiciones internas que rigen la vida del Movimiento Político Independiente indicado.- 2. Se notificará la resolución que adopte el Máximo Organismo Electoral, al Diputado Káiser Arévalo y al Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País.

RESOLUCION DEL PLENO: Aprobado en sesión de 8 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

049-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Sr. Angel Gonzalo Freire Urrutia

ENTIDAD:

Miembro de la Junta Parroquial de la Parroquia Rural La Unión del Cantón Babahoyo

RESUMEN PETICIÓN: Solicita copias calificadas de los resultados de la elección del 21 de mayo del 2000, a Miembro de a Junta Parroquial Rural de la Unión del Cantón Babahoyo de la Provincia de Los Ríos y que se le confiera la credencial correspondiente de Miembro Electo en esta Jurisdicción.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 99 y 209 de la Constitución Política; Arts. 10, 113, 52, 105, 106, 107, 108, 189 y 191 de la Codificación de la Ley de Elecciones y Arts. 24, 97 y 115 del Reglamento General de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que tomando en consideración la base de datos del Tribunal Supremo Electoral se disponga que el Tribunal Provincial Electoral de Los Ríos proceda a posesionar legalmente al señor ANGEL GONZALO FREIRE URRUTIA, en calidad de miembro de la Junta Parroquial de la Parroquia Rural La Unión, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, dejándose sin efecto el nombramiento del señor Carlos Benedicto Peralta Toasa, pues no tiene la votación que, se hace

constar en el reporte del Organismo Provincial Electoral de Los Ríos para que se proceda a su ejecución inmediata, en el plazo de 24h00, luego de recibida la notificación.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe N° 049-TSE-2001, en sesión de 13 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

050-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Sr. Miguel Llucó

ENTIDAD:

Coordinador Nacional del Movimiento

Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País

RESUMEN PETICIÓN: Expone la resolución del Consejo Político Nacional de Movimiento, separarle definitivamente del cargo de Coordinador Provincial del Movimiento Pachakutik Nuevo País, al señor Manuel Peñafiel Falconí y Expulsar al señor Manuel Peñafiel Falconí de las filas del Movimiento en aplicación del Art. 48 de los Estatutos por sus repetidas actuaciones indisciplinadas y divisionistas, reñidas con sus principios políticos, así como por las evidentes faltas y perjuicios ocasionados al Movimiento.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 26, 98 y 115 de la Constitución Política; Art. 20, literal n); Arts. 163, 164 y 165 del Reglamento General a la Ley de Elecciones y Art. 30, literales a), c) y m) del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Máximo Organismo Electoral, en virtud de que no existe norma jurídica que faculte al Tribunal Supremo Electoral, en virtud de que no existe norma jurídica que faculte al Tribunal Supremo Electoral proceder a la inscripción de desafiliaciones y expulsiones de los miembros de los Movimientos Políticos Independientes, resuelva dar por conocido el oficio N° 0027-CEN-MLT de 3 de agosto del 2001, dirigido por el señor Miguel Llucó Tixe, Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País, al señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral, mediante el cual comunica la expulsión del señor Manuel Peñafiel Falconí de las filas de dicho movimiento, a quien se correrá el respectivo traslado, a efectos de que se sujete a las normas internas que rigen la vida de la organización política en mención.- 2. Se notificará la resolución correspondiente al Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 8 de noviembre del 2001.

INFORME No.: 051-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: Sr. Abg. Gonzalo Zapata Mora
ENTIDAD: Director Nacional del Movimiento Independiente "Despierta Ecuador"
RESUMEN PETICIÓN: Solicita la reserva de nombre, símbolo y asignación de número.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 115, inciso 2do. De la Constitución Política; Art. 70 de la Codificación de la Ley de Elecciones; Art. 49 del Reglamento General a la Ley de Elecciones; Art. 8, del Reglamento Relativo a Formularios de Firmas de Adhesión a Candidaturas Independientes y Formularios para la Inscripción de Candidaturas; y Arts. 11, 12 y 13 del Instructivo para la Reserva de Nombre, Símbolo y Asignación de Número de los Movimientos Independientes.

CONCLUSIÓN: La Comisión Jurídica sugiere que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resuelva que, el Director del Movimiento Político Independiente "DESPIERTA ECUADOR", cambie el nombre del país por otro término, a fin de que no incurra en la prohibición constante en el Art. 8 del Reglamento relativo a formularios de firmas de adhesión a candidaturas independientes y formularios para inscripción de candidaturas; y una vez que eso suceda se dará el trámite legal correspondiente.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de noviembre del 2001.

INFORME No.: 052-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: Sr. Daniel Lozada C.
ENTIDAD: Director Provincial del Movimiento Independiente "Alianza Amazónica"
RESUMEN PETICIÓN: Solicita se registre la nómina del directorio del Movimiento Independiente Alianza Amazónica, para el período 05 de agosto del 2001 hasta el 05 de agosto del 2003.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 26, 98 y 115 de la Constitución Política; Art. 20, literal n) de la Codificación de la Ley de Elecciones; Arts. 163

y 165 del Reglamento General a la Ley de Elecciones; y Art. 30, literales a) y c) del Reglamento Orgánico Funcional del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Provinciales Electorales.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, resuelva archivar la solicitud de registro de la Directiva Provincial del Movimiento Político "Alianza Amazónica" de la Provincia de Orellana, en virtud de que no existe norma jurídica que faculte a los Organismos Supremo y Provinciales Electorales proceder a esta clase de inscripciones.- 2. Que se comuniquen a los solicitantes para los fines pertinentes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de 8 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

053-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Lcdo. Humberto Mata Espinel

ENTIDAD:

Representante legal del Movimiento
"Fuerza Ecuador"

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita la asignación de número, determinación de requisitos para inscribir candidaturas a nivel nacional y provincial y la entrega de la auditoría que realizó el TSE a todos los partidos políticos, movimientos e independientes que participaron en la última elección.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 115, inciso 2do., 98, 100, 101, 102, 127, 165 y 166 de la Constitución Política; Arts. 56 a 59 y 70 a 72 de la Codificación de la Ley de Elecciones, Arts. 25 a 42 y 49 del Reglamento General a la Ley de Elecciones; y, Arts. 11, 12 y 13 del Instructivo para la Reserva de Nombre, Símbolo y Asignación de Número de los Movimientos Independientes.

CONCLUSIÓN: 1. La Comisión Jurídica sugiere que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resuelva que, el Director del Movimiento Político Independiente "FUERZA ECUADOR", debe cambiar el nombre del país por otro término, a fin de que no incurra en la prohibición constante en el Art. 8 del Reglamento relativo a formularios de firmas de adhesión a candidaturas independientes y formularios para inscripción de candidaturas.- 2. Se debe determinar si la participación del Movimiento Independiente es a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial para aplicar el procedimiento respectivo en la aprobación del nombre, el símbolo y el número.- 3. las normas aplicables a la inscripción de candidaturas

en general y específicamente nacionales y provinciales, están detalladas en el acápite denominado MARCO JURÍDICO de este informe.- 4. Con relación a la auditoría solicitada, será el señor Secretario General quien deba entregar las respectiva documentación a dicho movimiento independiente.- 5. Se notificará la correspondiente resolución al representante legal del Movimiento Político Fuerza Ecuador y a la Dirección de Organizaciones Políticas del Máximo Organismo Electoral.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 27 de noviembre del 2001.

INFORME No.:

051(A)-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Abg. Gonzalo Zapata Mora

ENTIDAD:

Director Nacional del Movimiento

Independiente " Despierta Ecuador " .

RESUMEN PETICIÓN:

asignación de número.

Solicitando la reserva de nombre, símbolo y

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts.98 y 115, inciso 2do. de la Constitución Política; Art.70 de la Codificación a la Ley de Elecciones; Art.49 del Reglamento de firmas de adhesión a candidaturas independientes y formularios para inscripción de candidaturas y Arts. 11, 12 y 13 del Instructivo para la reserva de nombre, símbolo y asignación de número de los movimientos independientes.

CONCLUSIÓN: 1.- Que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resuelva aprobar la solicitud de reserva de nombre del Movimiento Político " NUEVO AMANECER", solicitada por su Director Nacional, Abg. Gonzalo Zapata Mora; así como también se apruebe el símbolo de dicho movimiento político, en virtud de que, tiene características que lo individualizan y diferencian de otros Partidos y Movimientos Políticos; y, además, se apruebe la asignación del No.23, que es el que corresponde conforme el Informe de la Dirección de Organizaciones Políticas, antes indicado. 2. Una vez cumplidas las disposiciones jurídicas invocadas, se dispondrá que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art.13 del Instructivo para la reserva de nombre, símbolo y asignación de número de los Movimientos Independientes, esto es, la correspondiente publicación a costa del peticionario. 3.- La respectiva resolución será notificada al Director del Movimiento Político materia del presente informe y a la Dirección de Organizaciones Políticas del Máximo Or-

ganismo Electoral.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de jueves 29 de noviembre del 2001.

INFORME No.: 054-CJ-TSE-2001
PETICIONARIO: El Concejo Municipal de Palora
ENTIDAD: El Municipio de Palora
RESUMEN PETICIÓN: Solicita al Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago, se convoque a una consulta popular para determinar la anexión del Cantón Palora a la Provincia de Pastaza.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 103, 106, 107, 147, 224, 228, Constitución Política; Arts. 115, 119 y 120 de la Codificación a la Ley de Elecciones y Arts. 1 y 2 del Decreto Supremo No. 1189: R.O. No. 291 de 9 de marzo de 1977.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en los casos de petición de convocatoria de consulta popular en asuntos que tienen relación con la modificación de la división político - administrativa del país, se tome en consideración principalmente la disposición contemplada en el Art.146 de la Constitución Política del Estado, ya que, tales asuntos son de competencia privativa y exclusiva del Presidente de la República; criterio jurídico que se ha adoptado en el Tribunal Supremo Electoral en casos anteriores y que son materia del Informe No. 020-2001-DAJ-TSE, de fecha 1 de marzo del 2001, suscrito por el señor Dr. Gustavo Araujo Rocha, Director de Asesoría Jurídica del Tribunal Supremo Electoral, en el caso en que se pretendía la provincialización del Cantón Chone de la Provincia de Manabí; y, el Informe No.047-CJ-TSE-2001, de fecha, 5 de octubre del 2001, de la Comisión Jurídica del TSE, en el caso en que el Concejo Municipal de Santo Domingo de los Colorados solicitaba se convoque a consulta popular para conseguir la provincialización del Cantón Santo Domingo de los Colorados de la Provincia de Pichincha. 2. Que el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resuelva, ratificar la resolución adoptada por el Tribunal Provincial de Morona Santiago, en sesión de 2 de octubre del 2001, mediante la cual se niega la petición de convocatoria a consulta popular para que el Cantón Palora de la Provincia de Morona Santiago se anexe a la Provincia de Pastaza . 3. Desechar

por improcedente, el recurso de apelación propuesto por el Concejo Municipal del Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago, con respecto a la resolución adoptada por el Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago, en sesión de 2 de octubre del 2001. 4. Que se autorice el desglose de la documentación aparejada a la primera petición de consulta popular presentada por el Concejo Municipal del Cantón Palora, dejándose copias auténticas y certificadas en autos, a costa del peticionario. 5. Que se observe al Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago, a fin de que, en el futuro, en las causas que son de su competencia, concedan única y exclusivamente los recursos que expresamente determina la ley. 6. Que la respectiva resolución sea notificada al Tribunal Provincial Electoral de Morona Santiago, al Concejo Municipal del Cantón Palora en la persona de su Alcalde señor Ab. Claus Díaz Ruilova, para fines legales consiguientes.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado el informe en sesión de jueves 29 de noviembre del 2001.

INFORME No.: 055-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO: Pleno del T.S.E.

ENTIDAD: Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN: Trasladar para informe a la Comisión Jurídica, el Memorando No. 077-DAJ-TSE-2001, de la Dirección de Asesoría Jurídica.

BASE LEGAL DEL INFORME: Arts. 228 y 230, de la Constitución Política; Art.53 inciso cuarto de la Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que para determinar al suplente o la suplente de un (a) concejal (a) que se ha principalizado por la renuncia del concejal o concejala principal, se debe observar lo prescrito en el inciso cuarto del Art.53 de la Codificación de la Ley de Elecciones, en virtud de que, como norma orgánica posterior, deja sin efecto, de acuerdo a la PRIMERA DISPOSICION FINAL de la LEY 2000-1, publicada en el R.O. No.20, Suplemento, de 18 de febrero del 2000, todas aquellas normas que se le opongan; por lo que las normas jurídicas en mención imponen su plena vigencia, y tienen preeminencia sobre las disposiciones contempladas en los Arts. 51, 52 y 53 de la Ley de Régimen Municipal. 2. Que se notifique la correspondiente resolución al Tribunal Provincial Electoral de Morona

Santiago y al l. Minipio del Cantón Logroño de la misma Provincia.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 20 de diciembre de 2001.

INFORME No.:

056-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Samuel Belletini

ENTIDAD:

a nombre del extinguido Partido Liberal
Radical Ecuatoriano.

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita que se deje sin efecto tanto la declaratoria de extinción como la cancelación de la inscripción del Partido Liberal Radical Ecuatoriano.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 35, literal d) 37, inciso primero, de las Codificación a la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: Desechar la solicitud del señor Samuel Belletini Zedeño, planteada en representación del extinto Partido Liberal Radical Ecuatoriano a efectos de que se deje sin efecto la declaratoria de extinción de dicho partido político, en virtud de que, la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de 6 de marzo del 2001, por la cual declaró la extinción del Partido Político Liberal Radical Ecuatoriano, listas 2, es una resolución administrativa de última instancia que causó ejecutoria y pasó en autoridad de cosa juzgada.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 20 de diciembre del 2001.

INFORME No.:

057-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Carlos Fabara Arias.

ENTIDAD:

Fundador del Movimiento Independiente
"GOBIERNO TRANSPARENTE"

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita reservar el número para participar con candidatos en las elecciones del año 2002.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 98 y 115, inciso 2do, Constitución Política; Art. 70 Codificación de la Ley de Elecciones; Art.49 del Reglamento General a la Ley de Elecciones; Art.8, Reglamento Relativo a Formularios de Firmas de Ahesión a Candidaturas Independientes y Formularios para Inscripción de Candidaturas; Arts. 11, 12 y 13, Instructivo para la reserva de nombre símbolo y asignación de número de los Movimientos Independientes.

CONCLUSIÓN: La Comisión Jurídica sugiere que, el Pleno del Tribunal Supremo Electoral resuelva que, el peticionario Carlos Fabara Arias, Fundador del Movimiento Político Independiente "GOBIERNO TRANSPARENTE"; debe solicitar expresamente al Máximo Organismo Electoral en forma complementaria a su petición inicial, la reserva del nombre para dicho movimiento y así como también indique si su participación será a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial; luego de lo cual se dará el trámite correspondiente a la petición del movimiento político en mención, debiendo previamente informar la Dirección de Organizaciones Políticas. La resolución del Pleno del TSE será notificada al peticionario, así como también a la Dirección de Organizaciones Políticas.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 20 de diciembre del 2001.

INFORME No.:

058-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Pleno del TSE

ENTIDAD:

Tribunal Supremo Electoral

RESUMEN PETICIÓN:

Aprobar por unanimidad la moción presentada por el señor licenciado Eduardo Viltaquirán Lebet, Vocal del Organismo, de que en el caso de la resolución adoptada el 8 de marzo del 2001, por la que se sancionó la utilización de recursos de la campaña presidencial de 1998 del doctor Jamil Mahuad Witt, se disponga, que la Comisión Jurídica determine el procedimiento de cobro de la multa. "

BASE LEGAL DEL INFORME: Art. 209, Constitución Política; Art.58, 64 y 68. Codificación de la Ley de Partidos Políticos; Art.147, inciso 2do. Codificación de la Ley de Elecciones.

CONCLUSIÓN: 1. Que en virtud de que, la Resolución de la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, acepta la acción de amparo constitucional planteada por el Dr. Ramiro Rivera Molina, suspendiendo los efectos de la resolución del Tribunal Supremo Electoral adoptada el 8 de marzo del 2001, en la parte que hace relación a la sanción pecuniaria al Partido Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana; y, toda vez que, los fundamentos y argumentos del Organismo Constitucional difieren de los esgrimidos por el Máximo Organismo Electoral; es necesario que, a efectos de que haya certeza jurídica en la ejecución del cobro de la

multa, el Tribunal Supremo Electoral realice la respectiva CONSULTA al señor PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, quien se dignará determinar en base a la resolución No. 319-2001-III-SALA-RA, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional, en la causa No.304-2001-RA, los siguientes aspectos: a) A qué persona o personas debe cobrarse la multa?; b) Cuál es el procedimiento o vía de cobro de la multa materia de la resolución en mención?, y, c) Qué organismo o persona de derecho público debe proceder al cobro de la multa?.- En todas las respuestas se indicarán todas las normas jurídicas aplicables a estos casos. 2. En la consulta al señor Procurador General del Estado se adjuntará la copia de la resolución dictada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional signada con el No.319-2001-II-SALA-RA, en la causa No. 304-2001-RA, a fin de que dicha autoridad tenga suficientes elementos de juicio para absolver la consulta en mención.

RESOLUCIÓN DEL PLENO: Aprobado en sesión de 20 de diciembre del 2001.

INFORME No.:

059-CJ-TSE-2001

PETICIONARIO:

Señor Ing. Adolfo Bucaram Ortíz

ENTIDAD:

Director Partido Roldosista Ecuatoriano

RESUMEN PETICIÓN:

Solicita el reconocimiento de los nuevos estatutos del Partido Roldosista Ecuatoriano y la inscripción de la nueva Directiva Nacional para el período 2001-2003.

BASE LEGAL DEL INFORME: Art.114, Constitución Política; Art. 1, 2, 22 de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos; Art.13, del Reglamento de la Ley de Partidos Políticos; y Arts. 1 a 4 del Instructivo para la inscripción de directivas nacionales y provinciales de los Partidos Políticos y Reserva de Nombre, Símbolo y Asignación de Número de los Movimientos Independientes.

CONCLUSIÓN: 1. Que el Pleno del Máximo Organismo Electoral proceda a la inscripción de la nueva Directiva Nacional del Partido Roldosista Ecuatoriano, denominado Comando Nacional, elegido en la Convención Nacional del PRE, celebrada en la ciudad de Panamá, los días 24 y 25 de mayo del 2001, conforme consta en la documentación y especialmente en el acta respectiva que forma parte de este expediente. 2. Que la resolución correspondiente se notifique

al Partido Roldosista Ecuatoriano, así como también a la Dirección e Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, para fines legales consiguientes.

3. Que el Pleno del TSE, adopte una resolución mediante la cual se sancione al señor Fausto Camacho Zambrano, Director de Organizaciones Políticas de la entidad, imponiéndole una sanción pecuniaria administrativa (multa) del 20% del sueldo que percibe en el Tribunal Supremo Electoral en su calidad de funcionario, de conformidad con lo que disponen los Arts. 31, inciso segundo; 32 numeral 3; 34 numerales 1, 2, 3 y 4 y literal a) del Reglamento de Administración de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales, por la negligencia observada en el cumplimiento de la resolución adoptada por la Comisión Jurídica en sesión de 20 de noviembre del 2001, notificada al funcionario en mención mediante Memorando No. 055-CJ-TSE-2001, con fecha 21 de los mismos mes y año, toda vez que, el respectivo informe sólo fue remitido a la Comisión Jurídica, el 19 de diciembre del 2001; y, por no dar cumplimiento al Memorando No.032-CJ-TSE-2001, de fecha 13 de junio del 2001, a efectos de que no incluya en sus informes juicio de valor alguno, lo cual no ha cumplido.

RESOLUCIÓN DEL PLENO:Aprobado en sesión de 20 de diciembre del 2001.

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MEMORANDO No.-015-CT-TSE-2001

DE : *Ing. Alfredo Arévalo M.*
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

PARA : *Lcdo. José Gabriel Terán Varea*
COORDINADOR DE RELACIONES INTERNACIONES

FECHA : *Quito, Octubre 23 del 2001*

En respuesta a su oficio No.-385-RI-TSE-2001, me permito poner en conocimiento el informe de labores de la Comisión Técnica correspondiente al período 2001.

al Partido Roldosista Ecuatoriano, así como también a la Dirección e Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral, para fines legales consiguientes.

3. Que el Pleno del TSE, adopte una resolución mediante la cual se sancione al señor Fausto Camacho Zambrano, Director de Organizaciones Políticas de la entidad, imponiéndole una sanción pecuniaria administrativa (multa) del 20% del sueldo que percibe en el Tribunal Supremo Electoral en su calidad de funcionario, de conformidad con lo que disponen los Arts. 31, inciso segundo; 32 numeral 3; 34 numerales 1, 2, 3 y 4 y literal a) del Reglamento de Administración de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral y Tribunales Provinciales Electorales, por la negligencia observada en el cumplimiento de la resolución adoptada por la Comisión Jurídica en sesión de 20 de noviembre del 2001, notificada al funcionario en mención mediante Memorando No. 055-CJ-TSE-2001, con fecha 21 de los mismos mes y año, toda vez que, el respectivo informe sólo fue remitido a la Comisión Jurídica, el 19 de diciembre del 2001; y, por no dar cumplimiento al Memorando No.032-CJ-TSE-2001, de fecha 13 de junio del 2001, a efectos de que no incluya en sus informes juicio de valor alguno, lo cual no ha cumplido.

RESOLUCIÓN DEL PLENO:Aprobado en sesión de 20 de diciembre del 2001.

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL MEMORANDO No.-015-CT-TSE-2001

DE : *Ing. Alfredo Arévalo M.*
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

PARA : *Lcdo. José Gabriel Terán Varela*
COORDINADOR DE RELACIONES INTERNACIONES

FECHA : *Quito, Octubre 23 del 2001*

En respuesta a su oficio No.-385-RI-TSE-2001, me permito poner en conocimiento el informe de labores de la Comisión Técnica correspondiente al período 2001.

Conformación de la Comisión

La Comisión Técnica como parte de las Comisiones Permanentes del Tribunal Supremo Electoral se encuentra conformada de la siguiente manera por los señores Vocales:

*Ing. Alfredo Arévalo
Lcdo. Jorge Valdospinos
Lcdo. Eduardo Villaquirán*

PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL

Personal Técnico

La Comisión en su área técnica cuenta con: Ing. Fabián Romo, Director de Sistemas Informáticos y la Sra. Francis Mena Asistente Técnico.

Requisitos para cubrir la vacante de Director de Sistemas Informáticos

La Comisión Técnica como parte activa del Tribunal Supremo y con el propósito de llenar la vacante de Director de Sistemas Informáticos, recomendó y formó parte en lo que se refiere a las exigencias del puesto las mismas que se detallan a continuación:

- Título de Ingeniero en Sistemas
- Experiencia mínima de cinco años en sus funciones de dirección, asesoría o consultoría en el Área de Informática.
- Conocimiento amplio del idioma Inglés Técnico.
- Cursos de capacitación de preferencia relacionados con:
 - Base de datos
 - Redes
 - Administración de Proyectos Informáticos

con una duración mínima de cien horas cada evento.

Análisis del contrato con la empresa Cronix

La Comisión en su informe técnico a la empresa Cronix y referente al arrendamiento del Call Center y Audiomáticos, concluyó que los audiomáticos se deben utilizar para las consultas del padrón electoral por su capacidad de memoria en el software, mientras que el Call Center solamente el día de las elecciones del 21 de Mayo por la rapidez en la entrega de resultados, obteniendo así una información más concreta y transparente.

Análisis del contrato con la Empresa Tecnocomp

Esta Comisión analizó el uso de la empresa Tecnocomp y recomienda que una vez establecidos los trabajos de digitalización pendientes y considerando la importancia de este trabajo para el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección Técnica, deberá solicitar la información faltante a los diferentes Tribunales Provinciales a fin de que conforme al ofrecimiento realizado por la empresa, proceda a completar el trabajo de digitalización.

De acuerdo a la información presentada por la empresa, la Dirección Técnica, deberá proceder en un plazo considerable, a fin de establecer los trabajos pendientes de digitalización.

TRABAJOS EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Dirección Administrativa

Paralelamente al mantenimiento de los equipos de computación fue importante la recomendación que se hiciera en cuanto se refiere a este mantenimiento para saber en que situación se encuentra la vigencia de los contratos de mantenimiento de los equipos, conjuntamente con el Ing. Francisco Andrade para la información necesaria.

Comisión Económica

Con la participación del presidente de la Comisión Económica Lcdo. Jorge Valdospinos y la Economista Marilú Guerrero, se elaboró el informe correspondiente al mantenimiento de equipos de computación, esta Comisión coordinó en lo que a informe técnico le corresponde sugiriendo que es necesario el mantenimiento de dichos equipos para cubrir con las necesidades requeridas por el Tribunal Supremo Electoral y evitar que se dificulte la información que se procese en futuras elecciones.

Asesoría Jurídica

Con el propósito de que el concurso de la Provisión de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo se haga de la mejor manera esta Comisión en reuniones mantenidas con el Asesor Jurídico, recomendó se hagan los cambios

pertinentes al documento presentado por dicho departamento para que cumpla con los requisitos indispensables para dicha Provisión.

Dirección Financiera

A fin de que el Concurso de Provisión de Servicios electrónicos, reparación y de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, en coordinación con el Econ. Manuel Estrada a fin de que se cumpla con los planes previstos se emitió un informe en el cual se recalca la sugerencia textual de ser presentada por la Superintendencia de Bancos.

Contratos de Mantenimiento de los Equipos de Computación

El Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Provinciales Electorales; necesitaban el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación, la Comisión Técnica realizó el estudio, análisis y emitió las recomendaciones al respecto:

- Lograr un aumento en el potencial de almacenamiento al equipo AS/400 y así obtener una mayor capacidad de disco ya que la base de datos cree constantemente por la actualización de datos que recibe del Registro Civil.
- En lo referente a los aires acondicionados, por encontrarse en mal estado debe realizarse el mantenimiento necesario ya que el servicio que brindan estos aires sirve para el funcionamiento de los equipos: AS/400, área de redes y aires acondicionados de las impresoras láser 3900.
- Además, la Comisión recomendó que el ambiente físico donde están ubicados los equipos no se encuentra dentro de las especificaciones ambientales recomendadas en los manuales especialmente de temperatura.
- La sugerencia en lo referente a servidores es la de adquirir los equipos ya que servirán de uso para el sistema desarrollado por la OSE y soportar así el Sistema del SIGEF desarrollado por el CONAM; mismo que se encuentra instalado en los diferentes Tribunales Provinciales Electorales.

Elecciones de Juntas Parroquiales

Además esta Comisión tuvo una participación activa en coordinación con la Dirección de Sistemas Informáticos en la preparación del software a utilizarse en las elecciones que se llevarán a cabo para las Juntas Parroquiales.

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

- *Particular atención mereció el proceso eleccionario de Juntas Parroquiales, por lo que conjuntamente con el área operativa del Tribunal Supremo Electoral se elaboró la cartilla electoral, con el propósito de asignar tareas y responsabilidades específicas a las diferentes comisiones que se formarán para este propósito, estos fueron:*
 - **Juntas Receptoras del Voto**, para que se realice el perfeccionamiento en la selección y designación de los miembros de las juntas receptoras del voto.
 - **Documentos de capacitación e información**, encargada del diseño principalmente de la cartilla electoral año 2001 para la elección de Juntas Parroquiales.
 - **Diseño de Formularios para las Juntas Receptoras del Voto**, encargada del diseño e impresión de los documentos electorales tales como las actas de instalación de las Juntas Receptoras del Voto, acta de escrutinios, auxiliares y otros.

La Comisión Técnica tomó parte en las elecciones de Juntas Parroquiales encargándose de la: movilización de equipos de computación a fin de que ninguna Provincia quede sin los recursos necesarios para el día del proceso, cumpliendo así con las necesidades básicas y prioritarias hasta la finalización de las actividades electorales como son las de la readecuación de las instalaciones y devolverles la funcionalidad que tenían antes del proceso.

Reapertura del Proceso de Selección No.-001-2001

La Comisión de acuerdo al informe presentado por la Dirección Financiera, presentó las observaciones que considera necesaria para la elaboración de las bases para el Concurso de la Provisión de Servicios; recomendando que una vez realizadas las sugerencias planteadas por el Director Financiero como por la Comisión Técnica, se apruebe el proyecto de bases referente a la reapertura del Proceso e Selección No.-001-2001.

Atentamente

Ing. Alfredo Arévalo Moscoso

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA

INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

INFORME No. 031-CE-TSE-2001

Quito, octubre 12 del 2001

Señor Licenciado

José Gabriel Terán Varela,

COORDINADOR DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

Presente.

En atención al oficio No. 383-RI-TSE-2001, de 3 de octubre del presente año, que se refiere al informe anual de actividades del Tribunal Supremo Electoral y en lo que corresponde a esta Comisión, a continuación me permito señalar las principales acciones cumplidas por esta Comisión, en el presente ejercicio económico:

1. Se elaboró y se tramitó la aprobación del presupuesto para las elecciones de Juntas Parroquiales, que se realizaron el 21 de septiembre del presente año, con el siguiente detalle:

ORGANISMO	ASIGNACIÓN
Tribunal Supremo Electoral	\$ 180.532,00
Tribunal Provincial del Azuay	16.578,86
Tribunal Provincial de el Oro	30.532,07
Tribunal Provincial de Loja	11.435,19
Tribunal Provincial de Manabí	21.120,98
Tribunal Provincial de Morona	18.451,83
Tribunal Provincial de Pichincha	24.491,16
Tribunal Provincial de Galápagos	11.282,92
Tribunal Provincial de Orellana	24.754,81

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

- 2.** Se elaboró las disposiciones generales del presupuesto ordinario del 2001 del Tribunal Supremo Electoral, como también las que corresponden a las elecciones de Juntas Parroquiales, las mismas que fueron aprobadas por el Pleno del Organismo.
- 3.** Se realizaron las estimaciones y proyecciones de los ingresos de :“Autogestión”, al inicio del presente ejercicio económico, los mismos que sirvieron para mejorar la capacidad operativa de la Función Electoral a nivel nacional.
- 4.** Se modificaron las proyecciones de los ingresos de “Autogestión”, por los cambios introducidos en las tasas de duplicados, exonerados, y la incorporación de nuevos rubros de ingresos, como alquiler de instalaciones, arrendamiento de urnas, venta de papel membretado del Tribunal Supremo Electoral, etc. estimaciones que fueron necesarias para tramitar y conseguir en el CONAREM Y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, la homologación de los beneficios sociales de la Función Electoral con el Tribunal Constitucional.
- 5.** Trámites de apoyo y de gestión para conseguir las bonificaciones trimestrales de la Función Electoral ante el CONAREM y el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS,
- 6.** Informes de Comisión para las reformas presupuestarias propuestas por los diferentes Tribunales Provinciales Electorales y el Tribunal Supremo Electoral.
- 7.** Preparación y elaboración de la proforma presupuestaria Institucional para el ejercicio económico del próximo año, correspondiente al presupuesto ordinario y electoral del 2002. De conformidad al siguiente detalle:

PRESUPUESTO ORDINARIO	\$ 11'475.564,23
RECURSOS FISCALES	\$ 9'623.052,23
RECURSOS DE AUTOGESTIÓN	1'852.512,00
<hr/>	
PRESUPUESTO ELECTORAL	\$ 28'327.915,24
<hr/>	
TOTAL DE PROFORMA:	\$ 39'803.479,47

Atentamente,
Lcdo. Jorge Valdospinos R.,
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

INFORME DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

INFORME DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

Quito, 7 de enero de 2002

La Comisión de Capacitación integrada por el Sr. Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed, quien la preside y como miembros lo señores Vocales José María Cabascango e Ing. Alfredo Arévalo, durante el año 2001 ha realizado las siguientes actividades.

Los miembros de la Comisión, conscientes de que es necesario difundir el conocimiento de los mandatos constitucionales y legales a un mayor número de personas, sobre todo a grupos organizados de la sociedad con la finalidad de lograr una mayor conciencia democrática y mayor y mejor participación en los procesos electorales, consideró necesario elaborar y determinar lo siguiente:

- *Elaboración de un plan de actividades basado en los siguientes criterios: Capacitación de grupos indígenas y campesinos a fin de que tengan una mayor y activa participación en los Procesos Electorales y en la vida política del País.*

Capacitación del personal de Funciones y Empleados de la Función Electoral, en materias y áreas tales como, relaciones humanas, públicas, mejoramiento profesional mediante cursos de capacitación para operar PC, sistemas contables, conocimiento de leyes, reglamentos, regulaciones y manuales que atañen a la vida del trabajador.

Capacitar grupos sociales, gremios, corporaciones, estudiantes y ciudadanía en general en materias legales y procedimientos para que actúen como Miembros de Juntas Receptoras del Voto y puedan ser más participativos en la vida política del País.

Capacitación a los Miembros de los Tribunales Provinciales Electorales en materia legal y de procedimientos a fin de lograr una mayor eficiencia y funcionalidad en la aplicación y desarrollo de los procesos electorales.

Intervenir y coordinar para que se cumpla el convenio firmado con el Ministerio de Educación y el TSE en lo relativo a Educación Cívico Electoral en escuelas y colegios.

A fines del año 2000, se coordinó y se logró, durante la Presidencia del Sr. José María Cabascango, con intermediación del Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed, interesar al Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Valencia el apoyo económico y técnico para difundir los derechos y obligaciones democráticas que tienen las comunidades indígenas, negras y campesinas del País, para intervenir y ser integrantes del quehacer político, social, económico en el sistema democrático y participar activamente en la vida comunitaria, llegando a un acuerdo para lo cual se concretó lo siguiente:

- Firma del Convenio de Cooperación entre el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Valencia, a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales y el Tribunal Supremo Electoral.*
- Planificación y Programación de los Seminarios de Capacitación "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN EL ECUADOR" .*
- Realización de los Seminarios de Capacitación "FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y FORMACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN EL ECUADOR" en 21 provincias, exceptuando la de Galápagos, dictada a representantes de comunidades indígenas y campesinas de cada provincia. Estos Seminarios se iniciaron el 29 de junio finalizando el 27 de octubre del presente año. Altamente elogiados por los participantes con la solicitud de que se mantenga en forma periódica y con diversos temas este tipo de intercomunicación. La memoria del Proyecto elaborada por el Delegado del Centro de Estudios Políticos y Sociales de Valencia Sr. Pau Caparós i Gironés, se adjunta como anexo al presente informe.*

Se estableció la necesidad de fortalecer el espíritu de cuerpo y cooperación del personal de Funcionarios y Empleados de la Función Electoral, a fin de que

puedan coadyuvar de manera más eficiente y efectiva en brindar información y realizar las funciones y tareas propias durante los procesos electorales, para lo cual la Comisión dispuso:

- *Realización del Curso de Motivación y Aplicación del FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidades y Amenazas) en la Institución, con lo que se capacitó a 150 empleados y funcionarios, bajo la Dirección y conducción del Sr. Lcdo. Jorge Carrera, Director de Relaciones Públicas del TSE, Capacitación que realmente no significó egreso económico para la Institución.*
- *Durante tres días en los meses de noviembre y diciembre se realizó el Seminario Denominado ORGANIZACIÓN ELECTORAL 2002 en la ciudad de Loja, con participación de los Vocales y miembros de los Tribunales Provinciales Electorales de Loja, Zamora Chinchipe, Morona, Azuay, Cañar y El Oro.*
- *Durante el mes de diciembre en la ciudad de Baños, Provincia de Tungurahua se realizó el mismo Seminario con la participación de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi, Napo, Pastaza y Galápagos. Durante el mismo mes y en Crucita Provincia de Manabí se desarrollo el mismo Seminario en la que participaron los Tribunales de las Provincia de Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana.*

Estos Seminarios se realizaron con la finalidad de capacitar mejor a los señores Vocales y Funcionarios de los Tribunales Provinciales Electorales en los sistemas y Procedimientos Operativos para los Procesos Electorales, así como refrescamiento en materias de carácter jurídico legales concernientes al mismo tema. Para efectos de trabajo durante los Seminarios estos se basaron en un documento aprobado por el Pleno del TSE denominado ELECCIONES 2002.

Para la realización de todas estas actividades la Comisión de Capacitación ha sesionado regularmente durante los días lunes y viernes de cada semana con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de todos estos trabajos. Habiendo recibido el apoyo, así como las asignaciones respectivas que permitieron la realización de las actividades detalladas anteriormente.

INFORME DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL AL CONGRESO NACIONAL

Cabe destacar el éxito alcanzado en cada una de estas actividades y la gran aceptación por parte de quienes recibieron los Seminarios y Cursos de Capacitación, demostrado esto en los múltiples informes, felicitaciones y congratulaciones que se dieron al finalizar cada uno de ellos con el pedido expreso de que sean más frecuentes y periódicas las orientaciones y capacitación, tanto para personal propio de la Institución como para otras Organizaciones gremiales, estudiantiles, profesionales y comunitarias. Queda pendiente por realizar los seminarios de capacitación especialmente a los posibles integrantes de las Juntas Receptoras del Voto, así como las coordinaciones y seguimiento en la realización de las materias cívico electorales en colegios y universidades. Actividades estas que se pueden cumplir en el año 2002, contando con una aprobación presupuestaria acorde a estas necesidades.

Atentamente,

Lcdo. Eduardo Villaquirán Lebed

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN

Ing. Alfredo Arévalo

VOCAL

Sr. José María Cabascango

VOCAL